298

PROYECTO
CODIGO CIVIL
MEXICANO

9220

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
ALERE FLAMMAM VERITATIS

"La Ciencia Jurídica."

REVISTA Y BIBLIOTECA QUINCENAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS ANEXAS.

REVISION
DEL
PROYECTO DE CODIGO CIVIL MEXICANO
DEL DR. DON JUSTO SIERRA

por la Comisión formada de los señores

Ministro de Justicia Lic. D. Jesús Terán (Presidente),
Vocales Lics. D. José María Lacunza,
D. Fernando Ramirez, D. Pedro Escudero y Echanove
y D. Luis Méndez, (Secretario)

DURANTE LOS AÑOS DE 1861 á 1866.

TOMO I



MÉXICO.
TALLERES DE LA LIBRERIA RELIGIOSA.
Calle de Tiburcio núm. 18.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
BIBLIOTECA
U. A. N. L.

1 MAR. 1990 9 ABR. 1985

4920

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ALERE FLAMMAM VERITATIS

Al Esclarecido Estadista

Lic. Don Joaquín Baranda,

Dignísimo
Ministro de Justicia é Instrucción Pública

SEÑOR:

Dueño, por inmerecido favor que me otorgara el eminente sabio y maestro mío muy querido Señor Lic. D. Luis Méndez, de los importantísimos manuscritos inéditos en que se contiene toda la discusión sobre reforma del primer proyecto de un Código Civil Mexicano, durante los años de 1861 á 1866, tengo la honra de poner su publicación bajo la alta egida del ilustre nombre de Ud.

Sírvase aceptar esta dedicatoria como homenaje de la adhesion y respeto de su afmo. A. A. S. S. y C.

A. Verdugo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA

DOS CARTAS IMPORTANTES

Consideramos necesario, para la mejor inteligencia de esta obra, que viene á llenar un antiguo y lamentable vacío en la historia de la codificación de nuestras leyes civiles, hacerla preceder de dos cartas del esclarecido jurisconsulto Don Luis Méndez, Secretario de la Comisión que trabajó de 1861 á 1866 en la revisión del primer Proyecto de un Código Civil Mexicano y hasta la redacción definitiva del que se conoce generalmente con el nombre de *Código del Imperio*. La primera, dirigida con fecha 19 de Junio de 1873 á los Señores Redactores de «El Foro», tiene por objeto rectificar algunos errores en que había incurrido el abogado francés León de Montluc en su obra: «Exámen Crítico del Nuevo Código Civil de México», y la segunda tuvimos nosotros la honra de recibirla, en 16 de Noviembre de 1894, con los manuscritos á que ella se refiere.

Deseamos que los lectores no fijen su atención en los inmerecidos elogios que para nosotros se contienen en esta segunda carta, y sólo la otorguen á las interesantes noticias que suministra sobre nuestra legislación civil sustantiva.

A. VERDUGO.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La verdad histórica sobre la formación del Código Civil

Sres. RR. de *El Foro*.—México, Junio 19 de 1873

Estimados amigos:

En un folleto de Don Leon de Montluc, Abogado de París é hijo del Agente comercial privado de la República en la misma ciudad, folleto titulado «Exámen crítico del nuevo Código Civil de México», se lee el párrafo siguiente:

«El Código de México, en el fondo, es una obra sábia; pero sobre todo lógica, llena de razón y sábiamente liberal. El nombre de los jurisconsultos que trabajaron en su redacción era desde luego una garantía, particularmente el del Sr. Lafragua, que es, con el Sr. Montiel, á quienes se debe la mayor parte del trabajo, y que se encontraba también en la Comisión encargada de formar el Código Penal últimamente concluido. La colaboración de hombres tan distinguidos, de trabajadores tan infatigables, prometía una obra concienzuda y de rápida ejecución. Ambas cosas se han obtenido, pues la Comisión, formada como antes hemos dicho, comenzó á ocuparse del Código en 1867. Verdad es que se había principiado antes de la intervención de las potencias europeas y que ya se había nombrado en 1861 otra comisión, con el mismo objeto, compuesta de los Sres. D. Jesús Terán, D. José María Lacunza, D. Sebastián Lerdo de Tejada y Don Fernando Ramírez; pero se desorganizó bien pronto, á consecuencia de los sucesos políticos, y tuvo que suspender sus estudios, que no pudieron continuarse sino después del restablecimiento del Gobierno Nacional.»

Había yo visto los artículos que componen este folleto,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

publicados, hace algunos meses, en la "Revue de Droit International et de Législatión Comparée" que se im pri me en Gante, y, aunque el párrafo transcripto me llamó la atención por su inexactitud en cuanto á los hechos, no me pareció entonces necesario ni conveniente hacer pública cualquiera rectificación, porque, sabiéndose cuán fácil es que incurra en errores de hecho un escritor extranjero, cuyo objeto principal, al escribir sobre el Código Civil Mexicano, es bien perceptible, se hubiera podido creer que mi objeto, tratando de rectificar conceptos de una obra apenas conocida por unas cuantas personas en la República, era satisfacer una presunción vana y ridícula, llamando la atención hácia mí.

Pero me hace faltar al propósito que tenía formado de guardar silencio sobre la historia de la formación del Código Civil, como lo guardaron los últimos letrados que de él se ocuparon, la traducción anotada que, salida de las prensas del Palacio Nacional, han dado del folleto de Montluc el Lic. D. Manuel A. Romo y D. Pedro G. Mendiondo. El hecho de que estos dos mexicanos hayan dejado pasar, sin nota alguna, el párrafo de que me ocupo, prueba que en la República misma no se conocen bien los hechos. Importa, sin embargo, que ellos sean conocidos, no á causa de las personas que precedieron en el trabajo á los distinguidos jurisconsultos que gozan la merecida gloria de haberle dado cima, sino en interés de la verdad histórica, siempre útil de conocer en estudios de este género.

Acaso, cuando ocupaciones de otra especie me lo permitan, daré á la prensa los copiosísimos manuscritos que conservo, los cuales, presentando la redacción primera de cada artículo, y sus modificaciones sucesivas, señalan, por decir así, paso á paso el laborioso estudio á que se entregó la Comisión de que tuve la honra de formar parte. Entonces también daré á luz el proyecto último é íntegro de dicha Comisión sobre los dos libros de *Sucesiones y Obligaciones* que debían seguir inmediatamente á los dos primeros so-

bre *Las Personas y Los Bienes*, promulgados por el emperador Maximiliano.

Deberá servir esa publicación, como ha servido en otros paises, para que, comparados los textos con los del Código actual, se le comprenda mejor; y útil será desde ahora no dejar sin rectificación especies que, sin ella, podrían pasar como verdaderas, y hacer dudar de la autenticidad de los textos que yo publique.

Durante la residencia en Veracruz del Gobierno emanado de la Constitución de 1857, el Presidente Juárez encargó al Dr. Don Justo Sierra, padre, señores redactores, de uno de vdes., la formación de un proyecto de Código Civil. El Dr. Sierra, hombre de vasta capacidad y de laboriosidad poco común, emprendió la obra con verdadera pasión. Apesar de que padecía de una enfermedad que exigía la esmerada asistencia de su familia y mucho reposo físico y moral, sobreponiéndose á sus dolencias y deseando no ser distraído en sus estudios, se retiró al Convento de la Mejorada, en Mérida de Yucatán, y, encerrado allí con sus libros, y teniendo por auxiliar y compañero al joven estudiante D. Perfecto Solís, que hoy es una de las ilustraciones del foro de aquella península, hubo de remitir al Gobierno de la República, en 18 de Diciembre de 1859, el primer libro, un mes después el segundo y los tres primeros títulos del tercero, y en todo el curso de 1860 la conclusión del proyecto.

Tomó por base principal el Dr. Sierra el Proyecto de Código Civil que en 1851 formó una comisión oficial de jurisconsultos españoles, cuyo proyecto el Excmo. Sr. Don Florencio García Goyena dió á conocer al mundo científico en su obra monumental de ciencia y elevada honra para España, titulada: "Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español."

Pocas variaciones hizo el Dr. Sierra en el Proyecto que le sirvió de base. Limitóse, en general, á aquellas que reclamaban nuestra forma de Gobierno y los principios de la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Reforma, que á la sazón se proclamaban. Quizá no anduvo en esto desacertado, porque aquella obra era ya fruto de un largo y concienzudo estudio de esclarecidas inteligencias, y debió asaltarle el temor natural en todo hombre de ciencia, para alterar por sí solo y sin el auxilio poderoso de la discusión, preceptos destinados á influir muy directamente en las relaciones de la sociedad y la familia, de los miembros de la misma familia entre sí, y en el bienestar moral y material de todo un pueblo.

Pero con todo y eso, el trabajo de este primer comisionado tuvo el mérito, aparte de lo que puso de su propio caudal, de dar á conocer la obra española, presentando á su favor un testimonio autorizado de la sanidad de sus principios, de la pureza de las deducciones y de la claridad, concisión y propiedad de las fórmulas, de transcendental importancia en la redacción de las leyes.

El trabajo ímprobo á que se dedicó el Sr. Sierra agravó de tal manera su enfermedad que, á muy poco tiempo de haberlo concluido, hubo de sucumbir á ella. El estado de Yucatán honró la memoria del distinguido historiador y jurisconsulto. Por la formación del Proyecto de Código Civil recibió del Gobierno de la República, como única recompensa, licencia con goce de sueldo de Juez de Distrito en Yucatán, destino que tenía en propiedad, por el tiempo en que desempeñó su comisión.

Restituidas las autoridades federales á esta Capital en los últimos días de 1860, los manuscritos de Sierra fueron remitidos al Congreso de la Unión, en donde, á pesar de los esfuerzos de algunos buenos patricios, tal vez habrían dormido largo sueño, si, poseyendo yo una copia que su autor me había remitido, y muerto éste, no hubiera obtenido del Ministerio de Justicia que se imprimieran por cuenta del Gobierno, encargándome de la corrección de la obra, sin retribución alguna.

Distribuyóse profusamente el Proyecto entre los Tribunales y Abogados de la República, invitándolos á estu-

diarlo y á hacer las observaciones que les ocurriesen. No tengo conocimiento de que se haya hecho una sola.

El Congreso de 1861 había expedido entre tanto dos decretos. En el primero, de 29 de Abril, mandaba poner en ejecución en el Distrito y Territorios los nuevos Códigos, á medida que se fueran concluyendo, invitando á los Estados para que los adoptasen, todo esto sin perjuicio de que se pasasen al Soberano Congreso, para los efectos convenientes.—En el segundo, de 29 de Mayo, se derogó el anterior, ordenándose que, antes de ponerse en ejecución los Códigos, se sometiesen á la revisión y aprobación del Congreso.

Es de advertir que, al mismo tiempo que se comisionaba al Dr. Sierra para el Código Civil, se nombraron otras comisiones para la formación de los demás Códigos; pero que ninguna de éstas llegó á presentar sus trabajos.

En este estado las cosas, un día del mes de Enero de 1862, fuimos llamados al Ministerio de Justicia los Señores Lics. D. José M. de Lacunza, D. Pedro Escudero, Don Fernando Ramírez y yo. Allí el Sr. Lic. D. Jesús Terán nos invitó para que manifestásemos nuestra opinión sobre el Proyecto del Dr. Sierra, indicando lo que, en nuestro concepto, fuese de modificarse. Ofrecimos hacerlo, y quedó convenida otra reunión para después de pocos días.

En ella se discurrió, en general, sobre la obra, y se llegó á la conclusión de que, para la revisión, sería muy conveniente que una comisión de cinco ó seis letrados la tomase á su cargo, bajo la presidencia del Ministro, á fin de impulsar sériamente los trabajos. Solicitados por el Sr. Terán para formar aquella comisión, aceptamos, por amistad con este señor, y ninguno creyó por entonces recibir un encargo oficial, pues no hubo nombramiento en forma. Mucho menos se pensó en retribución cualquiera. Juzgábamos por otra parte que nuestra dedicación á ese estudio sería de corta duración. El Ministro se dirigió con el mismo fin al Sr. Lic. D. Sebastián Lerdo de Tejada; pero las ocupacio-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nes que á la sazón absorvían el tiempo de este señor hicieron que, según recuerdo, no pudiera concurrir más que á dos juntas. Así, puede decirse que la Comisión se formó de los Sres. Terán, Lacunza, Escudero, Ramírez y de mí.

Las reuniones fueron diarias, de dos á cuatro de la tarde, en el Ministerio de Justicia, con exclusión únicamente de los domingos y días de fiesta civil, y duraron así desde el mes de Febrero de 1862 hasta Mayo de 1863, pues la última la tuvimos la víspera de la salida del Gobierno de esta Ciudad, para el interior, con motivo de la aproximación á ella de las fuerzas francesas. Jamás he visto ni más puntualidad en reuniones de este género, ni más empeño en el trabajo. Los que conocieron la exquisita laboriosidad y la inquebrantable firmeza del Sr. Lacunza para emplear el tiempo en aquello que se había propuesto, comprenderán que las dos horas diarias se emplearon precisamente en el estudio del Código. Este estudio venía ya preparado por cada uno, en lo particular; mas el Señor Lacunza era el que en general proponía las modificaciones, adiciones, etc., al Proyecto que estudiábamos —Sus proposiciones las presentaba escritas, y en su texto mismo se hacían las correcciones que brotaban de la discusión. Recogía yo todos estos papeles y les daba el orden conveniente. De esta manera es cómo están en mi poder los copiosos manuscritos de todos los miembros de la Comisión, de que antes hablé.

Cuando el Gobierno salió de la Capital sólo quedaban por formar los títulos relativos á la hipoteca, al registro público, á la graduación de acreedores y á la prescripción. El Sr. Terán, como Ministro, siguió al Presidente de la República.—Pocos días después de constituida la Regencia y tranquilizados algo los espíritus, la Comisión siguió sus trabajos; pero ya puramente en lo privado.—Habíamos, con el transcurso de más de un año, contraido cierto hábito de reunirnos y cariño y afición especiales á esta clase de labores científicas. Tuvimos en esa época nuestras reuniones en casa del Sr. Lacunza, Arquillo núm. 7, los mismos que

ántes, menos el Sr. Terán, y hubimos de formar los último títulos.

Después de concluidos, nos pareció que debíamos recorrer todo el trabajo de dos años para corregir sus defectos, y esto hacíamos cuando el Sr. Ramírez entró á formar parte del primer gabinete creado por el Emperador Maximiliano. Poco tiempo después, el Sr. Escudero aceptó la cartera de Justicia y el Sr. Lacunza y yo fuimos llamados al Consejo de Estado.

Maximiliano había sido nutrido de ideas de un progreso acaso más avanzado, en cuanto á reformas sociales, que las que se han adoptado en México.—Había recibido además una instrucción jurídica bastante sólida, y su espíritu elevado lo impulsaba á las grandes empresas. Por estos motivos tomó un positivo interés en todo lo relativo á la codificación y más particularmente á la civil.

Quiso que se revisara y elevara al rango de ley el Proyecto de la Comisión, presidiendo él mismo las sesiones de los cuatro miembros que vivían.—El Sr. Terán había fallecido en Europa.

Cuando el Emperador no podía presidir, por ocupación ó ausencia de la capital, se le remitía acta de la sesión, exponiéndole en compendio la discusión y sometiéndole aquellos puntos que, por su gravedad ó por desacuerdo entre los miembros de la Comisión, se juzgaba conveniente reservar para su resolución.

A fin de dar una idea de sus decisiones, copiaré aquí dos, que al acaso tomo entre otras varias.

Tratóse en una de las sesiones del mes de Mayo de 1866 de la legitimación por subsiguiente matrimonio.

El proyecto de Sierra comenzaba el capítulo relativo con estos dos artículos:

"Los hijos naturales se legitimarán únicamente por el subsiguiente matrimonio de sus padres."

"Se comprenden solamente bajo el nombre de hijos naturales *los nacidos* fuera de matrimonio de padres *que al*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"*tiempo de la concepción de aquellos* pudieron contraer "matrimonio, aunque fuera con dispensa, con la restricción "del artículo 147."

La restricción era relativa al hijo nacido de tío y sobrina carnal. Estos dos artículos habían sido modificados por la Comisión, la que en su Proyecto los redactó así:

"*La legitimación tiene lugar solamente en favor de "los hijos naturales.*"

"Los hijos naturales se legitimarán únicamente por el "subsiguiente matrimonio de sus padres; y *esta legitima-"ción tendrá lugar aunque haya mediado otro matrimonio "El matrimonio nulo produce la legitimación á favor de "los hijos, siempre que haya habido buena fe al celebrar-"lo en alguno de los cónyúges.*"

"Se comprenden solamente bajo el nombre de hijos na-"turales los nacidos fuera de matrimonio, de padres que al "tiempo de la concepción de aquellos *ó del nacimiento ó "del tiempo intermedio,* pudieron contraer matrimonio "aunque fuera con dispensa."

Conocida es de vdes. Señores RR., la ley 11 de Toro, primera en España que mandó se atendiese á la libertad de los padres para casarse en cualquiera de dos tiempos, el de la concepción ó el del nacimiento del hijo, para que éste se tuviese como natural.—*Ordenamos é mandamos que entonces se digan ser los fijos naturales cuando, al tiempo que nascieren ó fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres justamente sin dispensación.* —Conocidas son también de vdes. las cuestiones que los expositores levantaron con motivo de esta ley y las censuras á que dió lugar especialmente por abrir la puerta para que el hijo concebido en adulterio se tuviese como natural, si nacía en momentos en que el padre ó la madre adúlteros tenían ya libertad para casarse y porque hizo de peor condición al hijo incestuoso ó nacido de parientes en grado dispensable que al adulterino.

Las mismas razones con que se había combatido hasta

entonces la ley de Toro, se alegaban por dos de los miembros de la comisión en contra de la definición del hijo natural contenida en el proyecto, pues, si bien en ella se tenía como tal al hijo nacido de parientes en grado dispensable, se ampliaba más el inconveniente que presentaban los hijos adulterinos, estableciéndose que, para tener todos los derechos de los naturales, bastaba que sus padres fuesen libres para casarse en un solo momento del tiempo transcurrido entre la concepción y el nacimiento.

Esta definición venía á influir muy directamente en la legitimación que, teniendo lugar respecto de todos los hijos naturales, comprendía á los adulterinos y á los incestuosos, concebidos ó nacidos en las condiciones expresadas.

Pero la dificultad crecía de punto tratándose, no ya de la legitimación, por subsiguiente matrimonio válido, sino de la que se originase del matrimonio putativo, ó sea del que, contraído con impedimento dirimente, pero de buena fé, á lo menos, por parte de alguno de los cónyuges, fuese nulo á causa de tal impedimento.

Conformes todos los miembros de la Comisión en que el matrimonio putativo produjese todos los efectos civiles respecto del cónyuge ó cónyuges inocentes y de los hijos nacidos durante él, resolución que, siguiendo los precedentes históricos, habían adoptado en un artículo anterior (el 198 del Código de 1866, del que, sin otra alteración, formáronse los tres artículos 302, 303 y 304 del que hoy rige), se dividían en lo tocante á los hijos concebidos ó nacidos antes de celebrarse el matrimonio. En concepto de unos, no debiendo de tenerse como naturales á los hijos concebidos en adulterio ó incesto, mucho menos podían ser elevados al rango de legitimados. Mas otros, fijándose principalmente en la inocencia de los hijos ilegítimos y tratando de reducir, en cuanto fuera posible, la cruel doctrina que hace recaer sobre ellos las consecuencias sociales de las faltas de sus padres, sostenían con copia de razones humanitarias y filosóficas los artículos del Proyecto. Sometióse,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pués, la solución de estas divergencias al Emperador, que no había presidido aquella sesión.

He aquí su resolución:

«Mi querido Ministro Escudero:—Hemos leído con grande atención é interés los diferentes pareceres á que ha dado origen el debate entablado bajo vuestra presidencia, sobre el texto del artículo 220 y siguientes del Proyecto de Código Civil.

Respecto del art. 220, decidimos que se pondrán las palabras *el matrimonio anulado*, en vez de *el matrimonio nulo*.

En cuanto al artículo 221, encierra en sí la definición del hijo natural y debemos aprovechar las luminosas discusiones que han tenido lugar en los países extranjeros para redactarlo de una manera clara y precisa.

Creemos que no haya equívoco formulándolo del modo siguiente:

«Se comprende bajo el nombre de hijos naturales á los concebidos fuera del matrimonio, en tiempo en que el padre y la madre pudieron casarse, aunque con dispensa.»

En efecto, los hijos nacidos de tío y sobrina ó de cuñado y cuñada deben considerarse naturales, y no incestuosos, porque el incesto es la union criminal de dos personas á quienes la ley prohibe absolutamente casarse.

Si no se concediera la legitimación á los hijos nacidos de tio y sobrina y de cuñado y cuñada antes del matrimonio, resultaría, si se casaran después, con dispensa, los progenitores, que los hijos primogénitos estarían en casa de sus padres, sin ser reconocidos, vivirían bajo el mismo techo que sus hermanos, hijos de un mismo padre y madre, comerían en la misma mesa y, sin embargo, no participarían de los mismos derechos, ni llevarían el mismo apellido; es decir, en el mismo hogar los hijos legítimos irían creciendo al lado de los incestuosos.

Recibid las seguridades de la benevolencia de vuestro afectísimo—*Maximiliano*.—Palacio de México, á 29 de Mayo de 1866.»

Sustituyendo las palabras *matrimonio nulo* con estas *matrimonio anulado*, buscó Maximiliano la relación con otro artículo adoptado anteriormente por la Comisión, que hoy es el 296 del Código Civil vigente, y según el cual "el matrimonio, una vez contraído, tiene á su favor la presunción de ser válido, y sólo se considerará nulo cuando así se declare por sentencia que cause ejecutoria."

La definición del hijo natural, refiriéndose únicamente á la época de la concepción, salvó los graves inconvenientes que había presentado la ley de Toro.

Cosa digna de notarse es que esta definición del Emperador Maximiliano, consignada en el primer libro del Código que promulgó en 1866 (art. 243), se haya adoptado textualmente en el artículo 355 del Código vigente, lo mismo que lo fueron los artículos objeto de la discusión que he compendiado. Pueden verse en este último Código, con los números 352, 353 y 354.

En otra sesión, la de 14 de Mayo de 1866, hubo de dividirse la Comisión acerca de otros dos puntos de no menor importancia.

¿Deberán concederse al padre todos los derechos derivados del reconocimiento del hijo natural, á saber, la patria potestad con todas sus consecuencias sobre los bienes del hijo reconocido, sea cual fuere la edad del hijo, en el momento del reconocimiento?

¿Será justo y conveniente autorizar al padre para nombrar tutor testamentario á su hijo, excluyendo á la madre y demás ascendientes de la patria potestad?

La resolución de estas dos cuestiones la dió Maximiliano en esta otra nota.

"Mi querido Ministro Escudero:—En la sesión que se verificó el 14 del corriente, la Comisión encargada de la formación del Código Civil sometió á nuestra decisión la redacción que conviene dar al artículo 267.

En tal virtud nos ha parecido que es preciso reconocer que el derecho de autoridad de parte del padre y de la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de la madre sobre los hijos naturales implica el derecho de educarlos, y la educación misma implica el derecho de custodia y de corrección.

Los derechos de autoridad, de custodia, de corrección y educación implican por vía de consecuencia la administración y usufructo de sus bienes.

Sin embargo, como podría suceder que esto diese lugar á convertir el reconocimiento del padre, si se le atribuyese la patria potestad sin restricción, en una especulación que resultaría de que no lo haga sino cuando el hijo esté ya en edad de trabajar ó producir algo por sí mismo, dejando entre tanto, y durante la infancia, abandonada á la madre, la que se verá así privada de su hijo y al mismo tiempo del resultado de los sacrificios que haya hecho para criarlo y educarlo, opinamos por negar toda potestad al que no reconozca su hijo natural antes de que cumpla los siete años.

Respecto del artículo 277, párrafo 2º, en nuestro concepto, el padre debe tener la facultad de nombrar tutor testamentario, excluyendo á los abuelos de la patria potestad, pero no á la madre, porque tiene un derecho natural sobre sus hijos y ha cooperado tanto como el padre, ó tal vez más, á su educación, y el artículo 201 precave los abusos en que podría incurrir.

Recibid las seguridades de la benevolencia de vuestro afectísimo-*Maximiliano*.-Cuernavaca, á 18 de Mayo de 1866.

También veo con gusto que en el Código actual se adoptó la segunda de estas resoluciones (art. 530 y 531).

Tan grande importancia daba Maximiliano á los trabajos de codificación que no los perdía de vista, ni en momentos en que la complicación y gravedad de los asuntos públicos y las desgracias de familia pesaban horriblemente sobre su espíritu, destrozándole el corazón.

Sirva de prueba la carta siguiente, que me escribió desde Orizaba, en los días mismos en que, rodeado de partidarios de opiniones encontradas, tomaba la fatal resolución de sostener su Gobierno, rugiendo ya terrible la revolución que había de sacrificarlo, cuando á situación la más difícil que se presentó á un gobernante se unía la reciente y terrible noticia de la enajenación mental de la Emperatriz.

"Mi querido Consejero Luis Méndez:—Vd. tendrá la bondad de arreglar cuanto antes la publicación del tercer tomo del Código Civil y de arreglar también el que la Comisión se ocupe del cuarto, siendo de mucho interés la conclusión de obra tan importante.

Reciba vd. las seguridades de la benevolencia de su afectísimo—*Maximiliano*.—Orizaba, Diciembre 7 de 1866.

A esta carta siguieron varios telegramas, en el mismo sentido.

Merced á voluntad tan decidida, hubieron, en 6 y 20 de Julio de 1866, de promulgarse los dos primeros libros del Código Civil.—El libro tercero, de las sucesiones estaba ya listo para darlo á la prensa, cuando sucumbió el régimen imperial. Faltaba al cuarto la correccion de estilo.

Me resta decir á vds. lo que después pasó.

Preso en el ex-Convento de la Enseñanza de México, á causa de los acontecimientos políticos, tuve el honor de recibir allí las visitas, primero del Sr. Lic. D. José María Lafragua y después del Sr. Lic. D. Rafael Dondé.

Ambos tenían encargo del Ministro de Justicia, D. Antonio Martínez de Castro, quien ha puesto después muy alto su nombre en el mundo jurídico con la formación del Código Penal, para pedirme los papeles sobre el Código Civil, que debía ser revisado por ellos, en unión del Sr. Licenciado D. Mariano Yañez.

Ustedes, señores redactores, comprenderán mi difícil situación: personas muy respetables para mí, á quienes deseaba complacer, no sólo por este motivo, sino porque sus largos y profundos estudios constituían la elección más acertada posible para la Comisión que se les había conferido, solicitaban aquellos manuscritos, que eran la expresión

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de la vida científica de ótros tres amigos, desterrados.

La correspondencia que voy á comunicar á vdes., aunque seguida por mí en días angustiados, dará á vdes. una idea de la suerte del Proyecto y la relación que precede aclarará algunas equivocaciones que se deslizaron en las cartas del Sr. Martínez de Castro. Pretendiendo éste que el Proyecto era de propiedad pública, virtió en una de sus cartas la especie de que el Sr. Lacunza había sido remunerado durante su trabajo en 1862 y 1863, con el sueldo de Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, obteniendo una licencia con goce de sueldo, para dedicarse á la formación del Código. Es exacto que una parte de ese período tuvo la licencia; pero no sé que se le haya pagado el sueldo: conocido es que el Poder Judicial, en aquellos calamitosos años, sirvió con una abnegación honrosa la mayor parte del tiempo, sin recibir emolumentos, que el Gobierno no podía pagar, por tener destinados todos sus recursos para las atenciones de la guerra.

Pero, sea de esto lo que fuere, ninguno de los otros miembros tuvo remuneración, ni aspiró á ella.—Bien al contrario, alguno puso de su peculio les pequeños gastos que se ofrecían.

La correspondencia á que aludo, dice así:

"Sr. Lic. D. Antonio Martínez de Castro, Ministro de Justicia.—Prisión de la Enseñanza, en México, Agosto 31 de 1867.—Mi estimado Señor: Los Sres. Lafragua y Dondé han venido á verme de parte de vd. para pedirme el Proyecto de Código Civil que tuve el honor de formar en compañía de los Sres. Escudero, Lacunza y Ramírez. Parece que el objeto es el de revisarlo y corregirlo, para promulgarlo durante las facultades extraordinarias del Gobierno, á fin de no destruir y antes bien uniformar la legislación privada en el país.

Si en otras circunstancias se me hubiera hecho este pedido no habría vacilado en obsequiarlo, porque comprendo que los tres letrados nombrados por el Gobierno

son muy capaces y dignos de dar cima á una obra cuya conclusión reclama imperiosamente, y desde hace muchos años, la Nación, y que poco importa que la promulgación se haga por éste ó aquél Gobierno, con tal que se verifique.

Sé también, que una obra de este género, para que sea duradera, es y debe ser ajena á las opiniones políticas, manteniéndose en una esfera muy elevada de justicia, especialmente en sociedades cuyo derecho público aún no está bien cimentado y definido; y, todavía más, si la propiedad del Proyecto fuese sólo mía, no solo no habría vacilado en cederlo á la nueva Comisión, sino que me habría prestado gustoso á dar cuantas aclaraciones ó explicaciones se me hubieran pedido. En esto habría seguido mis sentimientos respecto del País, sin tener en cuenta para nada mis actuales padecimientos.

Pero el Proyecto no es una obra exclusivamente mía. La mayor y mejor parte de él es fruto del estudio de mis tres colaboradores, que hoy residen en el extranjero, desterrados de su suelo natal, y cuyos bienes se hallan aquí confiscados ó bajo la amenaza de serlo. ¿Puedo yo disponer de la obra sin su ausencia y privarlos así aún de su propiedad intelectual? ¿Hasta qué punto llevarían ellos á bien que por mí solo sujetase su obra á revisión y corrección.

Ella las necesita, en verdad, y tan convencidos estamos los cuatro de ello que en este último trabajo nos ocupábamos; y aunque, á pesar de todo nuestro empeño, el Código había de quedar defectuoso, ¿no es natural suponer que cada cual aspire á dar la última mano á su obra antes de entregarla á la censura de otros, especialmente cuando tres años de estudio laboriosísimo llegaron á hacerles cobrar amor y cariño?

Nada hay para mí más sagrado que el respeto y fidelidad al amigo ausente.

Así es que, al hablarme los Sres. Dondé y Lafragua, agolpándose en mi mente estas consideraciones, sentí que necesitaba meditarlas con todo recogimiento y les pedí

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tiempo para resolver. En esta dilación no he creído hacer nada irregular, porque entiendo que nuestro Proyecto no podría en ningún caso ser de propiedad pública, mientras no esté publicado con este fin. Usted, mejor que nadie, sabe que es el fruto del estudio de una reunión de amigos, que no recibieron remuneración alguna por él, como vd. tampoco la recibió por la formación del Código Penal, razón por la cual el Imperio no se consideró con derecho para exigírselo. Y, si bien el trabajo se hacía bajo la presidencia de un Ministro, la Comisión nunca tuvo carácter oficial, ni pudo concluir sus labores, sino mucho tiempo después de que esa presidencia cesó, faltando una buena parte al salir el Gobierno de esta Capital.

Sin embargo de todo, y después de pesadas todas estas consideraciones, habiéndoseme hecho valer que mi negativa podría atribuirse á causas que están muy lejos de mi mente, porque las que he tenido para tomarme tiempo de meditar son las que he expuesto con toda sinceridad, he creído deber acceder á los deseos del Gobierno, ofreciendo al Lic. Dondé que, tan luego como me avise que la Comisión ha concluído el estudio de los dos primeros libros que corren impresos, le entregaré los siguientes, con lo que tendré tiempo de poner en orden mis apuntes y presentar así el verdadero Proyecto de la Comisión. Sólo deseo que el Ministerio del digno cargo de vd. me dé una constancia cualquiera de que el Gobierno es el que me lo ha pedido, para cubrir así mi responsabilidad para con mis amigos.

Antes de concluir, me permitiré hacer algunas observaciones que pueden ser de alguna utilidad práctica. Cuando nosotros emprendimos el estudio del Proyecto formado por mi cuñado el Dr. Sierra, creímos que todo consistiría en darle una lectura, haciéndole una que otra corrección que á primera vista se presentase; pero, acaso por no estar presente el autor, para exponer sus motivos, á poco andar nos convencimos de la necesidad de hacer un nuevo Proyecto. Este duró tres años, aunque nuestras reuniones eran

de dos horas diarias y fueron interrumpidas poco tiempo. Me temo que lo mismo suceda con la nueva Comisión.

En el Proyecto que ahora se va á sujetar á revisión quedan por hacer dos trabajos que habíamos emprendido. El primero, recorrer, y tal vez modificar, algunos títulos que, sea porque los principios de la ciencia sobre ellos aún no están bien firmes, como el de hipotecas y el de contratos aleatorios, sea porque se formaron en momentos de poca calma de espíritu, no consideró la Comisión como acabados. El segundo, la corrección de estilo, tan importante en las leyes civiles, para evitar dudas é interpretaciones ajenas á su espíritu.

Con lo dicho, sin que en ello haya influido temor alguno originado de mi situación personal, creo dejar satisfechos los deseos de vd., de quien me repito suyo afectísimo seguro servidor Q. S. M. B.—*Luis Méndez.*»

«Sr. Lic. D. Luis Méndez.—Ministerio de Justicia, Septiembre 2 de 1867.—Compañero y Señor mío: Quedo impuesto de las dificultades que vd. pulsa para entregar al Sr. Dondé los manuscritos del Código Civil. Creo que la resistencia de vd. es de buena fé, y sólo por esa consideración me propongo combatirla, seguro de que vd., con su buen juicio, estimará de mejor peso mis razones que las expuestas en su favorecida á que contesto.

El proyecto de Código Civil, como vd. recordará, fué formado por el Lic. Justo Sierra, á quien el Gobierno nombró con ese objeto, remunerando y publicando sus trabajos. A fin de revisar éstos, el Gobierno nombró una Comisión, compuesta de varios jurisconsultos, casi todos empleados, que aceptaron gustosos tan honorífico encargo. Alguno de ellos, como el Lic. Lacunza, disfrutó de una licencia para dejar de asistir á la Corte, mientras se dedicaba á ese trabajo, sin dejar de percibir por eso el sueldo de Magistrado. Otros, en su carácter de empleados, eran muy considerados por el Gobierno, como premio de sus servicios, y todos los miembros de esa Comisión recibían de él una

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

honra que los hombres ilustrados estiman en mucho más que cualesquiera remuneraciones pecuniarias. Por otra parte, los que aceptaron el encargo mencionado, ya fuese con sueldo ó sin él, se obligaron á consagrar sus trabajos al Gobierno, que es, por lo mismo, el verdadero propietario de ellos.

El Sr. Lacunza, penetrado de esta verdad, que nadie ha puesto hasta hoy en duda, quiso remitir al Sr. Terán, á San Luis Potosí, los manuscritos del Código; pero recibió orden de concluir el Proyecto y enviarlo después. Por esta circunstancia quedaron en poder de dicho letrado y pasaron en seguida al de vd., sin que yo comprenda el derecho que le asiste para detenerlos, cuando tanto el Sr. Lacunza como vd. no han tenido otro carácter que el de depositarios de esos interesantes manuscritos.

La ausencia de algunos colaboradores de vd. y la falta de su expreso consentimiento no deben detener á vd. para restituir al Gobierno trabajos que le pertenecen, ya porque vd. en ocasión semejante no tuvo embarazo en ponerlos á disposición de Maximiliano, á pesar de hallarse ausentes en aquella época los Sres. Lerdo y Terán, ya también porque, careciendo los ausentes de derecho alguno sobre manuscritos que son propiedad del Gobierno, es inútil consultar la voluntad de esos señores.

Estoy persuadido de que, en vista de las razones que acabo de dar á vd., no tendrá dificultad alguna en entregar al Sr. Dondé todos los manuscritos de que se trata: así lo exigen la justicia, el buen nombre de vd. y su interés personal. A pesar de todas estas consideraciones, vd. obre como le parezca; pero sírvase decirme cuál sea su resolución, para que, en vista de ella, tome el Sr. Presidente la que crea oportuna.

Me repito de vd. afectísimo compañero y seguro servidor Q. S. M. B.—*Antonio Martínez de Castro.*»

Ministerio de Justicia é Instrucción Pública.—Sección 1ª.—Deseando el Ciudadano Presidente promulgar lo más

pronto posible el Código Civil formado bajo la presidencia del C. Ministro de Justicia, Lic. Jesús Terán, acordó se previniese á vd. que entregue al C. Lic. Rafael Dondé todos los manuscritos de dicho Código, para que proceda á la revisión que, en unión de otros letrados se le tiene encomendada.

Lo digo á vd. para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y Libertad. México, Septiembre 3 de 1867—*Martínez de Castro.*—C. Lic. Luís Méndez.

»Prisión de la Enseñanza en México, á 4 de Septiembre de 1867.—Compañero y Señor de mi respeto: tengo el honor de contestar la favorecida de vd. fecha de ayer, relativa al Proyecto del Código Civil.

Agradezco á vd. sinceramente estime las observaciones que hice en mi anterior como dictadas por la buena fé que guiará siempre mis actos. Desgraciadamente, acaso por una preocupación nacida de que en el Proyecto del Código Civil veo una creación intelectual de la Comisión, no puedo convenir con vd. en la apreciación que de él hace como siendo de propiedad pública. Usted, que es tenido con razón como el tipo de la franqueza, espero que no llevará á mal que la use á mi vez.

Pero sea de esto lo que fuere, la obra se considera útil para el país y se desea promulgarla, en lo que ciertamente recibe la Comisión una honra que es de agradecerse y, ya que vd. juzga inútil que yo me ocupe de poner orden en los apuntes de los últimos estudios que habíamos hecho, que es el deseo que manifesté en mi anterior, será vd. obsequiado en todo, porque me sería sumamente desagradable que se me pudiera atribuir una mira opuesta al servicio público, tratándose de un trabajo por cuya realización he sacrificado aún mi tranquilidad y bienestar privados.

Sinceramente deseo que se obtenga el objeto que vd se propone y quedo suyo afectísimo compañero y seguro servidor Q. S. M. B.—*Luís Méndez.*—Sr. Ministro de Justicia, Lic. D. Antonio Martínez de Castro.»

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

"Prisión de la Enseñanza en México, á 4 de Septiembre de 1867.—He recibido la comunicación de vd. fecha de ayer, previniéndome de orden del Sr. Presidente entregar al Sr. Rafael Dondé todos los manuscritos del Código Civil formado bajo la presidencia del Midistro de Justicia, Lic. D. Jesús Terán, con objeto de promulgarlo lo más pronto posible.

Después de las explicaciones verbales y por escrito que han mediado sobre el particular, y aunque considero de propiedad particular esta obra, que no llegó á terminarse bajo la presidencia del Sr. Terán, tengo el honor de decir á vd., en contestación, que hoy entrego al Sr. Lic. Dondé los manuscritos que se me piden y contienen el Proyecto completo, exceptuando los dos libros ya publicados, de los que no conservo manuscrito.

Con esto queda obsequiada la orden del Sr. Presidente, deseando por mi parte que todo redunde en bien públio.c

Soy de vd., Sr. Ministro, obediente servidor.—*Luís Méndez.*

"Sr. Lic. D. Luís Méndez.—En la Enseñanza.—México, Septiembre 5 de 1867.—Mi estimado compañero y señor: He celebrado mucho la resolución tomada por vd. de entregar al Sr. Lic. Dondé todos los trabajos relativos al Proyecto del Código Civil que paraban en poder de vd.

Es evidente, como vd. lo reconoce, que la pronta promulgación del Código redundará en beneficio del público; y, por otra parte, vd. no debe temer que el Gobierno quiera nunca privar á nadie de la gloria que pueda pertenecerle en tan importantes trabajos.

Quedo de vd. afectísimo compañero y servidor Q. S. M. B.—*Martínez de Castro.*

«Ministerio de Justicia é Instrucción Pública.—Sección 1.ª—Quedo enterado de que, en cumplimiento de la orden de 3 del corriente, entregó vd. al C. Lic Rafael Dondé los manuscritos del Código Civil, para su pronta promulgación. Al decirlo á vd., tengo la honra de manifestarle que el C.

Presidente cuidará, al hacer la promulgación, de que el público conozca los nombres de los letrados á cuyos ilustrados afanes se debe la formación de una obra de tan grande utilidad para el País, como es el Código Civil.

Lo digo á vd. para su inteligencia y satisfacción.

Independencia y Libertad. México, Septiembre 5 de 1867.—*Martínez de Castro.*—Sr. Lic. D. Luis Méndez."

Las comunicaciones que preceden son la mejor rectificación de los errores de hecho en que incurrió el Sr. de Montluc; pero debo añadir que, á pesar de estos errores, los elogios tributados á los miembros de la última Comisión son muy merecidos; que su obra contiene diferencias esenciales respecto de la Comisión de 1861, muchas de ellas, en mi concepto, mejorándola sábiamente, y que por lo tanto es de felicitarse al País de que aquella y no ésta sea su legislación civil.

Autorizo á vdes., señores redactores, para hacer de esta carta el uso que estimen conveniente y me subscribo de vdes. afectísimo amigo,

LUIS MÉNDEZ.

México, Noviembre 16 de 1894.

Sr. Lic. D. Agustín Verdugo.

Mi querido Agustín:

Ninguna prueba mayor de mi afecto y de la alta estima en que tengo la instrucción, la laboriosidad y la honorabilidad profesional que á vd. distinguen puedo darle que la de confiar á su estudio los autógrafos de la Comisión que trabajó en la formación del Código Civil de 1861 hasta 1866.

Y es que estos autógrafos, aparte de la grande importancia que tienen para la historia de nuestra legislación civil y para la recta inteligencia de sus textos, contienen el fruto, más precioso para mí, de mis estudios jurídicos, en época en que, joven aún, tuve la honra y la inmensa satisfacción de verme asociado á jurisperitos de la talla de La-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cunza, Ramírez D. Fernando y Escudero y Echanove, en la obra de más aliento que en legislación puede elaborarse, ya que el Código Civil, conteniendo los principios generales de la legislación de un país, es la base y fundamento de todos los demás Códigos y á la vez su complemento.

Considere usted, pues, si tendré cariño á estos autógrafos y si podré desprenderme de ellos sin tener plena y absoluta confianza en la persona á quien transmita este depósito sagrado, en el que no solamente los autores, sino la Nación entera, están interesados.

Ellos se componen:

1.° De un tomo empastado de la edición oficial que en 1861 se hizo del Proyecto del Dr. Sierra, habiendo sido mi primer trabajo correr con todo lo relativo á esa edición, corrigiendo sus pruebas, por orden del Gobierno.

En las fojas en blanco que comprende el tomo y en el texto impreso hallará usted, de mi puño y letra, las reformas, correcciones y adiciones que la Comisión hizo al Proyecto, á medida que se estudiaba y que por su brevedad no se consignaban en él.

2.° Cuarterones de papel, escritos generalmente de puño y letra del Sr. Lic. José María Lacunza, algunos de la de los Sres. Ramírez y Escudero y otros de la mía, siendo estos cuarterones en número considerable.

3.° Diez y ocho cuadernos manuscritos contienen la redacción íntegra del primer Proyecto de Revisión de la Comisión, desde el Título Preliminar hasta el Título XXIII del Libro Tercero, que es el Título sobre la Prescripción, es decir, todo el Código, pues ese Libro Tercero comienza por las Herencias y, continuando por los Contratos, concluye por los Tratados del Registro Público, Graduación de Acreedores y Prescripción.

De estos cuadernos, el primero comprende el Título Preliminar y el Libro Primero, ó sea el Tratado de las Personas, y el segundo sobre los Bienes, la Propiedad, en general, y sus diferentes modificaciones que se hicieron al

Proyecto revisado, para preparar la promulgación que de estos dos libros se hizo por el Emperador Maximiliano en 1866.

El tercer cuaderno, que comprende toda la materia de Sucesiones Hereditarias, tiene también las correcciones, generalmente de letra del Sr. Escudero, que se le estaban haciendo para promulgarse; pero esta promulgación, como usted sabe, no llegó á efectuarse.

Los otros cuadernos son los del Proyecto revisado, sin correcciones nuevas, y van desde el Título IV hasta el XXIII.

Cuando en 1867 fuí requerido, urgido y hasta cierto punto apremiado por el Secretario de Justicia, Lic. D. Antonio Martínez de Castro, para entregar á la nueva Comisión nombrada por el Gobierno de la República, restablecido en esta Capital, el Proyecto del Código, me encontraba afortunadamente poseedor de dos copias de ese Proyecto, una que entregué á dicha Comisión y la otra que en diez y ocho cuadernos remito á usted.

Por lo tanto, me quedo sin ninguno de los dos, y mucho le apreciaría, ya que en adelante va usted á ser el único propietario de estos manuscritos, que permita á un copista me vaya sacando la copia de todo el Libro III, pues del primero y del segundo ya la tengo, aunque no con las correcciones de los originales que le mando; pero ellas no me son tan necesarias para el fin que me propongo, que es el de conservar algo de esta obra, que no sólo me ocupó cinco años de estudio, como á mis demás compañeros de Comisión, sino que, además del trabajo que á ellos les dió, me dió á mí personalmente el de redactar el resultado de nuestras discusiones, por haberme tocado el carácter de Secretario, siendo el más jóven de la Comisión, y puedo agregar, supuesto que esta carta la dirijo á un amigo con quien pueden tenerse toda clase de confidencias, que de mi peculio pagué á los copistas y que ni siquiera este gasto me fué reembolsado.

Y no estará por demás agregar los siguientes porme-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nores, para que usted se forme una idea completa de cómo se hizo este trabajo.

Como ya he dicho, comencé por hacer, de orden del Gobierno que la costeó, mas no mi trabajo personal, la impresión oficial de los manustritos del Doctor Sierra.

El Gobierno repartió ejemplares de esta edición á los Abogados, Gobiernos y Tribunales de la República, invidoátodospara su estudio y quehiciesen sus observaciones.

Ninguna se le presentó que yo sepa.

Por el mes de Septiembre de 1861 fuímos invitados D. José María Lafragua, D. Sebastián Lerdo de Tejada, D. Eulalio María Ortega, D. José María Lacunza, D. Pedro Escudero y Echanove, D. Fernando Ramírez y yo, reunidos en el Ministerio de Justicia, por el Señor Ministro, para dar opinión sobre si debía promulgarse el proyecto del Dr. Sierra, tal como estaba.

Pedimos dos meses para estudiarlo y posesionarnos de él, pasados los cuales tuvimos nueva reunión y fuimos de parecer que el Proyecto requería una revisión minuciosa.

Entonces se resolvió el nombramiento de la Comisión, compuesta de todos los concurrentes, menos el Sr. Lafragua, que se excusó luego.

La Comisión debía ser presidida por el Ministro de Justicia D. Jesús Terán, como en efecto lo fué, desde que comenzó sus labores bajo el Gobierno de la República, hasta la víspera del 31 de Mayo de 1863, en que el Gobierno Republicano abandonó la ciudad de México, por acercarse á ella las fuerzas de la Intervención Francesa, que en efecto la ocuparon el 10 de Junio siguiente.

Pero el Sr. Lic. D. Eulalio Ortega se excusó después; y el Sr. Lerdo de Tejada no recuerdo que haya concurrido más que á una de nuestras juntas, que se tuvieron diariamente, en la Secretaría de Justicia, de 2 á 4 de la tarde, con admirable exactitud, porque durante año y seis meses, de Diciembre de 61 á 30 de Mayo de 63, se verificaron, sin más excepciones de días que los feriados.

El Sr. Lacunza, hombre que á una clarísima inteligencia y á profundos conocimientos del Derecho unía la cualidad, sumamente recomendable de gran laboriosidad y quien, para poderse dedicar exclusivamente al estudio del Código, se había separado con licencia de la Suprema Corte de Justicia, de la que era Magistrado constitucional, fué generalmente el ponente, ó, mejor dicho, el proponedor de las enmiendas. Por eso los cuarterones de papel están casi todos escritos por él mismo.

Los otros tres miembros de la Comisión discutíamos con el Sr. Lacunza y en estas discusiones tomaba también parte el Ministro Sr. Terán, siendo quien resolvía cuando ninguna opinión tenía mayoría absoluta.

Como usted notará, las enmiendas, adiciones, etc., que se hicieron al Proyecto sobre que elaboraba la Comisión, fueron en tal número y tan substanciales, que verdaderamente se formó un nuevo Proyecto de Código. Sin embargo de lo cual ese primer proyecto del Dr. Sierra debe consultarse, si se quieren comprender bien las modificaciones y ampliaciones que se le hicieron; como debe consultarse el Proyecto de Código Español que en 1851 dió á conocer al mundo científico el ilustre D. Florencio García Goyena, quien en sus Concordancias, Motivos y Comentarios se elevó al primer rango de los jurisconsultos españoles de nuestros tiempos; porque, como el mismo Dr. Sierra lo asentó al remitir su proyecto al Gobierno, de ese proyecto español tomó en general sus fórmulas.

La obra del Exmo. Sr. García Goyena, relacionando el Proyecto que comentó con la Legislación Romana y con la patria, á la vez que con los principales códigos vigentes á la sazón en Europa, será siempre consultada con provecho, no sólo por los que quieran remontarse á las fuentes de la legislación civil, sino por los jurisperitos que deseen resolver las cuestiones á que la legislación española antigua dió lugar entre los comentadores y los tribunales.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Y ya que de esto hablo, me permitiré una pequeña digresión.

Se cree, generalmente, por nuestros cursantes y noveles abogados, que para serlo completos, basta aprender los textos de los nuevos Códigos que la República se ha dado, y, cuando más, buscar su interpretación en los Códigos de la Europa, especialmente los franceses, que fueron consultados para la formación de los dichos nuestros Códigos.

Este es un error manifiesto; pero que está favorecido por el plan de estudios de nuestra Escuela de Derecho, en el que se nota la falta de un curso sobre los orígenes que en nuestra antigua legislación tenga la nueva, pues evidentemente no es bastante, ni puede tenerse como único origen, el derecho romano, cuyo estudio es obligatorio, siendo que la legislación española, por los usos y costumbres de los pueblos germanos, de los árabes, etc., que se establecieron en España, por la influencia de los cánones, etc., etc., contiene modificaciones profundas del derecho romano, muchas de las cuales se respetaron y conservaron en nuestros códigos modernos.

Y, fuera de lo dicho, el estudio de la antigua legislación patria española será todavía por largos años necesario, por tenerse que aplicar, no sólo como legislación común federal, sino aun como legislación particular, á todos los actos y contratos celebrados antes de su derogación, en el Distrito y en los Estados, dado que la ley nueva no tiene efecto retroactivo.

Y no sólo es necesario el conocimiento de esa legislación, cuando se quiere conocer con perfección el derecho privado mexicano, sino aun para la inteligencia del derecho público, como lo hice patente á nuestra Academia, en mi estudio sobre la interpretación y el alcance del art. 17 de la Constitución.

Será uno de los vacíos que llene la Academia el inducir á los jóvenes abogados al estudio de nuestra antigua y tan rica en sanos preceptos legislación patria española, y ninguno que no la conozca podrá llamarse verdadero jurisperito.

Basta ya de digresión y sigo la historia de la formación del Código Civil.

Cuando el Gobierno de la República, en 31 de Mayo de 1863, abandonó esta Capital, huyendo de las fuerzas invasoras de la Intervención Francesa, la Comisión había casi concluido el Proyecto de Código, pues sólo le faltaba formar los títulos sobre Hipoteca, Registro Público y Prescripción, títulos que se dedicó á formar, y concluyó en reuniones ya puramente privadas, que se tuvieron en el primer período del establecimiento de la Intervención Francesa en esta Capital, ó sea antes de la llegada del Emperador Maximiliano.

Omitiré referir á V. en pormenor las solicitudes que se hicieron á la Comisión por la Regencia del Imperio, creada y sostenida por las fuerzas de la Intervención en ese primer período para obtener la entrega del Proyecto de Código, y como vino éste á ser revisado y promulgado en sus dos primeros Libros por el Emperador Maximiliano.

Esta parte de la historia la he publicado en "El Foro" hace ya algunos años, comprendiendo en ella la de la entrega que de todo el Proyecto, del cual son una copia los diez y ocho cuadernos que hoy remito á V., hice á la Comisión creada por el Gobierno de la República, ya restablecido en esta Capital, la cual, adoptando casi en totalidad ese Proyecto; pero introduciendo ciertas modificaciones, séame permitido decirlo, que rompieron la harmonía del sistema, produjo el Código Civil promulgado en 1870, como especial para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California.

El del Dr. Sierra y el de la Comisión, de la que formé parte, se hicieron como Código General para toda la República.

Ahora, para que si alguna vez, como lo espero de su laboriosidad y del amor á la ciencia que ardorosamente cultiva V., se resolviese á estudiar los papeles que confío á su guarda, me permitiré indicarle el procedimiento.

Debe acudirse primero al tomo impreso del Proyecto

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

del Dr. Sierra, en el cual puse durante la discusión algunas anotaciones, que por su brevedad, podían ser consignadas en ese tomo.

En segundo lugar, á los cuarterones en que se hallan escritos los artículos nuevos ó las nuevas modificaciones, á artículos del Proyecto del Dr. Sierra. En esos cuarterones, lo tachado, lo entrerrenglonado, etc., significan las enmiendas que lo propuesto sufrió, durante la discusión, y sirven por lo tanto, para precisar bien el sentido de lo qqe se conservó.

Y, por último, en tercer lugar, á los cuadernos en los que consigné la redacción interrumpida de todo el Proyecto.

De esos cuadernos, los tres primeros los hallará V. con las últimas enmiendas de que ya he hablado.

Excúseme V. lo largo de esta carta, que es como mi testamento sobre la parte que tuve en la formación del Código Civil.

Recorriendo mis papeles, encuentro una carta de mi maestro el Sr. Lic. D. José María Regil, de venerada memoria para todos los que, en un período de cerca de cuarenta años, fuimos sus discípulos en la Escuela de Derecho de Campeche y á quien debo lo poco que sé en la árdua ciencia de las leyes. Esa carta está fechada en Campeche el 4 de Diciembre de 1866.

En ella con bondad suma me felicita con ocassión de la promulgación de los dos primeros Libros del Código.

Cuando la recibí puse en ella lo siguiente:

"En los sinsabores y desventuras que me trajo el Código Civil, encontré un verdadero consuelo al recibir esta carta de mi Maestro."

Y ahora concluyo, diciendo que experimento una verdadera satisfacción en confiar y donar á Vd. estos manuscritos, porque ninguno más digno que Vd. hallaría para poseerlos.

Suyo verdaderamente afmo.

LUIS MÉNDEZ.

CODIGO CIVIL MEXICANO.

TITULO PRELIMINAR.

De la ley y sus efectos, con las reglas generales de su aplicación.

Proyecto Sierra (art. 1) «La ley sólo obliga y surte efecto desde el día que ella designa. Si no está designado, obligará y surtirá efecto en la residencia de los supremos poderes nacionales desde que se inserte en el periódico oficial de la República: en las capitales de los Estados, desde que en los respectivos periódicos oficiales se verifique la publicación; y en las demás poblaciones de cada Estado, en los días siguientes á proporción de la distancia de la capital, computándose el tiempo á razón de cinco leguas por día.»

El Sr. Lacunza hace observaciones al Proyecto, proponiendo la redacción siguiente: "Las leyes, reglamentos ó cualesquiera otras disposiciones de observancia general de las autoridades, sólo obligan y surten su efecto desde el día posterior á la promulgación, que ellas mismas designen. Si no lo designan, obligarán y surtirán su efecto desde el día de su promulgación en el lugar en que ésta se verifique, y en los lugares dependientes de éste en los días siguientes á proporción de las distancias de la Capital ó cabecera en que se haya promulgado, computándose el tiempo á razón de un día por cada cinco leguas de distancia

del Dr. Sierra, en el cual puse durante la discusión algunas anotaciones, que por su brevedad, podían ser consignadas en ese tomo.

En segundo lugar, á los cuarterones en que se hallan escritos los artículos nuevos ó las nuevas modificaciones, á artículos del Proyecto del Dr. Sierra. En esos cuarterones, lo tachado, lo entrerrenglonado, etc., significan las enmiendas que lo propuesto sufrió, durante la discusión, y sirven por lo tanto, para precisar bien el sentido de lo qqe se conservó.

Y, por último, en tercer lugar, á los cuadernos en los que consigné la redacción interrumpida de todo el Proyecto.

De esos cuadernos, los tres primeros los hallará V. con las últimas enmiendas de que ya he hablado.

Excúseme V. lo largo de esta carta, que es como mi testamento sobre la parte que tuve en la formación del Código Civil.

Recorriendo mis papeles, encuentro una carta de mi maestro el Sr. Lic. D. José María Regil, de venerada memoria para todos los que, en un período de cerca de cuarenta años, fuimos sus discípulos en la Escuela de Derecho de Campeche y á quien debo lo poco que sé en la árdua ciencia de las leyes. Esa carta está fechada en Campeche el 4 de Diciembre de 1866.

En ella con bondad suma me felicita con ocassión de la promulgación de los dos primeros Libros del Código.

Cuando la recibí puse en ella lo siguiente:

"En los sinsabores y desventuras que me trajo el Código Civil, encontré un verdadero consuelo al recibir esta carta de mi Maestro."

Y ahora concluyo, diciendo que experimento una verdadera satisfacción en confiar y donar á Vd. estos manuscritos, porque ninguno más digno que Vd. hallaría para poseerlos.

Suyo verdaderamente afmo.

LUIS MÉNDEZ.

CODIGO CIVIL MEXICANO.

TITULO PRELIMINAR.

De la ley y sus efectos, con las reglas generales de su aplicación.

Proyecto Sierra (art. 1) «La ley sólo obliga y surte efecto desde el día que ella designa. Si no está designado, obligará y surtirá efecto en la residencia de los supremos poderes nacionales desde que se inserte en el periódico oficial de la República: en las capitales de los Estados, desde que en los respectivos periódicos oficiales se verifique la publicación; y en las demás poblaciones de cada Estado, en los días siguientes á proporción de la distancia de la capital, computándose el tiempo á razón de cinco leguas por día.»

El Sr. Lacunza hace observaciones al Proyecto, proponiendo la redacción siguiente: "Las leyes, reglamentos ó cualesquiera otras disposiciones de observancia general de las autoridades, sólo obligan y surten su efecto desde el día posterior á la promulgación, que ellas mismas designen. Si no lo designan, obligarán y surtirán su efecto desde el día de su promulgación en el lugar en que ésta se verifique, y en los lugares dependientes de éste en los días siguientes á proporción de las distancias de la Capital ó cabecera en que se haya promulgado, computándose el tiempo á razón de un día por cada cinco leguas de distancia

las fracciones que no lleguen á cinco leguas no se contarán."

El Sr. Ramírez encuentra que esa redacción nada contiene sobre el modo de promulgación.

El Sr. Terán acepta la observación, creyendo que debe ser materia de artículo especial y encomienda al propio Sr. Ramírez su redacción.

El Sr. Ramírez pide que el artículo quede redactado como sigue: «Las leyes, reglamentos ó cualesquiera otras disposiciones de observancia general emanadas de las autoridades sólo obligan y surten su efecto desde el día posterior á la promulgación que ellas mismas designen. Si no lo designan, obligarán y surtirán su efecto desde el día de su promulgación en los lugares en que deben promulgarse, y en los lugares dependientes de éstos en los días siguientes á proporción de las distancias de la capital ó cabecera en que se hayan promulgado, computándose el tiempo á razón de un día por cada cinco leguas de distancia; las fracciones que no lleguen á cinco leguas no se contarán.»

El Sr. Escudero manifiesta no percibir ninguna razón para que, en general, no obliguen las leyes sino un día después de su promulgación, aunque ellas mismas designen cuando han de ser obligatorias. Acepta que así se declare respecto de los lugares donde no se hace la promulgación, pues para ese caso la mira del legislador es facilitar el conocimiento de las leyes respetándose la distancia. Propone la siguiente redacción, en su concepto más metódica y completa, siendo unánimemente aceptada por la Comisión: "*Las leyes, reglamentos ó cualesquiera otras disposiciones de observancia general, emanadas de la autoridad, obligan y surten sus efectos desde el día de su promulgación, en los lugares en que deban promulgarse, y en los dependientes de estos en los días siguientes, á proporción de las distancias de la capital ó cabecera en que se haya hecho la promulgación, computándose el tiempo á razón de un día por cada cinco leguas de distancia. Las fracciones que no lleguen á cinco leguas, no se contarán. Sin embargo, si la ley, reglamento ó disposición difieren el día de su observancia, obligarán y surtirán efecto desde el que designen, precediendo siempre la promulgación; y si cuando ésta se verifique en los términos de la fracción precedente, el día designado hubiere pasado, la observancia tendrá lugar desde el día de la promulgación.*"

Proyecto Sierra (art. 2): "La ley no tiene efecto retroactivo."

El Sr. Méndez llama la atención sobre que el proyecto, en su riguroso laconismo, resulta muy incompleto en materia tan importante como la retroactividad de las leyes, y propone se haga una enumeración de los casos en que ella se verifica sin herir derechos legítimamente adquiridos, ó sea, sin la acción odiosa que ha hecho proscribirla de las legislaciones. El proponente presenta la redacción siguiente que es aceptada:

Ninguna ley ó disposición gubernativa ó municipal pueden tener efecto retroactivo en perjuicio de derechos legítimamente adquiridos, por actos consumados ó de efecto irrevocable.

No se entiende que los perjudican: 1.° Las leyes ó disposiciones que confirman ó mandan observar las anteriormente expedidas. 2.° Las que modifican la capacidad ó estado de las personas; pero sin perjuicio de la validez de los actos ejercidos antes de la modificación. 3.° Las que remiten ó minoran la responsabilidad penal. 4.° Las meramente declaratorias, entendiéndose por tales las que expedidas en la forma debida, no alteran la naturaleza y esencia del precepto que forma su objeto; pero si hubiere sentencias ejecutoriadas ó transacciones concluidas antes de la declaración, aunque hayan sido contrá ésta, se tendrán como válidas. 5.ª Las que versan sobre materias puramente graciosas ó por su naturaleza revocables. 6.° Las que innovan el orden de los procedi-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mientos ó disminuyen los recursos ó remedios legales, salvo los pendientes, entendiéndose por tales los legítimamente interpuestos. 7.º Los que alteran la organización ó atribuciones de los tribunales.

Proyecto Sierra (art. 3): "No tiene eficacia ninguna la renuncia de las leyes prohibitivas. Lo que se haga contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario."

El Sr. Méndez hace observar que, tratándose de leyes de interés público, aunque no estén redactadas en términos prohibitivos, tampoco debe valer la renuncia. En consecuencia, propone la siguiente redacción que es aceptada: *No tiene eficacia alguna la renuncia de las leyes en general ni la especial de las leyes prohibitivas ó de interés público. Los actos contra el tenor de las leyes prohibitivas serán nulos si las mismas leyes no disponen otra cosa.*

Proyecto Sierra (art. 4): "La ley no puede ser abrogada en todo ó parte sino por otra ley posterior, sin que valga alegar contra su observancia el desuso, costumbre ó práctica en contrario."

El Sr. Méndez llama la atención sobre los defectos de redacción del proyecto, indicando que sería mejor expresar la idea en los siguientes términos que son aceptados: "*La ley no puede ser abrogada ni derogada sino por otra ley posterior, sin que valga alegar contra su observancia el desuso, costumbre ó práctica en contrario.*

Proyecto Sierra (art. 5): "A todos los habitantes del territorio de la República obligan las leyes penales y de policía, salvo los principios de derecho internacional respecto de agentes diplomáticos:"

El Sr. Lacunza propone se cambie la redacción del artículo como sigue: *A todos los habitantes del territorio de la República obligan las leyes penales y de policía, sal-*

vas las exenciones estipuladas en los tratados ó autorizadas por el derecho de gentes. La proposición es aceptada por la Comisión.

Proyecto Sierra (art. 6): "Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas son obligatorias á los mexicanos, aun cuando residan en el extranjero."

El Sr. Lacunza propone se adicione el artículo, restringiendo su observancia á los actos que deban ser ejecutados en el país, pues de otro modo el precepto sería meramente declarativo y quedaría sin sanción. Indica en consecuencia, la siguiente redacción, que es aceptada: *Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas, son obligatorias á los mexicanos, aun cuando residan en el extranjero, respecto de los actos que deban tener ejecución en todo ó en parte en la República.*

Proyecto Sierra (art. 7): "Los bienes raíces sitos en el territorio de la República, aunque estén poseídos por extranjeros, se rigen por las leyes mexicanas. Los derechos y obligaciones respecto á bienes muebles, se regulan por las leyes del país en que su dueño esté domiciliado."

El Sr. Lacunza propone y es aceptada la redacción siguiente: *Los bienes raíces sitos en el territorio de la República, aunque estén poseídos por extranjeros, se rigen por las leyes mexicanas.*

Proyecto Sierra (art. 8): "Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y de todo instrumento público, se regirán por las leyes del país en que se hubieren otorgado; salva en este punto la libertad del ciudadano mexicano residente en el extranjero para acomodarse á las formas y solemnidades prescritas por la ley mexicana."

El Sr. Lacunza propone y es aceptada la redacción siguiente: *Las formas ó solemnidades de los contratos, testamentos y de todo instrumento público, se regirán por*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las leyes del país en que se hubieren otorgado; salva en este punto la libertad del mexicano ó del mismo extranjero residente fuera de la República para acomodarse á las formas y solemnidades prescritas por la ley mexicana, en los casos en que el acto haya de tener ejecución en la República.

———

Proyecto Sierra (art. 9): "Las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público y las buenas costumbres, no pueden alterarse por ninguna clase de convenios privados."

El Sr. Méndez propone se modifique la primera parte del artículo, que queda así: *Las leyes que afecten el orden público y las buenas costumbres, no pueden alterarse por ninguna clase de convenios privados.*

———

El Sr. Lacunza manifiesta que hay que suplir el silencio del *Proyecto Sierra* en esta materia, que queda incompleta, si nada se dice de los actos ó contratos *ya verificados* en el extranjero, y en orden á sus efectos en la República, ya sea que esos actos ó contratos hayan pasado entre mexicanos ó entre mexicanos y extranjeros. Propone, en consecuencia, como art. 10, el siguiente: *Las obligaciones y derechos nacidos de los contratos ó últimas voluntades pasados en el extranjero, se rigen por las leyes del país en que dichos actos deban cumplirse, á menos que los contratantes ó el testador hayan designado la ley á que han querido sujetarse, salvo en todo caso lo dispuesto en los arts. 6, 7 y 9. El que funde su derecho en leyes extranjeras, deberá presentar al tribunal su texto y probar ser el aplicable al caso.* El artículo es aceptado.

———

Proyecto Sierra (art. 10): "Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni por la palabra ni por el sentido natural ó espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunsatncias del caso. El Jeuz que rehuse fallar á pretesto de silencio, obscuridad ó insuficiencia de las leyes, incurre en responsabilidad.»

El Sr. Lacunza propone se enmiende la última parte del artículo, que queda como sigue bajo el núm. 11: *Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni por la palabra, ni por el sentido natural ó espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. El Juez que rehuse fallar ó demore el fallo, alegando silencio, obscuridad ó insuficiencia de la ley, ó en espera de consulta hecha sobre ella, incurre en responsabilidad.*

———

Proyecto Sierra (art. 11): "La ley es igual para todos y no conoce distinciones de condición social."

(Suprimido.)

LIBRO PRIMERO.

De las personas.

TITULO I.

De los mexicanos y extranjeros.

Proyecto Sierra (art. 12): «Son mexicanos: 1.º Todos los nacidos dentro ó fuera del territorio de la República de padres mexicanos. 2.º Los extranjeros que se naturalicen conforme á las leyes de la República. 3.º Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República ó tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad.»

Proyecto Sierra (art. 13): "Son extranjeros los que no posean las cualidades determinadas en el artículo anterior."

El Sr. Lacunza propone la reforma de ambos artículos, que quedan redactados así: *Son mexicanos los que tengan esta calidad conforme á las leyes vigentes. Son extranjeros los que no tengan la calidad de mexicanos.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las leyes del país en que se hubieren otorgado; salva en este punto la libertad del mexicano ó del mismo extranjero residente fuera de la República para acomodarse á las formas y solemnidades prescritas por la ley mexicana, en los casos en que el acto haya de tener ejecución en la República.

———

Proyecto Sierra (art. 9): "Las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público y las buenas costumbres, no pueden alterarse por ninguna clase de convenios privados."

El Sr. Méndez propone se modifique la primera parte del artículo, que queda así: *Las leyes que afecten el orden público y las buenas costumbres, no pueden alterarse por ninguna clase de convenios privados.*

———

El Sr. Lacunza manifiesta que hay que suplir el silencio del *Proyecto Sierra* en esta materia, que queda incompleta, si nada se dice de los actos ó contratos *ya verificados* en el extranjero, y en orden á sus efectos en la República, ya sea que esos actos ó contratos hayan pasado entre mexicanos ó entre mexicanos y extranjeros. Propone, en consecuencia, como art. 10, el siguiente: *Las obligaciones y derechos nacidos de los contratos ó últimas voluntades pasados en el extranjero, se rigen por las leyes del país en que dichos actos deban cumplirse, á menos que los contratantes ó el testador hayan designado la ley á que han querido sujetarse, salvo en todo caso lo dispuesto en los arts. 6, 7 y 9. El que funde su derecho en leyes extranjeras, deberá presentar al tribunal su texto y probar ser el aplicable al caso.* El artículo es aceptado.

———

Proyecto Sierra (art. 10): "Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni por la palabra ni por el sentido natural ó espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunsatncias del caso. El Jeuz que rehuse fallar á pretesto de silencio, obscuridad ó insuficiencia de las leyes, incurre en responsabilidad.»

El Sr. Lacunza propone se enmiende la última parte del artículo, que queda como sigue bajo el núm. 11: *Cuando no se pueda decidir una controversia judicial, ni por la palabra, ni por el sentido natural ó espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. El Juez que rehuse fallar ó demore el fallo, alegando silencio, obscuridad ó insuficiencia de la ley, ó en espera de consulta hecha sobre ella, incurre en responsabilidad.*

———

Proyecto Sierra (art. 11): "La ley es igual para todos y no conoce distinciones de condición social."

(Suprimido.)

LIBRO PRIMERO.

De las personas.

TITULO I.

De los mexicanos y extranjeros.

Proyecto Sierra (art. 12): «Son mexicanos: 1.º Todos los nacidos dentro ó fuera del territorio de la República de padres mexicanos. 2.º Los extranjeros que se naturalicen conforme á las leyes de la República. 3.º Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República ó tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad.»

Proyecto Sierra (art. 13): "Son extranjeros los que no posean las cualidades determinadas en el artículo anterior."

El Sr. Lacunza propone la reforma de ambos artículos, que quedan redactados así: *Son mexicanos los que tengan esta calidad conforme á las leyes vigentes. Son extranjeros los que no tengan la calidad de mexicanos.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Méndez pide se agregue, como indispensable complemento del art. 12, el que bajo el número 19 se contiene en el *Proyecto* que revisa la Comisión; pero redactado en la forma siguiente: *La mujer mexicana que contraiga matrimonio con un extranjero, sigue la condición del marido; pero disuelto aquel, podrá recobrar la calidad de mexicana para de allí en adelante, acudiendo para el efecto al Gobierno Federal. En caso de residir en la República, verificará su manifestación ante la primera autoridad política del lugar de su residencia.*

El Sr. Escudero pide y es aceptado igualmente, que se agregue al artículo lo siguiente: *La nacionalidad de los nacidos en buques nacionales y extranjeros, se determinará considerándose el buque como parte del territorio de la nación á que pertenezca.*

El Sr. Méndez manifiesta que hay en esta materia un concepto fundamental que no debe omitirse, el relativo á los efectos del cambio de nacionalidad en las relaciones jurídicas del orden privado, lo cual le parece oportuno sea dicho en la declaración general contenida en el art. 12. Propone, en consecuencia, se diga: *El cambio de nacionalidad no produce efectos retroactivos. Los actos pasados se regirán por las leyes de la nacionalidad que se tenía en el período en que se ejecutaron.*

El Sr. Terán está conforme con la promoción del Sr. Méndez: pero pregunta por qué no se menciona también, como incapaz de producir la retroactividad, el recobro de la nacionalidad.

El Sr. Méndez contesta que ese recobro es siempre y de todos modos un cambio.

La proposición del Sr. Méndez queda como art. 13.

Proyecto Sierra (art. 14): "La calidad de mexicano se pierde: 1.º Por naturalización en país extranjero. 2.º Por servir oficialmente al gobierno de otro país ó admitir de él condecoraciones, títulos ó funciones, sin previa

licencia del Congreso Federal. Exceptuándose los títulos literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente." (Suprimido.)

Proyecto Sierra (art. 15): «El mexicano que hubiere perdido esta calidad por adquirir naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla, volviendo al territorio de la República, renunciando ante el alcalde ó juez de paz del lugar que escoja para su domicilio, la protección del país extranjero en que se hubiere naturalizado. Pero para recobrarla después de perdida por haber servido oficialmente á un Gobierno extranjero, deberá ocurrir al Gobierno Federal, sin perjuicio de las penas en que haya podido incurrir en el caso de haber hecho armas contra la República.»

El Sr. Ramírez manifiesta que, suprimido el artículo del *Proyecto* sobre los casos en que se pierde la nacionalidad mexicana, se impone la necesidad, al tratar de los modos de recobrarla, de referirse á ellos de alguna manera, pues seguramente no ha de ser igual el sistema en todos, como no es igual la gravedad del hecho cuyo cambio se autoriza. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción: "El mexicano que hubiere perdido esta calidad por adquirir naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla, volviendo al territorio de la República, renunciando, ante la primera autoridad política del lugar que escoja para su domicilio, la protección del país extranjero en que se hubiera naturalizado. Pero para recabrarla despues de perdida por haber servido oficialmente á un gobierno extranjero ó admitido funciones ó condecoraciones de él, ó haber hecho armas contra la República ó dañádola de cualquiera manera, deberá ocurrir al gobierno federal, sin perjuicio de las penas en que haya podido incurrir por haber hecho armas contra la República."

El Sr. Méndez hace observar que este artículo, así como otros que se encuentran en el *Proyecto* que se revisa, le parecen impropios de un cuerpo de leyes sobre

las relaciones privadas de los ciudadanos, estando en su concepto, más en su lugar en la Constitución Política del país ó en una ley especial sobre *nacionalidad y extranjería* que en el Código Civil; no deben, sobre esta materia que es esencialmente del Derecho Público, sino asentarse declaraciones generales como las ya acordadas para el artículo 12; que, en consecuencia, propone á la Comisión la supresión del artículo del proyecto.

El Sr. Ramírez retira su proposición y el artículo queda suprimido.

Proyecto Sierra (art. 16): "Los hijos de un extranjero nacidos en la República seguirán la condición de su padre; pero se considerarán mexicanos en el caso de que dentro de un año después de emancipados, ó de llegar á la mayor edad, declaren su voluntad de ser mexicanos ante el alcalde ó Juez de Paz del lugar de su residencia."

(Suprimido).

Proyecto Sierra (art. 17): "Los hijos de mexicanos residentes en el extranjero conservarán aquella calidad conforme al artículo 12, mientras no la renuncien expresamente ante los agentes consulares ó diplomáticos de la República, ó á falta de ellos dirigiéndose al Supremo Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores."

(Suprimido).

Proyecto Sierra (art. 18): Los hijos nacidos en país extranjero de padres mexicanos que hubiesen perdido esta calidad, podrán adquirirla haciendo la declaración de que habla el art. 16; ó, si aún permanecen en el extranjero, acudiendo al Gobierno federal."

(Suprimido).

Proyecto Sierra (art. 19): "La mujer mexicana que contraiga matrimonio con un extranjero, sigue la condición de su marido; pero disuelto el matrimonio podrá recobrar la calidad de mexicana para de allí en adelante, acudiendo para el efecto al Gobierno federal. En caso de residir en la República verificará su manifestación ante el alcalde ó Juez de paz del lugar de su residencia."

(Véase antes el art. 12 del Código de la Comisión Revisora, en la cual éste fué refundido.)

Proyecto Sierra (art. 20): "Los extranjeros gozarán en la República de los mismos derechos civiles que tienen los mexicanos, si en el país de aquellos gozan éstos de los derechos que les concede su Código Civil, salvo lo dispuesto ó que se dispusiere por los tratados y leyes especiales."

[Suprimido]

Proyecto Sierra (art. 21): "El mexicano puede ser demandado ante los tribunales de la República por las obligaciones contraídas fuera del territorio de ella con un extranjero ú otro mexicano, con tal que siendo extranjero el demandante, en el país de éste goce el mexicano de igual derecho.

El Sr. Escudero pide se suprima del art. 21 del *Proyecto* la parte relativa al principio de estricta reciprocidad internacional que establece para el ejercicio de los derechos civiles en nuestro territorio entre mexicano y extranjero, siendo éste el demandante, pues, fuera de que podrían discutirse la justicia y hasta la conveniencia de tal principio, tratándose, como se trata, de meros derechos privados, igualmente acequibles por su naturaleza lo mismo para los nacionales que para los extranjeros, entiende no ser oportuno ocuparse en este particular el Código que se está formando, según ya lo manifestó el Sr. Méndez y aprobó la Comisión. Cree, además, que el mismo artículo del *Proyecto* debe expresar, como indispensable condición para su aplicación, una verdad que es indiscutible en todos los

sistemas modernos de enjuiciamiento, es á saber, que para la competencia de nuestros tribunales sobre obligaciones contraídas en el extranjero por mexicano, es necesario que éste resida ó tenga bienes en el país. En consecuencia propone la siguiente redacción: *El mexicano puede ser demandado ante los Tribunales del país, en el modo y forma que dispongan las leyes de procedimientos, por las obligaciones contraídas fuera del territorio nacional, con un extranjero ó mexicano, siempre que el demandado resida ó tenga bienes en la República.* La enmienda es aceptada y queda como art. 14 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 22): "El extranjero que se encuentre en el territorio de la República, podrá ser demandado ante los tribunales de ella por las obligaciones contraídas en la República con un mexicano, ó que deban tener la ejecución dentro del territorio de ella."

El Sr. Escudero opina que se amplíe el artículo, comprendiendo aun al extranjero que, aunque no residente tenga bienes en el país; el caso de obligaciones contraídas en el extranjero y el de que el cocontratante sea también extranjero, pues no hay razón para poner siquiera en duda, en esos supuestos, la competencia de los tribunales mexicanos, tratándose de obligaciones exigibles entre nosotros.

El Sr. Méndez manifiesta su completo acuerdo con la enmienda del Sr. Escudero; pero hace observar que la última condición del artículo del *Proyecto* es menos clara que si se dijese: *si las obligaciones pueden hacerse efectivas en la República.* Propone que el artículo quede redactado así: *El extranjero que se encuentre en el territorio de la República, ó tenga bienes en ella podrá ser demandado ante los tribunales de ésta por las obligaciones civiles contraídas dentro y fuera de ella con un mexicano ó extranjero, si las obligaciones pueden hacerse efectivas en la República.* La proposición es aceptada y queda como art 15.

Proyecto Sierra (art. 23): "El extranjero ó mexicano que demande en la República por obligaciones contraídas fuera de ella, debe afianzar el pago de lo juzgado y sentenciado, á no ser que posea en el país bienes raíces en cantidad suficiente."

El Sr. Escudero encuentra infundado que la caución *judicatum solvi* se derive de la circunstancia de tratarse de obligaciones contraídas en el extranjero, y no como es lo natural y se ha entendido siempre, de ser extranjero el demandante. El lugar donde la obligación se contrajo, dice, no es el que dicta ni puede dictar esa medida, sino la falta de arrraigo del actor.

El Sr. Lacunza está conforme con la observación del Sr. Escudero y agrega que debe expresarse que la necesidad de la caución alcanza aun al extranjero, que demande en la República á otro extranjero, pues obra la misma razón.

El Sr. Méndez expone que, siendo la caución *judicatum solvi*, al fin y al cabo, un embarazo para el ejercicio de un derecho civil, como es el de acudir á los tribunales en demanda de la justicia que se cree tener, debe ella ser restringida lo más posible, no conservándola sino dentro de los límites estrictamente necesarios para su objeto, que, en consecuencia, propone á la comisión, se exonere de prestar dicha caución, no sólo al que tenga bienes raíces, como expresa el *Proyecto*, sino también al que tenga un establecimiento industrial ó comercial.

El Sr. Ramirez encuentra muy prudente y justa la observación del Sr. Méndez; pero vacila en aceptarla, si no se ha de agregar algo que defina y determine la importancia de la negociación industrial ó mercantil.

El Sr. Terán manifiesta que entiende ser éste un caso de necesario arbitrio judicial.

El Sr. Escudero expone que el *Proyecto* nada precisa sobre el particular, lo lo que, sin duda, fué también esa la mente del Dr. Sierra.

El Sr. Méndez insistiendo sobre que la medida que se discute debe restringirse todo cuanto se pueda, manifiesta que, importando ella un simple derecho privado sin el menor aspecto de interés público, como que sólo se trata de algo relativo á una contienda judicial entre particulares, ella no debe ser obligatoria según aparece en el *Proyecto*, sino meramente facultativa para el demandado. Encuentra, además, muy poco equitativo que la exigencia de esa medida quede en un todo *ad libitum* del reo en cualquier período del juicio, y aun después de contestada la demanda. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción que es aceptada y forma el art. 16 del nuevo Código. *El extranjero que demande en la República á un mexicano ó extranjero, si el demandado lo pide antes de contestar la demanda, debe afianzar estar á derecho y pagar lo juzgado y sentenciado, á no ser que posea bienes raíces ó un establecimiento fabril ó mercantil suficiente á juicio del tribunal, para responder en caso de condenación por los daños y perjuicios.*

———

Proyecto Sierra (art. 24): "El extranjero que se encuentre en el territorio de la República puede ser demandado por otro extranjero, en razón de las obligaciones contraídas en ella."

El Sr. Lacunza propone se redacte la idea del artículo en la forma siguiente: "El extranjero que se encuentre en el territorio de la República, puede ser demandado civilmente por otro extranjero, salvo lo estipulado en los tratados. Los tribunales mexicanos podrán dictar todas las medidas precautorias ó provisionales á fin de que no se perjudique el interés de las partes ó alguna de ellas, aunque no deban de conocer del fondo del litigio. Estas medidas, aun siendo pedidas por extranjeros, se dictarán con sólo los requisitos que para los casos comunes disponga el Código de Procedimientos Civiles.

El Sr. Ramírez entiende que, en materia tan delicada como la competencia de nuestros tribunales para conocer de negocios extranjeros, lo mejor es abstenerse de formular reglas que no sean de una absoluta y rigurosa precisión. Expresados ya algunos casos relativos á extranjeros y en los cuales se ha acordado la intervención de nuestros tribunales, parece ser bastante que se diga: "En los casos no expresados en este Código los tribunales mexicanos no juzgarán en las demandas entre extranjeros, salvo lo estipulado en los tratados."

El Sr. Lacunza manifiesta que el artículo del *Proyecto* responde al caso de obligaciones contraídas *en la República*, mientras los textos á que alude el preopinante se refieren á las contraídas *en el extranjero*. Cree, en consecuencia, deber mantenerse lo que ha propuesto, en una forma amplia y general.

El Sr. Escudero expone que, en su concepto, es innecesario y hasta redundante declarar la competencia de nuestros tribunales para conocer de obligaciones contraídas en el país y en contra de personas residentes también aquí, pues no hay la menor duda de que esa competencia existe, cualquiera que sea la nacionalidad de los interesados, y sin otra excepción que los agentes diplomáticos en ciertos casos. En consecuencia, y siendo ésta más bien materia del Derecho Internacional Público, entiende que lo más conveniente sería suprimir el artículo. Así se hizo.

———

Provecto Sierra (art. 25): "Las corporaciones, asociaciones y establecimientos reconocidos por la ley se consideran personas morales para el ejercicio de los derechos civiles, en todo lo que la misma ley no modifique ó limite.

El Sr. Méndez encuenta deficiente esa redacción, y propone la siguiente, que es aceptada como art 17.

Las corporaciones, asociaciones y establecimientos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

públicos y particulares reconocidos por la ley se consideran personas morales y gozarán de los derechos civiles en todo lo que la ley misma no modifique ó limite; pero no podrán ejercerlos ya activa, ya pasivamente sino en la forma establecida por la ley y por sus estatutos ó actas de formación.

Proyecto Sierra (art. 26): "En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por este solo hecho su libertad y tienen derecho á la protección de las leyes."

(Suprimido.)

TITULO II

De la vecindad y del domicilio.

Capitulo I.

De la vecindad.

Proyecto Sierra (art. 27): "Son vecinos de un pueblo los mexicanos que residiendo en él esten inscritos en el padrón del vecindario, y lleven dos años de residencia ejerciendo su profesión ó industria.

El Sr. Lacunza encuentra deficiente el *Proyecto* en materia de vecindad, que es fuente de numerosas relaciones jurídicas, pues tomado del proyecto del Sr. García Goyena (art. 35), quien lo formó para España, sólo hace mención de los "pueblos," como asiento de la vecindad, siendo así que en nuestro dilatado territorio y á causa de la poca población que sobre él se extiende en algunos lugares, hay la necesidad de referirse á agrupaciones de familias que viven en barrios, rancherías ó haciendas, y sobre las cuales ejerce jurisdicción, no el juez letrado del pueblo sino uno de paz ó el mismo presidente de la Municipalidad, que es

la forma más embrionaria en el orden de la gerarquía administrativa entre nosotros. Manifiesta, además, que la palabra "pueblo" de que usa el *Proyecto* peca por demasiado vaga y no dejaría de ocasionar desórden y confusiones en su aplicación. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción: "Son vecinos de un pueblo: Los mexicanos que residiendo en él ó en sus barrios, rancherías ó haciendas dependientes, estén inscritos en el padrón de la municipalidad y lleven dos años de residencia ejerciendo su profesión ó industria. Los que teniendo la residencia no hubiesen cuidado de inscribirse en el padrón se reputarán vecinos para todos los efectos legales; pero no gozarán de las franquicias y derechos útiles anexos á la vecindad."

El Sr. Ramírez está conforme con el Sr. Lacunza en que para definir la «vecindad» no es bastante referirse al pueblo ó cabecera de él, como lugar de residencia; pero entiende que, en vez de la enumeración hecha por el preopinante, y supuesto que la vecindad dice siempre relación con el pueblo, como lugar de mayor importancia, podríase emplear una palabra genérica en que cupiesen todas las hipótesis posibles y esto sin el peligro que el Sr. Lacunza indica, *verbi gratia*, la palabra "demarcación." Advierte también que el preopinante reproduce en su proposición un defecto en que el *Proyecto* se separa del Sr. García Goyena, á saber, la necesidad de que se reunan para producir la vecindad los dos requisitos de inscripción en el padrón y residencia bienal sin que por lo mismo baste sólo el segundo. Propone, pues, otra redacción: "Son vecinos de un pueblo los mexicanos que residiendo en su demarcación estén inscritos en el padrón del vecindario ó lleven dos años de residencia ejerciendo su profesión ó industria."

El Sr. Méndez propone la supresión en el nuevo Código de todo tratado sobre la vecindad, pues entiende pertenecer esta materia más bien al Derecho público administrativo que al Civil. En efecto, la vecindad comprende todo un Estado ó Provincia y es la base de los cargos y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

públicos y particulares reconocidos por la ley se consideran personas morales y gozarán de los derechos civiles en todo lo que la ley misma no modifique ó limite; pero no podrán ejercerlos ya activa, ya pasivamente sino en la forma establecida por la ley y por sus estatutos ó actas de formación.

Proyecto Sierra (art. 26): "En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por este solo hecho su libertad y tienen derecho á la protección de las leyes."

(Suprimido.)

TITULO II

De la vecindad y del domicilio.

Capitulo I.

De la vecindad.

Proyecto Sierra (art. 27): "Son vecinos de un pueblo los mexicanos que residiendo en él esten inscritos en el padrón del vecindario, y lleven dos años de residencia ejerciendo su profesión ó industria.

El Sr. Lacunza encuentra deficiente el *Proyecto* en materia de vecindad, que es fuente de numerosas relaciones jurídicas, pues tomado del proyecto del Sr. García Goyena (art. 35), quien lo formó para España, sólo hace mención de los "pueblos," como asiento de la vecindad, siendo así que en nuestro dilatado territorio y á causa de la poca población que sobre él se extiende en algunos lugares, hay la necesidad de referirse á agrupaciones de familias que viven en barrios, rancherías ó haciendas, y sobre las cuales ejerce jurisdicción, no el juez letrado del pueblo sino uno de paz ó el mismo presidente de la Municipalidad, que es

la forma más embrionaria en el orden de la gerarquía administrativa entre nosotros. Manifiesta, además, que la palabra "pueblo" de que usa el *Proyecto* peca por demasiado vaga y no dejaría de ocasionar desórden y confusiones en su aplicación. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción: "Son vecinos de un pueblo: Los mexicanos que residiendo en él ó en sus barrios, rancherías ó haciendas dependientes, estén inscritos en el padrón de la municipalidad y lleven dos años de residencia ejerciendo su profesión ó industria. Los que teniendo la residencia no hubiesen cuidado de inscribirse en el padrón se reputarán vecinos para todos los efectos legales; pero no gozarán de las franquicias y derechos útiles anexos á la vecindad."

El Sr. Ramírez está conforme con el Sr. Lacunza en que para definir la «vecindad» no es bastante referirse al pueblo ó cabecera de él, como lugar de residencia; pero entiende que, en vez de la enumeración hecha por el preopinante, y supuesto que la vecindad dice siempre relación con el pueblo, como lugar de mayor importancia, podríase emplear una palabra genérica en que cupiesen todas las hipótesis posibles y esto sin el peligro que el Sr. Lacunza indica, *verbi gratia*, la palabra "demarcación." Advierte también que el preopinante reproduce en su proposición un defecto en que el *Proyecto* se separa del Sr. García Goyena, á saber, la necesidad de que se reunan para producir la vecindad los dos requisitos de inscripción en el padrón y residencia bienal sin que por lo mismo baste sólo el segundo. Propone, pues, otra redacción: "Son vecinos de un pueblo los mexicanos que residiendo en su demarcación estén inscritos en el padrón del vecindario ó lleven dos años de residencia ejerciendo su profesión ó industria."

El Sr. Méndez propone la supresión en el nuevo Código de todo tratado sobre la vecindad, pues entiende pertenecer esta materia más bien al Derecho público administrativo que al Civil. En efecto, la vecindad comprende todo un Estado ó Provincia y es la base de los cargos y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tributos municipales, así como de varias funciones públicas y políticas, mientras el domicilio no es sino el asiento de una persona, que la ley toma en cuenta para el ejercicio de los derechos civiles, para los emplazamientos y las notificaciones. Cree, en consecuencia, que ocuparse el Código Civil en lo relativo á la vecindad es tan motivado como si lo hiciera con la ciudadanía política, con el derecho de votar y ser votado, etc., etc., fuera de que se correría el riesgo de anticipar definiciones sobre materias acerca de las cuales se manifestará la legislación respectiva más adelante.

El Sr. Escudero está de acuerdo con el Sr. Méndez agregando, con la doctrina de Escriche [Dicc. "vecino"], que entre la vecindad y el domicilio existe la diferencia de que la primera es más comprensiva que el segundo.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) opina como los Sres. Méndez y Escudero. El art. 27 del *Proyecto* queda suprimido.

———

Proyecto Sierra (art. 28): "El extranjero que sin estar naturalizado quiera ganar vecindad en un pueblo de la República, deberá residir en él por espacio de tres años, renunciar ante el Alcalde ó Juez de paz la protección del gobierno de su país y acreditar alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que ha estado ó está al servicio de la República; 2.ª Que fué ó es casado con mexicana; 3.ª Que á lo menos por cinco años ha ejercido en cualquiera parte de la República una profesión útil ó una industria que exija residencia habitual en el país; 4.ª Que ha adquirido en el territorio de la República bienes raíces. Entendido todo esto, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales de colonización.

El Sr. Méndez pide la supresión del artículo por las razones antes expuestas.

El Sr. Ramírez expone que venía dispuesto á consultar la reforma del *Proyecto* en cuanto á la vecindad de

los extranjeros, en dos puntos, primero, respecto de la renuncia de la protección de su gobierno que, en su concepto, debe hacerse, no ante el alcalde ó juez de paz, sino ante la primera autoridad política del lugar, por tratarse de renuncia en materia muy importante; y segundo, en orden al requisito de que el extranjero hubiera estado ó estuviese al servicio de la República, pues le parece que esto sobre importar una exigencia odiosa, resulta completamente extraño á la vecindad, como base del ejercicio de los derechos civiles.

El Sr. Escudero insiste en la supresión del artículo, porque hace una lamentable confusión de la vecindad y de la nacionalidad, interpretando impropiamente, como ya lo había hecho el Sr. García Goyena (art. 36 de su proyecto), la ley 1.ª, tít. 11, lib. VI de la Novísima Recopilación, que meramente eximía de ciertas obligaciones á los extranjeros en determinadas circunstancias; pero sin declararlos vecinos.

(El artículo queda suprimido.)

———

Proyecto Sierra (art. 29): "Ninguno podrá ser vecino al mismo tiempo de dos pueblos."

(Suprimido.)

Capítulo II.

Del domicilio.

Proyecto Sierra (art. 30): "El lugar en que una persona tiene su vecindad es también el de su domicilio. A falta de domicilio, la residencia habitual ocupará su lugar."

El Sr. Méndez llama la atención de la Comisión sobre que el *Proyecto* mismo justifica las observaciones que se permitió hacer respecto de la supresión en el nuevo Código de todo artículo relativo á la vecindad, pues como se ve, ésta se confunde con el domicilio, tratándose del ejer-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cicio de los derechos civiles, sin que, por lo mismo, haya necesidad de tratar de ella. Encuentra, sin embargo, que el *Proyecto* es extremadamente confuso en este particular y propone la siguiente redacción: *El domicilio de una persona es el lugar en donde tiene su vecindad. A falta de vecindad, la residencia habitual ó el lugar en donde tenga el principal asiento de sus negocios, se tendrá por domicilio.* La proposición es aceptada y queda como art. 18 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 31): "Los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar en que desempeñan su destino. Más los que se hallan accidentalmente en un pueblo en comisión, conservarán el domicilio que antes tenían."

El Sr. Escudero propone, como más clara la siguiente redacción: *Los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar en que desempeñan sus funciones. Mas los que se hallen accidentalmente en un pueblo, en comisión no adquieren domicio en él.* La proposición es aceptada y queda como art. 19 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 32): *Los militares en servicio activo tienen su domicilo en el lugar en que se hallen prestándolo.* El artículo es aceptado, y queda como 20 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra [art. 33]: "El hijo de familia no emancipado tiene el domicilio del padre ó madre á cuya potestad se halle sujeto, y en falta de ambos, el de su tutor: las personas mayores de edad sujetas á curaduría tienen el domicilo de su curador."

El Sr. Terán propone y es aceptada, como más correcta la siguiente redacción, que expresa el mismo pensamiento del *Proyecto: El menor de edad no emancipado, tiene el domicilio de aqnél á cuya potestad se halle sujeto,*

y en falta de patria potestad el de su tutor: las personas mayores de edad sujetas á curaduría, tienen el domicilio de su curador. La proposición queda como artículo 21 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 34): *La mujer casada, si no está legalmente separada de su marido, tiene el domicilio de éste.* El artículo es aceptado y queda como 22 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 35): "Los mayores de edad que sirvan habitualmente á una persona y habiten en su casa, tienen el domicilio del dueño de ésta; y también los sirvientes menores de edad, por las obligaciones que con traen durante este servicio."

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción de la idea del *Proyecto*, por no ser tan equívoca y comprender una hipótesis no prevista en aquel: *Los que sirven habitualmente á una persona y habiten en su casa, sean mayores ó menores de edad, tienen el domicilio de la persona á quien sirven; pero si son menores y tienen bienes que estén á cargo de un curador, respecto de estos bienes tendrán el domicilio del tutor ó curador.* La proposición es aceptada y queda como art. 23 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 36): *El domicilio de los que se hallan extinguiendo alguna condena, es el lugar donde la extinguen. Pero los condenados á destierro simplemente, conservarán su domicilio anterior.* El artículo es aceptado y queda como 24 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 37): *El domicilio de una persona que no tiene residencia habitual, es el lugar en que se halle.* El artículo es aceptado y queda como 25 del nuevo Código.

———

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra [art. 38]: «El domicilio de las corporaciones, asociaciones y establecimientos reconocidos por la ley, es el lugar donde está situada su dirección ó administración, salvo lo que dispusieren sus estatutos ó leyes especiales.

El Sr. Méndez propone para mayor claridad de la idea del *Proyecto* la siguiente adición: "siempre que el domicilio que en ellos se determine, esté dentro del territorio nacional." La adición es aceptada y el artículo queda bajo el núm. 26, como sigue: "*El domicilio de las corporaciones, asociaciones y establecimientos reconocidos por la ley, es el lugar donde está situada su dirección ó administración, salvo lo que dispusieren sus Estatutos ó leyes especiales, siempre que el domicilio que en ellos se determine esté dentro del territorio nacional.*"

———

El Sr. Lacunza manifiesta que antes de pasar adelante, conviene fijarse en que el *Proyecto* que se revisa nada expresa respecto del domicilio de los que sirvan en la marina de guerra ó en la mercante, ya sea una ú otra nacional ó extranjera. Para llenar este vacío, que se nota también en el Proyecto de Código Español, propone, en cuanto á la marina de guerra nacional, el siguiente artículo: "Los individuos que sirven en la marina de guerra de la República, seguirán para el domicilio las mismas reglas que los militares en servicio."

El Sr. Ramírez expone que el pensamiento sería expresado mejor, si se dijese: *Los individuos que sirven en la marina de guerra de la Rtpública, tienen su domicilio en el lugar mexicano en que se encuentren.* La enmienda es aceptada y queda como art. 27 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza dice, refiriéndose al domicilio de los que sirven en la marina mercante, que hay un lugar fijo para

determinarlo y es el lugar de la matrícula del buque; propone, en consecuencia, se exprese así, agregando que si fuesen casados no separados y su esposa tuviese casa en otro lugar, el domicilio será esa misma casa. De la misma manera, si no siendo casados, tuviesen algún establecimiento, el domicilio será el lugar del establecimiento.

El Sr. Méndez se manifiesta de acuerdo con el Sr. Lacunza; pero indica que en el último supuesto convendría, para perjudicar lo menos posible en multitud de casos que podrían presentarse, al buen orden é intereses del comercio marítimo, agregar que el domicilio de los que sirven en la marina mercante es el que se fija; pero sólo respecto de los actos y contratos relativos al establecimiento.

El Sr. Lacunza acepta la indicación del Sr. Méndez y propone la redacción siguiente: *Los hombres que sirven en la marina mercante de la República se tendrán por domiciliados en el lugar de la matrícula del buque; pero si fueren casados no separados y su esposa tuviese casa en otro lugar, se considerarán domiciliados en el domicilio de ésta. Cuando no siendo casados tuvieren algún establecimiento en otro lugar, se considerarán domiciliados en él, y si fueren casados tendrán el domicilio del lugar del establecimiento, respecto de los actos y contratos relativos á éste.* La proposición es aceptada y queda como art. 28 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza, continuando el desarrollo de su pensamiento, propone en orden á los mexicanos que sirvan en la marina de guerra ó mercante extranjera la siguiente redacción: «Los mexicanos que, sin licencia del Gobierno, sirven en la marina de guerra extranjera, ó en buque armado en corso por nación extranjera, pierden su nacionalidad y domicilio mexicanos, y sólo podrán recobrarlos según las reglas establecidas para los que sirven á potencia extranjera. Los que sirven en la marina mercante extranjera conservan la nacionalidad mexicana si no la han re-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nunciado, y el domicilio que tenían antes de entrar al servicio de la marina mercante extranjera.»

El Sr. Escudero observa que le parece impropio hablar en el nuevo Código, como ya la Comisión lo reconoció antes, de nacionalidad, pues esta materia pertenece esencialmente al Derecho Público del país; que en consecuencia propone se haga tan sólo referencia á esa circunstancia, pero sin determinarla y establecerla ahora. El artículo, sin embargo, queda redactado como sigue bajo el núm. 29: *Los mexicanos que sin licencia del Gobierno sirven en la marina de guerra extranjera, ó en buque armado en corso por nación extranjera, pierden su nacionalidad y domicilio mexicanos, y sólo podrán recobrarlos según tas reglas establecidas para los que sirven á potencia extranjera. Los ~~que~~ sirven en la marina mercante extranjera, si no han renunciado la nacionalidad mexicana, conservan el domicilio que tenían al entrar al servicio de la expresada marina.*

Proyecto Sierra (art. 39): *Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio del caso en que las partes hayan convenido, ó una de ellas haya designado en conformidad á la ley, el lugar en que deban tenerse por domiciliados para la ejecución de un acto determinado.* El artículo es aceptado por la Comisión y queda bajo el núm. 30 en el nuevo Código.

TITULO III.

De las actas del Estado Civil.

Capítulo I.

Proyecto Sierra (art. 40): «El modo con que deben llevarse los registros del Estado Civil se determina por reglamentos especiales que se den ó se hayan dado para el Distrito, Territorios y Estados de la República.

El Sr. Lacunza manifiesta la necesidad que hay de abrazar en este título toda la vasta é importante materia del *Registro del Estado Civil*, al cual dedica el *Proyecto* que se revisa apenas seis artículos. La Comisión no ignora existir ya en la República dos leyes sobre el asunto, la de 27 de Enero de 1857 y la de 28 de Julio de 1859, cuyo articulado parece al exponente deber utilizarse hasta donde convenga y sea posible. En consecuencia, propone á sus colegas de Comisión que, sin perjuicio de continuar como hasta aquí la revisión del *Proyecto del Dr. Sierra*, se procure establecer una serie de preceptos en que quepan todas las declaraciones que hace necesarias una materia de suyo delicada y fecunda en pormenores y sobre la cual el primer deber del legislador es fijar las mayores garantías posibles de eficacia y autencidad. Esto supuesto, el exponente propone que al artículo del *Proyecto* se substituya otro en el cual, en vez de referirse vagamente á reglamentos, se exprese con toda precisión y claridad la manera con que deben llevarse los registros del estado civil.

El Sr. Terán dice que las observaciones del Sr. Lacunza son tanto más justas, cuanto que el *Proyecto del Dr. Sierra* no debía, en la intención de su distinguido autor, contener sino principios generales sobre el Registro del Estado Civil, á reserva de que ellos fuesen desarrollados posteriormente por las legislaturas de cada entidad federativa de la República ó por leyes especiales. "En el título de las actas del Registro Civil, dice el Dr. Sierra en el oficio con que remitió al Ministerio de Justicia el primer libro del *Proyecto*, no he descendido á pormenores reglamentarios, lo uno porque conozco el celo de los Estados contra las tendencias centralizadoras del poder federal, aún cuando sean en el sentido más progresista, y lo otro, porque este asunto es de los que deben regularse por leyes especiales. Me he limitado á fijar bases y dar valor uniformemente legal á las actas del Registro. En este punto he imitado al Código sardo que es uno de los más liberales." La cuestión que-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nunciado, y el domicilio que tenían antes de entrar al servicio de la marina mercante extranjera.»

El Sr. Escudero observa que le parece impropio hablar en el nuevo Código, como ya la Comisión lo reconoció antes, de nacionalidad, pues esta materia pertenece esencialmente al Derecho Público del país; que en consecuencia propone se haga tan sólo referencia á esa circunstancia, pero sin determinarla y establecerla ahora. El artículo, sin embargo, queda redactado como sigue bajo el núm. 29: *Los mexicanos que sin licencia del Gobierno sirven en la marina de guerra extranjera, ó en buque armado en corso por nación extranjera, pierden su nacionalidad y domicilio mexicanos, y sólo podrán recobrarlos según tas reglas establecidas para los que sirven á potencia extranjera. Los ~~que~~ sirven en la marina mercante extranjera, si no han renunciado la nacionalidad mexicana, conservan el domicilio que tenían al entrar al servicio de la expresada marina.*

Proyecto Sierra (art. 39): *Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio del caso en que las partes hayan convenido, ó una de ellas haya designado en conformidad á la ley, el lugar en que deban tenerse por domiciliados para la ejecución de un acto determinado.* El artículo es aceptado por la Comisión y queda bajo el núm. 30 en el nuevo Código.

TITULO III.

De las actas del Estado Civil.

Capítulo I.

Proyecto Sierra (art. 40): «El modo con que deben llevarse los registros del Estado Civil se determina por reglamentos especiales que se den ó se hayan dado para el Distrito, Territorios y Estados de la República.

El Sr. Lacunza manifiesta la necesidad que hay de abrazar en este título toda la vasta é importante materia del *Registro del Estado Civil*, al cual dedica el *Proyecto* que se revisa apenas seis artículos. La Comisión no ignora existir ya en la República dos leyes sobre el asunto, la de 27 de Enero de 1857 y la de 28 de Julio de 1859, cuyo articulado parece al exponente deber utilizarse hasta donde convenga y sea posible. En consecuencia, propone á sus colegas de Comisión que, sin perjuicio de continuar como hasta aquí la revisión del *Proyecto del Dr. Sierra*, se procure establecer una serie de preceptos en que quepan todas las declaraciones que hace necesarias una materia de suyo delicada y fecunda en pormenores y sobre la cual el primer deber del legislador es fijar las mayores garantías posibles de eficacia y autencidad. Esto supuesto, el exponente propone que al artículo del *Proyecto* se substituya otro en el cual, en vez de referirse vagamente á reglamentos, se exprese con toda precisión y claridad la manera con que deben llevarse los registros del estado civil.

El Sr. Terán dice que las observaciones del Sr. Lacunza son tanto más justas, cuanto que el *Proyecto del Dr. Sierra* no debía, en la intención de su distinguido autor, contener sino principios generales sobre el Registro del Estado Civil, á reserva de que ellos fuesen desarrollados posteriormente por las legislaturas de cada entidad federativa de la República ó por leyes especiales. "En el título de las actas del Registro Civil, dice el Dr. Sierra en el oficio con que remitió al Ministerio de Justicia el primer libro del *Proyecto*, no he descendido á pormenores reglamentarios, lo uno porque conozco el celo de los Estados contra las tendencias centralizadoras del poder federal, aún cuando sean en el sentido más progresista, y lo otro, porque este asunto es de los que deben regularse por leyes especiales. Me he limitado á fijar bases y dar valor uniformemente legal á las actas del Registro. En este punto he imitado al Código sardo que es uno de los más liberales." La cuestión que-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

da, pues, reducida á saber si la Comisión se conforma con las bases generales más ó menos aumentadas del *Proyecto*, dejando que una ley especial implante más tarde todo el mecanismo del Registro Civil, ó entra al desarrollo completo del sistema. El exponente se muestra partidario de esto último, porque entiende que el lugar de una ley sobre el Registro Civil está en un Código de la índole del que se revisa. Designa al Sr. Lacunza para que redacte el primer artículo del nuevo Código sobre la materia en que la Comisión se ocupa ahora.

El Sr. Lacunza propone, de acuerdo con las observaciones que antes indicó, la siguiente redacción: «Los actos del Estado Civil serán validos y los documentos que los comprueben harán fe en toda la República cuando estén otorgados conforme á la prescripción de este Código.»

El Sr. Ramírez propone se conserve un poco más la idea del *Proyecto*, diciéndose: "El método con que deben llevarse los registros del Estado Civil es uno mismo en todos los Estados, Territorios y Distrito Federal y harán fe los documentos sacados de ellos como en este título se prescribe, como instrumentos públicos."

El Sr. Méndez encuentra que esa redacción parece no tomar en cuenta la posibilidad de que los Registros del Estado Civil no se lleven del mismo modo, en lo material y económico, en todos los lugares de la República, á causa de que no son unos mismos ni iguales los elementos de que dispone la administración pública en cada uno de ellos. Observa, además, que no se expresa en ninguna de las redacciones que la Comisión tiene á la vista la idea, en su concepto fundamental en la materia de que se trata, es á saber, si después de establecidos los Registros del Estado Civil ya no podrá probarse éste por otros medios.

El Sr. Lacunza manifiesta parecerle sumamente peligroso formular una declaración como la que pretende el Sr. Méndez, pues, fuera de que puede suceder que en muchos puntos del país no se establezcan por falta de elemen-

tos, las oficinas del Registro Civil, hay que considerar que los mismos registros pueden perderse, destruirse o borrarse, casos en los cuales sería injusto privar á los interesados de su estado civil. Además, tratándose de una institución nueva entre nosotros, y estando ya impuesta, como es notorio, nuestra numerosa población indígena á conformarse con los registros parroquiales, entiende el exponente que la prudencia aconseja abstenerse de establecer prohibiciones tan radicales como la que se anuncia, porque su sanción á todas luces entrañaría una iniquidad.

El Sr. Méndez insiste en su opinión, manifestando que las hipótesis que menciona el Sr. Lacunza podrían tomarse en cuenta como excepción del principio en que se proclamase que el estado civil sólo puede probarse con las constancias del Registro, pues ciertamente, á lo imposible nadie está obligado. Pero si el principio no se enuncia en términos exclusivos y absolutos, una de dos cosas tiene que suceder por las mismas causales de que el Sr. Lacunza hace mérito: ó muy rara vez se irá á las Oficinas del Registro y entonces mejor es no pensar en la institución, ó va á subsistir meramente como un sistema subsidiario y paralelo con los Registros parroquiales y entonces que se diga esto clara y francamente. El exponente entiende que ninguna ley nueva podría promulgarse si se pensara en todos los que no han de cumplir con ella, pues su número necesariamente ha de ser grande: pero, como ya está declarada la independencia entre los negocios civiles y los eclesiásticos por la ley de 12 de Julio de 1859, el establecimiento del Registro laico para el estado civil de los habitantes de la República se impone como una consecuencia ineludible. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción bajo la denominación de: *Disposiciones generales á las actas del estado civil* que denominará todo el capítulo I. *Las constancias sobre actos del estado civil serán válidas y harán fe en toda la República, sólo en el caso de que estén otorgadas conforme á las prescripciones de este Código. Ningún*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

otro documento es admisible para comprobar el estado civil de las personas, si no es en los casos previstos en el art .... (1). Dejo en blanco, dice el Sr. Méndez, esta referencia porque más adelante encontraremos en el *Proyecto* que estamos revisando un artículo en que se contienen los casos de excepción á que aludía el Sr. Lacunza. Dicha redacción es aceptada y queda como art. 31 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 41): "Las actas formalizadas con arreglo al método establecido ó que se establezca harán fe como los actos e instrumentos públicos."

El Sr. Lacunza pide la supresión del artículo por estar su sentido ya camprendido, en el que la Camisión acaba de aprobar. Queda suprimido.

Proyecto Sierra [art. 42]: «Toda alteración en los registros y actas públicas y toda infracción culpable en lo dispuesto por los reglamentos, producirá contra los transgresores una acción de daños é incurrirán en las penas marcadas por la ley.»

El Sr. Lacunza repite sus observaciones formuladas con motivo del art. 40 del *Proyecto*, y pide se reserve la discusión sobre las infracciones y sus castigos en orden al modo de llevarse los registros para cuando ya la Comisión haya fijado los principios relativos á este punto, pues así parece más lógico y no debe olvidarse, como ya lo patentizó el Sr. Ministro de Justicia (Terán), que el *Proyecto* no se propuso sino delincar las bases generales de la institución de que ahora se trata, sin descender á pormenores.

El artículo se reserva en el sentido de las reflexiones del Sr. Lacunza, quien ofrece presentar un texto que res-

---

(1) En la secnela de la discusiòn el artículo relativo resultó ser el 48, según se verá mas adelante.

(Nota del Editor.)

ponda al supuesto de las infracciones en el modo de llevar los registros y á la penalidad de las mismas.

Proyecto Sierra [art. 43]: «Cuando no existan registros, ó que por algún evento se hubiesen perdido, podrá admitirse prueba de instrumentos y testigos. Y en este caso, los matrimonios, nacimientos y defunciones se podrán probar tanto por registros, notas y papeles pertenecientes á los padres y madres ya difuntos, cuanto por medio de testigos. Pero si el defecto de los registros ó del acta fuere efecto del dolo del querellante, no se admitirá la prueba permitida por el presente artículo.»

El Sr. Lacunza pide se reserve también este precepto para discutirlo más adelante.

(Reservado).

Proyecto Sierra (art. 44): "Toda acta del Estado civil de mexicanos ó extranjeros redactada en país extranjero hará plena fe si se hubiere arreglado á las leyes y formas usadas en dicho país."

(Igual petición y acuerdo).

Proyecto Sierra (art. 46): "Las municipalidades de la República están particularmente encargadas de velar sobre la seguridad del estado civil de las personas."

El Sr. Lacunza expone que es éste el último precepto de los dedicados por el Dr. Sierra en su *Proyecto* al Registro del estado civil, y como él trata precisamente de la organización del sistema, punto sobre el cual ha fijado el exponente la atención para continuar de allí en adelante la serie de prevenciones que considera necesarias en el asunto, entra desde luego á manifestar sus ideas acerca del particular. No cree conveniente encomendar á las municipalidades de la República las funciones del Registro de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

estado civil, pues ellas son de tal modo importantes que requieren un personal especial. Así, propone ante todo se encargue del Registro á funcionarios que se denominarán «jueces del estado civil.»

El Sr. Escudero no acepta esa denominación, pues por «juez» de *jus dicere* se entiende el que tiene autoridad y poder para juzgar. Ahora bien los funcionarios á cuyo cargo va á estar el registro del estado civil, no tienen competencia para decidir ni sobre las contiendas en que se ventile el estado civil mismo. Propone se les llame: «oficiales del estado civil»

El Sr. Lacunza aprueba la observación y continuando la exposición de sus ideas sobre organización del Registro, propone se lleven tres libros, de los cuales el primero deberá contener las actas de nacimiento, adopción ó reconocimiento; el segundo, las de matrimonio y el tercero, las de fallecimiento.

El Sr. Terán llama la atención de la comisión sobre que, aunque incidentalmente se trata ahora de la adopción es necesario resolver desde luego si ésta ha de conservarse ó nó en el nuevo Código. El exponente cree, como el Dr. Sierra lo dice en el oficio adjunto al primer libro de su *Proyecto*, que la adopción es enteramente inútil, una cosa que está del todo fuera de nuestras costumbres. Pide que en vez de la adopción se asiente en los libros del registro la legitimación.

El Sr. Lacunza cree que debe conservarse la adopción, como un consuelo para los padres sin hijos y con sujeción á ciertas condiciones que podrían ser las que expone la Instituta de Justiniano (lib. 1, tít. 11, 554 y 9); pero como la mayoría de la Comisión resuelve que debe suprimirse en en el nuevo Código tal institución, el exponente, á ruego de sus colegas, propone la siguiente redacción para el artículo pendiente: *Los oficiales del estado civil llevarán por duplicado tres libros, que se denominarán « Registro Civil,» y contendrán el 1° Actas de nacimien*

to, legitimaeión ó reconocimiento;» el 2° Actas de matrimonio, y el 3° Actas de fallecimiento.» En uno de estos libros se asentarán las actas originales de cada ramo, y en el duplicado se irán haciendo inmediatamente copiasexactas de ellas, cada una de las cuales será autorizada por el oficial del estado civil. La redacción es aceptada y queda como art. 32 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone que se redacte el artículo siguiente como sigue: *Todos los libros del registro civil serán visados en su primera y última foja* por la primera autoridad política del Cantón, Departamento ó Distrito, *y autorizadas por la misma con su rúbrica en todas sus demás fojas. Se renovarán cada año, y el ejemplar original de cada uno de ellos quedará en el archivo del registro civil, así como los documentos sueltos que les correspondan, remitiéndose el primer mes del año siguiente* á los gobiernos de los respectivos Estados, Distrito y Territorios *los libros de copias.*

El Sr. Mendez propone que, en vez de que sea necesario acudir, para visar los libros, hasta la primera autoridad política, baste hacerlo con el *Prefecto ó Subprefecto respectivo*, siendo, en consecuencia también este funcionario, y no aquella autoridad, al que se remitan los libros de copias. La enmienda es aceptada y queda así redactado el artículo 33 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: *El oficial del estado civil que no cumpliere con la prevención de remitir oportunamente á la Prefectura respectiva las copias de que habla el artículo anterior será destituido de su cargo.* La proposición es aceptada y queda como art. 34 del nuevo Código.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: *En las actas del registro civil se hará constar el año, día y hora en que se presenten los interesados, se tomará razón especificada de los documentos que se mencionen en ellas, y los nombres, edad, profesión y domicilio de todos los que en ellas sean nombrados en cuanto sea posible.* La proposición es aceptada y queda como art. 35 del nuevo Código.

El Sr Lacunza propone como artículo siguiente: *No podrá insertarse en las actas, ni por vía de nota ó advertencia sino lo que deba ser declarado para el acto preciso á que ellas se refieren.*

El Sr. Escudero manifiesta, que para completar mejor el pensamiento del Sr. Lacunza, propondría se agregase á la anterior redacción la frase: *y lo que esté expresamente prevenido en este Código.* La redacción del señor Lacunza, así adicionada, es aceptada, y queda como art. 36 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: *Para los casos en que los interesados no puedan concurrir personalmente, podrán hacerse representar por un encargado cuyo nombramiento conste por escrito. Este nombramiento se archivará después de haberlo citado especificadamente en el acta.*

El Sr. Ramírez indica que quizá sería conveniente agregar á la anterior redacción todas aquellas salvedades en que una absoluta imposibilidad impide que los interesados mismos concurran á las oficinas del registro; por ejemplo, tratándose de niños expósitos ó abandonados; de fallecimientos en casas de vecindad, en hoteles, hospitales, prisiones, etc., etc. En estos supuestos, aun los extraños están obligados á comunicar el nacimiento ó fallecimiento á los oficiales del registro, sin necesidad de poder alguno.

El Sr. Lacunza manifiesta, que en su oportunidad dará cuenta á la Comisión de la manera con que se ha de provér á las hipótesis que cita el Sr. Ramírez y en las cuales entiende no deber ocuparse ahora, porque sólo se trata de *facultar* á los interesados para que se registren los actos que les conciernen, sin que sea obstáculo que no comparezcan personalmente; mientras en los casos en que el Sr. Ramírez hace valer, existe una verdadera obligación para las personas extrañas de comunicar el nacimiento ó fallecimiento á los oficiales del Registro.

La proposición del Sr. Lacunza es aceptada y queda como art. 37 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: *Los testigos que intervengan en las actas del estado civil, serán varones, mayores* de dieciocho años, *prefiriéndose los que quieran los interesados aunque sean sus parientes.*

El Sr. Escudero dice que encuentra arbitraria la fijación de la edad de dieciocho años en este caso y propone se diga: *mayores de edad,* pues entiende que lo que se busca en los testigos es su mayor posible conocimiento de la importancia del acto sobre el cual van á declarar.

La proposición del Sr. Lacunza es aceptada con la enmienda del Sr. Escudero y queda como art. 38 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción: *Sentada en el libro el acta, será leída por el oficial del estado civil á los interesados y testigos; la firmarán, y si algunos no la firman, se asentará por qué no lo hacen. Se expresará que el acta fué leída y quedarán conformes los interesados.*

La redacción es aceptada y queda como art. 39 del nuevo Código.

———

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Al asentarse las actas en los libros del registro civil, se observarán las prevenciones siguientes:*

1.ª Las actas se numerarán y escribirán una después de otra, sin dejar entre ellas ningún renglón entero en blanco.

2.ª Tanto su número ordinal como el de las fechas ó cualquiera otro, estarán escritos en cifras aritméticas, y además con todas sus letras en palabras.

3.ª Ninguna palabra se pondrá en abreviatura.

4.ª No se hará raspadura alguna; lo que fuere necesario testar ó tachar, se hará pasando una linea sobre las palabras de manera que éstas queden siempre legibles.

5.ª Al fin de cada acta se salvará con toda claridad lo entrerrenglonado, testado ó tachado.

El artículo es aceptado y queda como artículo 40 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta la necesidad de establecer una seria sanción de las disposiciones anteriores y para ese fin propone la redacción siguiente: "Las raspaduras, aplicaciones de ácidos, así como toda alteración, toda falsificación en las actas del Registro Civil ó en las copias que se den á las partes, toda inscripción de estas actas hecha sobre una hoja que quede suelta ó de otro modo que no sea sobre los registros destinados á ellas, serán castigados con la destitución, si el autor fuere el Oficial del Estado Civil. Si no fuere él, será su obligación probar que otro lo hizo. Este otro y él en su caso serán además responsables para con las partes interesadas por los daños y perjuicios que de tales faltas se las sigan, y por último serán castigados con las penas que á los falsarios imponen las leyes."

El Sr. Méndez propone se suprima de la anterior redacción la parte relativa á la destitución de loficial del registro, pues entiende que, siendo tan extensa la responsabi-

lidad que sobre él se hace pesar hasta el grado de que siempre se presume su culpabilidad, salvo la prueba contraria, no es equitavo prescribir para él en todos los casos tan terrible pena. Considera, además, que la fijación de penas debe dejarse en lo posible para el Código Penal limitándose en el civil á una simple referencia á aquél. Como con todas las demás ideas contenidas en la redacción presentada por el Sr. Lacunza, el Sr. Méndez está de acuerdo, propone la siguiente: *Las raspaduras, aplicaciones de ácidos, así como toda alteración, toda falsificación en las actas del registro civil; toda inscripción de estas actas, hecha sobre una hoja que quede suelta, ó de otro modo que no sea sobre los libros destinados al registro, constituyen un delito de falsedad, que será castigado con las penas decretadas por las leyes para los falsarios. La pena se impondrá al encargado del registro civil, siempre que no pruebe que otro fué el autor del hecho de que se trate.*

El oficial del registro civil, ó el que resultare culpable, será además responsable para con las partes interesadas, por los daños y perjuicios que de tales faltas se les sigan.

Las faltas mencionadas en este artículo, que se cometieren en las copias autorizadas que se expidan de las actas del registro civil, serán igualmente castigadas con las penas decretadas para los falsarios.

Esta redacción es aceptada y queda como artículo 41 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción para otro artículo: *Los apuntes dados por los interesados, y los documentos que presenten, se anotarán poniéndoles el número del acta; se reunirán y depositarán cada año con el ejemplar que ha de quedarse en el archivo del registro civil, asentándose un índice de ellos en las últimas hojas del duplicado.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esta redacción es aceptada y queda como artículo 42 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza presenta la siguiente redacción para otro articulo: *Toda persona, aun cuando no sea interesada, puede hacerse dar testimonio de las actas del registro civil: estos testimonios harán plena fé y producirán todos los efectos civiles.*

La redacción es aceptada y queda como artículo 43 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone para el artículo siguiente: *Las actas del estado civil relativas al mismo oficial del registro, á su esposa ó á los ascendientes ó descendientes de cualquiera de ellos no pueden autorizarse por el misma oficial; pero se asentarán en el mismo libro, y serán autorizadas por la primera autoridad política del lugar.*

La redacción es aceptada y queda como artículo 44 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone para el siguiente artículo: *Los vicios ó defectos que haya en el acta, sujetan al oficial á las penas establecidas; pero no producen nulidad del acto, á menos que se pruebe la falsedad de éste.*

La redacción es aceptada y queda como artículo 45 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, después de haber aprobado la Comisión los artículos que llevan los núms. 31 y 36 en el nuevo Código, entiende que se impone la necesidad de aprobar tambien el siguiente: *Los registros del estado civil solo hacen fe respecto del acto que debe ser consignado en ellos; cualquiera otra cosa que se agregue se tendrá por no puesta, y el oficial del registro incurre en multa de diez pesos.*

La proposición es aceptada y queda como art. 46 del nuevo código.

El Sr. Lacunza presenta la siguiente redacción para un nuevo artículo: *Las actas del estado civil que hayan tenido lugar en país extranjero, se sujetarán, en cuanto á las formas de su otorgamiento al art. 8.*

La redacción es aceptada y queda como art. 47 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza, después de referirse á la aprobación ya otorgada por la Comisión al art. 31 del nuevo Código en virtud de las observacinnes hechas por el Sr Méndez, manifiesta que presenta reformado y en conceptos más sencillos el art. 43 del Proyecto del Dr. Sierra (1) en los siguientes términos: *Cuando no hayan existido registros, ó se hayan perdido; ó estuvieren rotos ó borrados, ó faltas las hojas en que se pueda suponer que estaba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumentos ó testigos; pero si uno solo de los registros se ha inutilizado y subsiste el duplicado, de éste debe tomarse la prueba sin admitirla de otra clase.*

La redacción es aceptada y queda como art. 48 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que propone como último artículo, de los generales, sobre el registro del estado civil, el siguiente, «Todo acto de estado civil relativo á otro ya registrado, podrá ser anotado al margen del inscripto anterior á petición de los interesados: la misma anotación deberá hacerse siempre que lo mande la autoridad que puede rectificar un acto. Después de hecha la anotación, todo testimonio de la acta contendrá la anotación.»

---

(1) Veáse *supra* pág. 65.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Mendez propone al Sr. Lacunza como más clara esta otra redacción: *Todo acto del estado civil, relativo á otro ya registrado, podrá ser anotado, á petición de los interesados, al margen del acta relativa: la misma anotación deberá hacerse siempre que lo mande la autoridad que puede determinar acerca de los actos del estado civil. Después de hecha, se insertará en todo testimonio que se expida del acta.*

La nueva redacción es aceptada y queda como art. 49 del Código que se discute.

———

El Sr. Mendez manifiesta que hay dos puntos importantes en que, en su concepto, debe ocuparse todavía la Comisión respecto del estado civil. El uno se refiere á los funcionarios que han de regentar las oficinas del registro, y el otro, á lo que ha de hacerse, cuando el ejército nacional se halle fuera del territorio. Para lo primero propone se diga: *Los Alcaldes ejercerán las atribuciones de oficiales del registro civil, y estarán en obligación de llevar el de su respectiva municipalidad, cumpliendo con las prevenciones de este título. Los libros del registro civil estarán bajo la inspección y vigilancia del Ministerio Público y de las autoridades superiores á los alcaldes en el orden gubernativo.*

Aceptada la proposición del Sr. Méndez, queda como art. 50 del nuevo Código.

———

El Sr. Mendez propone también, por lo que respecta al ejército, lo siguiente: *Cuando el ejercito nacional se halle fuera del territorio de la República, las actas del estado civil, relativas á los militares y demás personas dependientes del ejército, se sujetarán á las prevenciones de este Código, con las modificaciones siguientes:*

1.ª Las funciones de oficiales del estado civil, serán desempeñadas por el Comisario ó Sub-comisario que designe el Comandante en jefe del ejército en campaña, en virtud de una orden que se publicará en la general del cuerpo del ejército.

2.ª El comisario ó sub-comisario designado, llevará los libros de que habla el art. 32, los cuales serán visados y rubricados por el jefe de Estado Mayor general del ejército en campaña. Los duplicados permanecerán constantemente en el Estado Mayor general, y los principales en poder del Comisario ó Sub-comisario, hasta que volviendo el ejército al territorio nacional, se depositen en el Ministerio de la guerra.

3.ª De cada acta del estado civil que se inscriba en los registros del ejército, se remitirá copia certificada al Ministerio de la Guerra, y por éste al oficial del estado civil del último domicilio de los interesados, á quienes se entregarán desde luego dos copias certificadas. Si se tratare de nacimiento, se remitirá la copia al último domicilio de los padres, ó únicamente al de la madre, si sola ésta fuere conocida. Si se tratare de reconocimiento, se remitirá además al oficial del estado civil en cuyo registro esté el acta de nacimiento del reconocido.

4.ª Los oficiales del estado civil á quienes llegaren estas copias certificadas, las trasladarán inmediatamente en sus libros, y conservarán las copias entre los documentos concernientes al estado civil.

5.ª Las publicaciones para matrimonio se harán en el domicilio último de los contrayentes, y además se insertarán ocho días antes de celebrar el matrimonio, en la orden general del ejército y se hará su publicación en el lugar de la residencia de los contrayentes, con quince días de anticipación

6.ª Los juicios sobre denuncias de impedimento se seguirán ante el Tribunal del último domicilio del pretendiente á quien se objete el impedimento.

7.ª En general, en las actas de matrimonio de los militares, dentro ó fuera del territorio nacional, se hará

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mención de la correspondiente licencia ó autorización para contraerlo, que se le haya concedido por quien corresponda.

8.ª Las actas de defunción se extenderán en vista de la declaración hecha por el jefe del cuerpo respectivo, por el médico militar ó por tres testigos. El acta será firmada por los que hagan la declaración.

9.ª Si la muerte acaeciere en hospital militar, el Director de él tendrá obligación de hacer la declaración.

Estas proposiciones son aceptadas y quedan como artículo 51 del nuevo Código.

Capítulo II.

De las actas de nacimiento.

El Sr. Lacunza continúa presentando su proyecto sobre el registro del estado civil, y manifiesta que, aprobado ya por la Comisión con el número 32 el artículo que trata de los libros que han de llevarse por los oficiales encargados de dicho registro, propone como primera disposición respecto de las *actas de nacimiento* lo siguiente: "Las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los quince días que sigan á él, presentando el niño al oficial del estado civil, ó requiriendo á éste para que pase á verle en la casa en que se halle, lo que podrá verificar. En las poblaciones en que no haya oficial del estado civil el niño será presentado al que ejerza la autoridad política local y éste dará la constancia respectiva, que los interesados llevarán al oficial del estado civil para que asiente la acta respectiva."

El Sr. Méndez expone que, en su concepto, debe modificarse la proposición del Sr. Lacunza en el punto relativo á la falta de presentación del recién nacido, pues entiende que esa solemnidad es necesaria y no conviene

dejar de observarla sino por excepción, que la ley ha de expresar, para no dejarla al arbitrio del oficial del estado civil. Propone, en consecuencia, se modifique el pensamiento del Sr. Lacunza en la forma siguiente: *Las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los quince días que sigan á él, presentando el niño al oficial de estado civil, ó requiriendo á éste para que pase á verle en la casa en que se halle, lo que deberá verificarse en caso de enfermedad. En las poblaciones donde no haya oficial del estado civil, el niño será presentado al que ejerza la autoridad política local, y éste dará la constancia respectiva, que los interesados llevarán al oficial del estado civil para que asiente el acta.*

El Sr. Ramírez pregunta al Sr. Méndez si su mente es prescribir al oficial del estado civil que pase á la casa del niño solamente en caso de enfermedad. Si es así, encuentra muy injusta la prescripción, porque son posibles otros casos en que igualmente conviene no sacar al recién nacido á la calle.

El Sr. Lacunza contesta, adelantándose al Sr. Mendez, que el artículo, tal como éste lo propone, llena, en su concepto, perfectamente todas las exigencias en la materia, pues, en efecto, muchos otros casos, además de el de enfermedad, son posibles, en que convendría, sería debido ó por lo menos prudente que el oficial del estado civil se trasladase á la casa del recién nacido. Esto necesariamente hay que dejarlo á la discreción del oficial del estado civil, pues la ley no puede entrar en pormenores. Sin embargo existe un caso en que ya no puede ser discrecional sino gravemente obligatorio que se obre así y es el de enfermedad del niño. Conducirse de otro modo sería inhumano y volvería odiosa la institución de que se trata.

La proposición del Sr. Mendez es aceptada y queda como art. 52 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: "Tienen obligación de declarar el nacimiento los padres; en defecto de éstos los abuelos si los hay, ó los parientes inmediatos; á falta de parientes las personas en cuya casa se haya verificado y en defecto de éstos los facultativos ú obstetrices que hayan asistido á la madre."

El Sr. Mendez observa que la obligación de declarar al oficial del registro el nacimiento debe ser eficaz, para lo cual no conviene encomendarla sino á aquellas personas que por estar inmediatamente cerca del recién nacido tienen mayor facilidad para tal declaración; que sin duda por esto el art. 56 del Código de Napoleón llegó hasta excluir á la madre, fijándose desde luego en el padre y, si él no lo hace, en los médicos, obstetrices y en fin, en cualesquiera personas que hubieran asistido al alumbramiento.

El objeto del legislador, en este punto, debe ser asegurar y no dificultar el registro del nacimiento, tan necesario para fijar la edad del hombre, sus conexiones de familia, etc. etc. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción: *El nacimiento del niño será declarado por el padre ó en defecto del padre por los médicos, cirujanos obstetrices, ú otras personas que hayan asistido al parto, y cuando la madre haya parido fuera de su domicilio, por la persona en cuya casa haya parido.*

La redacción es aceptada y queda como art. 53 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente *El acta de nacimiento se extenderá inmediatamente con dos testigos que pueden ser designados por las partes interesadas. Contendrá el acta el día, hora y lugar del nacimiento; el sexo del niño, el nombre y apellido que se le ponga.*

El Sr. Escudero manifiesta que considera muy conveniente se agregue: *y si se ha presentado muerto ó vivo,*

pues esta mención tiene que ser en muchos casos el fundamento de diversos derechos civiles que sin aquella no podrían asegurarse.

La redacción del Sr. Lacunza, con la adición del Sr. Escudero, es aceptada y queda como art. 54 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente: artículo: *Si la presentación del recién nacido se hiciere como de legítimo matrimonio, se asentarán los nombres y domicilios del padre y madre, y si se supieren, los de los abuelos paternos y maternos y el de la persona que haya hecho la declaración de quienes son los padres.* «Si esta declaración fuere hecha por el mismo padre legítimo por sí ó por apoderado especial ó por escrito firmado por él mismo, hace plena fe para probar la filiación."

El Sr. Escudero manifiesta que entiende no ser todavía oportuna la segunda parte de la anterior proposición, que se refiere á la prueba de la filiación legítima, pues de esto tendrá que tratar la Comisión más adelante, siguiendo el orden de los artículos del *Proyecto del Dr. Sierra.*

El Sr. Lacunza retira dicha segunda parte, quedando aprobada la primera como art. 55 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: «Si fuere natural el hijo solo se asentarán los nombres del padre ó madre, por sí ó por apoderado especial, si estos lo piden, expresando que se hizo á su petición; si no lo piden se asentará que el niño es hijo de padres no conocidos: si el hijo fuere adulterino, no podrá asentarse, aunque lo pidan las partes el nombre del padre; pero podrá asentarse el de la madre á petición de ésta, si ella no fuese casada."

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Terán [Ministro de Justicia) manifiesta que la anterior redacción es muy compleja y comprende dos hipótesis muy diversas, que no pueden regirse por iguales principios: los hijos simplemente *naturales* y los *adulterinos*; que propone se trate por el momento solo de los primeros y se deje para otro artículo hablar de los segundos.

El Sr. Escudero manifiesta que considera muy remota en nuestras costumbres esa indiferencia de la madre que se supone, para darse á conocer en el acta de nacimiento. Querria, en consecuencia que á la madre se le abriesen las puertas un poco más de lo que de la redacción del Sr. Lacunza parece desprenderse, para que pudiera, sin sonrojo ni coacción alguna, declarar la verdad al menos en cuanto á ella; por ejemplo, autorizándola para llamar al oficial del estado civil, y diciéndose que en tal caso, éste tendrá la obligación de pasar á la casa de la madre; que de este modo no se asentará en el acta el duro calificativo para el recien nacido de hijo de *padres no conocidos* sino en el último extremo.

El Sr. Lacunza pide reformar su redacción y lo hace en los términos siguientes. *Si el hijo no fuere legítimo, sólo se asentarán el nombre del padre ó de la madre si estos lo pidieren por si ó por apoderado especial, expresando en el asiento, que se hizo á su petición. Si la madre no pudiere concurrir, ni tuviese apoderado, pero mandará llamar al oficial del registro civil, éste pasará al lugar en que se halle, y allí podrá recibir de ella la petición de que se exprese su nombre; todo lo cual se asentará en el acta.*

Esta redacción es aprobada y queda como artículo 56 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza, continuando la exposición de su proyecto en el sentido de las observaciones de sus colegas de Comisión, propone que en seguida del artículo anterior se diga: *Si los padres del hijo ilegítimo no piden que se asienten sus nombres, se asentará que es hijo de padres no conocidos; si uno solo de los padres lo pidiere, la paternidad de éste solo se asentará, y no la del otro.*

Esta redacción es igualmente aprobada y queda como artículo 57 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, supuesta la anterior advertencia del Sr. Ministro de Justicia, en orden á tratar separadamente de los hijos adulterinos, conoce ya la Comisión lo que ha propuesto á este respecto.

El Sr. Ramírez observa que en la redacción del Sr. Lacunza se omite hablar de los hijos incestuosos y entiende que algo debe decirse.

El Sr. Lacunza responde que su primer pensamiento fué incluirlos; pero desistió de él ante el escándalo de semejante revelación en los registros del estado civil; que, por lo demás, considera inútil hablar en el Código de hijos incestuosos, porque, como siempre, ha de ocultarse esta circunstancia, el caso tendrá que regirse por los principios relativos á hijos naturales.

El Sr. Escudero expone no estar de acuerdo con la redacción propuesta por el Sr. Lacunza en orden á los hijos adulterinos, porque, pudiéndose el adulterio cometer por mujer casada con hombre libre y al contrario, no encuentra la razón de que se diga que si el hijo es adulterino no podrá asentarse el nombre del padre. Bien está, si sólo el padre es casado; pero si él es el soltero y la madre la casada, ¿por qué no ha de poderse asentar el nombre de aquél?

El Sr. Lacunza contesta que se ha referido sólo al padre, porque la hipótesis que indica el Sr. Escudero entra de lleno en el principio antiguo y siempre necesario para el orden de las familias: *Pater est quem nuptiæ demonstrant.* Por manera, que, si se trata de hijo nacido de mujer

casada y de padre soltero, tiene que asentarse no el nombre de éste sino el del marido de la madre.

El Sr. Méndez hace observar que esto será si la mujer que se supone vive con su marido; no así, en el caso contrario.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) manifiesta que en su concepto, no hay inconveniente en que, si el hijo es nacido de padre casado y de mujer soltera, se asiente el nombre de ésta, omitiéndose el de aquél, lo cual ya aprobó la Comisión en el artículo 56 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza pide reformar el artículo, en el sentido de las observaciones que se le han hecho y lo presenta en la forma siguiente: *Si el hijo fuere adulterino no podrá asentarse, aunque lo pidan las partes, el nombre del padre ó madre casado; pero podrá asentarse el del padre ó madre soltero, si lo hubiere. Cuando el hijo nazca de una mujer casada qne viva con su marido, en ningún caso, ni á petición de persona alguna, podrá el oficial del estado civil asentar como padre á otro que al mismo marido.*

La redacción es aceptada y queda como artículo 58 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Toda persona que encontrare un niño recién nacido, ó en cuya casa ó propiedad fuere expuesto, está obligada á llevarlo al oficial del estado civil, así como los vestidos, papeles ó cualesquiera otros objetos encontrados con el niño, y á declarar todas las circunstancias de tiempo y lugar en que le haya encontrado. La misma obligación tienen los jefes, directores ó administradores de cualquiera casa de comunidad ó prisión, y especialmente de los hospitales y de las casas de maternidad y de expósitos, respecto de los niños nacidos ó expuestos en ellos.*

El artículo es aprobado y queda bajo el número 59 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone este otro artículo: *En el acta que se levantará en estos casos se expresarán con especificación todas estas circunstancias y la edad aparente del niño, su sexo y nombre que se le imponga y el de la persona ó casa de expósitos que se encargue de él. Si con el expósito se hubieren encontrado papeles, alhajas ú otros objetos, que puedan conducir al reconocimiento de él, estos se depositarán en el archivo del registro, mencionándolos en el acta y dando constancia de quedar allí al que recoja al niño.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 60 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *En todo caso, se prohibe al oficial del estado civil y á los testigos del acta hacer inquisición directa ó indirecta sobre la paternidad, debiéndose limitar á expresar lo que les digan las personas que presenten al niño, aun cuando parezcan sospechosas de falsedad.*

El Sr. Escudero manifiesta que, debiendo ser el registro del estado civil el archivo de la verdad y no de la mentira, la cual en ésta, como en cualquiera otra materia puede deslizarse con daño de los directamente interesados, que son los niños á que los asientos se refieren, entiende que no debe autorizarse la segunda, so pena de convertir la institución en un monumento de errores é inexactitudes, siempre perjudiciales y trascendentes al interés material y moral de las personas.

El Sr. Lacunza contesta que ha prohibido á los oficiales del estado civil investigar de cualquier manera que sea la paternidad del niño presentado, porque, además de que ésto atacaría muchas veces el secreto de la vida privada, siendo por lo mismo un motivo muy serio para alejar á no pocas personas de inscribir los nacimientos, el oficial carece de las facultades necesarias para decidir cuestiones

de esta clase, que son materia de un juicio contradictorio; que, además, para el peligro que el Sr. Escudero señala están las prescripciones de las leyes penales y en todo caso el juicio sobre rectificación de las actas, que más adelante propondrá á la Comisión.

El Sr. Escudero replica que entonces propone se agregue al artículo la frase "sin perjuicio de que la falsedad sea castigada conforme á las leyes penales."

El Sr. Lacunza dice que no cree necesaria la adición, porque se sobreentiende.

El artículo queda aprobado bajo el núm. 61 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: *Si el nacimiento acaece en un buque de la República, de cualquiera especie, se extenderá el acta por el jefe del buque, se firmará por dos testigos y se entregará á la primera autoridad política del puerto nacional á que llegare el buque, quien cuidará de entregarla al oficial de estado civil, y éste la asentará en su libro. Si arribare á puerto extranjero donde hubiere cónsul mexicano, se entregará al cónsul, quien cuidará de asentarla en su libro.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 62 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Cuando un juez decida sobre el reconocimiento de un hijo, avisará al oficial de estado civil, para que asiente una acta, y en ella se hará mención de la del nacimiento, si la hay. Asimismo, en la del nacimiento se hará al margen anotación de la nueva. Esta misma anotación se hará, si los interesados lo solicitan, aunque el reconocimiento no se haya hecho judicialmente.* El proponente manifiesta, para motivar esta redacción, que la primera parte se refiere al caso en que la paternidad ó maternidad natural hayan sido materia de un juicio en el cual se haya pronunciado sentencia definitiva declarando aquellas. Si hemos establecido (art. 31) que los registros del estado civil son la única prueba del mismo, se impone la necesidad de asentar acta especial del reconocimiento en dichos registros. La segunda parte del artículo tiene por objeto relacionar por medio de anotaciones las actas de nacimiento y reconocimiento de una misma persona. En cuanto á la tercera parte del propio artículo, hace saber á la Comisión que más adelante y en su oportunidad expondrá los diversos modos de reconocimiento que, en concepto del proponente, deben aceptarse en el nuevo Código, en el sentido de otras tantas facultades para el padre ó madre que quieran obligarse como tales en favor de sus hijos habidos fuera de matrimonio. Se trata, pues, del reconocimiento voluntario y no del forzoso, como pudiera llamarse al que es efecto de una sentencia.

El artículo es aprobado y queda como 63 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como nuevo artículo el siguiente: *Si al dar el aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, la una de nacimiento y la otra de fallecimiento en sus libros respectivos.*

El artículo es aprobado y queda como 64 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción para un nuevo artículo: «Si se presentaren gemelos, el Juez procurará saber cuál nació primero y lo asentará en las actas, que serán dos. Se asentarán también las particularidades que distinguen á los gemelos.»

El Sr. Méndez observa, advirtiendo que, quizá por ser un punto demasiado claro, lo omitió el Sr. Lacunza, que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en el caso el juez debe tomar los datos sobre las particularidades de los gemelos y la prioridad del nacimiento, del médico, cirujano, obstetriz ó de las personas que hayan asistido al parto. Propone, en consecuencia, esta redacción. *En el acta de nacimiento de gemelos, el oficial del estado civil hará constar las particularidades que los distingan y cuál nació primero, según las noticias que le comuniquen el médico, el cirujano, la obstetriz, ó las personas que hayan asistido al parto.*

Esta redacción es aceptada, y queda como art. 65 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Si el nacimiento fuere en viaje, se registrará en el lugar que ocurra; y, si los padres lo pidieren, se enviará copia del acta al oficial del estado civil del domicilio de los padres, quien la copiará en su libro.*

Esta proposición es aceptada y queda como art. 66 del nuevo Código.

Capítulo III.

De las actas de matrimonio.

El Sr. Lacunza manifiesta que, aunque el *Proyecto del Sr. Dr. Sierra*, base de los trabajos de la Comisión y al cual no ha habido necesidad de recurrir para la fijación de los principios que tratan del Registro del estado civil, por las razones expuestas en su oportunidad, [1] se ocupa no sin cierta minuciosidad de las *actas de matrimonio*, en el capítulo sobre *ritualidades* con que debe celebrarse este acto, el que habla cree conveniente no traerlo todavía á la discusión, aunque declara haberlo consultado para los preceptos que en seguida va á proponer, tanto

(1) Véase *supra*, pág. 61.

para no interrumpir el orden numérico de los artículos, cuanto porque entiende deber conservarse dicho capítulo sobre *ritualidades* del matrimonio en el nuevo Código, reservándose para entonces recurrir al *Proyecto Sierra*. En esta virtud, propone á la Comisión el siguiente artículo: «Las personas que pretendan contraer matrimonio se presentarán al oficial del estado civil, quien tomará en el registro nota de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten los nombres, apellidos, profesiones y domicilio, así de los contrayentes como de sus padres, si los hubiere y fueren conocidos, y los de dos testigos que presentará cada contrayente para hacer constar su aptitud para el matrimonio, conforme á la ley: se hará constar también en la acta la licencia de los padres ó tutores, si alguno de los contrayentes la necesita ó la dispensa de ella, si la hubiere, y el certificado de viudedad, si alguno hubiere sido casado otra vez: también se insertará la dispensa de impedimentos si la hubiere.»

El Sr. Méndez dice que tiene que someter al Señor Lacunza dos observaciones al artículo que acaba de leerse: una en cuanto á la forma de redacción y otra relativa á las personas cuya licencia pueda necesitarse para el matrimonio. Respecto de la primera, propondría, para mayor claridad, se redactase el artículo poniendo una serie de fracciones ó incisos en correspondencia con todas las menciones que deben contenerse en el acta de que se trata. Respecto de la segunda, el Sr. Méndez entiende que, no siendo sólo los padres ó tutores, sino también en algunos casos la autoridad, la que debe prestar el consentimiento para el matrimonio, bueno es expresar la idea por medio de una frase genérica.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) encomienda al Sr. Méndez la redacción del artículo.

El Sr. Méndez propone la siguiente redacción: *Las personas que pretendan contraer matrimonio se presentarán al oficial del estado civil, quien tomará en el regis-*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tro nota de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten:

1.° Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así de los contrayentes como de sus padres, si los hubiere y fueren conocidos.

2°. Los de dos testigos que presentará cada contrayente, para hacer constar su aptitud para el matrimonio conforme á la ley.

3.° La licencia de los padres, tutores ó de las personas cuyo consentimiento se necesite, ó de dispensa de ella, si la hubiere.

4.° El certificado de viudedad, si alguno hubiere sido casado otra vez.

5.° La dispensa de impedimento, si la hubiere.

El artículo es aceptado y queda como 67 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Si de las declaraciones de los testigos consta la aptitud de los pretendientes, se fijará una copia del acta en el despacho del oficial del estado civil, en lugar bien aparente y de fácil acceso, y otras dos en los lugares públicos de costumbre. Permanecerán fijas durante quince días y será obligación del oficial del estado civil reemplazarlas, si por cualquier accidente se destruyen ó vuelven ilegibles.*"

El artículo es aprobado y queda como 68 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *En el caso de que cualquiera de los pretendientes, ó ambos, no hayan tenido en los seis meses últimos el mismo domicilio del oficial del estado civil, se remitirán copias del acta de presentación á los anteriores domicilios, para que se publiquen en cllos. Pero, si en ningún punto lo hubiesen tenido seis meses contínuos, anteriores al dia de la*

presentación, se les reputará, para este solo efecto, como vagos, y *las copias del acta de presentación durarán fijas en los lugares ya señalados dos meses, en vez de los quince días. Si, aunque en los últimos seis meses se haya tenido domicilio en el del oficial del estado civil, hubiere habido otro anterior, el oficial mandará hacer la publicación en el lugar del domicilio anterior; pero, á juicio prudente del mismo, podrá omitirse esta publicación.*

El Sr. Escudero manifiesta no estar en su concepto motivada esa declaración de vagancia que se contiene en el artículo, el cual llena perfectamente su objeto sin ella.

El artículo es aprobado con la supresión que se acaba de indicar, y queda como 69 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Sólo el Prefecto Superior Político podrá dispensar las publicaciones, cuando los interesados presenten razón bastante y suficientemente comprobada, á juicio del mismo Prefecto. El peligro de muerte de uno de los pretendientes se tendrá por razón suficiente para la dispensa. En cualquier caso que se pida dispensa, el oficial del estado civil asentará en una acta la petición, y, con copia de ella, de las declaraciones de los testigos y demás pruebas presentadas por los pretendientes, ocurrirán los interesados al Prefecto respectivo.*

El artículo es aprobado y queda como 70 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: "Cuando haya sido necesario librar copias del acta de presentación á los oficiales de otros domicilios, para que en ellos se publiquen, éstos tendrán obligación, pasados los términos de la publicación, de dar testimonio del acta que levantarán sobre el hecho de no haberse interpuesto impedimento ó del resultado del que acaso se interpusiere. Sin haber

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

recibido estas constancias y la certeza por ellas de que el matrimonio puede celebrarse, no podrán los oficiales ante quienes penda la presentación proceder al matrimonio. Estas constancias formarán parte del acta de que habla el artículo anterior."

El Sr. Escudero manifiesta estar de acuerdo con el Sr. Lacunza, porque su pensamiento realiza el fin á que tiende el art. 69 (1); pero rogaría al proponente redactase su idea con mayor claridad, permitiéndose el que habla indicar la siguiente forma, en la cual suprime la segunda parte de la redacción propuesta, por creer que es mejor constituya artículo especial, y la tercera, porque la considera hasta contradictoria con el texto á que se refiere: *El oficial del registro civil que reciba para publicar actas remitidas por los encargados de otros registros deberá, pasado el término de la publicación, levantar una acta en que haga constar que esto se verificó. De esta acta y de la que levante sobre oposiciones, si las hubiere, remitirá testimonios al oficial ante quien penda la celebración del matrimonio. Si no hubiere habido oposición, se expresará en el acta de publicación.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 71 del nuevo Código.

El Sr. Escudero, continuando la exposición de sus ideas, propone como artículo siguiente: *Sin haber recibido los testimonios de que habla el artículo anterior y la certeza por ellos de que el matrimonio puede celebrarse, no podrán los oficiales ante quienes penda la celebración proceder al matrimonio.*

El artículo es aprobado y queda como 72 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: «Los

(1) Vease *supra*, págs. 88 y 89.

oficiales del estado civil harán anotación de los certificados que las partes les entregarán de que no hubo oposición en los puntos á donde se mandaron fijar los anuncios.»

El Sr. Escudero manifiesta que entiende no guarda conformidad este artículo con el 71, ya aprobado, pues éste no supone que las partes entreguen al oficial ante quien pende la celebración del matrimonio los certificados de que no hubo oposición en los puntos á donde se mandaron hacer las publicaciones, (1) sino que impone al oficial de estos últimos la obligación de enviar aquellos á su destino. Además, cree que debe reservarse esta disposición para cuando se trate de lo que debe contener el acta especial de matrimonio.

El artículo queda pendiente.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Si el matrimonio no quedare celebrado en los seis meses siguientes á las publicaciones, no podrá celebrarse sin repetir éstas.*

El artículo es aprobado y queda como 73 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Pasados los términos de las publicaciones, y tres días más, después de ellas, sin que se denuncie impedimento, ó si, habiéndose denunciado, la autoridad judicial declaró que no lo había, ó si se hubiere obtenido dispensa de él, se hará constar esto en el libro, y, de acuerdo con los interesados, señalará el oficial del estado civil el lugar, día y hora en que se ha de celebrar el matrimonio.*

El artículo es aceptado y queda como 74 del nuevo Código.

---

(1) Vease *supra* pág. 90.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Si, dentro del término fijado en los arts. 68, 69 y 74 de este Código, se denunciase al oficial del estado civil algún impedimento contra el matrimonio anunciado, sentará de ello acta en que consten el nombre, el apellido, edad y estado del denunciante, haciéndole declarar ante dos testigos, que firmen con él, anotándose si alguno no puede hacerlo, y la remitirá al Tribunal de primera instancia del lugar, quien procederá conforme á los artículos.... ..... (1) y siguientes de este Código. El oficial del estado civil hará saber á ambos pretendientes el impedimento denunciado, aunque sea relativo á uno de ellos y se abstendrá de todo procedimiento ulterior, hasta que se remueva el obstáculo. La denuncia de impedimento se anotará al márgen de todos los actos relativos al matrimonio intentado.*

El artículo es aprobado y queda como 75 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Una vez denunciado un impedimento del matrimonio, no puede celebrarse éste, aunque el denunciante se desista, si no recayere sentencia judicial que declare no haberlo ó dispensa de él.*

El Sr. Méndez propone se diga antes del artículo propuesto por el Sr. Lacunza, el cual expone ya una consecuencia, muy puesta en razón, de cualquiera denuncia que se haga sobre el matrimonio por celebrar, cómo ha de ser esa denuncia; si caben para producir el efecto de la suspensión del matrimonio las denuncias aun anónimas, con tal de que se presenten comprobadas ó se requiere que ellas sean francas y leales, aunque faltas de toda responsabilidad nominal. Entiende que antes de hablarse de los efectos, deben mencionarse las causas capaces de producirlos. Propone en consecuencia la siguiente redacción: *Si el im-*

[1] Vease *infra*, art. 126.

presentación, se les reputará, para este solo efecto, como vagos, y *las copias del acta de presentación durarán fijas en los lugares ya señalados dos meses, en vez de los quince días. Si, aunque en los últimos seis meses se haya tenido domicilio en el del oficial del estado civil, hubiere habido otro anterior, el oficial mandará hacer la publicación en el lugar del domicilio anterior; pero, á juicio prudente del mismo, podrá omitirse esta publicación.*

El Sr. Escudero manifiesta no estar en su concepto motivada esa declaración de vagancia que se contiene en el artículo, el cual llena perfectamente su objeto sin ella.

El artículo es aprobado con la supresión que se acaba de indicar, y queda como 69 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Sólo el Prefecto Superior Político podrá dispensar las publicaciones, cuando los interesados presenten razón bastante y suficientemente comprobada, á juicio del mismo Prefecto. El peligro de muerte de uno de los pretendientes se tendrá por razón suficiente para la dispensa. En cualquier caso que se pida dispensa, el oficial del estado civil asentará en una acta la petición, y, con copia de ella, de las declaraciones de los testigos y demás pruebas presentadas por los pretendientes, ocurrirán los interesados al Prefecto respectivo.*

El artículo es aprobado y queda como 70 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: "Cuando haya sido necesario librar copias del acta de presentación á los oficiales de otros domicilios, para que en ellos se publiquen, éstos tendrán obligación, pasados los términos de la publicación, de dar testimonio del acta que levantarán sobre el hecho de no haberse interpuesto impedimento ó del resultado del que acaso se interpusiere. Sin haber

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Si, dentro del término fijado en los arts. 68, 69 y 74 de este Código, se denunciase al oficial del estado civil algún impedimento contra el matrimonio anunciado, sentará de ello acta en que consten el nombre, el apellido, edad y estado del denunciante, haciéndole declarar ante dos testigos, que firmen con él, anotándose si alguno no puede hacerlo, y la remitirá al Tribunal de primera instancia del lugar, quien procederá conforme á los artículos..... (1) y siguientes de este Código. El oficial del estado civil hará saber á ambos pretendientes el impedimento denunciado, aunque sea relativo á uno de ellos y se abstendrá de todo procedimiento ulterior, hasta que se remueva el obstáculo. La denuncia de impedimento se anotará al márgen de todos los actos relativos al matrimonio intentado.*

El artículo es aprobado y queda como 75 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Una vez denunciado un impedimento del matrimonio, no puede celebrarse éste, aunque el denunciante se desista, si no recayere sentencia judicial que declare no haberlo ó dispensa de él.*

El Sr. Méndez propone se diga antes del artículo propuesto por el Sr. Lacunza, el cual expone ya una consecuencia, muy puesta en razón, de cualquiera denuncia que se haga sobre el matrimonio por celebrar, cómo ha de ser esa denuncia; si caben para producir el efecto de la suspensión del matrimonio las denuncias aun anónimas, con tal de que se presenten comprobadas ó se requiere que ellas sean francas y leales, aunque faltas de toda responsabilidad nominal. Entiende que antes de hablarse de los efectos, deben mencionarse las causas capaces de producirlos. Propone en consecuencia la siguiente redacción: *Si el im-*

[1] Vease *infra*, art. 126.

pedimento se comunicare al oficial del estado civil, por cualquiera vía, y se presentaren pruebas de él, el oficial dará cuenta con todo á la autoridad judicial, y se suspenderá todo procedimiento, hasta que ésta resuelva.

Ambos artículos son aprobados quedando éste bajo el número 76, y el propuesto por el Sr. Lacunza, bajo el número 77 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Concluido este acto, se extenderá inmediatamente en el libro una acta en que consten:*

1.º Los nombres, apellidos, edad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes, de sus padres si se supiere, y de los testigos.

2.º Si los contrayentes son menores de edad, el consentimiento de sus superiores ó la habilitación.

3.º Que no hubo impedimento ó que se dispensó.

4.º La declaración por los esposos de consentir en unirse en matrimonio, y la prolación de la fórmula de unión hecha por el oficial. Esta acta se firmará por todos los que pudiesen hacerlo y se anotará el motivo por que dejan de firmar algunos, si así sucediere. El oficial no permitirá que se separen del lugar los que deben firmar, antes de haberlo verificado.

El Sr. Escudero propone se ponga antes de las palabras «*concluido este acto*» lo siguiente: *El día señalado para celebrar el matrimonio, se verificará éste en público y en lugar designado al efecto, compareciendo* personalmente *los contrayentes con tres testigos por lo menos, parientes suyos ó no, ante el encargado del registro civil, el cual recibirá la formal declaración que hagan las partes de ser su voluntad unirse en matrimonio.*

El Sr. Ramirez manifiesta que no encuentra la razón de que el matrimonio sólo pueda contraerse *personalmente*, cuando siempre se ha considerado posible verificar-

lo también por apoderado como lo declara la ley 5, tít. 2, de la Partida 4.ª y ha sido de práctica entre nosotros. Recuerda, además, que la Comisión aprobó ya el artículo 37, según el cual los actos del estado civil son válidos, aunque los interesados no concurran personalmente, si se hacen representar por un encargado cuyo nombramiento conste por escrito. Entiende que lo mismo debe decirse en el caso y propone, en consecuencia, que al adverbio «personalmente» se substituyan las palabras: *por sí ó por apoderado especial.*

El artículo propuesto por el Sr. Lacunza es aceptado con la adición previa propuesta por el Sr. Escudero y la enmienda indicada por el Sr. Ramirez, quedando como 78 del nuevo Código.

Capítulo IV.

De las actas de defunción.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Ningún entierro se hará sin autorización por escrito del oficial del estado civil, quien se asegurará prudentemente del fallecimiento, y hará que pasen veinticuatro horas entre la muerte y la inhumación, excepto en los casos en que se ordene otra cosa por la policía.*

El artículo es aceptado y queda como 79 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *El acta de fallecimiento se escribirá en el libro respectivo asentando* las constancias que la autoridad dé en su aviso, *ó los datos que el oficial del estado civil adquiera ó la declaración que se le haga: será firmada, por los testigos, prefiriéndose para tales, los parientes si los hay, ó los vecinos; y en caso de que la persona haya muerto fuera de*

su domicilio, uno de los testigos será aquél en cuya casa haya muerto ó alguno de los vecinos más inmediatos.

El Sr. Méndez propone se suprima la frase: "las constancias que la autoridad dé en su aviso", pues este caso especial está comprendido en las palabras genéricas: *datos que el oficial del estado civil adquiera.*

Con esta enmienda el artículo es aprobado y queda como 80 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *El acta de fallecimiento contendrá:*

1.° *El nombre, apellido, edad y profesión que tuvo el difunto.*

2.° *Si el difunto era casado ó viudo, el nombre y apellido de su cónyuge.*

3.° *Los nombres, apellidos, edad y profesión de los testigos, y si son parientes, el grado en que lo fueren.*

4.° *Los nombres de los padres del difunto, si se supieren.*

5.° *La clase de enfermedad de que hubiere fallecido, y especificadamente el lugar en que se sepulte.*

6.° *La hora de la muerte, si se supiere.*

El Sr. Méndez propone se agregue al inciso 6.° la frase: *y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta.*

El artículo y adición son aprobados, quedando como 81 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Los dueños ó habitantes de la casa en que se verificare un fallecimiento; los superiores, directores ó admistradores de las prisiones, hospitales, conventos, colegios ú otra cualquiera casa de comunidad, ó los huéspedes de los mesones ú hoteles, ó caseros de casa de vecindad, tienen obligación de dar aviso, dentro de las veinticuatro horas*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®

siguientes á la muerte al oficial del estado civil, quien se asegurará prudentemente del fallecimiento y extenderá la acta.

El Sr. Escudero pide la supresión de la última parte del artículo, pues ella contiene una regla, general para todos los casos, que ya queda expresada en el art. 79.

La redacción con la enmienda es aprobada y queda como art. 82 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente: *Si el fallecimiento ocurriere en lugar ó población en que no estuviere la oficina del registro, la autoridad política, y en su defecto la municipal, hará las veces de oficial del estado civil y remitirá á éste copia del acta que haya formado, para que la asiente en su libro.*

El artículo es aprobado y queda como 83 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Cuando el oficial del estado civil sospeche que la muerte fué violenta, dará parte á la autoridad judicial, comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda á la averiguación, conforme á derecho: cuando la autoridad judicial averigüe un fallecimiento, dará parte al oficial del estado civil, para que asiente el acta respectiva. Si se ignora quién sea la persona muerta, se asentarán sus señas, vestidos y todo lo que pueda conducir con el tiempo á identificar la persona; y, siempre que se adquieran mayores datos, se comunicarán al oficial del registro, para que los asiente al márgen.*

El artículo es aprobado y queda como 84 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Si el fallecimiento ocurriere por inundación, incendio, terremoto, naufragio, ó de cualquiera otra manera que haga imposible encontrar ó identificar el cadáver, se asentará inmediatamente en el acta, el testimonio de las personas que declaren sobre la persona muerta, y se procurará digan de ésta cuanto sepan sobre su edad, vecindad, estado y profesión, firmando dichas personas, si pudieren, el acta, además de los testigos.*

El artículo es aprobado y queda como 85 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Cuando alguno falleciere en lugar que no sea el de su domicilio se remitirá á éste, en copia certificada, el acta, para que se asiente en el libro respectivo, anotándose la remisión al márgen del acta de fallecimiento.*

El artículo es aprobado y queda como 86 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *Los tribunales cuidarán de enviar, en las veinticuatro horas siguientes á la ejecución de las sentencias á muerte, una noticia al oficial del estado civil del lugar donde se haya verificado la ejecución. Esta noticia contendrá el nombre: apellido, profesión, edad del ejecutado y su estado.*

El artículo es aprobado y queda como 87 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone como artículo siguiente, *Si el fallecimiento fuere en algún buque de la República, sea de guerra ó mercante, el jefe de él levantará el acta, y se observará lo mismo que en las actas de nacimiento en dichos buques.*

El artículo es aceptado y queda como 88 del nuevo Código.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *El Cuartel Maestre ó Mayor General de una división ó cuerpo de ejército, y si no lo hubiere, el jefe de cualquiera partida, tiene obligación de dar parte al oficial del estado civil de los muertos que haya habido en ella, en campaña ó de otro modo, especificando las filiaciones de los muertos: el oficial practicará lo prevenido para los muertos fuera del domicilio.*

El artículo es aceptado y queda como 89 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo, que es el 42 de la ley de 28 de Julio de 1859: *En todas los casos de muerte violenta en las prisiones ó casas de detención, ó de ejecución de justicia, no se hará sobre los registros mención de esta circunstancia, y las actas contendrán simplemente las demás formas prescriptas en el art. 81.*

El artículo es aceptado y queda como 90 del nuevo Código.

Capítulo V.

De la rectificación de las actas del estado civil.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *La rectificación ó modificación de una acta del estado civil no puede hacerse sino ante el poder judicial, y en virtud de sentencia de éste, salvo el reconocimiento voluntario de un padre á su hijo, que se hará conforme á las prescripciones de este Código.*

El artículo es aceptado y queda como 91 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Ha lugar á rectificación:*

I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó.

II. Por enmienda, cuando se pretenda variar algún nombre ú otra circunstancia, sea esencial ó accidental.

El artículo es aceptado y queda como 92 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *Cuando se intente demanda sobre una rectificación, el juez ordinario, además de citar á las partes interesadas, conocidas, la publicará por un plazo de treinta días, y admitirá á contradecirla á cualquiera que se presente.*

El artículo es aceptado y queda como 93 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: "Si no hubiere parte interesada ni saliere alguno en los treinta días, se citará al síndico del Ayuntamiento para que la contradiga."

El Sr. Escudero pregunta al Sr. Lacunza porqué á todo trance quiere que la demanda sobre rectificación sea contradicha, aunque ficticiamente.

El Sr. Lacunza contesta que, siendo el estado civil de las personas de interés social y orden público, al grado de que, como acaba de aprobarlo la Comisión, se deberá admitir en el juicio de rectificación á cualquiera que se presente, es decir, no sólo á los parientes sino á todo hombre á quien repugne, en conciencia, que una persona extraña se introduzca sin derecho en una familia, es lógico que el legislador provea á la indiferencia de que en esta materia puede dar muestras el público; que por esta razón entiende que, á falta de un contradictor, hay que encomendar

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

á alguien esa tarea, para que, habiendo siempre debate judicial, se decida el punto con mejor conocimiento de causa.

El Sr. Escudero manifiesta ser muy atendible y de gran peso la explicación anterior; pero cree ser muy poco serio esperar de la forzada intervención del funcionario público que se señala el auxilio ilustrado y diligente para los jueces, que justamente se busca en la delicada materia de la rectificación de los registros. Propone, en consecuencia, y atenta la explicación del Sr. Lacunza, que su artículo se substituya con el siguiente: *En todo juicio de rectificación serán oidos el Ministerio Público y el oficial del registro civil*, pues entiende que en México, como en todos los países, tendrá que establecerse aquella magistratura, independiente de los jueces, y que es la genuina representante de los intereses públicos y de las leyes.

Este artículo es aceptado y queda como 94 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: «El juicio de rectificación será ordinario y admite las apelaciones y súplicas conforme á las leyes: aunque no se apele, tendrá segunda instancia, y en ella se oirá al Fiscal, siempre que se diga que es falso el acto consignado en el registro. En este caso se oirá como parte al oficial del estado civil."

El Sr. Méndez hace observar la conveniencia de emplear términos más genéricos en la redacción del pensamiento del Sr. Lacunza, para no tener necesidad de reformar muy pronto el Código que la Comisión está formando, cuando llegue á establecerse el de Procedimientos Civiles. Opina que se use la palabra genérica "recursos", expresándose que en los juicios de rectificación habrá lugar á todos los que se emplean en los de mayor interés. Llama la atención también sobre que, dicho ya, en el art. 94, que será oido el Ministerio Público en estos juicios, no hay necesidad de prescribir la intervención del Fscal, ni menos de limitarla al sólo caso que el Sr. Lacunza supone, pues la Comisión ha convenido ya en que el estado civil de los hombres es de interés social, afectándose lo mismo por la falsedad en los registros que por las inexactitudes que apenas ameriten simples enmiendas. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción: *El juicio de rectificación será ordinario, admitiendo las apelaciones y recursos que los juicios de mayor interés, conforme á las leyes. Aunque no se apele, tendrá lugar la segunda instancia.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 95 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *La sentencia ejecutoriada que recaiga se comunicará al oficial del estado civil, y éste hará una referencia á ella, al márgen del acta rectificada ó controvertida.*

El Sr. Ramírez manifiesta que no cree necesaria la referencia á la sentencia que haya negado la rectificación en el acta controvertida, por la misma razón que sí la juzga indispensable en el caso contrario.

El Sr. Lacunza responde que la necesidad está motivada, porque la referencia, aún en el acta que queda firme, servirá para impedir en lo porvenir nuevas y temerarias demandas.

El artículo es aprobado y queda como 96 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: *La sentencia ejecutoriada hará plena fé contra todos, aunque no hayan litigado; pero, si alguno probare que estuvo impedido para salir al juicio, se le admitirá á probar contra él; mas se tendrá como buena la sentencia ante-*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

rior y surtirá sus efectos hasta que recaiga otra ejecutoriada que la contradiga. En este nuevo juicio se procederá en todo como en el de rectificación por falsedad.

El Sr. Escudero manifiesta no estar de acuerdo con la primera parte de la anterior redacción, pues ella peca contra el tradicional principio de derecho: *Res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest Res inte alios judicatae neque emolummentum afferrehis, qui judicio non interfuerunt, neque praejudicium solent irrogare. Nec in simili negotio res inter aliis actas absente praejudicare....*(1) que igualmente expresa la ley 20, tit. 22 de la Partida 3.ª Y, si la Comisión ha aprobado (art. 93) que el juez ante quien pende un juicio de rectificación debe admitir á cualquiera á contradecirla, no encuentra razón para que se impida promoverla á parte interesada que no litigó.

El Sr. Lacunza contesta que la cosa juzgada debe imponerse en esta materia como en cualquiera otra, para cerrar la puerta á pleitos vanos é inútiles que, tratándose del estado civil, base de todas las relaciones jurídicas, no servirían sino para perturbarlo con daño de la tranquilidad de las familias. Por eso se ha establecido [art. 93] que se cite á las partes interesadas y se haga un llamamiento al público mediante una convocatoria y por un plazo de treinta días. En el artículo que ahora presenta á la Comisión se ofrece, además, la facultad de combatir la sentencia ejecutoriada á todo aquél que demuestre no haber salido al juicio por impedimento insuperable.

El Sr. Mendez expone que, como ya lo dijo al tratarse del art. 95, no hay razón para clasificar aparte el caso en que la rectificación tenga por objeto establecer la falsedad del registro. Opina, por lo mismo, que se suprima la última parte de la redacción propuesta por el Señor Lacunza.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) se manifiesta de acuerdo con el Sr. Lacunza.

El artículo es aprobado y queda como 97 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza propone el artículo siguiente: "Sólo las partes interesadas pueden pedir la rectificación ó los parientes hasta el cuarto grado civil. El Juez competente es el del lugar en que está extendida el acta."

El Sr. Ramirez manifiesta que la expresión «partes interesadas» es muy vaga y se presta á lamentables equivocaciones, que siempre conviene evitar en lo posible. Evidentemente, dice, no es la mente del Sr. Lacunza convertir la acción de que se trata en acción popular, accesible á todo el mundo.

El Sr. Escudero dice que no está conforme con el preopinante, pues la expresión «partes interesadas» es muy clara en derecho. Por ella se entienden desde luego en el caso las personas de cuyo estado se trata, los parientes más ó menos próximos, los herederos de unos y otros, todos los que, en una palabra, pueden tener un interés, al menos moral, en la rectificación.

El Sr. Ramirez: Entonces ¿porqué no dar la acción también á los acreedores, legatarios ó donatarios de la persona de cuyo estado civil se trata? Su interés no puede ser discutible en ciertos casos.

El Sr Lacunza: No repugna esa extensión al espíritu del artículo que se propone.

El Sr. Mendez manifiesta estar conforme con el Sr. Lacunza; pero, á su juicio, sería mejor, para evitar dudas, enumerar las personas que pueden pedir la rectificación. Se permite, en consecuencia, proponer la siguiente redacción en el sentido de la discusión: *Pueden pedir la rectificación de una acta del estado civil.*

1.º Las personas de cuyo estado se trate.

2.º Los que se mencionan en el acta como ligados con el estado civil de alguno.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ©
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

3.° Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores.

4.° Los que pueden intentar ó continuar la acción de estado en defecto del hijo. (1)

Esta redacción es aceptada y queda como art. 98 del nuevo Código.

TITULO IV

Del matrimonio.

Capitulo I

De las calidades y condiciones que se requieren para poder contraer matrimonio.

Proyecto Sierra (art. 46): *El matrimonio es la sociedad legítima de un solo hombre y de una sola mujer, que se unen con vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse á llevar el peso de la vida.*

El artículo es aceptado y queda como 99 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 47]: «La ley sólo reconoce esponsales de futuro cuando se han elevado á escritura pública, otorgada en debida forma».

El Sr. Ramirez pide la supresión de ese artículo, por ser, en su concepto, contrario á la libertad del consentimiento para el matrimonio.

El Sr. Lacunza manifiesta que los esponsales de futuro están en nuestras costumbres, al grado que la ley de 23 de Julio de 1858 los considera (fracción V del art. 8.°) como impedimento para el matrimonio, si ellos constan en escritura pública y no se han disuelto por el mutuo disenso de los contrayentes.

---

1 Véanse *supra*, arts. 235 y 236.

El Sr. Ramirez da lectura á la siguiente impugnación que de los esponsales hace el Sr. García Goyena, en su *Proyecto* de Código Civil Español (art. 47): Los esponsales de futuro eran las más veces tan funestos á la moral como contrarios á la santidad del matrimonio y á la libertad con que debe ser contraido. En manos de un seductor hábil eran una arma para combatir la virtud de una joven apasionada ó de inferiores circunstancias; en las de una mujer artera é hipócrita de pudor eran un lazo para enrel dar á un hombre locamente enamorado; más de una vez los padres y tutores los empleaban para asegurar sus combinaciones de interés, de ambición ó vanidad, comprometiendo anticipadamente á sus hijos ó menores." Propone que no sólo se suprima el artículo del *Proyecto Sierra* sino que se diga claramente: *La ley no reconoce esponsales de futuro.*

La mayoría de la Comisión acepta esta redacción, que queda como art. 100 del nuevo Código

---

Proyecto Sierra (art. 48): "Para que el matrimonio pueda tener efectos civiles y la ley civil lo considere tal es necesario celebrarlo con todas las formas y requisitos que ella misma exige."

El Sr. Ramírez pide se aclare un poco más el pensamiento del *Proyecto* y á tal fin propone la siguiente redacción: *Para que el matrimonio pueda tener efectos y la ley civil lo considere tal, es necesario celebrarlo ante los funcionarios que ella establece y con todas las formas y requisitos que la misma exige como esenciales.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 101 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 49): «El matrimonio celebrado entre extranjeros, que sea válido con arreglo á las

3.° Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores.

4.° Los que pueden intentar ó continuar la acción de estado en defecto del hijo. (1)

Esta redacción es aceptada y queda como art. 98 del nuevo Código.

TITULO IV

Del matrimonio.

Capitulo I

De las calidades y condiciones que se requieren para poder contraer matrimonio.

Proyecto Sierra (art. 46): *El matrimonio es la sociedad legítima de un solo hombre y de una sola mujer, que se unen con vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse á llevar el peso de la vida.*

El artículo es aceptado y queda como 99 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 47]: «La ley sólo reconoce esponsales de futuro cuando se han elevado á escritura pública, otorgada en debida forma».

El Sr. Ramirez pide la supresión de ese artículo, por ser, en su concepto, contrario á la libertad del consentimiento para el matrimonio.

El Sr. Lacunza manifiesta que los esponsales de futuro están en nuestras costumbres, al grado que la ley de 23 de Julio de 1858 los considera (fracción V del art. 8.°) como impedimento para el matrimonio, si ellos constan en escritura pública y no se han disuelto por el mutuo disenso de los contrayentes.

---

1 Véanse *supra*, arts. 235 y 236.

El Sr. Ramirez da lectura á la siguiente impugnación que de los esponsales hace el Sr. García Goyena, en su *Proyecto* de Código Civil Español (art. 47): Los esponsales de futuro eran las más veces tan funestos á la moral como contrarios á la santidad del matrimonio y á la libertad con que debe ser contraido. En manos de un seductor hábil eran una arma para combatir la virtud de una joven apasionada ó de inferiores circunstancias; en las de una mujer artera é hipócrita de pudor eran un lazo para enrel dar á un hombre locamente enamorado; más de una vez los padres y tutores los empleaban para asegurar sus combinaciones de interés, de ambición ó vanidad, comprometiendo anticipadamente á sus hijos ó menores." Propone que no sólo se suprima el artículo del *Proyecto Sierra* sino que se diga claramente: *La ley no reconoce esponsales de futuro.*

La mayoría de la Comisión acepta esta redacción, que queda como art. 100 del nuevo Código

---

Proyecto Sierra (art. 48): "Para que el matrimonio pueda tener efectos civiles y la ley civil lo considere tal es necesario celebrarlo con todas las formas y requisitos que ella misma exige."

El Sr. Ramírez pide se aclare un poco más el pensamiento del *Proyecto* y á tal fin propone la siguiente redacción: *Para que el matrimonio pueda tener efectos y la ley civil lo considere tal, es necesario celebrarlo ante los funcionarios que ella establece y con todas las formas y requisitos que la misma exige como esenciales.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 101 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 49): «El matrimonio celebrado entre extranjeros, que sea válido con arreglo á las

leyes de su país, surtirá todos los efectos civiles en la República.»

El Sr. Lacunza manifiesta que el artículo está redactado en términos que pueden dar lugar á aberraciones jurídicas. Supóngase que se trata de dos extranjeros que se han casado en México, solamente conforme á su rito religioso, sin acudir á los funcionarios públicos á quienes nuestra ley encomienda presidir y autorizar el matrimonio. Tal acto puede ser válido, según las leyes del país de esos extranjeros. ¿Vamos nosotros á reconocerle efectos civiles en la República? Supóngase que dos extranjeros contraen matrimonio, también en México, pero ante su Cónsul ó Ministro diplomático, despreciando igualmente nuestras leyes. ¿Surtirá efectos civiles en la República? Una y otra conclusión sería contraria á la regla universalmente aceptada en el Derecho Internacional Privado y que se funda en el debido respeto de la soberanía é independencia de cada país: *locus regit actum*. En consecuencia, propone se adicione el artículo del *Proyecto* en los siguientes términos: *El matrimonio celebrado entre extranjeros, fuera de la República, que sea válido con arreglo á las leyes del país en que se celebró, surtirá todos los efectos civiles en la República.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 102 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 50): «No pueden contraer matrimonio el hombre antes de cumplir catorce años de edad, y la mujer antes de los doce, también cumplidos."

El Sr. Lacunza manifiesta que, para acto tan serio y transcendental como el matrimonio, debe fijarse el legislador no sólo en la capacidad física sino también en la intelectual y moral, para la cual es muy poca edad la de catorce años en el hombre y la de doce en la mujer. Propone, en consecuencia, se diga: *No pueden contraer matrimonio el hombre antes de cumplir catorce años de su edad, y la mujer antes de los quince, también cumplidos.*

La redacción es aceptada y queda como art. 103 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 51): «No hay matrimonio cuando no hay consentimiento.»

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto* hace una declaración incontrovertible, pues, ciertamente, el matrimonio es la unión de dos voluntades. Sin embargo, para evitar equívocos, propone se diga: *No hay matrimonio cuando no hay consentimiento libre de los que lo contraen.*

La adición es aprobada y el artículo queda en tales términos, como 104 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art 52): *No se puede contraer segundo matrimonio mientras no se disuelva el primero ó se declare nulo.* El artículo es aceptado y queda como 105 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 63): *Los hijos de ambos sexos que no hayan cumplido veintiun años no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento paterno, ó materno, faltando el padre.*

El Sr. Lacunza expone que considera muy conveniente agregar al artículo del *Proyecto* la siguiente frase: *aún cuando la madre haya contraído segundas nupcias*, pues, como pregunta Goyena, «¿porqué se ha de negar á la madre lo que realmente tiene una madrastra á la sombra y con el nombre del padre binubo? [1]

El artículo, así adicionado, es aprobado y queda como 106 del nuevo Código.

---

(1) *Proyecto*, art. 168

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra [art. 54]: "A falta de los padres se necesita para el matrimonio del consentimiento de los abuelos paternos, si los hay, ó maternos, á falta de aquéllos. Faltando unos y otros, del de los tutores; pero en estos casos sólo tienen necesidad de dicho consentimiento los menores que no hayan llegado á la edad de veinte años.»

El Sr. Lacunza manifiesta el gozo que le causa ver introducidos en la familia, y para la importante función de prestar el consentimiento en el matrimonio de sus nietos menores de edad, á los abuelos, ya paternos, ora maternos, idea enunciada, por la primera vez, en nuestra legislación patria, en la ley 9, tit. 2, lib. 10 de la Novísima y repetida en nuestra ley de 23 de Julio de 1859 (art. 6). Propondría, sin embargo, se diese, por analogía de lo que la Comisión acaba de aprobar respecto de los padres, la preeminencia del consentimiento al abuelo sobre la abuela, dentro de su respectiva clase. No encuentra motivado, además, que los menores de edad, huérfanos de padres y faltos también de abuelos, necesiten acudir á los tutores en solicitud del consentimiento para casarse, sólo en el caso de que no hayan llegado á la edad de veinte años. La idea es tomada del Sr. Goyena; pero ni este autor la motiva. (1). En consecuencia propone á la Comisión se redacte el artículo en los términos siguientes: *A falta de padres, se necesita, para el matrimonio, el consentimiento de los abuelos paternos, si los hay, ó maternos, á falta de aquéllos, con preferencia, en uno y otro caso, del abuelo á la abuela, en la misma clase. Faltando unos y otros, se necesita el consentimiento de los tutores.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 107 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, antes de continuar recorriendo el articulado del *Proyecto Sierra*, cree conveniente llamar la atención de la Comisión sobre un caso que no se preve en él, es á saber, aquél en que, otorgado ya el consentimiento por el ascendiente que debe prestarlo, estime racional y justo revocarlo, antes, por supuesto, de la celebración del matrimonio. Si, después de este, para nada hay que fijarse en tal revocación, porque sería funestísimo hacerlo para el honor y tranquilidad de las familias, antes es otra cosa. ¿Cómo no dar importancia entónces á la revocación de un consentimiento otorgado de buena fé; pero con no menos ignorancia de hechos que pueden influir seriamente en el porvenir de la familia? Descubiertos éllos, nada parece más justo que diferir á la revocación que fundan y motivan, por las mismas consideraciones que han movido al legislador á establecer la necesidad de solicitar de los superiores en la familia del menor el consentimiento para su matrimonio. Además, puede suceder que fallezca, siempre antes del matrimonio, el ascendiente que ha prestado el consentimiento y puede revocarlo. Como tal facultad pasa, según ya la Comisión lo ha aprobado (arts. 106 y 107), á otro ascendiente, la lógica obliga á decir que, en ese caso, tal ascendiente puede revocar el consentimiento del anterior. No parece deber decirse lo mismo de los tutores, como personas menos inmediatas y afectuosas respecto del menor.

El Sr. Ramirez expone que, en su concepto, no hay la menor necesidad de formar artículo aparte con las ideas que el Sr. Lacunza acaba de expresar y con las cuales está en completo acuerdo, pues el art. 55 del *Proyecto Sierra*, al hablar de la manera de remediar el discurso irracional de los padres, abuelos ó tutores, seguramente preve lo mismo el caso de inmediata renuencia de esas personas para el matrimonio del menor que el de revocación posterior. Además, no encuentra motivado que los tutores no puedan revocar el consentimiento que una vez dieron, porque, con evidencia, si la ley ha juzgado conve-

(1) *Proyecto*, art. 52.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

niente pedírselo, la misma consideración milita en favor de la idea de facultarlos para revocarlo.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) manifiesta que, probablemente, ha expresado el Sr. Lacunza la idea de no conceder á los tutores la facultad de revocar su consentimiento, porque, á no dudarlo, conviene restringir lo más posible esa facultad, cuyo ejercicio defrauda legítimas esperanzas y puede originar graves disgustos y funestos escándalos en las familias. Indica al Sr. Lacunza redacte su pensamiento en forma para, comprenderlo mejor.

El Sr. Lacunza lee el artículo, cuyos términos son los siguientes: *El ascendiente que ha prestado su consentimiento puede revocarlo antes de celebrado el matrimonio, extendiendo acta de la revocación ante el oficial del estado civil. Si el ascendiente que otorgó el consentimiento fallece antes del matrimonio, podrá hacer la revocación, en la misma forma, el ascendiente que sigue. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán á los tutores.*

El Sr. Escudero manifiesta que acepta la redacción del Sr. Lacunza; pero se permite hacer observar que en vez de la frase "si el ascendiente que otorgó el consentimiento *fallece* antes del matrimonio" se emplee ésta ó semejante "si el ascendiente *fallece, cae en interdicción ó si se ausenta*", pues evidentemente en los tres casos hay la misma razón de decidir.

El Sr. Lacunza expone su conformidad con la observación del Sr. Escudero.

Sin embargo, el artículo queda como el primero de estos Señores lo había redactado y con el núm. 108 en el nuevo Código.

———

El Sr Lacunza propone, igualmente, antes de seguir el articulado del *Proyecto Sierra*, el texto que sigue: *Los derechos concedidos á los ascendientes en los artículos anteriores sólo tienen lugar respecto de los hijos legítimos y los naturales reconocidos.*

El Sr, Escudero propone se intercale la palabra *legitimados*, entre las *naturales* y *reconocidos*.

El texto con la adición es aceptado y queda como art. 109 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra [art. 55]. "Cuando no parezca racional el disenso de los padres, abuelos ó tutores, acudirán los interesados á la primera autoridad política de su Distrito, para que, con audiencia de aquellos, este funcionario habilite ó no la edad. Sin este requisito, no puede procederse á la celebración del matrimonio."

El Sr. Lacunza manifiesta que el artículo debe modificarse en el sentido de restringir su disposición á sólo los tutores, pues el legislador debe confiar plenamente en el amor y prudencia de los ascendientes, sin admitir ningún recurso contra su disenso respecto del matrimonio de los menores de edad.

El Sr. Ramirez conviene con el Sr. Lacunza en la verdad de su observación para la generalidad de los casos; pero, como no es imposible que muchos padres y abuelos se opongan injustamente al matrimonio de sus hijos, debe el legislador proveer á esa posibilidad, por lo cual solicita la aprobación del artículo del proyecto tal como está.

El Sr. Lacunza expone que el remedio es peor que el mal que se teme, pues los expedientes *informativos*, á que se abre la puerta, traen la desunión en las familias y dán pié á escandalosas difamaciones de los hijos contra los padres.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) invita al Sr. Lacunza para que redacte el artículo como debe quedar, en su concepto.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción *Cuando no parezca racional el disenso de los tutores,*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

podrán ocurrir los interesados á la primera autoridad política de su Distrito, para que, con audiencia de aquellos, este funcionario habilite ó no la edad. Sin la prévia habilitación, no puede celebrarse matrimonio. El recurso de que trata este artículo no procede contra el disentimiento de los padres y abuelos.

Esta redacción es aceptada y queda como art. 110 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 56): *Se prohibe el matrimonio en la línea recta, entre todos los ascendientes y descendientes legítimos* ó naturales *y los afines en la misma línea.*

El Sr. Lacunza pide se substituya la palabra «naturales" por la de *ilegítimos*.

Con esta enmienda el artículo es aprobado y queda como 111 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 57): "En la línea colateral se prohibe el matrimonio entre hermanos legítimos y naturales, y los afines en la misma línea, á no ser, respecto de éstos últimos, que haya justos motivos de dispensa.

El Sr. Lacunza solicita se cambie la anterior redacción, en los siguientes términos: *En la línea cólatera se prohibe el matrimonio entre hermanos legítimos ó ilegítimos, y asimismo entre los afines en el mismo grado, á no ser, respecto de estos últimos, que se haya obtenido dispensa por justos motivos*, manifestando que, antes de pasar adelante, cree necesario que se diga, supliendo en esto el silencio del *Proyecto* que se examina, cómo debe entenderse ese parentesco de la afinidad á que se refieren los dos artículos anteriores que acaban de aprobarse. Tal silencio no se explica sino porque el ilustrado autor del

Proyecto entendió no deber innovarse en lo más mínimo lo establecido por el derecho canónico. Sin embargo, el exponente cree que, al tomar á su cargo el Estado la legislación sobre matrimonio, no puede dispensarse de aclarar ciertos puntos, cuya omisión sería funesta para las costumbres. Recuerda que, con motivo del silencio de la ley de 23 de Julio de 1859, que omitía por completo ocuparse en el impedimento de afinidad, el que habla fué consultado acerca de este punto. Como la consulta motivó el Decreto de 2 de Mayo de 1861, pide al Sr. Ministro de Justicia le permita la lectura de aquella.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia): Puede el Señor Lacunza dar lectura á su consulta.

El Sr. Lacunza La consulta dice así:

"Exmo. Señor:

He tenido el honor de recibir el oficio de V. E., de 23 del pasado, en que inserta el del Gobierno de Jalisco de 28 de Diciembre último, en que consulta si los hijastros pueden válidamente contraer matrimonio civil con los padrastros ó al contrario, por no estar determinado expresamente este punto en la ley del ramo, y ofreciéndose algunos casos de este género, ocurre al Supremo Gobierno para la resolución conveniente. Lo que V. E. me transcribe para oir mi opinión en esta duda de la ley. Comenzando por fijar la cuestión, creo que es la siguiente: ¿La persona que ha sido casada con el padre ó madre puede, muerto el cónyuge, contraer matrimonio con los hijos que el muerto tuvo en otra unión? O al contrario, ¿la persona cuyo hijo ha sido casado, puede, muerto el hijo, contraer matrimonio con el cónyuge sobreviviente del hijo? El Derecho Canónico vigente en la República, y único que arreglaba el matrimonio antes de la ley de 23 de Julio de 1859, reconoce en estos casos un impedimento de la clase de los dirimentes, es decir, que impide contraer matrimonio y anula éste cuando se ha contraido, existiendo el impedimento y esto aun cuando hubiese ignorancia en alguno de los contrayentes.

En el caso, muy raro, de que el matrimonio hubiese sido rato y no consumado, esta prohibición recibía el nombre de impedimento de pública honestidad; y en el caso de más común ocurrencia de ser consumado el matrimonio, nacía el impedimento, conocido con el nombre de afinidad, que según el derecho canónico nace de la cópula: en el caso propuesto, en la consulta, esta afinidad se decía existir en el primer grado de la línea recta. Distingue el Derecho Canónico en este impedimento de afinidad los casos en que procede de *cópula ilícita*, que es la habida fuera del matrimonio, y los en que procede de *cópula lícita* ó habida en el matrimonio: en el primero, los escritores opinan que el impedimento no procede del derecho natural, sino del positivo eclesiástico, y por lo mismo, *puede dispensarse:* en las facultades concedidas á nuestros obispos, por la silla romana, estaba la de otorgar esta dispensa. Pero en el segundo caso, á saber, el de que la afinidad, en el primer grado de la línea recta, procede de la *lícita* en el matrimonio, los escritores están divididos sobre si el impedimento es de derecho natural ó nó; y tan respetables son los que sostienen la afirmativa, como los que defienden la negativa. Sea lo que fuere de esta cuestión, la verdad es. que la misma silla romana *no acostumbra conceder dispensa en este impedimento.*—Tal era el estado de la legislación en México, cuando se promulgó la ley de 23 de Julio de 1859, que arregló el matrimonio civil en la República; esta ley, única hasta hoy, sobre este punto, al mencionar los impedimentos que debía haber para el matrimonio civil, no mencionó el de afinidad, y como debe creerse que ella no quiso que hubiese otros impedimentos que los que ella misma expresaba, se infiere que, no debe, según esa ley, tomarse por tal impedimento el de afinidad en ningun grado ni línea. Si se atiende á sólo ella, la consulta del Señor Gobernador de Jalisco no presenta dificultad: se resuelve muy fácilmente, diciendo que la ley citada no conoce el impedimento de afinidad, y por lo mismo, según ella, el matrimonio civil puede contraerse válidamente en los casos propuestos. Pero la cuestión se presenta más grave, cuando se considera que este impedimento, aunque omitido en la repetida ley, puede existir dictado por la razón y la filosofía, y sancionado por el uso constante de las naciones más civilizadas del Universo, y esta consideración, es, sin duda, la que inclinó al Gobernador de Jalisco, á llamar la atención del Supremo Gobierno sobre un punto que merecía ser tomado de nuevo en consideración. El impedimento matrimonial, ó la prohibición de contraer matrimonio en los casos que comprende la consulta, aun prescindiendo del Derecho Canónico, es, en mi concepto, conforme á la razón, útil á la sociedad y apoyado por el uso de todas las naciones civilizadas, que lo han consignado en sus códigos civiles. Me ocuparé de ambos extremos con separación. Debo llamar la atención del Gobierno á que las doctrinas de autores que voy á exponer, no serán tomadas de autores católicos, porque aunque abundan de esta clase y muy recomendables, su peso podría creerse disminuido por el deseo de apoyar la regla de su Iglesia, deseo que no puede suponerse en los otros. Entre las razones para prohibir el matrimonio, entre muy próximos parientes, se cuentan como principales, *la necesidad de conservar la moralidad en las familias, el orden de respeto que deben los que ocupan el lugar de hijos, á los que ocupan el de padres, el temor de evitar el abuso del poder de éstos, y el de que no haya rivalidades entre personas que deben amarse y respetarse.* El hogar de la familia debe conservarse lo más puro posible, y exento de toda pasión que no sea legítima, quitando todas las esperanzas de aprobación social á las que no lo sean. Que se reflexione un momento sobre la confusión y el peligro, el trastorno moral que se produce, si puede un *padrastro, respecto de una hijastra, ó una madrastra respecto de un hijastro, concebir esperanzas de unión legítima; si puede un padre concebirlas respecto de las mujeres de sus hijos, ó una madre respecto de los mari-*

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ©
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dos de sus hijas. El primer inconveniente es que, por lo general. estos casos presentarían una *gran diferencia en la edad de los esposos*, y esta diferencia produciría un in conveniente para la procreación de una prole bien constituida, y otro mayor para la harmonía y fidelidad conyugal de esposos, de los que uno estuviese en la flor de la juventud y el otro próximo ó entrado ya en la vejez. La sociedad tolera á veces, pero nunca encuentra convenientes esos matrimonios de una joven y un anciano, que presentan la imágen en el órden moral del antiguo suplicio en que se ataba un cuerpo lleno de vida con un cadáver. Supóngase el caso de un hombre casado con una mujer que le lleve una hija de otro, la que llega á casarse también, y que es el objeto del amor de su padrastro, á quien se dán esperanzas de satisfacer esa pasión, á la muerte de su actual esposa, madre de la futura. *Todas las inmoralidades y todos los peligros se presentan entonces: el abuso del poder del hombre sobre la joven, para seducirla: las caricias dirigidas por una pasión criminal, cubiertas con él velo del cariño paterno*, serán un nuevo y fácil medio de seducción: *las ocasiones que presentan la familiaridad y la vida en una misma casa, la destrucción del respeto hacia el que debiera considerarse como padre, la rivalidad producida entre la madre y la hija, tan desventajosa para la persona respetable que es la madre, tan propia para destruir la obediencia y el amor hacia ésta de la hija*, y por colmo de males, la pasion, *considerando la vida de la madre como un obstáculo y su muerte como un bien*: pues que proporcionaría su satisfacción libre y legítima, tales son los efectos que produciría en las relaciones de la familia un estado que renovaría las escenas impúdicas y sangrientas de la antigua tragedia griega. Convienen en la prohibición de contraer matrimonio en este grado todos los escritores de derecho natural. Grocio afirma, que aun concediendo que el impedimento no nazca del derecho natural, su remoción daría lugar á *grave perversión* moral en la

familia. (Grocio, de *jure belli et pacis*, lib. 2.º, capítulo 5.º, núm. 13.) La misma es la opinión de Puffendorf, que aunque cree que acaso no podría probarse que tales enlaces fueran prohibidos por el derecho natural, debían serlo por la ley positiva. *[Puffendorf. Le droit de la nature et des gens*. lib 6.º, cap. 1.º. núm. 35.*]* Omitiendo otros muchos autores, cuyas doctrinas podrían acumularse, no puedo menos que citar, por su espíritu de análisis, trascribiéndola á la letra, la de Jeremías Bentham, jurisconsulto inglés tan ilustre y conocido en todo el mundo. "Si no hubiera, dice, un muro insuperable entre parientes cercanos, destinados á vivir juntos en la mayor intimidad, su aproximación, las ocasiones contínuas, la amistad íntima y sus caricias inocentes, podrían encender pasiones funestas. Las familias, aquellos asilos en que debe hallarse la tranquilidad en el seno del orden y en que los movimientos del alma, agitada en las escenas del mundo, deben calmarse; las familias mismas vivirían devoradas por todas las inquietudes de las rivalidades y por todos los furores del amor. Los recelos desterrarían la confianza, los resentimientos más dulces se extinguirán en los corazones, y odios eternos y venganzas, cuya sola idea extremece, ocuparían el lugar de ellos. La opinión de la castidad de las jóvenes doncellas, aquel atractivo tan poderoso del matrimonio, no tendría en qué fundarse, y los lazos más peligrosos para la educación de la juventud se hallarían en el asilo mismo en que ella puede menos evitarlos. Estos inconvenientes pueden comprenderse en cuatro artículos: «1.º *Mal de rivalidad*. Peligro resultante de una rivalidad real ó presumida entre un cónyuge y ciertas personas del número de sus parientes ó aliados.« «2.º *Impedimento de matrimonio*. Peligro de privar á las doncellas de la probabilidad de formar su establecimiento permanente y ventajoso por medio del matrimonio, disminuyendo la seguridad de los que desean casarse con ellas.» «3.º *Relajación de la disciplina doméstica*. Peligro de invertir la naturaleza de las relacio-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nes entre los que deben mandar y los que deben obedecer, ó de debilitar á lo menos la autoridad tutelar, que por interés de las personas menores deben ejercer sobre ellas los jefes de familia, ó los que hacen veces de tales.» «4,° *Perjuicio físico.* Peligros que pueden resultar de los goces prematuros para el desarrollo de las fuerzas y para la salud de los hijos.»—Pone este autor á continuación una tabla de las alianzas que deben prohibirse, y en ellas se encuentran, entre otras, las siguientes: «Un hombre no podrá casarse con la mujer ó esposa de su padre ó de otro progenitor cualquiera.—Inconvenientes 1.°, 3.° y 4.°»—«Con la descendiente de su esposa.—Inconvenientes 1.°, 2.°, 3.° y 4.°»—«Con la madre de su esposa.—Inconveniente 1.°»—«Con la esposa ó con la viuda de su descendiente cualquiera.—Inconveniente 1.°»—(*J. Bentham, tratado de la Legislación, P. 3 del Código Civil, cap. 5. sección 1.ª*)—Poco se puede agregar á tan clara exposición; pero una reflexión mediana hará patente que los inconvenientes expresados por Bentham son verdaderos y tienen aún mayor fuerza que la que á primera vista presenta el laconismo con que escribe el autor. Con las doctrinas filosóficas ó racionales expuestas hasta aquí, concuerda el desarrollo histórico del principio en las legislaciones de los pueblos civilizados. Omitiendo la cita de los innumerables lugares en que poetas é historiadores griegos y romanos manifiestan la universal reprobación que la conciencia del género humano ha dado á estas uniones, seguiremos sólo la legislación comparada de los pueblos cultos, Los judíos tenían esta prohibición en los libros legales del Antiguo Testamento, y los Católicos en el Derecho Canónico: ya expuse á V. E. al principio cuáles eran las resoluciones de la Iglesia Católica; y en los países de Europa y América, en que el matrimonio se hace eclesiástica y no civilmente, se siguen exactamente estas disposiciones y el impedimento de afinidad nacido de la unión en el matrimonio es constante en la linea recta y anula éste. La legislación civil romana re-

conocia también este impedimento de afinidad, con extensión á algunos casos en que el actual derecho canónico no lo reconoce, y restringiéndonos al de los enlaces con personas que hayan estado casadas con ascendientes ó descendientes, las disposiciones del derecho romano eran expresas, entre otros lugares, en los siguientes: *Cod.* § 6 *de Nuptiis.*—L. 14 D. *de Ritu nupt.* L. 17 C. de Nuptiis.—Siendo muy digno de notarse, que de las dos leyes citadas, una está tomada de una obra del jurisconsulto Julio Pardo, que vivió bajo Alejandro Severo, de quien fué consejero cerca de un siglo antes de que Constantino adoptase el Cristianismo en el imperio, y la otra es del emperador Diocleciano, bien conocido como perseguidor de la nueva religión: así es que, la opinión moral emitida por ámbos es independiente de las doctrinas de la Iglesia. Las legislaciones europeas de la Edad Media, eran hijas á la par del derecho canónico y del romano, muy especialmente la Española, reconocieron el impedimento de afinidad con el nombre de alianza ó de alleganza. y el matrimonio seguía en todas partes más bien las leyes eclesiásticas que las civiles. [L. 12, tít. 1°, Part. 4.ª] En el siglo pasado y el presente, se han hecho varios códigos civiles, que han arreglado el matrimonio civilmente, y han consignado sus impedimentos. entre éstos está el de que tratamos. El célebre Código civil francés, llamado Código de Napoleón, presenta el artículo siguiente: "161. *En ligne directe le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants legitimes ou natureles, et les allies dans la même ligne.* «*Rogron,* comentando este artículo, en la palabra *et les alliés,* dice: «La alianza es el vínculo que existe entre uno de los esposos y los parientes del otro esposo. Así hay alianza en línea recta entre el padre y la mujer del hijo (*belle fille*), entre el hijo y la segunda esposa del padre (*belle mére*), etc. De la expresión *alliés*, refiriéndose á los ascendientes legítimos y naturales, se sigue que el matrimonio es prohibido entre los hijos y la viuda del padre del hijo natural..... Estas pro-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hibiciones están fundadas en la naturaleza y la moral. *Boileux*, comentando el mismo artículo, dice: «La alianza ó afinidad es el vínculo que existe entre uno de los dos esposos y los parientes del otro esposo. Asi el marido es aliado de todos los parientes de la mujer y vice versa.... En todos tiempos el matrimonio ha sido prohibido entre los hijos y sus ascendientes: semejante matrimonio sería contrario á la moral, y con la mayor frecuencia á la naturaleza. El consejero M. Portalis, exponiendo los motivos de este artículo decía: «En todos tiempos el matrimonio ha sido prohibido entre los hijos y los autores de sus días: sería frecuentemente inconciliable con las leyes físicas de la naturaleza, lo sería siempre con las leyes del pudor: cambiaría las relaciones esenciales que deben existir entre los padres, las madres y sus hijos; repugnaría á su situación respectiva, trastornaría entre ellos todos los derechos y todos los deberes, causaría horror.» Lo que decimos del padre y madre y de sus hijos naturales y legítimos, se aplica en línea recta á todos sus ascendientes y descendientes y aliados, afines de la misma linea. Las causas de estas prohibiciones son tan fuertes y naturales, que han operado casi por toda la tierra independientemente de toda comunicación.» El tribuno Guillet, en su dictámen al tribunado, decía: "Está en el interés de la sociedad, que la intimidad de las familias no sea una ocasión de seducciones corruptoras, de empresas y rivalidades, sino que al contrario, el pudor repose allí como en su asilo natural. Además de algunas ideas probables sobre la perfectibilidad física, hay pues un motivo moral para que el compromiso del matrimonio sea imposible á aquellos entre quienes la sangre ó la *afinidad* han establecido ya relaciones directas muy próximas, para que la pureza de sus efectos mutuos no sea turbada por las ilusiones de otra esperanza." Tal es la legislación francesa, y por consiguiente la de las naciones que han adoptado este código: véamos otras legislaciones. El Código Civil de Austria contiene dos artículos que presentan la misma resolución. El 65 dice: "No puede ser contraido matrimonio válido, entre parientes en la línea ascendiente y descendiente. El 66. La alianza impide que el marido pueda casarse con aquellas parientas de su mujer, mencionadas en el atr. 65, y que la mujer pueda casarse con los parientes allí mencionados de su marido." El Código de Prusia, en su art. 935, dice: "Los matrimonios son nulos: 1.º cuando han sido contraidos entre parientes en grado prohibido..... 3 y 4. El matrimonio es prohibido entre los ascendientes y descendientes.... 6. Es igualmente prohibido entre los aliados [afines] de los descendientes y ascendientes." Sobre la legislación inglesa, en la que como en la nuestra, el matrimonio fué antes eclesiástico y después civil, citaré á Blackstone, adicionado por Steward, que refiere las más recientes disposiciones. «Nuestra ley, dice, no considera el matrimonio bajo otra luz, que como un contrato civil y hasta muy recientemente la santidad del estado matrimonial, fué dejada enteramente á la ley matrimonial: los tribunales temporales no tenían jurisdicción para considerar el matrimonio ilegal como un pecado, sino como una inconveniencia civil. El castigo, en consecuencia, al anular matrimonios incestuosos ú otros anti-bíblicos, era del resorte de los tribunales espirituales que actuaban *pro salute animæ*. Sin embargo, por los estatutos 5 y 6, capítulo 54, de Guillermo IV, se mandó que los matrimonios entre personas dentro de los grados prohibidos de afinidad que habían sido celebrados antes de ellos (31 de Agosto de 1835), no fuesen anulados por esta causa por sentencia alguna del tribunal eclesiástico, á menos que fuese pronunciada en un proceso; pero que de allí en adelante tales matrimonios, todos, serían nulos é írritos. Ellos, por consiguiente, son ahora positivamente nulos, y concibo que su nulidad sería reconocida, tanto en los tribunales temporales como en los eclesiásticos." (*Comentaries on the laws of England by sir W. Blackstone. The twenthieth edition by. J. Stewart, book the first, C. 15 núm. 1*).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La legislación de los Estados Unidos del Norte de América es una continuación en cuanto al Derecho Privado de la inglesa, como la nuestra lo es de la española, y me limitaré á citar la doctrina de uno de sus más conocidos jurisconsultos. *Kent* dice: «En los más países de Europa, en que el Derecho Canónico ha tenido autoridad ó influencia, son prohibidos los matrimonios entre próximos parientes por la sangre ó por el matrimonio. Prohibiciones semejantes á los impedimentos del Derecho eclesiástico inglés se contenían en las leyes judías, de las que fué deducido el Derecho Canónico en este punto: y ellas existían también en las leyes y usos de los griegos y romanos, sujetas á considerables alternativas de opinión, y con varias modificaciones y extensión. Esas reglas, tan lejos á lo menos, como prohiben los matrimonios entre próximos parientes, por sangre ó m atri monio, porque la ley común y la canónica no hacen distinción en este punto entre el parentesco por consanguinidad y afinidad, están evidentemente fundadas en la ley de la naturaleza, y los matrimonios incestuosos, generalmente con algunas extrañas excepciones en Atenas, han sido mirados con odio por los más sólidos escritores, y los más civilizados Estados de la antigüedad..... Es muy difícil fijar exactamente el punto en que las leyes de la naturaleza han cesado de reprobar la unión. Está muy claramente establecido, que matrimonios entre parientes por consanguinidad ó afinidad en la linea recta ascendiente ó descendiente, son contra lo natural é ilegales y conducen á una confusión de los derechos y de los deberes. Sobre este punto, el Derecho civil, el canónico y el común, están en perfecta armonía. En el ilustrado dictámen dado por Vaugham sobre este punto en el litigio de Harrison contra Burwell, en virtud de consulta con todos los jueces de Inglaterra, consideró que tales matrimonios eran contra la ley de la naturaleza y contrarios á una prohibición moral que obliga á todo el género humano.» (*Comentaries on American laws James Kent*, lecture 26, núm. 4.)—Por todo lo expuesto, aparece, que tanto la razón y la filosofía, como el uso general de las naciones civilizadas, confirman la verdad de que es conveniente á la sociedad la prohibición del matrimonio, cuando existe la afinidad en linea recta entre los que pretenden contraer el enlace.—La ley que arregla el matrimonio civil, hecha en Veracruz, no consignó en verdad este impedimento; pero no era de esperar que esta disposición, la primera que se dicta en la República sobre este objeto, que se hizo enmedio de las tormentas de la guerra civil, y de las contradicciones de opinión; inevitables al plantear novedades de tanta importancia, fuese una obra tan perfecta que no tuviese algún vacío ó alguna omisión. El objeto capital del legislador fué fijar el principio del matrimonio civil, y aunque arregló casi todos sus pormenores, no debe rehusarse á tomar éstos de nuevo en consideración y darles la perfección que el tiempo y la experiencia de los casos que se van presentando, acrediten ser oportuna ó necesaria.—Mi opinión, pues, en respuesta á la consulta. se contiene en estas dos proposiciones:

«1ª. El impedimento de afinidad en linea recta, ó en cualquiera otra no está contenido en la ley de 23 de Julio de 1859.

2.ª Sin embargo, conviene que el supremo Gobierno, usando de las facultades legislativas, declare que no pueden contraer entre sí matrimonio cualquiera de los cónyuges con las parientas de su cónyuge en linea recta ascendente ó descendente.»

En consecuencia propone, se diga, en seguida de la anterior redacción: *El impedimento de afinidad de que se habla en los artículos anteriores, solamente se producirá por el matrimonio; nace luego que éste se celebre, y se extiende á los descendientes y ascendientes legítimos ó naturales reconocidos de cualquiera de los cónyuges.*

Ambas redacciones son aceptadas, quedando la primera como art. 112 y la segunda como 113 del nuevo Código.

———

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 58). «También se prohibe el matrimonio entre tio y sobrina, y tia y sobrino, á no ser que haya justas causas ó motivos de dispensa, que se harán valer ante la competente autoridad.»

El Sr. Lacunza propone se aclare el pensamiento del *Proyecto* en los siguientes términos: *También se prohibe el matrimouio entre tio hermano de padre ó de madre, de abuelo ó de abuela y sobrina, ó entre tia hermana del padre ó de la madre, del abuelo ó de la abuela y sobrino, á no ser que se haya obtenido dispensa.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 114 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto* guarda absoluto silencio sobre un impedimento muy racional y fundado y del cual se trata por Gollena en el art. 55 del Proyecto del Código Civil Español: el que surge entre el tutor y la persona que está bajo su guarda; de él hablan un Senado-Consulto de Marco Aurelio y de Cómodo y la Legislación de las Partidas, motivándolo esta última en términos que satisfacen completamente á la razón (1) Propone, en consecuencia, se redacte un artículo como sigue: *Se prohibe el matrimonio del tutor, curador, sus hijos y descendientes, con la persona que ha tenido ó tiene en guarda, á no ser que se obtenga dispensa. Esta no se concederá mientras que, fenecida la tutela ó curatela, no haya recaido la aprobación de las cuentas.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 115 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 59]: «Cuando ha precedido rapto no puede celebrarse el matrimonio, á menos que el

(1) *Dig.* lib. 23, tít. 2, l. l. 60 y 67, § 3.—*Id.* lib. 23, tít. 2, l. 2.—Cuyacio, *Operæ Omnia*, tom. 2, Paratitla in lib. 5, Código de Justiniano.—Partida 7.ª, tít. XVII, l. 4.

consentimiento se haya dado al raptor después que la persona robada recobre su libertad.»

El Sr. Lacunza observa que la palabra "rapto" por sí sola adolece de cierta vaguedad, por lo que propone se diga: «rapto por violencia ó por seducción», reformándose el artículo del *Proyecto* en los siguiente términos: *Cuando ha precedido rapto, sea por violencia ó por seducción, no puede celebrarse el matrimonio, á menos que la persona que fué objeto del rapto haya dado su consentimiento después que se encuentre en lugar seguro.*

La redacción es aceptada y queda como art. 116 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 60): *El error cuando recae esencialmente sobre la persona, supone falta de consentimiento para el matrimonio. Sin embargo, esta causa sólo puede favorecer á la persona que ha incurrido en el error y eso si no se ha ratificado el consentimiento después de conocido aquél, lo cual se presume si han continuado después viviendo conyugalmente por más de seis meses.*

El Sr. Escudero manifiesta que considera innecesario el plazo de seis meses que se señala, bastando que no se denuncie el error inmediatamente que se advierte.

El Sr. Lacunza contesta que muy bien puede el cónyuge engañado no tener libertad para tal denuncia inmediatamente que advierte el error de que ha sido víctima, siendo muy conveniente por lo mismo señalar un límite de tiempo desde el cual en adelante se presuma la ratificación.

El Sr. Ramirez pregunta si tal presunción es de las llamadas *juris et de jure*, que no consienten prueba en contrario, porque él también cree que es verosímil la posibilidad afirmada por el Sr. Lacunza.

El Sr. Méndez manifiesta que un principio de la más estricta moralidad es el que, en su concepto, debe re-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

solver la cuestión. No sería honrado que un matrimonio ya celebrado con todas las formalidades legales viniese á disolverse, porque uno de los cónyuges dijera y aun demostrara que, habiendo creido contraerlo con tal persona, lo había contraido con otra, y esto después de algún tiempo de cohabitación. Comprende, sin embargo, también la posibilidad del hecho afirmado por el Sr. Lacunza, y en esta virtud propone á la Comisión un término medio: que se diga: *dos meses*, en vez de seis como reza el *Proyecto* que se examina.

El artículo es aceptado con esta enmienda y queda como 117 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 61). El atentado contra la vida de alguno de los casados impide la celebración del matrimonio con el que quedó libre.»

El Sr. Lacunza propone se complete el pensamiento del *Proyecto* en los siguientes términos: «El homicidio de alguno de los casados impide al que lo cometió contraer matrimonio con el cónyuge que sobrevive, si al homicidio se junta el adulterio anterior ó relaciones ilícitas con el cónyuge sobreviviente, ó el pacto de casarse después.»

El Sr. Escudero encuentra muy levantada y digna de la pureza del matrimonio la idea del Sr. Lacunza; pero no tanto que no pudiera levantarse más, frente á frente de la corrupción de las costumbres. Recuerda que el jurisconsulto Paulo en una de sus Respuestas daba á entender por argumento *a contrario* que el simple hecho del adulterio anterior entre dos personas, una con otra, nulificaba el matrimonio que después se contrajera entre los adúlteros por muerte del primer cónyuge (1). Más terminantemente, si cabe, resolvió también este punto y en el propio sentido, Papiniano, en su consulta á Claudio Selenco sobre la validez del

(1) *Dig.* lib. 48, tít. 5, l. 40.

matrimonio de Menio y Sempronia, adúlteros entre sí, aunque con la circunstancia de que la segunda no había sido condenada. (1) Agrega que el Derecho Canónico de los primeros siglos declaraba también ilícito el matrimonio en tales condiciones. (2) Propone, en consecuencia, se diga en primer lugar: *Es nulo el matrimonio entre dos personas que han cometido adulterio, una con otra, siempre que el adulterio haya quedado probado antes de la celebración del matrimonio.*

El Sr. Lacunza insiste en su anterior redacción, en la cual, dice, se resumen todas las diversas teorías y distinciones de los Canonistas sobre el delicado asunto en que la Comisión se ocupa. Recuerda que el Cánon del Concilio de Tribur á que se ha referido el Sr. Escudero aparece modificado en las Decretales, en el sentido que expresan las siguientes palabras: [*Quod nisi alter earum in mortem uxoris defunctæ fuerit machinatus, vel ea vivente sibi fidem dederit de matrimonio contrahendo legitimun judices matrimonium.* (3) Además, no hay que olvidar que los Canonistas, atendiendo á que el impedimento de crimen coarta la libertad del matrimonio, explican que él es de extricta interpretación, por lo cual no tiene lugar sino en los casos y con las condiciones prefijados, siendo característico de él que al crimen, sea adulterio ú homicidio, acompañe la intención y aun la formal promesa de contraer después entre sí matrimonio los culpables. El proponente hace una síntesis de todo lo enseñado por los Expositores y aun extrema el rigor de ciertos preceptos morales, en la materia, en debido homenaje á la dignidad del matrimonio.

El Sr. Ramírez propone se substituya á la palabra «homicidio» la genérica de «atentado,» que, en su genuino

(1) *Dig.* lib. 34, tít. 9, l. 13.
(2) *Concilio de Tribur*, año de 895, Can. 4.
(3) Cap. *Significasti*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sentido basta para constituir el impedimento de que se trata y es la empleada en la legislación Canónica.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) manifiesta que, si aun el homicidio consumado le parece incapáz de producir el impedimento si no lo acompaña la voluntad perfectamente probada de casarse entre sí el matador y su cómplice, con mayor razón opina del mismo modo tratándose del simple atentado. Comprende, sin embargo, que esta condición es menos necesaria en el primer caso que en el segundo, bastando en aquél, para justificar el impedimento, el mero hecho de la muerte dada por el nuevo cónyuge al anterior. Propone se apruebe, á reserva de continuar con otros artículos sobre el mismo impedimento de crimen, en el sentido de la discusión, la anterior redacción del Sr. Escudero.

Es aprobada y queda como artículo 118 del nuevo Código.

El Sr. Teran (Ministro de Justicia) dice que le parece deberse establecer en seguida el impedimento de crimen, en el sentido de homicidio consumado y propone conforme á la discusión, la siguiente fórmula: *Es nulo el matrimonio entre personas de las que una ha dado muerte al cónyuge de la otra.*

La fórmula es aceptada y queda como art. 119 del nuevo Código.

El Sr. Teran (Ministro de Justicia,) propone el siguiente artículo: *Es nulo el matrimonio entre personas de las que una ha atentado á la vida del cónyuge anterior de la otra, para poder casarse después con ésta.*

El artículo es aceptado y queda como 120 del nuevo Código.

Proyecto Sierra. (art. 62). "*La violencia ó la fuerza, siendo tal que baste para quitar la libertad de alguno de los dos contrayentes, es impedimento igualmente para el matrimonio.*

El Sr. Lacunza pide se agregue á la palabra «fuerza» el calificativo *ilegal*, pues casos pueden presentarse en que, con el mejor y más indisputable derecho, se haga fuerza á un individuo para que contraiga matrimonio; por ejemplo, en el caso de seducción de una hija de familia, y no precisamente de parte de la autoridad, sino por la de sus padres, so pena de querellarse contra aquél ó de no desistirse de la querella ya presentada.

La redacción del *Proyecto* es aceptada con la enmienda propuesta, y queda como artículo 121 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 63). «Lo es asimismo la locura constante ó incurable.

El Sr. Ramírez manifiesta que sería más justo y más claro decir: "El estado de locura legalmente calificado es impedimento para contraer matrimonio."

El Sr. Lacunza contesta que no es conveniente prohibir de una manera absoluta el matrimonio á los incapaces, pues éstos pueden curarse en el estado de matrimonio ó tener intervalos lúcidos.

El Sr. Méndez propone se haga una enumeración de las varias clases de incapaces, que por razón de su enfermedad no pueden tener intervalos lúcidos. Indica en consecuencia, se diga: *Los dementes, los locos y los imbéciles no pueden contraer matrimonio.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 122 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 64): «Cualquiera de los impedimentos expresados basta, no sólo para que no se per-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

mita la celebración del matrimonio, sino para destruirlo en el caso de que existiendo alguno de dichos impedimentos se haya celebrado, salvo que haya habido, para los menores, habilitación de edad en el caso del art. 55 (1), ó que se hayan dispensado los impedimentos de consanguinidad ó afinidad que puedan dispensarse según los arts. 57 y 58 [2].'

Este artículo es suprimido.

En el Código del Imperio de 6 de Julio de 1866 y en consonancia con el Estatuto Provisional de 10 de Abril de 1865, art. 58, se agregó por la Comisión Revisora el siguiente artículo, que figura bajo el núm. 123: *Los que hayan contraído matrimonio, sea civil, sea conforme á un culto reconocido por el Estado, tienen impedimento dirimente para contraer otro matrimonio civil antes de que aquél esté disuelto.*

Proyecto Sierra (art. 65): «La autoridad á quien se concede la facultad de dispensar los impedimentos que puedan dispensarse es la de los gobernadores respectivos del Distrito, Estados y Territorios de la República.»

El Sr. Lacunza propone se invierta el orden de redacción del artículo para que quede así: «Los gobernadores respectivos del Distrito, Estados y Territorios de la República son los que tienen facultad de dispensar los impedimentos que puedan dispensarse con arreglo á este Código.

Esta redacción se cambia en el Código Civil del Imperio en los siguientes términos, que forman el art. 124: *Las dispensas de que trata este capítulo serán concedidas por el Jefe del Estado ó sus delegados especiales.*

---

(1) Vèase *supra*, pág. 111.
(2) Vèase *supra* págs. 112 y 124.

Capítulo II.

De las ritualidades con que debe celebrarse el matrimon io.

Proyecto Sierra (art. 66): "Antes de la celebración del matrimonio, los que pretendan contraerlo acudirán al Juez del Registro Civil del domicilio de cualquiera de los interesados, manifestando su intención de unirse en matrimonio, con expresión de sus nombres y apellidos y de cuantas más circunstancias quieran tomar en cuenta."

La Comisión resuelve retirar este artículo en el nuevo Código, atenta la redacción que lleva, para no incurrir en una innecesaria repetición, pues lo que él contiene está ya dicho en el art. 67. [1]

Proyecto Sierra (art. 67): "Formulada esta declaración en una acta, en que se hará constar que el Juez del registro civil leyó á los futuros esposos todo el capítulo primero de este título, mandará fijar dicho funcionario una copia en un paraje público del lugar para conocimiento de todos, á fin de que cualquiera pueda denunciar los impedimentos que sepa."

Retirado también por las expresadas razones. [2]

Proyecto Sierra [art. 68]: "Pasados veinte días de haberse fijado la copia, y no resultando contradicción, puede procederse á la celebración del matrimonio; pero si hubiese pasado un año sin que los que han de desposarse comparezcan, se necesita nueva manifestación y publicación para celebrarlo. Cuando se trate de personas que no tienen domicilio fijo, tampoco se procederá al matrimonio,

---

(1) Véase *supra* págs. 86 á 88, art. 67.
(2) Vease *supra*, pág. 88, art. 68.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

si no han pasado dos meses después de la publicación. Los términos de veinte días y dos meses señalados en este artículo, pueden dispensarse en parte, con justas causas por los respectivos gobiernos."

Retirado por las mismas razones. [1]

Proyecto Sierra [art. 69]: «Si dentro de los términos designados en el artículo anterior, se denunciase alguno de los impedimentos especificados en el capítulo primero de este título, el encargado del registro cvil lo hará constar, ratificando simplemente á la persona que lo denunciase. Practicada esta diligencia, remitirá la denuncia ratificada al Juez de 1.ª instancia del Partido, para que haga la calificación correspondiente.»

Retirado por las propias razones ya expresadas. [2]

Proyecto Sierra.—(Art. 70). Recibido el expediente por el Juez, *ampliará la denuncia y recibirá en la forma legal cuantas pruebas presenten, así el denunciante como las personas interesadas en la celebración del matrimonio. El término para la práctica de estas diligencias, no deberá exceder de cinco días, á no ser que alguna prueba importante tenga que rendirse fuera del lugar, en cuyo caso el Juez, prudentemente, concederá para rendirla el menor tiempo posible.*

El Sr. Lacunza manifiesta que, como recordará la Comisión, se dijo con motivo del art. 75 (3) que, denunciado al oficial del estado civil algún impedimento contra el matrimonio ya proclamado, dicho funcionario debía levantar acta en que constase la denuncia con todos los demás por-

---

(1) Vèase *supra*, págs. 89 y 91, arts. 69, 73 y 74.
(2) Vèase *supra*, pág. 92, art. 75.
(3) Veáse *supra* pág. 92.

menores que allí mismo se mencionan, y remitirla á la autoridad judicial. Es llegado, pues, el momento de decir lo que hará el Juez, una vez recibida por él dicha acta. El que habla propone se mantenga el artículo del *Proyecto*; pero encabezándolo, en vez de las que tiene, con las siguientes palabras, que enlazan con toda claridad las ideas: *Recibida por el juez el acta de que hablan los arts 75 y 76* etc. El proponente indica también la conveniencia de empezar el presente capítulo con un texto así concebido: *Además de las disposiciones contenidas en el cap. 3, tit. III de este Código, se observará lo dispuesto en los artículos siguientes.*

Ambas redacciones son aprobadas, quedando ésta como art. 125 y la anterior como 126 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.— (art. 71). *En caso de resultar, por plena justificación, legítimo el impedimento alegado, el juez declarará que no puede celebrarse el matrimonio y así lo hará saber á las partes y al respectivo encargado del registro civil, quien hará constar el fallo al calce de la acta de presentación. Sólo alguno de los que pretendan contraer matrimonio ó sus padres, abuelos ó tutores... pueden apelar de este auto; pero en tal caso el fallo de segunda instancia causará ejecutoria, impidiendo ó permitiendo el matrimonio. Tambien se hará saber este fallo al encargado del registro civil.*

El Sr. Lacunza se manifiesta conforme con el artículo, que encuentra mejor que el 13 de la ley de 23 de Julio de 1859, de donde ha sido tomado, pues mientras éste sólo daba el recurso extremo de la responsabilidad contra la declaración que hacía el juez de no poderse celebrar el matrimonio á causa del impedimento denunciado, aquél concede el de apelación, verdaderamente eficaz para reparar un error ó injusticia posible en materia tan delicada. Opina que debe darse intervención en la segunda instan-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cia, además de los pretendidos contrayentes ó sus representantes legítimos en caso de menor edad, al que pretende ser cónyuge anterior, si el impedimento denunciado es el de un matrimonio antecedente. Observa finalmente que no debe decirse que el encargado del registro civil hará constar dicha declaración al calce del acta de presentación, sino *al margen*, pues es de suponerse, que no ha quedado espacio, por haber seguido asentándose otras actas.

Con estas enmiendas es aprobado el artículo, que queda como 127 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 72): "Cuando ante el Juez de primera instancia no resulte probado el impedimento que se alegó, hará dicho Juez la declaración correspondiente, notificándola á las partes y al encargado del registro. De esta declaración solo habrá el recurso de responsabilidad contra el Juez que la dictó; pero causará ejecutoria. A los testigos que declaren con falsedad y á los denunciantes que no justifiquen la denuncia ó cuando resulte ésta calumniosa, se impondrán las penas que señala el Código Penal á los falsarios y calumniadores."

El Sr. Lacunza manifiesta que no encuentra razón para que solo sea apelable la declaración judicial opuesta al matrimanio, pues también la favorable puede ameritar revocación. Cree, además, que no basta condenar á una pena corporal á los denunciantes falsarios ó calumniadores, sino que es justo paguen también los daños y perjuicios si los ha habido. Sin embargo, reconoce un caso de excepción, cuando tales denunciantes sean ascendientes de los contrayentes, pues, entonces, aunque en rigor el autor de la denuncia falsa ó calumniosa merece siempre una pena, sea quien fuere, hay que pensar en lo respetable, aún siendo extraviado, del movil que generalmente impulsará á los ascendientes á constituirse en denunciantes. Por otra parte, debe evitarse el escándalo que resultaría de que, después

de un litigio entre padres é hijos, éstos fuesen causa de que aquellos sufrieran una pena.

El Sr. Ramírez encuentra muy cuerdas las consideraciones anteriores; pero manifiesta que ellas obran también, tratándose de otros parientes de los contrayentes, que aunque menos inmediatos que los ascendientes, pueden igualmente haber sido impulsados para la denuncia por móviles honestos y de afecto. En consecuencia, opina por que la idea del Sr. Lacunza se haga extensiva á los descendientes y colaterales dentro del cuarto grado y la pena se reserve solo para los denunciantes extraños.

El Sr. Lacunza dice que ha propuesto una excepción que debe restringirse lo más posible para cerrar la puerta á las denuncias falsas.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) invita al Sr. Lacunza para que redacte el artículo como le parezca más conveniente.

El Sr. Lacunza propone la redacción siguiente: "*Cuando ante el Juez de 1.ª instancia no resulte probado el impedimento que se alegó, hará dicho Juez la declaración correspondiente, notificándola á las partes y al encargado del registro. De esta declaración habrá el mismo recurso que en el caso del artículo anterior. A los testigos que declaren con falsedad y á los denunciantes que no justifiquen la denuncia ó cuando resulte ésta calumniosa, se impondrán las penas que señala el Código Penal á los falsarios y calumniadores, además de la condenación en los daños y perjuicios si los hubo. Pero si los que hubiesen denunciado y no probado el impedimento fueren ascendientes de alguno de los contrayentes, no incurrirán en pena.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 128 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 74): *El matrimonio celebrado en el extranjero entre mexicanos, ó entre mexicano*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y extranjera, ó entre extranjero y mexicana, también producirá efectos civiles en la República si se hace constar que se celebró con las formas y requisitos acostumbrados en dicho país y *con tal que el mexicano no haya contravenido á las disposiciones dadas en el capítulo primero de este título.*

El Sr. Lacunza hace observar que en vez de las palabras "dicho país" sería más claro decir *en el lugar de su celebración,* estando en todo lo demás de perfecto acuerdo con el *Proyecto,* porque él hace la debida diferencia entre la *lex loci actus* y el *estatuto formal.*

El artículo es aprobado con la modificación indicada por el Sr. Lacunza y queda como 129 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 75): *Dentro de tres meses después de vuelto el mexicano al territorio de la República, cuando ha contraído en el extranjero un matrimonio con las circunstancias que especifica el artículo anterior, se trasladará el acta de su celebración al registro público de matrimonios del pueblo de su domicilio.*

El Sr. Lacunza manifiesta estar conforme con el artículo, porque él viene á confirmar el precepto ya establecido anteriormente sobre que el estado civil solo ha de probarse con las constancias del registro (1), aún tratándose de matrimonios celebrados en el extranjero y entre mexicanos; pero nota que nada se dice con respecto á la sanción del precepto de la transcripción. Varias cuestiones ocurren á este propósito. ¿La falta de la transcripción invalida el matrimonio? ¿Ha de hacerse precisamente dentro de los tres meses, sopena de no poder efectuarse después? ¿Sus efectos se retrotraen hasta la fecha del matrimonio? El que habla entiende, respecto del primer punto, que la falta de la transcripción no debe invalidar el matrimonio, porque éste se supone ya celebrado conforme á las exigencias de la ley,

(1) Véase *supra*, art. 31, págs. 63 á 64.

que quedan expresadas en el artículo anterior. No habría, pues, razón para tener por nulo un acto tan serio y trascendental como el matrimonio, por solo el defecto de una formalidad, que aunque muy justificada, viene á ser, en último análisis, meramente adicional y extraña á la esencia ó ser del acto y como simple medida de orden. Así no podría contraerse un segundo matrimonio, porque el primero, celebrado en país extranjero, no hubiese sido transcripto á los registros. En cuanto á la segunda cuestión, el que habla entiende que el plazo para la transcripción no debe ser fatal, pudiendo llenarse después la formalidad; pero como el retardo importa siempre una omisión ilícita y capaz de causar daños y perjuicios á terceros, conviene castigarla de alguna manera. Finalmente, los efectos, meramente civiles del matrimonio, ó sea la comunidad de bienes, la hipoteca legal de la mujer casada, etc., que necesariamente deban quedar en suspenso, mientras no se cumpla con el requisito de la transcripción, tienen que retrotraerse á la fecha del matrimonio. En consecuencia, propone se adicione el artículo del proyecto en la siguiente forma: «La falta de esta transcripción no invalida el matrimonio; pero mientras no se haga, aquél no producirá efectos civiles, estando, entre tanto, sujetos los cónyuges á una multa de doscientos á mil pesos ó de dos meses á diez de prisión. En cualquier tiempo en que el matrimonio se registre, se retrotraerá el efecto del registro; de modo que los efectos civiles se entenderán producidos desde el día en que se contrajo el matrimonio.»

El Sr. Escudero manifiesta que está de acuerdo con el Sr. Lacunza; pero entiende que sus ideas podrían concretarse en la siguiente fórmula: «*La falta de esta transcripción no invalida el matrimonio; pero priva al marido de los beneficios que respecto de los bienes tiene en la sociedad conyugal,* pues, á no dudarlo, sería injusto oponer á la mujer la falta de la transcripción, ya que ella no lleva el cetro de la familia sino en defecto del marido. Lo demás

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de las ideas expresadas por el Sr. Lacunza debe dejarse á la doctrina y á la jurisprudencia, para que el nuevo Código no resulte un comentario.

La proposición es aceptada; pero más tarde, ocupándose la Comisión bajo la presidencia del Emperador Maximiliano en la revisión de todos estos trabajos, y aprobado ya el art. 123,(1) se convino en redactar la adición en cuestión en esta forma: *La falta de esta transcripción no invalida el matrimonio; pero sujeta á los cónyuges á las penas de suspensión de efectos civiles y demás establecidos en el art.....* (2), que quedó como art. 130 del nuevo Código.

Capitulo III.

De los derechos y obligacionés que nacen del matrimonio.

Proyecto Sierra.—[Art. 76]: "Los cónyuges están obligados á vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente."

El Sr. Lacunza no está de acuerdo con el artículo así redactado, pues es la mujer la que debe vivir donde el marido y no *vice-versa*. Propone se divida el artículo como sigue: "*Los cónyuges están obligados á guardarse fidelidad, á contribuir cada uno por su parte á los objetos del matrimonio y á socorrerse mutuamente.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 131 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.—(Art. 77): "El marido debe proteger á la mujer y ésta obedecer la voluntad del marido.

---

(1) Véase *supra*. pág. 130.

(2) El 206 que trata de la transcripción de los matrimonios eclesiásticos á los registros del estado civil.

El Sr. Lacunza propone se substituya este precepto, que más parece del orden moral que del jurídico, y por tanto muy poco ó nada susceptible de sanción exterior, con el siguiente, comprensivo de la vida común; pero salvo el debido respeto de la autoridad marital: *La mujer debe vivir con su marido; éste tiene obligación de recibirla. El marido debe dar alimentos á la mujer, haya ésta llevado ó no bienes al matrimonio. La mujer está sujeta y obligada á obedecer al marido, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y en la administración de los bienes. Si la mujer tiene bienes propios y el marido no, y está impedido de trabajar, la mujer debe dar alimentos al marido, aún cuando éste no administre los bienes del matrimonio.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 132 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.—(Art. 78): *La mujer está obligada á seguir á su marido, si éste lo exige, donde quiera que fije su residencia..... ...*Sin embargo, *podrán los tribunales, con conocimiento de causa, eximirla de esta obligación cuando el marido translade su residencia* á países remotos.»

El Sr. Lacunza observa que la obligación perteneciente, en general, á la mujer de seguir á su marido, debe tener una excepción: *el pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales.*

El Sr. Ramírez dice que este punto no puede ser materia de las capitulaciones matrimoniales, y que mejor puede dejarse en cada caso á la decisión prudente del juez.

El Sr. Lacunza contesta que no hay inconveniente en lo que propone, porque no es indiferente á la administración de los bienes cualquiera residencia del encargado de ella.

La proposición del Sr. Lacunza queda aprobada en esta forma: *salvo pacto en contrario en las capitulaciones*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

matrimoniales. Aunque no haya este pacto, etc. y como art. 133 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.—[Art. 79): "El marido es el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio; pero, siendo menor de diez y ocho años, necesitará del consentimiento de su padre, y en defecto de éste, de la autorización judicial para todos los actos que deben redactarse en escritura pública, y para demandar y defenderse en juicio. La viuda menor de diez y ocho años queda sujeta á la disposición de este artículo hasta que los cumpla."

El Sr. Lacunza manifiesta que en el *Proyecto* se habla más adelante del marido, como representante legítimo de la mujer. Pide se formule un artículo aparte sobre este punto; pero después del relativo á la administración legítima de los bienes del matrimonio. Redacta su pensamiento como está en el *Proyecto: El marido es el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio.*

La redacción es aceptada y queda como art. 134 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza continúa diciendo que no le parece suficiente la edad de diez y ocho años para que el marido pueda administrar libremente los bienes del matrimonio La Pragmática de Felipe IV, de 11 de Febrero de 1623, que es la ley 7, tít. 2, lib. 10 de la Novísima Recopilación, de donde tomó Goyena el art. 60 de su Proyecto, y el Dr. Sierra el artículo de que se trata, tuvo un objeto seguramente moralizador en frente de la corrupción de costumbres en aquella época: alentar los matrimonios mediante ciertas concesiones y privilegios en favor de los que se casaran antes de los diez y ocho años, lo que ha hecho dudar á los intérpretes si la Pragmática sería aplicable á los que tomaran estado después de dicha edad. Pero ella no puede constituir una regla permanente, en contradicción con

la naturaleza que nos enseña cómo á tal edad apenas se tiene una sombra de discernimiento para conducirse en la vida y mucho menos para los negocios. Propone, pues, el abandono de esa idea, y que se sustituya con la declaración de incapacidad de la mujer casada para comparecer en juicio. Redacta, en consecuencia, el artículo, en la siguiente forma: *El marido es el representante legítimo de su mujer. Esta no puede sin licencia de aquél, dada por escrito, comparecer en juicio por sí ó por procurador, ni aun para la prosecución de los pleitos comenzados antes del matrimonio y pendientes en cualquiera instancia al contraerse éste; mas una vez dada la autorización, sirve para todas las instancias, á menos que sea especial para una sola, lo que no se presume si no se expresa.*

La redacción es aprobada y queda como art. 135 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 80). "El marido es el representante legítimo de su mujer. Esta no puede, sin licencia de aquél, comparecer en juicio por sí ni por procurador."

Se considera comprendido ya en el artículo anterior.

El Sr. Lacunza propone que, antes de seguir el orden de los artículos del *Proyecto Sierra*, se establezca la respectiva responsabilidad del marido y de la esposa, por efecto de la comparecencia en juicio de que acaba de hablarse en el artículo preanterior. Dos supuestos pueden realizarse: ó la mujer ha sido autorizada por el marido para litigar, ó no lo ha sido sino por el Juez, que consideró infundada la renuencia de aquél, supuesto de que se tratará en artículo posterior. Si lo primero, la más evidente justicia enseña que la responsabilidad de la condenación puede hacerse efectiva desde luego sobre los bienes propios

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN CENTRAL DE BIBLIOTECAS

de la mujer, pues investida ésta de la autorización marital es una personalidad jurídica perfecta y completa, que debe soportar todas las consecuencias de sus actos, y después, sobre los bienes comunes del matrimonio. Si lo segundo, una justicia igualmente clara dice que la condenación sólo podrá ejecutarse sobre los bienes de la mujer, salvo que se trate de obligación contraída para librar los bienes comunes ó los del marido, de un daño, ó para colocar ó educar á los hijos del matrimonio, pues entonces quedan obligados los bienes comunes.

El Sr. Escudero manifiesta que no ve la justicia de la solución propuesta por el Sr. Lacunza, pues nota que en ninguno de los supuestos á que se refiere, resulta responsable el marido con sus bienes propios. Ahora bien, esto tiene que suceder necesariamente cuando el marido autoriza, *proprio motu* á la mujer para comparecer en juicio, y aun en el caso de licencia judicial, siempre que del acto haya resultado beneficio para el marido. Entonces la razón está diciendo que la obligación debe alcanzar los bienes propios del marido hasta la concurrencia del beneficio que él hubiera reportado.

El Sr. Teran (Ministro de Justicia) indica al Sr. Lacunza que redacte su pensamiento.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción: *Si la mujer ha sido autorizada por el marido para litigar, la condenación puede ejecutarse sobre los bienes de la mujer y los comunes del matrimonio. Si ha sido autorizada por el Juez, la condenación solo puede ejecutarse sobre los bienes de la mujer, excepto que la obligación haya sido contraída para librar los bienes comunes ó los del marido, de un daño, ó para colocar y educar á los hijos del matrimonio, pues entonces quedan obligados los bienes comunes.*

Esta redacción es aceptada y queda como artículo 136 del nuevo Código.

Proyecto Sierra---(art. 81): *Tampoco puede la mujer, sin licencia ó poder de su marido, adquirir por título oneroso ó lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos especificados en la ley.*

Este artículo es aceptado y queda como 137 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza hace observar que el *Proyecto* que se revisa, nada dice sobre si la licencia del marido puede ser general ó requiere ser especial, ya para que la mujer contrate, ora para que litigue, imitando en este punto el laconismo de la ley 55 de Toro, que es la 11, tít. 1, lib. 10 de la Novisima. Hay que recordar, sin embargo, todas las controversias habidas entre los intérpretes sobre este particular (1) y que para cerrarlas se dió la ley 56 de Toro que decía: "Mandamos que el marido pueda dar licencia general á su mujer para contraer y para hacer todo aquello que no podía hacer sin licencia, y si el marido se la diere vala todo lo que su mujer ficiere por virtud de dicha licencia." Así este sentido ha estado vigente en nuestra jurisprudencia y, como lo enseña el Goyena, impugnando á los partidarios de la necesidad de la licencia marital, «trátase aquí de autorización voluntaria y revocable. ¿Y por qué no ha de poder un marido ausente ó impedido dar esta prueba de aprecio y confianza á la mujer, que se ha hecho digna de ella por su aplicación y prudencia; á la mujer cuyos intereses apenas pueden dividirse de los suyos? ¿Se negará á la ssciedad conyugal lo que no podría negarse á otra sociedad cualquiera. (2)»

El Sr. Ramírez manifiesta que pudiera formularse una seria objeción á lo dicho por el Sr. Lacunza, la de que

---

(1) Matienzo, *Glosa* 1, núm. 2.—Antonio Gómez, *De cont.* cap. 4, núm. 16.—Covarrubias, *De test.* part. 3, núm. 15.

(2) *Proyecto*, art. 62.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

con la licencia general dada por el marido á la mujer para contratos y pleitos, abdicaría el primero en favor de la segunda, toda la autoridad que las leyes le han otorgado en respecto al buen orden de la familia y á la pureza delas costumbres. Sabe la Comisión que en las capitulaciones matrimoniales están prohibidos todos los pactos depresivos de la autoridad marital ó contrarios á las leyes preceptivas con respecto á la posición que á cada cónyuge corresponde en la familia. Ahora bien, el apoderamiento general y absoluto en favor de la mujer no es otra cosa que un pacto de ese género. Mejor sería no hablar de esto en el Codigo, imitando la prudencia del mismo Goyena, partidario de la licencia general, á fin de que la jurisprudencia decidiese en cada caso lo conveniente.

El Sr. Lacunza replica que no se trata de pacto hecho en las capitulaciones matrimoniales, sino después del matrimonio y durante él, ni tampoco de pacto irrevocable, sino temporal y por mientras el marido, jefe y director de la familia, lo estime conveniente. La misma suma de poder físico y moral, reconocido ya por el nuevo Código al marido en la familia, está exigiendo que no se le prive de una facultad que tiene cualquier extraño en los intereses que representa y administra. Además, la jurisprudencia entre nosotros, hace tiempo que se manifiesta en el sentido de la ley 56 de Toro; por manera que lo que propone no es una novedad en nuestras leyes ni en nuestras costumbres, y sí servirá para cerrar la puerta á discusiones vanas en los tribunales. Propone, en consecuencia, se acepten los dos artículos siguientes *La licencia para contratar puede ser general ó especial. Se presume concedida cuando la mujer tiene un establecimiento público propio, profesional, industrial ó mercantil, y en este caso quedan obligados por los contratos relativos al establecimiento, celedrados por la mujer, los bienes del establecimiento mismo; si estos no bastan, los gananciales del matrimonio, y en defecto de éstos, los propios de la mujer.*

La licencia para demandar y defenderse en juicio puede ser también general ó especial.

Ambos artículos son aceptados y quedan como 138 y y 139 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.—(Art. 82): Los tribunales, con conocimiento de causa, pueden suplir la falta de la licencia marital requerida en los dos artículos precedentes, cuando el marido sea menor de diez y ocho años y carezca de padres, ó cuando siendo mayor se halle ausente ó impedido, ó la rehuse sin fundado motivo."

El Sr. Lacunza repite sus observaciones hechas con motivo del art. 79 del *Proyecto* que se discute y en orden á la edad de diez y ocho años, que no le parece deber tomarse en cuenta ni en este particular.

El Sr. Méndez manifiesta que el artículo del *Proyecto Sierra* está tomado literalmente del art. 64 del Proyecto de Gollena, donde se motiva aludiendo al 60 del mismo, que la Comisión no ha aceptado. [1] Considera, sin embargo, que la idea no debe abandonarse del todo en este caso, pues debiendo ser materia de una audiencia si el juez suple ó no la licencia marital, tal formalidad parece inmotivada cuando el marido es menor de dicha edad y no tiene padres, como innecesaria cuando está ausente ó impedido. Propone, en consecuencia, se diga: "Si el marido está presente en el territorio de la jurisdicción del Tribunal y rehusare autorizar á la mujer para contraer ó litigar, antes de que el Tribunal dé á la mujer la autorización para litigar ó contraer, será citado á una audiencia verbal ante el mismo Tribunal, y oído lo que diga si comparece, ó en su rebeldía, si á primera cita no comparece y probados los hechos que lo necesiten dentro de quince días á lo más, decidirá el juez sobre la autorización, sin otro trámite ni re-

(1) Véase *supra* art. 135 pags. 140 y 141.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

curso .No es necesaria esta audiencia cuando el marido es menor de diez y ocho años y carece de padre, ó está ausente ó impedido."

El Sr. Lacunza insiste en su observación anterior y es de opinión que, en ausencia temporal del marido, nunca debe el juez suplir la licencia marital, pues ante todo, debe oír al marido, sin el cual requisito se expondría, otorgando la licencia, á atentar injustificadamente á la autoridad marital. Propone, en consecuencia, se limite el nuevo Código á decir: *Si el marido está presente en el territorio de la jurisdicción del Tribunal, y rehusare autorizar á la mujer para contraer ó litigar, el Tribunal concederá ó negará la autorización dentro de quince días, oyendo en audiencia verbal al marido si éste concurriere á la primera citación, y admitiendo dentro de dicho término la justificación de los hechos.*

El Sr. Méndez objeta á la anterior redacción un laconismo que puede ser peligroso á los intereses del matrimonio en casos urgentes, en que el marido esté ausente y no haya tiempo de esperar su regreso.

El Sr. Escudero recuerda al Sr. Lacunza la ley 59 de Toro, que decía: "Cuando el marido estuviere ausente y no se espera de próximo venir ó corre peligro en la tardanza, que la justicia con conocimiento de causa, seyendo legítima, ó necesaria, ó provechosa á su mujer, pueda dar licencia á la mujer la que el marido le había de dar, la cual ansi dada vala, como si el marido se la diese." Además, no hay inconveniente en que, después de concedida la licencia por el juez en ausencia del marido, comparezca éste oponiéndose, en el cual caso puede sustanciarse el juicio respectivo. De lo que se trata es de obviar á una emergencia, que desatendida, puede perjudicar por un rigorismo legal los intereses del matrimonio.

Sin embargo de estas observaciones, la redacción del Sr. Lacunza es aceptada y queda como art. 140 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.—(Art. 83): *La mujer no necesita licencia para defenderse en juicio criminal, ni para demandar ó defenderse en los pleitos contra su marido.*

Este artículo es aceptado y queda como 141 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra.—(Art. 84): *Tampoco necesita la mujer licencia del marido para disponer de sus bienes por testamento.*

Este artículo es igualmente aceptado y queda como 142 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra.—(Art. 85): «No puede oponerse la nulidad fundada en la falta de licencia exigida por los arts. 80 y 81, sino por la mujer, el marido ó los herederos de ambos.»

El Sr. Lacunza manifiesta que este artículo debe ser completado en tres puntos muy importantes: primero en lo que se refiere á la nulidad por defecto de licencia judicial; segundo, en cuanto á no proceder la acción de nulidad si el marido ha ratificado expresa ó tácitamente los hechos de su mujer, y cuarto, respecto de que esa acción, exclusivamente personal, no puede corresponder á otras personas que las mencionadas. Propone, en consecuencia, se redacte dicho artículo en la forma siguiente: *La nulidad de los actos de la mujer, fundada en la falta de licencia marital ó judicial, no puede oponerse sino por la mujer, el marido ó los herederos de ambos, y ni aún por éstos si el marido ha ratificado expresa ó tácitamente los hechos de su mujer. Ninguna otra persona, ni aún los fiadores ó conjuntos del contrato pueden alegar esta nulidad.*

La redacción es aceptada y queda como art. 143 del nuevo Código.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO IV

De los deberes dé los esposos para con sus hijos, y de su obligación y la de otros parientes de prestarse alimentos recíprocamente.

Proyecto Sierra.—(Art. 86): *El padre y la madre están obligados á criar á sus hijos, educarlos y alimentarlos.*

El Sr. Lacunza pide se adicione el precepto, de acuerdo con el art. 204 del Código Civil francés, con las siguientes palabras: *mas no á dotarlos ni formarles un establecimiento para contraer matrimonio ó para cualquier otro objeto.* Esto importa quizá una innovación respecto del antiguo derecho, aunque no del Patrio, que dejaba en este punto toda libertad al padre para comprometerse ó no á la constitución de dote ó donación *propter nuptias.* La ley Julia, en efecto, según Marciano, prohibía á los padres oponerse al matrimonio de sus hijos, y de aquí tomó origen la Constitución de los Emperadores Severo y Antonino para extenderse hasta obligar á aquellos á dotarlos:—*capite trigésimoquinto legis Juliæ, qui liberos, quos habent in potestate, injuria prohibuerint ducere uxores, vel nubere; (vel qui dotem dare non volunt; ex constitutione divorum Severi et Antonini) per proconsules, præsidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et dotare. Prohibere autem videtur et qui conditionem non quærit* [1]. Pero nuestro Derecho patrio se limitó á decir: "Si el marido ó la mujer durante el matrimonio casaren algún fijo común, e ambos le prometieren la dote ó donación *proter nuptias*, que ambos la paguen de los bienes que tuvieren ganados durante el matrimonio, etc." (2), lo que se repite en la Novísima (3), á pesar del regreso que en esta materia como en

(1) *Dig.* lib. 23, tit. 2, l. 19.
(2) Ley 53 de Toro. Partida 4ª
(3) Ley 4, tit. 3, lib. 10 Nov. Recop.

otras hizo el Código de las Partidas al Derecho Romano (1). Que la innovación está justificada, lo demuestra Pothier, diciendo: "La obligación de dotar á los hijos comunes es una deuda meramente natural, para cuyo pago la ley no da ninguna acción á los hijos contra los padres. He aquí por qué cada uno de los cónyuges no debe dotar, si no quiere; y por la misma razón cada uno de ellos no contribuye á la dote sino en la parte que quiere. En esto nuestro derecho es diferente del romano, en el cual, según la Constitución de Severo y Antonino, un padre podía ser obligado por el magistrado á dotar á sus hijos; l. 19, ff *de ritu Nupt.* Al contrario, en nuestro derecho, la ley fía bastante en el afecto que la naturaleza inspira á los padres por sus hijos, para creer que, cuando no los dotan, es porque no tienen los medios de hacerlo de una manera conveniente; ella juzga que sería contrario al respeto que los hijos deben á sus padres permitirles arrastrarlos ante los tribunales y obligarlos á descubrir el secreto de sus negocios, para dejar establecido si cuentan ó no con los medios de constituir una dote conveniente. Puede, á la verdad, encontrarse padres que no obren en este punto con justicia respecto de sus hijos; pero siempre será un caso raro y un mal menor que conviene tolerar para evitar otro más grande." (2)

El artículo del *Proyecto*, adicionado, como queda dicho, por el Sr. Lacunza, es aprobado y forma el art. 144 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 87): *A falta de padre y madre los ascendientes de ambas líneas más próximos en grado, tienen obligación de alimentar..... á sus descendientes*

El Sr. Lacunza pide se adicione el artículo, después de la palabra "alimentar" con la frase *y educar*, pues

(1) Partida 4, tít. 11, l. 8.
(2) Pothier, *De la communauté*, núm. 646.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

de otra manera se podría entender que la obligación de que se trata, es menos extensa, tratándose de ascendientes remotos que de los padres.

El artículo así adicionado, es apobado y queda como art. 145 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto Sierra*, siguiendo en esto al de Gollena, no habla de la obligación alimenticia á cargo de los hermanos, silencio que es necesario corregir, porque fundada enta materia en el *movimiento natural de las cosas á criar y guardar lo que nasce de ellas, y por razón de amor que han con ellas naturalmente*, como decía la l. 2, tít. 19, Partida 4.ª, no cabe duda que tal fundamento alcanza á los hermanos, respecto de quienes también conviene decir algo. Gollena no motiva suficientemente su silencio sobre el particular, al afirmar que la obligación de que se trata á cargo de los hermanos, aunque establecida en lo antiguo por la Novela 89, cap. XII, §6, "no pasó á nuestras leyes y está en oposición con nuestras costumbres" (1), pues fuera de que, además de la Novela, pueden citarse otras disposiciones del Derecho romano, (2) es inconcuso que el Fuero Real prescribe dicha obligación en los siguientes términos: "Si el padre ó la madre vinieren á pobreza en vida de los fijos, quier sean casados, quier no, mandamos que segun fuere su poder de cada uno, que gobiernen al padre, è á la madre. *Otrosí, mandamos que si hubiere algun hermano que fuere pobre, sean tenudos de le gobernar: é si el padre ó la madre murieren, los fijos gobiernen á aquel que fincare: e si se casare, dénle la meitad del gobierno que le ante daban, e no sean tenudos de gobernar la madrastra, si no quisieren.*" (3) El que habla cree, sin embargo, que, menos exigible por la naturaleza humana esta obligación en-

(1) *Proyecto*, sobre el art. 69.
(2) *Dig.*, lib. 26, tít. 7, l. 13.—*Id.*, lib. 27, tít. 2, l. 4.—*Id.*, lib. id., tít. 3, l. 1, § 2.
(3) *Fuero Real*, lib. 3, tít. VIII, l. 1.

tre hermanos que la que media entre ascendientes y descendientes, la prudencia aconseja ponerle un límite, no sólo marcado por la necesidad del alimentista sino también por cierta edad, desde la cual en adelante se considere que el hombre puede y debe proveer á su subsistencia por sus propios y personales esfuerzos. En consecuencia, propone se diga: *También los hermanos, tienen la obligacion de educar y alimentar á sus hermanos, hasta que estos lleguen á la edad de diez y ocho.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 146 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 88]: *La obligación de dar alimentos es recíproca; los hijos y descendientes la deben á sus padres y ascendientes.*

El artículo es aprobado y queda como 147 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (89): *Los alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien debe darlos y á las necesidades de quien ha de recibirlos.*

El Sr. Lacunza se manifiesta conforme con el artículo; pero cree que debe aclararse en lo relativo al caso en que sean varios los obligados á dar alimentos, pues una de dos: ó se establece aquí una verdadera obligación solidaria, que pueda ser exigida en su totalidad de uno solo de los obligados, ó al contrario se expresa que las autoridades repartirán á prorrata el pago entre todos los que se hallen en posibilidad de verificarlo. Lo primero no sería equitativo, pues no se trata de una obligación entre extraños, sino fundada en la piedad y natural amor de los miembros de la familia, causas que no permiten excluir á unos, para hacer pesar la obligación tan sólo sobre los otros. Hay, en consecuencia, que fijarse en el segundo, como lo hace Gollena, quien, sin embargo, no creyó nece-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sario aclararlo en el art. 71 de su Proyecto: pero lo dice al exponer sus motivos. El que habla piensa de otra manera, y para evitar dudas, propone se adicione el artículo del *Proyecto Sierra* en la forma siguiente: *Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren posibilidad para darlos, el juez repartirá, proporcionalmente á sus haberes, la obligación entre ellos; pero si uno solo ó algunos sólo fueren ricos y los demás pobres, la obligación quedará sólo en totalidad en el que, ó los que fueren ricos*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 148 de nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza manifiesta que en el *Proyecto* que se examina nada se dice respecto de la forma ó manera en que debe ser pagada la deuda alimenticia, pues aunque generalmente no sea otra que una suma de dinero en cantidad fijada de acuerdo con lo que dice el artículo que acaba de aprobarse, casos habrá en que convenga al deudor alimenticio, ya poner en pensión al alimentista, ora incorporarlo á su familia. ¿Porqué se le ha de prescribir exclusivamente una de estas formas, tal vez con daño del favorecido y haciendo odioso el crédito por alimentos? El Código Francés trae sobre el particular los arts. 210 y 211, que textualmente dicen: «Si la persona que debe proporcionar los alimentos justifica que no puede pagar la pensión alimenticia, el tribunal, con conocimiento de causa, ordenará que reciba en su casa y en ella alimente y sostenga á aquel á quien los alimentos se deban.» «El Tribunal determinará también si los padres que ofrezcan recibir y alimentar en su casa al hijo á quien deban alimentos, estarán ó no dispensados en este caso de seguir pagando la pensión alimenticia.» El que habla llama sobre estos textos la atención de la Comisión y le propone acepte un artículo concebido en estos ó parecidos términos: «*El obligado á dar educación y alimentos, llena la obligación que le impone la ley, asignando una pensión al acreedor alimenticio, ó poniéndolo en pensión, ó incorporándolo en su familia.*

La redacción es aceptada y queda como art. 149 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 90): *Cesa la obligación de dar alimentos, cuando el que los da cesa de ser rico, ó de ser indigente el que los recibe, y debe reducirse proporcionalmente si se minora el caudal del primero ó la necesidad del segundo.*

El artículo es aceptado y queda como 150 del nuevo Código.

———

CAPÍTULO V.

Del divorcio.

Proyecto Sierra (art. 91): "El divorcio no disuelve el matrimonio; pero suspende la vida común de los casados."

El Sr. Lacunza se manifiesta conforme con la sencillez de este texto, que expresa, en su concepto, perfectamente la idea de que el matrimonio debe ser indisoluble en cuanto al vínculo; pero susceptible de interrupción en cuanto á la vida común de los esposos, cuando ciertas poderosas causas así lo exijan.

El Sr. Ramírez propone, sin embargo, la siguiente redación: *El divorcio no disuelve el matrimonio de manera que alguno de los divorciados pueda contraer otro matrimonio, ó faltar á la fidelidad debida á su consorte; suspende sólo algunas de las obligaciones civiles que se expresan en los artículos relativos de este Código, que* queda aceptada como art. 151 del nuevo Código.

———

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 92): "Son causas legítimas de divorcio: 1.ª El adulterio de la mujer en todo caso, y el del marido cuando resulte escándalo público ó menosprecio de la mujer. 2.ª Los malos tratamientos de obra ó injurias graves. 3.ª La propuesta del marido para prostituir á la mujer. 4ª El conato del marido ó de la mujer para corromper á sus hijos, y la connivencia en su corrupción ó prostitución."

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto* no incluye, entre las causas de divorcio, algunas muy justificadas que exponía nuestra ley de 23 de Julio de 1859. En esta virtud, cree que deben mencionarse en el artículo del nuevo código tales causas, procurándose respecto del adulterio reservar las salvedades, según que sea cometido por el marido ó por la mujer, para cuando en el curso de este capítulo se vayan explicando las aplicaciones de cada una. Esto lo exigen la claridad y el método. Propone, en consecuencia, la siguiente redacción:

Son causas legítimas de divorcio:

1.ª El adulterio de uno de los cónyuges.

2.ª La propuesta del marido para prostituir á la mujer.

3.ª El conato del marido ó de la mujer para corromper á los hijos, ó la connivencia en su corrupción.

4.ª La pena impuesta por delito infamante.

5.ª La demencia ó cualquiera enfermedad crónica contagiosa

5.ª El abandono sin justa causa del domicilio conyugal, prolongado por más de dos años.

7.ª La sevicia ó trato cruel del marido á la mujer.

8.ª La acusación falsa hecha por un cónyuge al otro.

9.ª La violación de las capitulaciones matrimoniales.

La primera causa, naturalmente requiere ser explicada después; pero por el momento basta enunciarla en términos al parecer comunes para ambos cónyuges, pues también el adulterio del marido es causa de divorcio, si se verifica en determinadas circunstancias.—La segunda, que se encuentra también, como ya se ha visto, en el *Proyecto Sierra*, no es otra que la prevista por el P. Sánchez bajo la general de «incitación de uno de los cónyuges al otro para que cometa pecado mortal (1)» y la de que trata Justiniano por medio de estas palabras: *Si maritus uxoris castitati insidiatus aliis etiam cam adulterandam tentaverit tradere* (2), siendo, según el Fuero Juzgo, hasta motivo para que la mujer pudiera casarse con otro (3)

La tercera causa se justifica por su sola enunciación

La cuarta encuentra su razón de ser en la injusticia que habría en hacer soportar contra su voluntad la deshonra al cónyuge inocente por hechos á que era absolutamente extraño.

La quinta se funda en la imposibilidad, á causa de ella, de realizar los fines del matrimonio, y ya el Derecho Canónico (4), lo mismo que el Civil (5), trataban de ella como motivo suficiente al menos para suspender algunas de las obligaciones del matrimonio.

La sexta justifica á primera vista el divorcio, porque el abandono prolongado sin motivo por el tiempo que se supone, es señal inequívoca de un profundo desacuerdo entre los consortes.

La séptima se concreta á la sevicia ó trato cruel, suprimiendo las "injurias graves," porque aunque esta segunda causa es generalmente mencionada, cree el que habla que no es tan importante, que baste á motivar la separación de los cónyuges. La sevicia se refiere solamente al marido contra la mujer, porque, como lo nota Gollena (6), en la generalidad de los casos, es el marido, por su mayor fuerza, quien se hace reo de ella.

---

(1) Sánchez, *De matrimonio*, lib. 10, Disput. 17.
(2) Novella, 117, cap. 9. § 3.
(3) *Fuero Juzgo*, lib. 3, tit. 6, l. 2.
(4) Van Espen, *Jus Eccles. univ.*, part. 2, tit. 15, *De Divortiis*, cap. 2.
(5) Elizondo, tom 7, cap. 13, núm. 19.—Ley de 23 de Julio de 1859, art. 21, fr. VII.
(6) *Proyecto* sobre el art. 76, núm. 2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La octava comprende toda acusación falsa hecha por un cónyuge al otro, y no sólo la de adulterio, como nuestra ley de 23 de Julio de 1859 (art. 21, frac. II) lo expresa, de conformidad con el Derecho Romano [1], pues obra la misma razón de decidir en un caso que en otro.

La novena causa es una novedad en nuestra legislación; pero el exponente entiende que es debido separar á los cónyuges de los cuales el uno ha violado en daño del otro, con toda malicia, los pactos celebrados sobre los bienes. Por supuesto no se comprenden aquí los malos negocios fortuitos, sino solamente las dilapidaciones en una vida de vicios, que siempre revelarán en el consorte culpable algo más que la pérdida de los intereses.

El Sr. Escudero manifiesta que no le parece deba aceptarse la causa cuarta, ó, sea la «pena impuesta por delito infamante», porque, ó esta expresión es muy vaga, y entonces se corre riesgo de poner su aplicación al servicio de meras preocupaciones, ó se refiere á la pena, contra lo preceptuado por el art. 22 de la Constitución Política de la República, de 5 de Febrero de 1857.

El Sr. Lacunza contesta, que en esta causa, como en otras, no cree posible guardar la severa precisión que el Sr. Escudero exige, debiéndose estar, en la práctica, á la prudencia y buen parecer del juez, que no faltará á su deber, si en el sentido de preocupaciones dominantes, falla que tal delito infama ó no. Esto es inevitable, resultando siempre que se deficende al cónyuge inocente contra la deshonra de que pudiera hacerlo partícipe el cónyuge culpable.

El Sr. Escudero insiste en que lo propuesto por el Sr. Lacunza es muy vago, é indica que mejor sería determinar el delito á que el legislador ha querido referirse, para lo cual le parece buen criterio fijarse en la pena, diciéndose *verbi gratia:* «La pena mayor de cinco años de presidio ó prisión impuesta á alguno de los cónyuges »

(6) *Novella* 117, cap. 9, § 4.

El Sr. Méndez expone que con la redacción del Sr. Escudero se desvirtúa todo el pensamiento del Sr. Lacunza, quien, sin duda, se ha inspirado en el art. 232 francés, según el cual «la sentencia que imponga á uno de los cónyuges una pena infamante será para el otro motivo de divorcio.

El Sr. Lacunza dice que se ha separado del texto francés, porque la pena infamante, en la significación de este calificativo, se explica en Francia; no en México por la razón ya dada por el Sr. Escudero.

El Sr. Ramírez, refiriéndose á la causa 5ª de las propuestas por el Sr. Lacunza, manifiesta que debe suprimirse, pues como decía Merlin: "El matrimonio es una sociedad de bienes y de males, de placeres y de penas, que se forma para no acabar sino con la vida del uno ó del otro contratante. La mujer ha debido, pues, preveer, al casarse, que podían sobrevenir enfermedades á su marido; y por horribles que ellas sean, no pueden privar á éste de los derechos que tiene sobre la persona y bienes de aquella. De otra manera ¿cuál sería el hombre bastante poco sensato para buscar una compañera? Dependería de los caprichos de la naturaleza arrebatarle en un momento lo que para él habría de más caro en el, mundo, su mujer, sus hijos, su reposo, su fortuna, y esto precisamente cuando los socorros le son más necesarios. ¡Estar aislado en su familia, abandonado de aquellos cuya felicidad hacía, cuando él gozaba de la salud! No le quedaría sino gemir en medio de la crueldad de su destino, y libre en la desesperación, terminaría prematuramente, falto de consuelo y de apoyo, una vida dolorosa que se habría prolongado, si su esposa y sus hijos se hubieran reunido para salvarlo. Si existiera semejante ley,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sería bárbara y la humanidad se apresuraría á abolirla [1]." Esto mismo decía el jurisconsulto Ulpiano: *Quid enim tam humanum est, quam fortuitis casibus mulieri maritum vel uxorem viri participem esse* (2). El exponente conviene en que habrá casos en que una enfermedad contagiosa deba hacer que se interrumpan las relaciones sexuales; pero esto es de carácter íntimo y es preciso dejarlo á la conciencia de los esposos.

El Sr. Lacunza contesta que el Sr. Ramírez se ha dignado ver este delicado asunto sólo desde el punto de vista del interés del cónyuge enfermo. Pero ¿y el cónyuge sano? ¿no será también digno de consideración? Como exclamaba un notable abogado francés [3], bastan las crueldades del trato para pronunciar el divorcio, y no las hay más crueles que aquellas de que nos quejamos. Basta para el mismo fin una difamación, y no puede encontrarse ninguna más deshonrosa. Uno de nuestros prácticos más acreditado entre nosotros, Elizondo, decía: «La enfermedad contagiosa de uno de los cónyuges, de la cual amenace peligro de vida al otro, como sucede al morbo gálico, á la fiebre ética, á la lepra y otras causas igualmente graves, es suficiente motivo para el divorcio, probándose aquellas, no por la sola fe de los testigos, sino por la deposición de los peritos que han de reconocer al paciente y deponer de su insanibilidad, pues, en otros términos, cualquiera separación debe ser por el tiempo que necesite el enfermo para su perfecta curación y no más (4).»

El Sr. Mendez expone que, á su juicio, la causal de "sevicia" debe adicionarse con la de injurias graves, y am-

(1) Merlin, *Répert.* "Separat. de corps." § 1, núm. 2.
(2) *Dig.* lib. 24, tit. 3, l. 22, § 7.
(3) Augeard; tom. 1, § 69.
(4) Elizondo, *Pract. univ.* tom. 7, cap. 13, núm. 19.

bas referirse indistintamente al hombre y á la mujer, como las mencionan Gollena [1] y el *Proyecto* que se examina y nuestra ley de 23 de Julio de 1859 (2), aunque ésta última sólo habla también de la "crueldad excesiva."

Conviniéndose por la Comisión en hablar más adelante de la causa quinta, por considerarse que, en rigor, no debe necesariamente motivar el divorcio, la redacción del Sr. Lacunza es aprobada y queda como art. 152 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, enumeradas las causas necesarias para el divorcio, es llegada la oportunidad de ir exponiendo sus casos de aplicación con todas las aclaraciones y limitaciones que les corresponden. Así, fijándose desde luego en el adulterio, cree que si está bien dicho en el *Proyecto Sierra*, que el adulterio de la mujer es causa de divorcio, en todo caso, no puede decirse otro tanto respecto del adulterio del marido. Casos hay, fuera de lo que dicho *Proyecto* menciona, en que debe conducirse el legislador con menos disimulo respecto del hombre, pues entonces su conducta obliga á perder toda esperanza en su favor, por ejemplo, cuando el marido es adúltero en la casa conyugal, cuando es concubinario, etc. Propone, en consecuencia, se diga: *El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio. El del marido lo es solamente cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1ª Que el adulterio haya sido cometido en la casa común. 2ª Que haya habido concubinato entre los adúlteros dentro ó fuera de la casa conyugal. 3ª Que haya habido escándalo ó insulto público á la mujer legítima. 4ª Que la adúltera haya dado maltrato ó sido causa de que se dé á la mujer legítima.*

(1) *Proyecto*, art. 76, fr. 2ª
(2) Art. 21, fr. V.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esta redaccion es aceptada y queda como art. 153 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que respecto de la segunda causa mencionada por el art. 152, ya aprobado, es necesario consignar en el Código alguna explicación, pues la prostitución de la mujer por el marido puede revestir diversas formas. Entiende que todas las hipótesis se satisfacen, diciendo: *La propuesta del marido para prostituir á su mujer es causa de divorcio, no solo cuando le haya sido hecha directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero ó cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro seduzca ó tenga relaciones ilícitas con su mujer.*

El Sr. Mendez dice que no le parece completo el pensamiento, si no se agrega que dicha causa de divorcio dejará de serlo en caso de que las relaciones ilícitas de la mujer, aunque procuradas por el marido, lleguen á ser una realidad, pues, culpable la mujer, aunque por incitación del marido, no puede aprovecharse de su propia falta. En esta virtud propone se adicione la situación del Sr. Lacunza con las siguientes palabras: "Pero si la mujer llegó á tener las relaciones ilícitas, dicha propuesta dejara de ser causa de divorcio."

Ambas redacciones son aprobadas; pero en el arreglo posterior del nuevo Código y supuesto el art. 159 de que se hablará después, la adición del Sr. Mendez queda como sigue: *Pero si la mujer llegó á tener las relaciones ilícitas, se aplicará lo dispuesto en el art. 159.* Ambas redacciones forman el art. 154 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone que, para ampliar, ó mejor dicho, explicar la anterior causa de divorcio, se diga algo respectivo á la propuesta del marido para inducir á su mujer á que cometa algún otro delito, fuera de la prostitución.

Así indica la siguiente idea: *También será causa de divorcio el que el marido induzca ó pretenda obligar á la mujer á cometer algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal.*

La redacción es aceptada y queda como art. 155 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza dice que, con respecto á la causa tercera, de las mencionadas para motivar el divorcio, considera necesario hacer una aclaración. En efecto, el conato del marido ó de la mujer para corromper á los hijos debe ser causa de divorcio, ya sea que los hijos sean comunes ó de uno sólo de los cónyuges. Se ha hablado también de connivencia en la corrupción de los mismos hijos, y el que habla entiende que esa connivencia debe manifestarse por hechos positivos que la hagan indubitable, sin que basten, para motivar el divorcio, las simples sospechas

El Sr. Escudero manifiesta su conformidad con la primera de las aclaraciones anteriores; pero respecto de la segunda, dice que convendría hacerla extensiva al conato directo del marido ó de la mujer para corromper á los hijos, pues también en este punto, si no se exigen actos positivos de corrupción, se corre el riesgo de tomar por tal meras apariencias ó inocentes omisiones.

El Sr. Lacunza cree que no es tan necesario, como supone el Sr. Escudero, aclarar el punto de la corrupción directa de los hijos, pues cualquiera comprende que se trata de hechos claros, que no dejan lugar á duda sobre la intención del corruptor. No así tratándose de la connivencia, que, trae á la mente la idea de simple disimulo ó tolerancia y también de confabulación ó complicidad con extraños, acerca de lo cual sí pueden asaltar dudas antes de decidir. El que habla propone la siguiente redacción, que en su concepto satisface todas las exigencias: *El co-*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nato del marido ó de la mujer para corromper á los hijos es causa de divorcio, sea que los hijos sean comunes ó de uno solo de ellos: la connivencia debe ser por actos positivos, sin que sean causa de divorcio las simples omisiones.

Esta redacción es aceptada y queda como art. 156 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza expone que otra de las causas de divorcio que conviene explicar es la séptima, ó sea la relativa á la acusación falsa hecha por un cónyuge al otro. El que habla entiende que, pedido el divorcio por adulterio, si resulta que esta causal no fué probada, el cónyuge demandado ó acusado en su caso debe tener derecho á solicitar por su parte también el divorcio, aunque convendría fijar un plazo, *verbi gratia*, el de cuatro meses desde la notificación de la sentencia definitiva, para intentar la acción, expresándose que, durante ese tiempo, la mujer no podría ser obligada á vivir con su marido.

El Sr. Ramírez manifiesta que la causa que se trata de explicar es la de acusación y no de simple demanda. Parece que la Comisión, al aprobar la frac. 7.ª del art. 152, se fijó en que si la primera es motivo suficiente para el divorcio, no así la segunda, por importar un menor agravio y no convenir multiplicar las causas de desunión entre los cónyuges. El que habla, pues, propondría á la Comisión la siguiente fórmula: "Cuando un cónyuge ha acusado al otro de adulterio, sevicias, injurias graves ó de cualquiera de las causas legítimas de divorcio, y no ha podido probarlas, el acusado absuelto puede, si quiere, pedir el divorcio por este motivo de acusación; pero no puede intentar esa acción sino pasados cuatro meses después de la notificación de la sentencia: durante estos cuatro meses la mujer no puede ser obligada á vivir con su marido."

El Sr. Méndez encuentra que la causal que se está tratando debe comprender no sólo la acusación sino también la demanda, y ambas, no sólo éste ó aquel motivo, sino todas las causas de divorcio ó todos los delitos, pues como acaba de reconocerlo el Sr. Ramírez, aun la simple demanda importa un agravio, si bien menor, que la acusación.

El Sr. Escudero expresa, de acuerdo con el Señor Méndez, que debe también incluirse en el artículo que se está discutiendo, la demanda por nulidad del matrimonio.

El Sr. Teran (Ministro de Justicia) comisiona al Sr. Escudero para que dé forma á su pensamiento.

El Sr. Escudero propone la siguiente redacción: *Cuando un cónyuge haya pedido la nulidad del matrimonio ó el divorcio por una causa que no haya justificado, ó que haya resultado insuficiente, ó acusado judicialmente á su cónyuge, el cónyuge* acusado ó contra quien se pretendió la nulidad ó divorcio, *tiene en cualquiera de estos casos causa legítima para pedir el divorcio; pero no puede intentar esta acción sino pasados cuatro meses de la notificación de la última sentencia. Durante estos cuatro meses, la mujer no puede ser obligada á vivir con su marido.*

El Sr. Lacunza propone se substituya la frase "el acusado ó contra quien se pretendió la nulidad ó divorcio" por la simple palabra: *el demandado.*

El artículo es así aprobado y queda como 157 del nuevo Código.

El Sr. Ramírez manifiesta que, aprobada ya por la Comisión la causal para el divorcio, que se contiene en la fracción 8.ª del art. 152, cree necesario se insista sobre ella, limitándola al caso en que expresamente se haya pac-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tado alguna cláusula bajo la condición de pedir el divorcio, si tal cláusula no se cumpliere. Así propone se diga ahora: *Cuando en las capitulaciones matrimoniales se haya pactado expresamente alguna cláusula, bajo la condición de pedir el divorcio si no se cumpliere, su violación será causa legítima de divorcio.*

El Sr. Lacunza cree que, limitada así la causa de que se trata, pierde todo su carácter y aun asume un aspecto inmoral, pues importa un pacto previo entre los consortes sobre su futura separación.

Sin embargo, la redacción del Sr. Ramírez es aprobada y queda como art. 158 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone se quite la acción de divorcio por adulterio al que esté convicto de haber cometido igual delito, pues como decía Ulpiano: *periniquum enim videtur esse est pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat* (1), doctrina que el Cristianismo recogió (2) y que pasó á nuestras leyes patrias (3). Así podría repetirse la declaración de la ley de 23 de Julio de 1859, art. 21 fracción I, diciéndose: *El adulterio no será causa precisa de divorcio cuando el que la invoca es convencido de haber cometido igual delito.*

El Sr. Escudero manifiesta que á esa redacción, con la cual está de entero acuerdo, sería bueno agregar, siempre en consonancia con la ley de 23 de Julio de 1859 (art. y frac. cits.) la siguiente frase: *ó ha inducido al adulterio al que lo cometió.*

El Sr. Méndez dice que en Francia se ha discutido mucho sobre si la excepción de compensación contra la ac-

(1) *Dig.* lib. 48, tít. 5, l. 12.
(2) Can. *Nihil iniquius*, cap. 32, quest. 6.
(3) *Fuero Real*, lib. 4, tít. 7, l. 4.

ción de divorcio es siempre eficaz, habiéndose llegado al acuerdo de que en este punto lo más conveniente es referirse á la discreción del Juez, después de establecer el principio. Así propone á la Comisión termine el artículo que se discute con estas palabras: *pero queda á discreción del Juez otorgarlo ó no.*

El artículo, con ambas adiciones, es aprobado y queda como 159 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 93]: «El mutuo consentimiento de los cónyuges no es causa de divorcio, ni autoriza su voluntaria separación.»

El Sr. Escudero solicita la supresión de este artículo, pues él cierra la puerta á multitud de casos en que habiendo serios motivos para la separación de los cónyuges, éstos acuden al remedio del mutuo consentimiento para no revelarlos al público, lo que significa, no que aquellos falten, sino que el pudor tal vez y las conveniencias sociales impiden exponerlos en un escrito ante los tribunales.

El Sr. Lacunza está por el mantenimiento del artículo, pues el divorcio por mutuo consentimiento y sin expresión de causa, pertenece á la época de mayor relajación de costumbres en Roma, cuando considerado el matrimonio como cualquier contrato y no como base de la familia y de la sociedad, se le aplicaba el principio: *nihil tam naturale est, quam eo génere quidque dissolvere, quo colligatum est*, sin comprender que si bien es cierto que el consentimiento forma las nuptias, el deber las mantiene con lazos indisolubles, cuyo aflojamiento no puede autorizar la ley sino en casos extremos, después de perfectamente conocidos y analizados por la autoridad judicial. Así Justiniano y con él todo el Derecho Canónico son opuestos á esa manera de separación entre los cónyuges [1], respecto de

(1) Cap. *Significat de Divortiis.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

a cual decía Pothier: "La mujer no puede obtener la separación de habitación sino por una sentencia del Juez, dada con perfecto conocimiento de causa. Una acta otorgada entre notarios, en la cual una mujer expusiera todos los hechos por los cuales pide la separación, y en la que el marido, por su parte, reconociera la verdad de tales hechos, y aún consintiera en la separación, sería un acto absolutamente nulo, que no produciría ningún efecto. Siendo el compromiso del matrimonio formado por el mismo Dios, resulta, no solamente que es indisoluble, sino que no debe ser permitido á las partes que lo han contraído, atentar de manera alguna á los efectos que debe producir, á no ser por grandes causas, cuyo valor debe ser examinado y reconocido por el Juez (1)."

El Sr. Escudero insiste en la supresion del artículo, á reserva de poner después ciertas restricciones y condiciones á la separación por mutuo consentimiento, pues, repite, esa causal es el signo de grandes y hondos motivos que se tiene el pudor de no querer revelar ante los tribunales. Napoleón 1°. confesaba que deben autorizar el divorcio solo las causas admitidas por el Código. Pero ¡qué desgracia, decía, será verse forzado á exponerlas y á revelar hasta los detalles más íntimos y secretos del interior del hogar! En el sistema del Código, el consentimiento mutuo no es la *causa* del divorcio, sino un *signo* de que el divorcio se ha hecho necesario." De estas ideas resultó el art. 233, que ha venido después á ser abolido por el 307, según el espíritu de la ley de 16 de Mayo de 1816. El que habla se ha manifestado conforme con que no se enumere el mutuo consentimiento entre las causas del divorcio, porque realmente no lo es, pues la verdadera causa se ocultará siempre por los esposos; pero quiere que, á semejanza del art. 233 francés se reglamente y organice esa facultad para los cónyuges. Agrega que no se trata de una mera sepa-

(1) Pothier, *Traité du contrat de Mariage*, núm. 517.

ración de hecho, sino siempre mediante la intervención de la autoridad, á la cual tan sólo no se le da á conocer el motivo de la separación.

El Sr Terán (Ministro de Justicia) llama la atención de la Comisión sobre que nuestra ley de 23 de Julio de 1859 nada contiene sobre el punto que se discute, por manera que es una novedad lo propuesto por el Sr. Escudero, al menos en México, donde siempre nos hemos regido por el principio canónico: *separatio non sine lege, et processu, et ratione facta* (1). Hace notar, además, que autorizando la separación voluntaria de los cónyuges, se corre el riesgo de que éstos la verifiquen por causas fútiles, por disenciones ó altercados pasajeros que, bien analizados en un juicio, resultarían ineficaces.

El Sr. Méndez manifiesta que, en rigor, no es una novedad el divorcio por mutuo consentimiento ni aun entre nosotros, pues siempre ha habido separaciones de hecho en los matrimonios mal avenidos, y de lo que ahora se trata es de reglamentarlos, legalizando una situación que no tiene carácter alguno definido en el orden del derecho y de las relaciones, tanto de los esposos entre sí, como con los hijos y con los bienes. No cree, como el señor Ministro de Justicia, que causas fútiles lleven á los cónyuges á solicitar su separación, pues ellas serán bastantes para disgustos pasajeros; pero no para apartarlos completamente el uno del otro, fuera de que, para evitar ese mal, que es meramente posible, puede la Comisión, al reglamentar el divorcio voluntario, imponer al Juez ante quien se presente la solicitud, el deber de exhortar á los consortes para que no se separen.

Sujeto á votación el art. 93 del *Proyecto* es reprobado por mayoría.

— —

(1) Can. *Quod Deus conjunxit*, 18, caus, 33, quest. 2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr Terán (Ministro de Justicia) comisiona al Sr. Escudero para que proponga la redacción que ha de substituir al artículo reprobado.

El Sr. Escudero propone la siguiente: *Cuando ambos esposos convengan en divorciarse en cuanto al lecho y habitación, no podrán verificarlo sino acudiendo por escrito al Juez y en los términos que expresan los artículos siguientes.*

El Sr. Méndez pide se adicione esa redacción con lo siguiente: *En caso contrario, aunque vivan separados, se tendrán como si viviesen unidos, para todos los efectos legales del matrimonio.*

Ambas redacciones son aprobadas y quedan como artículo 160 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone el siguiente artículo: *El divorcio por mutuo consentimiento no tiene lugar después de veinte años de matrimonio, ni cuando la mujer tenga cuarenta y cinco años ó más.* El proponente dice que es el art. 277 del Código Civil francés, cuyo principal motivo hacen consistir los comentadores en la inconveniencia de separar uniones ya de largo tiempo bien cimentadas.

La proposición del Sr. Escudero es aprobada y queda como art. 160 del nuevo Código.

El Sr. Escudero dice que es necesario establecer cómo han de quedar los hijos y la administración de los bienes, después de la separación voluntaria de los cónyuges, y durante la tramitación. Naturalmente, tratándose de divorcio voluntario, en cuya solicitud no se expresa causa determinada para la separación, el legislador no puede tomar como base para determinar aquella situación, la inocencia ó culpabilidad de los cónyuges, como en el divorcio necesario. Hay, pues, que referirse también en esto á la voluntad de los cónyuges, en todo lo que no sea contrario á la ley. El que habla entiende que satisfaría á todos estas exigencias la redacción siguiente: *Los esposos que pidan de conformidad la separación de lecho y habitación, acompañarán á su petición una escritura de arreglo del modo cómo han de quedar, durante el tiempo de la separación, los hijos y la administración de los bienes. Esta escritura podrá ser aprobada por el juez, ó reprobada si encuentra que viola los derechos actuales de los hijos. Igualmente sujetarán á la aprobación de éste el modo provisorio con que deben vivir, mientras se resuelva definitivamente sobre su pretensión.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 162 del nuevo Código.

El Sr. Escudero manifiesta que estima conveniente poner al divorcio voluntario una taxativa que la prudencia aconseja, aunque sea posible que su razón de ser esté en algunos casos desmentida por la realidad: la de que el divorcio de que se trata no pueda ser solicitado sino después de dos años de matrimonio, pues generalmente al principio de la vida conyugal sucederá que los esposos tomen por causas graves para separarse las que no son sino disgustos insignificantes y pasajeros. Así propone se diga: *Esta pretensión no puede hacerse sino pasados dos años del matrimonio.*

La proposición es aceptada y queda como art. 163 del nuevo Código.

El Sr. Escudero expone que, como antes lo expresó al defender el divorcio voluntario (1), conviene que el

(1) Véase *supra*, págs. 165 y 166.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

juez no defiera fácilmente á su pretensión, sino que procure por medio de exhortaciones á los cónyuges traerlos á la reconciliación. En consecuencia propone se diga: *Una vez presentada la solicitud el juez citará á los cónyuges á una junta en que procurará inducirlos á su reunión voluntaria, y si no la lograre, aprobará el arreglo provisorio con las modificaciones que crea oportunas, y diferirá una nueva junta para de allí á tres meses.*

La proposición es aceptada y se incorpora al artículo anterior 163.

El Sr. Escudero propone lo siguiente: *Pasados los trer meses, á petición de los cónyuges ó de alguno de ellos tendrá otra junta, en que les exhortará de nuevo á la reunión; si no se lograre, dejará pasar aun otros tres meses, y si al fin de ellos alguno de los cónyuges pidiere que se apruebe el convenio de separación, lo hará, aprobándolo ó reprobándolo á su discresión, según entienda que se han conservado ó no los derechos de los hijos ó de otros terceros interesados, y que la voluntad de los consortes es libre y resuelta á separarse.—Esta sentencia admite apelación y los recursos que se conceden en los juicios de mayor interés*

El Sr. Méndez propone se prevea el caso en que ninguno de los cónyuges se presente á solicitar la convocación de la nueva junta El que habla entiende que, sucediendo eso en cualquiera de los plazos, y pasados quince días después del cumplimiento de cualquiera de ellos, deben de correr de nuevo, pues el designio en esta materia tiene que ser, por parte de la autoridad, lograr el avenimiento de los cónyuges. En consecuencia propone se agregue al artículo propuesto por el Sr. Escudero la siguiente parte: *Si pasados los plazos de tres en tres meses en que los cónyuges deben agitar, no lo hacen en los quince días siguientes al cumplimento del plazo, pierden éste, y el juez lo hará correr de nuevo.*

Ambas redacciones son aprobadas y quedan como art. 164 del nuevo Código.

El Sr. Méndez pide se determine la situación de los hijos del matrimonio y la de los bienes respecto de terceros, durante la tramitación del divorcio voluntario. En concepto del que habla, y ya que la escritura de arreglo á que se refiere el art, 162 no puede producir efecto, ni entre los cónyuges, de una manera definitiva, sino hasta que la sentencia de separación haya causado ejecutoria, debe expresarse así, diciéndose que sólo deberán observarse los arreglos provisorios en cuanto á los cónyuges y á los hijos; pero sin hacer extensiva esta declaración á los extraños.

El Sr. Ramírez indica que aun á los arreglos provisorios sería convenientes fijarles un plazo, *verbi gratia*, el de seis meses, para que surtieran efecto en orden á los cónyuges y á los hijos.

El Sr. Méndez manifiesta que la fijación de cualquier plazo tendría el inconveniente de hacer volver las personas y las cosas á una condición incompatible con el desacuerdo de los cónyuges, que dura aun después de aquél, y que todavía está tramitándose. Entiende que los arreglos provisorios deben ser una ley para los cónyuges y los hijos que les están sometidos, salvándose toda dificultad con expresar que no sucede lo mismo respecto de terceros. Para mayor claridad de su idea, propone se diga: *Mientras no cause ejecutoria la sentencia que se pronuncie sobre la separación, no podrá ejecutarse; observándose sólo los arreglos provisorios, los cuales no producen efecto respecto de terceros.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La redacción es aprobada y queda como art. 165 del nuevo Código.

El Sr. Escudero expone, que, independientemente de la voluntad de los cónyuges, hay necesidad de limitar el tiempo de la separación, siempre con la mira de que los matrimonios no se desunan. A este efecto entiende que sería eficaz, ya que no sea posible forzarlos á la reconciliación, establecer que, pasado cierto plazo, la separación cesa de producir efecto, aunque los cónyuges continúen, de hecho, desunidos. Propone en consecuencia se diga: *La sentencia que apruebe la separación de lecho y habitación, le fijará un plazo como se lo hayan fijado las partes, el que no excederá de tres años; concluidos éstos, el matrimonio se entiende reunido, por sólo el lapso del tiempo para todos los efectos civiles, aunque los cónyuges continúen de hecho viviendo separados, y cesa la escritura de arreglo de producir obligación, así respecto de los mismos cónyuges como de los hijos y de cualquiera otra persona. En todo tiempo los cónyuges son libres para de común acuerdo hacer cesar la separación.*

El Sr. Ramírez observa que el plazo de tres años, como puede ser suficiente, puede resultar también corto, según las circunstancias, por lo que opina que lo más prudente sería dejar toda libertad al juez para que, en vista de la gravedad ó insignificancia de los disgustos domésticos, fijase la duración de la separación en cada caso.

Sin embargo de esta observación, es aprobada la proposición del Sr. Escudero y queda como artículo 166 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 94): *La demencia, la enfermedad declarada contagiosa ó cualquiera otra calamidad semejante de uno de los cónyuges, no autoriza el*

divorcio; pero podrá el juez con conocimiento de causa, y sólo á instancia del otro cónyuge, suspender breve y sumariamente en cualquiera de dichos casos la obligación de cohabitar, quedando, sin embargo, subsistentes las demás obligaciones para con el esposo desgraciado.

La Comisión, tomando en cuenta las reflexiones hechas por los Sres. Lacunza y Ramírez, al proponerse esta causa de divorcio (1), aceptan el art. del *Proyecto*, que pasa á ser el 167 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 95): *El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa á él.*

El Sr. Lacunza propone se adicione este artículo con la siguiente frase: *y dentro del año en que hayan acaecido los hechos en que se funda la demanda*, pues entiende que hay ya un perdón tácito de parte del cónyuge ofendido por el hecho de dejar transcurrir ese tiempo, sin presentarse á los tribunales.

El Sr. Méndez manifiesta que es muy puesta en razón la idea del Sr. Lacunza; pero cree que quedaría mejor expresada si dijese, en vez de *acaecido*, «llegado á su noticia.»

El Sr. Lacunza contesta que es justa la observación del Sr. Méndez; pero innecesario expresarla, porque se sobreentiende.

El artículo con la adicción, queda aprobado y pasa á ser el 168 del nuevo Código

---

Proyecto Sierra (art. 96): «La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de divorcio y deja sin

(1) Véase *supra*, págs. 155, 157 á 158.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

efecto ulterior la ejecutoria dictada en él; pero los interesados deberán ponerla en conocimiento del tribunal que entiende en la causa, si aún se está instruyendo.»

El Sr. Lacunza manifiesta que los mismos conceptos del *Proyecto* pueden expresarse en la siguiente forma, que le parece más clara: *La reconciliación de los cónyuges deja sin efecto ulterior la ejecutoria que declaró el divorcio. Pone también término al juicio si aún se está instruyendo; pero los interesados deberán ponerla en conocimiento del Tribunal, sin que la omisión de esta noticia destruya los efectos producidos por la reconciliación.*

Esta redacción es aceptada y queda como 169. del nuevo Código.

Proyecto Sierra (atr. 97): "*La ley presume la reconciliación* cuando el marido cohabita con su mujer después de haber dejado el domicilio común."

El Sr. Lacunza cree que, siendo el voto de la sociedad en toda esta materia, facilitar por cuantos medios sean posibles la reconciliación de los cónyuges, ésta no debe limitarse al regreso del marido al hogar doméstico. Así propone se diga, en vez de la frase: «cuando el marido cohabita, etc.,» *cuando ha habido cohabitación posterior entre los cónyuges.*

El artículo, enmendado en tales términos, es aprobado y queda como 170 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto Sierra* hace punto omiso, á propósito de la reconciliación, de un derecho concedido, desde las leyes romanas y respetado por las canónicas, al cónyuge inocente en materia de divorcio. Ese derecho consiste en el desistimiento de la ac-

ción intentada, del cual debe ser resultado la obligación por parte del cónyuge culpable de volver á reunirse con aquél, según la regla: *quod ob gratiam alicujus conceditur, non est in ejus dispendium retorquendum.* Del mismo modo decía el Angel de las escuelas: *Quod inducitur in favorem alicujus, non facit ei præjudicium. Unde cum divortium fit inductum in favorem viri, non aufert ei jus petendi debitum, vel revocandi uxorem. Unde uxor tenetur ei reddere, et ad eum redire, si fuerit revocata; nisi de licentia ejus votum continentiæ emiserit* (1). En consecuencia propone se diga: *El conyuge que no ha dado causa al divorcio, puede, aun después de ejecutoriado éste, prescindir de sus derechos y obligar al que dió causa á reunirse con él: mas hecho esto, no puede pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el antiguo, aunque sí por otros nuevos, aun de la misma especie.*

La redacción es aceptada y queda como art. 171 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 98): *Al admitirse la demanda de divorcio, ó antes si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo mientras dure el juicio las disposiciones siguientes:*

1ª Separar á los cónyuges en todo caso.

2ª Depositar en casa de honor á la mujer, si el marido lo pidiere y hubiere causa suficiente para ello.

3ª Poner á los hijos al cuidado de uno de los cónyuges, ó de los dos, observándose lo dispuesto en los artículos 99 y 100.

4ª Señalar.... alimentos á la mujer y á los hijos que no queden en poder del padre.

---

(1) D. Thom. *Summ. Theol.* Q. 62, art. 6.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

5.ª *Dictar las medidas convenientes para que el marido, como administrador de los bienes del matrimonio, no cause perjuicio á la mujer*, si ésta pide el divorcio.

6.ª *Decretar en su caso las precauciones que el Código establece respecto de las mujeres que queden en cinta.*

El Sr. Lacunza encuentra muy vaga la expresión de uno de los motivos para decretar la medida provisional del depósito de la mujer casada, pues decir que ella se verificará cuando "hubiere causa suficiente para ello" da lugar á su depósito, aún siendo de todo punto inocente en el juicio de divorcio, es decir, aún siendo ella quien lo demande. Gollena, de cuyo *Proyecto* [art. 81] tomó el Sr. Dr. Sierra el artículo propuesto, reconoce esta misma vaguedad, que el que habla entiende deber y poder corregirse en la la sencilla forma siguiente: «*si se dice que ella es culpable en la causa alegada para el divorcio, y el marido lo pidiere.*

En cuanto á la 4.ª medida, el mismo señor Lacunza pide se agregue la palabra *asegurar*, pues seguramente no ha de bastar el señalamiento de alimentos, cuando se trate de otorgarlos en calidad de urgentes.

Con estas modificaciones y substituyéndose los arts. 99 y 100 que se citan en el inciso 3 con los que corresponden en el nuevo Código (1), el artículo del *Proyecto* es aprobado y queda como 172 de aquel.

El Sr. Lacunza propone se diga: *En los juicios de divorcio son admisibles como testigos aún los parientes y domésticos de los cónyuges, reservando al Juez la fe que deba dárseles según las circunstancias.* Es la consagración de la doctrina constante en las Partidas (2).

(1) Son los 174 y 175.

(2) L. L. 15, 16, 17, 18, 19 y 20, tít. 9, Partida 4.

El Sr. Ramírez manifiesta que el artículo estaría mejor en la ley de procedimientos.

Sin embargo de esta observación, la redacción del Sr, Lacunza es aprobada y queda como art. 173 del nuevo Código.

Proyecto Sierra. [art. 99]: *Ejecutoriado el divorcio, quedarán los hijos ó se pondrán bajo el poder y protección del cónyuge no culpable; pero si ambos lo fueren, se proveerá á los hijos de tutor. Los hijos menores de tres años se mantendrán hasta que cumplan esta edad al cuidado de la madre, á no ser que el Tribunal, por justas causas, disponga otra cosa.*

La Comisión acepta este artículo, que queda como 174 del nuevo Código por los fundamentos y motivos que menciona Gollena en su *Proyecto*, del cual está tomado. (1)

Proyecto Sierra.—(art. 100) *Sin embargo de lo dispuesto* en los dos artículos anteriores, *los tribunales podrán acordar, á pedimento de los abuelos, tíos ó hermanos mayores de los hijos, cualquiera providencia que se considere beneficiosa á éstos.*

El Sr. Lacunza pide se substituya la frase «en los dos artículos anteriores» con ésta: *en el artículo anterior*, para guardar la debida relación con el art. 172, inciso 3, ya aprobado.

Así se hace y el artículo del *Proyecto* queda como 175 del nuevo Código.

Proyecto Sierra.—(art. 101): *El padre y la ma-*

(1) Sobre el art. 82.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dre quedan sujetos á todas las obligaciones que tienen para con sus hijos, aunque pierdan la patria potestad.

El artículo es aprobado y queda como 176 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 102): *El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo su poder y derechos sobre las personas y bienes de sus hijos, mientras vive el cónyuge inocente; pero los recobrará muerto éste, si el divorcio se ha declarado por las causas 1ª y 2ª señaladas en el art. 92. En los demás casos se les proveerá de tutor á la muerte del padre ó madre inocentes.*

El Sr. Lacunza pide se reforme el artículo en el sentido del aumento de causas para el divorcio, según el art. 152 ya aprobado, pues conforme á ese texto hay otras causas de divorcio aparte de las aludidas por el *Proyecto Sierra*, que no son incompatibles con el recobro de la patria potestad por el cónyuge culpable, una vez muerto el inocente. Así, propone se diga: *por las causas 1ª, 2ª, 6ª, 7ª y 8ª señaladas en el art. 152* (1).

El artículo es aprobado con esta enmienda y queda como 177 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 103]: *El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado ó prometido por su consorte ó por otra persona en consideración á éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho.*

El artículo es aprobado y queda como 178 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que en el *Proyecto* nada

(1) Véase *supra*, pág. 154.

se dice con respecto á la situación en que queda la mujer, tanto por lo que hace á sus bienes propios, como respecto de su capacidad jurídica, después de pronunciada la sentencia definitiva de divorcio. En consecuencia, propone se diga: *El divorcio ejecutoriado hace volver á cada consorte sus propios bienes, y habilita á la mujer para contraer y litigar sobre los suyos, sin licencia del marido.*

La redacción es aprobada y queda como art. 179 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 104): "La culpabilidad del marido que da causa al divorcio determina el derecho de la mujer para pedir alimentos."

El Sr. Lacunza manifiesta que, en su concepto, hay injusticia en que la mujer continúe recibiendo alimentos del marido, si deja de vivir honestamente después del divorcio. Así propone que la idea del *Proyecto* se redacte como sigue: *La culpabilidad del marido en el divorcio determina el derecho de la mujer para exigir la continuación de los alimentos mientras viva honestamente, aunque ella no haya llevado bienes al matrimonio.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 180 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 105): «Cuando sea la mujer culpable del divorcio por cualquiera causa, conservará el marido la administración de los bienes del matrimonio y dará alimentos á su mujer.»

El Sr. Lacunza hace observar que la generalidad del *Proyecto* en este punto entraña una injusticia que, en su concepto, debe evitarse á todo trance: la de que el marido esté obligado á dar alimentos á la mujer culpable, aún de adulterio y que no había llevado ningunos bienes al ma-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

trimonio. Propone, en consecuencia, se establezca una taxativa en este sentido, diciéndose que el marido, en tal hipótesis, no debe dar alimentos á la esposa adúltera.

El Sr. Escudero indica que la idea del Sr. Lacunza es muy justa y debe expresarse, dejando en libertad al marido para que dé ó no los alimentos, como juez único de su propia honra ofendida.

El Sr. Ramírez manifiesta que, para evitar una contradicción con lo ya dicho en el art. 179, debe aclararse más de lo que lo está en el Proyecto, á qué bienes se refiere la administración del marido, pues se supone que los propios de la mujer ya volvieron á ella, después de la ejecutoria del divorcio.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) comisiona al Sr. Lacunza para que redacte el artículo en el sentido de las observaciones hechas.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción: *Cuando sea la mujer culpable del divorcio por cualquiera causa, conservará el marido la administación de los bienes gananciales comunes del matrimonio, y dará alimentos á su mujer; pero si ella fué culpable del divorcio por adulterio y no hubiere llevado bienes al matrimonio, el marido será libre para darle ó no alimentos.*

La redacción es aprobada y queda como art. 181 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo: *La muerte de una de los cónyuges, acaecida durante el pleito de divorcio, pone fin á él en todo caso, y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que si no hubiera habido pleito.*

El artículo es apobado y queda como 182 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone también se diga: *En todo juicio de divorcio las audiencias serán secretas, y se oirá al Ministerio Público.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 183 del nuevo Código.

CAPITULO VI.

De los matrimonios nulos y de los ilícitos.

El Sr. Lacunza manifiesta que el título anterior es preferible al del *Proyecto* que se discute: "De la disolución y nulidad del matrimonio," pues comprende casos en que á pesar de la infracción legal, razones de moralidad y orden público obligan á mantener el matrimonio.

Proyecto Sierra [art. 106]: "El matrimonio válido sólo se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges."

El Sr. Ramírez propone la supresión de este artículo por expresar la misma idea contenida en el art. 99 ya aprobado.

Queda suprimido.

El Sr. Lacunza manifiesta que, suprimido el artículo del *Proyecto* por repetir un principio ya establecido al definir el matrimonio, conviene empezar el presente capítulo con una definición de la materia de que se va á tratar. Propone en consecuencia se diga: *Es matrimonio nulo el que se ha contraído con alguno de los impedimentos que se expresan en el artículo siguiente. La nulidad..... hace que el matrimonio se tenga como no contraído, y los que se decían cónyuges, quedan enteramente libres aun*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

para contraer otro matrimonio . . . . para enumerar después las causas de nulidad.

El Sr. Escudero hace notar que la nulidad de que va á tratarse requiere muy especialmente ser declarada por los tribunales, no produciendo entre tanto ningún efecto. En esta virtud propone se incluya en la redacción del Sr. Lacunza, después de la palabra "nulidad" esta frase: *después de declarada por los tribunales*.

El Sr. Ramírez indica también que, como la nulidad de que se trata, no puede envolver á los hijos y á los bienes del matrimonio, sino en cierto sentido, convendría de una vez formular una salvedad. Así, propone que se agregue, al fin de la redacción del Sr. Lacunza, esta frase: *salvas las obligaciones que se expresarán respecto de los hijos y bienes.*

La redacción del Sr. Lacunza, con las adiciones expuestas, es aprobada y queda como art. 184 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción: Son impedimentos que, cuando existen al tiempo de contraerlo, disuelven el matrimonio:

1.º La edad menor de dieciocho años en el hombre, ó de quince en la mujer al tiempo de casarse.

2º. La falta de consentimiento de los ascendientes; pero no el de los tutores.

3.º El parentesco de consanguinidad ó afinidad determinado en los arts. 111, 112, 113 y 114, si no ha habido dispensa.

4.º El error en la persona de uno de los cónyuges.

5º La fuerza ó el miedo que da causa al consentimiento.

6.º El vínculo de otro matrimonio anterior subsistente.

7.º El crimen de homicidio en los términos de los arts. 119 y 120.

8.º La falta de celebración en los términos del art. 101.

El Sr. Escudero propone se cambie la primera parte de la redacción por la siguiente frase, más en harmonía con la materia á que está destinado el capítulo: *Son causas de nulidad las siguientes:*

El Sr. Ramírez observa que en la enumeración anterior de las causas de nulidad no están comprendidas todas las mencionadas en el capítulo I, salvo que vayan á considerarse como de mera ilicitud, con lo que desde luego no está de acuerdo, por ejemplo, el matrimonio de los adúlteros, el de los locos.

El Sr. Méndez entiende que cualquier laguna podría llenarse, añadiendo un nuevo inciso á la redacción del Sr. Lacunza, *vervigratia: 9.ª Las demás determinadas en el capítulo I de este título como prohibiciones absolutas.*

La redacción propuesta por el Sr. Lacunza, con la reforma y adición mencionadas, se aprueba y queda como art. 185 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra [art. 107]: "Desde que se presente en los tribunales una demanda por nulidad de un matrimonio, el Juez procederá á practicar lo que dispone el art. 98 respecto de las demandas de divorcio.

La Comisión acuerda reservar este artículo para después, entendiendo que primero tienen que definirse las causas de nulidad que la requieran.

———

Proyecto Sierra [art. 108]. "Contra el matrimonio verificado sin el libre consentimiento de ambos cónyuges, ó del uno de ellos, no puede ponerse demanda de nulidad, sino por los cónyuges mismos ó por el que de ellos no tuvo libertad en su consentimiento.

Reservado para más adelante.

———

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra [art. 109]: "Cuando ha habido error en la persona no puede pretenderse la nulidad del matrimnio, sino por el cónyuge que padeció el error."

El mismo acuerdo.

———

Proyecto Sierra [art 110]: "Contra el matrimonio verificado sin el consentimiento de los padres, abuelos ó tutores respectivamente, no puede decirse de nulidad sino por aquellos cuyo consentimiento es requerido, ó sólo por el cónyuge que tenía necesidad de tal consentimiento.

Igual acuerdo.

———

Proyecto Sierra [art. 111]: "La nulidad de un matrimonio no puede intentarse, ni por los cónyuges, ni por los parientes ó tutores cuyo consentimiento era necesario, siempre que el matrimonio haya sido expresa ó tácitamente aprobado por aquellos mismos cuyo consentimiento se exige, ó cuando ha pasado un año después que supieron el matrimonio sin hacer por su parte reclamación alguna. Tampoco puede intentarse por el cónyuge, siempre que haya pasado un año sin reclamar después que llegó á la edad competente para consentir por sí mismo en el matrimonio."

Ibidem,

———

Proyecto Sierra (art. 112) "De todo matrimonio contraido antes de la edad núbil, de catorce y doce años respectivamente, del segundo contraido antes de disolverse el primero, del que resultare celebrado en línea recta entre ascendientes y descendientes legítimos, naturales ó afines en la propia línea sin dispensa, del celebrado entre hermanos legítimos, naturales ó afines en la propia línea sin dispensa, y también del contraido sin la misma dispensa entre tio y sobrina, tia y sobrino, puede pedirse la nulidad por

los cónyuges mismos, y por cuantos tienen interés en él y por el oficio público."

Ibidem.

———

Proyecto Sierra (art. 113): "Sin embargo, el matrimonio celebrado por quienes no tenían á la sazón la edad competente, ó de los cuales uno no había llegado á esta edad, no puede ser dicho de nulidad cuando han pasado seis meses después que el uno ó los dos llegaron á la edad señalada por la ley; ni cuando la mujer que no tenía esta edad ha concebido antes de haberse pasado seis meses.»

El Sr. Lacunza manifiesta que los dos últimos artículos del *Proyecto* deben reformarse en cuanto á la edad núbil, ya establecida por la Comisión al aprobar el art. 103 (1) y respecto de la pertenencia de la acción de que se trata. El que habla entiende que la nulidad por falta de edad no debe ser reclamada sino por el esposo menor, único á quien realmente puede interesar la disolución de un acto, que importaba para él el abuso de su inexperiencia y acerca del cual ha venido á desengañarse.

El Sr. Ramírez no opina del mismo modo y está por que se mantenga el pensamiento del art. 112 del *Proyecto*, que es el mismo del art. 184 del Código Francés, pues indudablemente la ley exige cierta edad para el matrimonio por razones de orden público y de interés social.

El Sr. Méndez manifiesta que no debe confundirse la causa de nulidad que ahora ocupa á la Comisión con otras que importan una grave inmoralidad y hasta un verdadero delito, como el incesto ó la bigamia. De éstos sí cree que puede afirmarse lo dicho por el Sr. Ramírez; pero no de la falta de edad, que necesariamente cesa con el transcurso del tiempo y puede así ser subsanada.

(1) Vèase *supra* pág. 107.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Escudero expone que le parece excesivo el plazo de seis meses que el *Proyecto* señala para que ya no pueda invocarse esta causa de nulidad, si aquel transcurre después de la edad núbil. En su concepto, bastan dos meses.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) invita al Sr. Lacunza para que redacte el artículo.

El Sr. Lacunza propone la siguiente redacción: *La edad menor de diez y ocho años en el hombre y de quince en la mujer, cesará de ser causa de nulidad:*

1.º Cuando llegado el menor á la edad señalada no reclama dentro de dos meses la nulidad y continúa cohabitando con el otro cónyuge.

2.º Cuando antes de llegar á la edad ha habido concepción de prole.

Sólo puede deducir nulidad por esta causa el mismo menor, si no existe alguna de dichas excepciones.

La redacción es aprobada y queda como art. 186 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 114): «El padre, la madre, los ascendientes y los tutores que consintieron en el matrimonio contraído en el caso del artículo anterior, no pueden ser admitidos á demandar su nulidad.»

Se conviene en retirar este artículo por haberse aprobado el anterior.

Proyecto Sierra (art. 115): "En todos los casos en que según el art. 112 puede intentarse la acción de nulidad por todos los que tienen interés en ella, no puede hacerse por los parientes colaterales, ni por los hijos de otro matrimonio en vida de los dos cónyuges, sino en el caso en que hayan probado previamente su interés, claro y actual en la demanda."

Se acuerda retirar igualmente este artículo por contener excepciones incompatibles con el verdadero interés en materia de nulidad del matrimonio.

El Sr. Lacunza, refiriéndose á los arts. 110 y 111 del *Proyecto*, manifiesta que la causa de nulidad de que tratan (falta de consentimiento de los padres, abuelos ó tutores) no debe ser accesible, sino al ascendiente cuyo consentimiento no se solicitó para contraer matrimonio. Permitir que pueda ser invocada aun por el cónyuge que omitió recabar ese consentimiento, es sancionar el dolo. El que habla entiende, además, que supuesto que la Comisión no enumeró esta formalidad entre los requisitos necesarios para el matrimonio, sino á fin de robustecer la autoridad paterna, debe, ahora que se trata de su sanción, limitar el artículo á los ascendientes, sin hacerlo extensivo á los tutores, contra los cuales la desobediencia no aparece tan grave. Propone, por tales razones, se diga: *La nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes, sólo puede deducirse por el ascendiente á quien tocaba prestarlo, y dentro de un año después de que tenga conocimiento del matrimonio. Cesa esta causa de nulidad:*

1º Cuando ha pasado el año sin que se haya pedido la nulidad.

2º Cuando aún durante él, el ascendiente ha consentido expresa ó tácitamente en el matrimonio, como sucedería dotando á la hija ó haciendo donación al hijo para el matrimonio, recibiendo á los consortes á vivir en su casa, ó presentando la prole como legítima al registro civil ó practicando otros actos que á juicio del Juez sean tan claros como los expresados.

Esta redacción es aprobada y queda como art. 187 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza, refiriéndose al art. 112 del *Proyec-*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

to en orden al impedimento de parentesco, dice que lo encuentra incompleto, pues si bien es cierto que por su texto se deja entender que el parentesco en grado no dispensable anula radicalmente el matrimonio, al contrario de lo que sucede si ha podido haber la dispensa, nada se dice del caso en que aquella sobrevenga después de contraído el matrimonio. Propone, en consecuencia, se diga: *El parentesco de consanguinidad ó afinidad no dispensado anula el matrimonio; pero si después se obtuviere la dispensa y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, quieren espontáneamente repetir su consentimiento, lo que se hará por un acta ante el oficial del estado civil, quedará, después de extendida la acta, revalidado el matrimonio, y surtirá todos sus efectos civiles desde el día en que se contrajo primeramente.*

El Sr. Méndez pide se agregue á la anterior redacción lo que sin duda la completa, á saber, declaración de las personas que pueden invocar esta causa de nulidad. En concepto del que habla, ella no debe permitirse á los extraños sino sólo á los parientes y entre éstos sólo á los cónyuges mismos y á los ascendientes, pudiendo seguirse también de oficio, pues aunque en el particular se trata, á no dudarlo, de un interes social, conviene evitar el escándalo y el deshonor de las personas, principalmente de los hijos. Así propone se diga: *Esta causa de nulidad puede deducirse por cualquiera de los cónyuges, por los ascendientes de éstos y también de oficio.*

Ambas redacciones son aprobadas y quedan como art. 188 del nuevo Código.

———

El Sr. Lacunza, refiriéndose al art. 109 del *Proyecto*, manifiesta que la generalidad de sus términos está clamando por una exposición más precisa de la idea que expresa, pues no se sabe de qué error se trata, si del que recae sobre las cualidades ó del que tiene por objeto la persona físicamente determinada. Como esta materia ha dado en todo tiempo margen á las más vivas discusiones, propone se explique en el nuevo Código hasta con minuciosidad. Al efecto, indica la siguiente redacción: "*El error en la persona anula el matrimonio, sólo cuando entendiendo un cónyuge contraer con tal persona física determinada, ha contraído con otra. Pero si la persona es la misma físicamente, aunque por dolo ú otro motivo, el otro cónyuge haya creído ó sido inducido á creer que tenía cualidades de cualquiera clase, que después resulte no tener, no se anulará el mataimonio,* excepto en los dos casos siguientes: 1.º Si uno de los cónyuges tenía la calidad de casado en un matrimonio anterior subsistente; 2.º Si tenía la calidad de impotente para la cópula, siendo la impotencia incurable y reconocida evidentemente por la sola inspección de peritos. En los casos referidos, como excepción, el matrimonio es nulo. Esta causa de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge engañado."

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) manifiesta que es muy justo el deseo del Sr. Lacunza de poner la mayor claridad en esta delicada materia, que efectivamente en todo tiempo ha suscitado vivas controversias, lo mismo en el Derecho Canónico que en el Civil moderno. Sin embargo, el Ministro entiende que esa claridad no debe pecar por repeticiones y redundancias, que más bien servirían para opacarla, si no es que para inducir á confusiones y desaciertos en la práctica. Dice esto porque recuerda que la Comisión aprobó ya el art. 117 (1), que es literalmente el 60 del *Proyecto* y cuyo sujeto no es otro que el error como incompatible con el consentimiento en el matrimonio. Luego lo único por hacer ahora es determinar la clase de error que nulifica el matrimonio, para lo cual bastará decir lo que dice el Sr. Lacunza en la primera parte de la redacción propuesta.

El Sr. Lacunza expone que esa primera parte no

———

(1) Véase *supra* págs. 125 á 126.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

basta, en su concepto, para conjurar dudas, pues se contiene en el Antiguo Derecho sin que haya servido para evitarlas, habiendo intérpretes que definen la persona por sus cualidades.

El Sr. Escudero dice que, á su juicio, debe suprimirse la primera excepción contenida en la redacción propuesta por el Sr. Lacunza, porque importa una declaración innecesaria, ya que es bien sabido cómo no puede contraerse matrimonio, mientras subsiste un vínculo anterior.

El Sr. Ramírez pregunta por qué no se dice lo mismo respecto de la segunda excepción.

El Sr. Escudero contesta que cree haber entendido el pensamiento del Sr. Lacunza, al considerar el error sobre la capacidad física para la cópula, si reune ciertas condiciones, como el único que, aunque relativo á una cualidad, es bastante para anular el matrimonio.

El Sr. Méndez manifiesta que la Comisión no ha de haber olvidado que no se enumera la impotencia entre los impedimentos para el matrimonio, en el nuevo Código, que se ha inspirado, sin duda, para esta materia, en las doctrinas de los autores del Código Francés (1). Pero ahora se trata de tomarla en cuenta, apoyada, ademas, con la circunstancia del error acerca de ella.

El Sr. Ramírez dice que eso equivale á reconocer siempre la impotencia como impedimento dirimente.

El Sr. Terán comisiona al Sr. Méndez para que redacte el artículo.

El Sr. Méndez presenta la siguiente redacción: *El error en la persona anula el matrimonio, sólo cuando entendiendo un cónyuge contraer con persona determinada lo ha contraído con otra. Pero si la persona es la misma físicamente aunque por dolo ú otro motivo el otro cónyuge haya creído ó sido inducido á creer que tenía cualidades de cualquiera clase, que después resulte no tener, no se anulará el matrimonio, excepto en el caso de que tenga, en el momento de contraerlo, la cualidad de impotente para la cópula, y la impotencia sea incurable, y reconocible evidentemente por la sola inspección de peritos. Esta causa de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge engañado.*

(1) Tronchet, *Proces verbal du 14 thermidor* an X.—Merlin, *Rep.* «Impuissance» núm. 2.

La redacción es aceptada y queda como art. 189 del nuevo Codigo.

El Sr. Lacunza, refiriéndose al art, 108 del *Proyecto*, dice que aunque este texto habla de la falta de consentimiento en el matrimonio, sus términos necesitan precisarse en relación con el art. 121 del nuevo Código, pues no cualquier violencia ó fuerza bastan para producir la nulidad. El que habla entiende que desde luego puede asentarse la regla de que aquellas han de ser del mismo carácter é intensidad que las que producen igual efecto en todos los contratos. Llama también la atención de la Comisión sobre que no es necesario que la fuerza ó violencia se ejerzan directamente sobre el cónyuge, bastando para producir la nulidad del matrimonio, que ello suceda sobre personas ligadas con aquel por fuertes lazos de afecto y respeto Pero, como es debido poner y expresar un límite en orden á estas personas para no ampliar demasiado esta causa de nulidad, el exponente se fija tan solo en los padres. Propone, en consecuencia, esta redacción: *La fuerza ó miedo para anular el matrimonio debe ser tal como se requiere para la nulidad de los contratos. Ha de haber sido inferido al cónyuge ó á sus padres con el objeto de contraer el matrimonio, y ha de haber subsistido al tiempo de celebrarse éste.* En ella se comprende el caso de rapto en los términos del art. 116. *Esta causa de nulidad solo puede deducirse por el cónyuge que padeció la fuerza en sí mismo ó en sus padres dentro de los dos meses siguientes á la fecha en que cesó.*

El Sr. Escudero manifiesta que no ve la necesidad

de que se diga que en la fuerza de que se trata se comprende el rapto, pues claro está ser así, después de lo ya expresado en el art. 116.

El Sr. Lacunza retira la frase relativa, quedando sin ella aprobado el artículo como 190 del nuevo Código.

— —

Proyecto Sierra (art. 116): "El cónyuge en cuyo perjuicio se haya contraído un segundo matrimonio, puede pedir su nulidad aun en vida del cónyuge que estaba enlazado con él; pero si los nuevos cónyuges oponen la nulidad del primer matrimonio, ante todos casos se ha de resolver la nulidad ó validez de este matrimonio."

El Sr. Lacunza manifiesta que este artículo y el 112 del *Proyecto* se refieren al vínculo de un matrimonio anterior, subsistente como causa de nulidad del que se contraiga después. El que habla entiende que, ya establecido por el art. 105, que no puede contraerse segundo matrimonio mientras no se disuelva el primero ó se declare nulo, no hay necesidad sino de determinar la naturaleza de la acción á que esta causa de nulidad da lugar, y pocas pueden presentarse que ameriten la acción popular y el oficio del Juez en el grado que ésta. En consecuencia, el exponente pide á la Comisión que, fundiendo en una sola las declaraciones contenidas en dichos dos artículos del *Proyecto* se sirva aceptar la siguiente redacción: *El vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste, aunque se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el anterior consorte había muerto.* Esta causa de nulidad puede deducirse por cualquiera á cuya noticia haya llegado el doble matrimonio.

El Sr. Ramírez manifiesta que no le parece conveniente dar acción popular con motivo de esta causa de nulidad, pues equivaldría á provocar el escándalo. Basta concederla al oficio del Juez.

El Sr. Escudero dice que, en su sentir, hay necesidad de expresar con toda claridad á quienes corresponde la acción, é indudablemente los primeros interesados son los cónyuges de uno y otro matrimonio.

El Sr. Méndez cree que los hijos del primer matrimonio deben ser llamados al ejercicio de la acción de nulidad contra un matrimonio que los perjudica.

El Sr. Terán (Ministro de Justicia) no está por esa amplitud dada á la acción en el caso especial de que se trata, pues precisamente el aguijón del mayor interés es lo que debe huirse, para no provocar sin motivo cierto y justificado y sí tan sólo por odios y malas pasiones, litigios escandalosos en contra del matrimonio. Cree que todo se consigue mediante la siguiente fórmula: *Esta causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del matrimonio primero, por los cónyuges que contrajeron el segundo y por el juez de oficio.*

La redacción del Sr. Lacunza, con esta adición, es aprobada y queda como art. 191 del nuevo Código.

— —

Proyecto Sierra (art. 117): "Todo matrimonio que no haya sido contraido públicamente ante el oficial encargado por la ley de presenciarlo, puede ser impugnado por los mismos cónyuges, por sus padres, ascendientes y cúantos en él tengan interés actual, así como por el Ministerio Público, que pedirá las penas que la ley señala contra el encargado del Registro Civil por cualquiera falta ú omisión de su parte en llenar las formalidades exigidas, declárese ó no la nulidad del matrimonio."

Proyecto Sierra (art. 118): «Ninguno puede reclamar el título de cónyuge y los efectos civiles del matrimonio, si no presenta el acta de su celebrcción sentada en el Registro Civil; excepto en los casos prevenidos en el art. 43.»

El Sr. Lacunza expone que hay que poner la redacción de la idea contenida en los dos anteriores artícu-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

los en la relación con la terminalogía empleada sobre esta materia en el nuevo Código. Dichos artículos están inspirados en los 191 y 192 del Código Francés, y, como éstos, comprenden puntos extraños á la materia de que se trata. Así, el que habla entiende que la siguiente sencilla redacción podría admitirse. "*La falta de celebración en los términos del art. 101 anula el matrimonio: sólo puede probarse éste por la copia del acta del registro civil la cual es esencial para la validez del matrimonio.* En caso de pérdida de los libros del registro ó parte de ellos, único caso en que el matrimonio puede probarse por testigos, para que éstos formen prueba deben precisamente declarar que el matrimonio se celebró y que se extendió la acta respectiva conforme á dicho artículo. *Esta causa de nulidad puede deducirse por los cónyuges, por cualquiera que tenga interes en probar que no hay matrimonio y por el juez de oficio.*"

El Sr. Méndez se permite indicar la supresión de la segunda parte de la redacción anterior, por estar comprendido en el art. 48 ya aprobado.

Así lo acepta la Comisión y, suprimida dicha segunda parte, queda aprobada la redacción propuesta por el Sr. Lacunza como art. 192 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 119): "La actual posesión de estado no podrá dispensar á los pretendidos cónyuges, que respectivamente la aleguen en su favor, de la obligación de producir ante el oficial del Registro Civil la partida del matrimonio."

Suprimido, por estar su idea comprendida en el artículo anterior.

Proyecto Sierra (art. 120): "Cuando hay posesión de estado y se presenta la partida de matrimonio ante el

encargado del registro civil, no puede admitirse á los cónyuges la demanda de nulidad contra dicha partida."

El Sr. Méndez indica, en lugar de esa redacción, la siguiente: *No puede admitirse á los cónyuges la demanda de nulidad contra el acta de matrimonio celebrado ante el oficial del registro civil, cuando á la existencia del acta se une la posesión de estado matrimonial.*

La redacción es aceptada y queda como art. 193 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 121): "Sin embargo, si en los casos de los arts. 118 y 119 hubiese hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer y ámbos hubieren fallecido, ó por ausencia ó enfermedad les fuese imposible manifestar el lugar en que se casaron, no puede disputarse á los hijos su legitimidad por sólo la falta de presentación de la partida de matrimonio, siempre que se pruebe esta legitimidad por la posesión de estado, á la cual no contradiga la partida de nacimiento."

El Sr. Escudero dice que, aunque este artículo, tomado del 197 francés, guarda la misma colocación que tiene en el *Proyecto Sierra*, le parece fuera de lugar, pues no se está tratando de las pruebas de la legitimidad de los hijos, sino de las causas de nulidad de matrimonio. En consecuencia, pide la supresión de dicho texto, y su reserva para el título siguiente.

Esta observación es atendida.

El Sr. Méndez manifiesta que, antes de seguir recorriendo el articulado del *Proyecto Sierra*, quiere proponer á la Comisión tres artículos que le ha sugerido el estudio de esta materia.

Es el primero el siguiente: *El matrimonio, una vez contraido, tiene á su favor la presunción de ser válido, y*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sólo en virtud de la ejecutoria de los Tribunales competentes, puede tenerse por nulo. La mente de este artículo no es otra que la expresada por Duranton: "Cuando un matrimonio, dice este sabio comentador del Código Francés, es atacado, como contraido con menosprecio de las disposiciones de la ley, es necesario hacer pronunciar su nulidad. El matrimonio no es nulo de pleno derecho, cualesquiera que sean los vicios de que está infectado: hay un título público y auténtico, cuyo efecto es necesario aniquilar, y las partes á quienes se aplican no podrían constituirse en sus propios jueces. El vicio de que ellas tienen que quejarse hace solamente nacer una cuestión que debe ser sometida á los tribunales, encargados de aplicar el derecho al hecho alegado: éstos son los únicos apreciadores de los caracteres de ese hecho, competentes para decidir si, en el espíritu de la ley, aquél produce una nulidad del matrimonio y si esta nulidad no está cubierta. Así es que, trazando las condiciones requeridas para el matrimonio, el legislador habría sin duda dejado imperfecta su obra, si, en seguida, no hubiese agregado, como sanción, la pena de nulidad por la inobservancia de ellas; pero también, no dando en todos los casos á sólo los tribunales el poder de aplicar esta pena, habría abandonado el matrimonio á la discreción de aquellos para quienes ya no fuese sino un yugo importuno, y de este modo habría entregado con frecuencia á la avidez de los colaterales el estado de los hijos y la tranquilidad de la familia." (1)

El Sr. Escudero se manifiesta de acuerdo con la proposición del Sr. Méndez, la cual encuentra clara y perfectamente bien establecida en el Derecho Canónico, como lo demuestra la institución del *Defensor de matrimonios*, para defender en todo caso y siempre en el curso de un juicio contradictorio, la validez del acto. (2) Cree que á esa proposición debe agregarse otro principio, igualmente con-

(1) Duranton, tom. 1, núm. 850.
(2) Bula de Benedicto XIV "Dei miseratione."

tenido en el Derecho Canónico y acogido por el Civil Patrio (1): *Acerca de la nulidad no hay lugar á transacción de los cónyuges ni á compromiso en árbitros.*

Ambas proposiciones son aceptadas, y juntas forman el art. 194 del nuevo Código.

El Sr. Méndez dice que el segundo artículo que propone á la Comisión es el siguiente: *El juicio de nulidad de matrimonio es civil ordinario, y admite todos los recursos que se conceden por las leyes en los juicios de mayor interés. Aun cuando no se apele habrá segunda instancia. El Ministerio Público será oido en este juicio. Si en él hubiere incidencia criminal, el juez mismo que conoció de la nulidad formará la causa correspondiente é impondrá la pena.* Los motivos de este precepto, dice el proponente, son dar á la controversia sobre la nulidad de un matrimonio la mayor posible amplitud, lo cual se consigue solamente en el juicio civil ordinario y con todos los recursos establecidos por la ley, con más el de revista forzosa. La intervención del Ministerio Público, en esta materia, es reclamada por el interés social que siempre se versa en ella. En cuanto á no deber formarse incidente criminal si surge en el juicio civil, para que de él conozca la jurisdicción respectiva, el que habla lo encuentra suficientemente motivado por la consideración de que no conviene entorpecer la marcha de la contienda judicial sobre la nulidad del matrimonio, y porque ya la intervención del Ministerio Público garantiza que en el juicio civil se cuidará el interés social, factor principal en los procesos, sin necesidad de ir á la justicia penal especial.

El artículo es aprobado y queda como 195 del nuevo Código.

---

(1) *Decretales*, cap. 11, *De transact.*—Cap. 9, *De in integrum rest.*—Sánchez, *De matrim.*, lib. 2, disput. 14. núm. 1.—*Partida* 3, tít. 4, l. 24.—

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Méndez dice que el tercer artículo que propone á la Comisión es el siguiente: *El derecho para demandar la nulidad del matrimonio no corresponde sino á los que la ley lo da expresamente, y no es transmisible por herencia ni de cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda de nulidad entablada por aquel á quien heredan.* El proponente manifiesta que la primera parte de este artículo tiene toda su justificación en la naturaleza misma de las acciones de nulidad de que se ha tratado en los textos legales ya aprobados, pues, al expresar cada uno de ellos que la nulidad del matrimonio puede ser reclamada, en tales y cuales casos, por éstas ó aquellas personas, ha tomado en consideración el interés individual, y muy justo es que cuando éste calla, los matrimonios conserven la validez que no han querido quitarles los interesados. La segunda parte del artículo no es sino la reproducción de la vieja máxima romana. *Omnes actiones quæ morte vel tempore pereunt, judicio semel inclusæ, salvæ manent*, aceptada en la materia por Duranton y Delvincourt, intérpretes autorizadísimos del Código Civil Francés. (1)

El Sr. Escudero se manifiesta de acuerdo con las ideas expresadas por el Sr. Méndez; pero para evitar el equívoco á que daría lugar no decir claramente que ellas rezan tan sólo con las nulidades relativas, propone la siguiente redacción: "Cuando la persona que tiene el derecho de deducir la nulidad de un matrimonio dentro de un plazo limitado, muere dentro de él sin haberlo deducido, aquel derecho se extingue y no pasa á los herederos ni á otra persona alguna, á menos que á las personas que quieran deducirlo les corresponda el derecho de hacerlo por sí propias."

Se prefiere lo propuesto por el Sr. Méndez, que queda como art. 196 del nuevo Código.

---

(1) Duranton, tom. 1, núm. 858.—Delvincourt, tom. 1, *sur* l'art. 330.

Proyecto Sierra (Art. 122): "Ejecutoriada la sentencia de nulidad de un matrimonio se enviará copia certificada al respectivo encargado del registro civil para que ponga la nota y asiento correspondientes."

El Sr. Lacunza dice que, como lo ve la Comisión, el *Proyecto*, omiso en muchos puntos de detalle relativos al registro civil, según ya se hizo notar en su oportunidad (1), necesita ser ampliado en el presente y á tal efecto propone que, en vez de la anterior redacción, se acepte la siguiente: *Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad de un matrimonio, enviará el tribunal de oficio copia autorizada de la sentencia al oficial encargado del registro civil, ante quien pasó el matrimonio, para que al margen del acta ponga nota, expresando que el matrimonio fué declarado nulo en tal fecha, por tal Tribunal, según el documento número tantos, que será la copia autorizada que colocará en su archivo.*

La redacción es aceptada y queda como art. 198 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 123): "*El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles*, así en favor de los cónyuges como de sus hijos..... *Si ha intervenido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, surte únicamente efectos civiles respecto de él y de los hijos* de este matrimonio. *La buena fe en estos casos se presume, si no consta lo contrario.*"

El Sr. Lacunza encuentra aceptable la redacción del artículo, pues no es sino la exposición de los principios tan conocidos sobre el matrimonio putativo.

El Sr. Escudero opina lo mismo; pero cree que dicha redacción es susceptible de mayor claridad, pues entiende que los efectos del matrimonio de que se trata á fa-

---

(1) Véase *supra* pág. 61.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

vor de los cónyuges han de ser sólo por lo que hace al tiempo que aquel ha durado y no para después. Respecto de los hijos, el que habla desearía también que se expresase que dichos efectos se producen en favor de los hijos nacidos antes, durante el matrimonio y diez meses después, ó sea atento el tiempo máximo de la vida intrauterina, según la regla hipocrática. Propone, en consecuencia, se diga: en favor de los cónyuges, *mientras dura, y para siempre á favor de los hijos nacidos antes, durante él y diez meses después.*

El artículo del *Proyecto*, así adicionado, es aceptado y queda como 198 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza, refiriéndose al art. 107 del *Proyecto* (1), llama la atención de la Comisión sobre que la idea constituye una novedad, opuesta á nuestro Derecho Patrio, como es de verse en la ley 1ª, tit. 13, Partida 4, glosa 6 de Gregorio López; pero indudablemente muy abonada por consideraciones de moralidad y conveniencia de los hijos.

El Sr. Méndez así lo cree también; pero entiende que las medidas provisionales á que el texto del *Proyecto Sierra* se refiere, deben restringirse al caso en que la nulidad del matrimonio fuese solicitada por uno de los cónyuges ó por ambos, no por otro motivo que porque esa circunstancia deja ya fuera de duda, como en el divorcio, la falta de acuerdo entre los consortes y el deseo de uno de ellos, cuando menos, de desligarse del vínculo matrimonial. En cuanto á los hijos y á la moralidad de que el Sr. Lacunza hace mérito, el que habla entiende que nada tienen que padecer por la continuación de la vida conyugal á pesar del litigio sobre nulidad, porque ya la Comisión ha aprobado por indiscutibles razones de justicia los arts. 194 y 198, que disipan toda duda sobre el particular. Propone, en consecuencia, se diga: *Si la demanda de nulidad fuese instaurada por uno de los cónyuges, se dictarán desde luego las medidas provisionoles del art. 172.*

(1) Véase *supra* pág. 183.

La redacción es aprobada y queda como art. 199 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone el siguiente artículo, cuya justicia es patente: *La sentencia de nulidad no surte efecto retroactivo respecto de los contratos celebrados por terceros de buena fe.*

El artículo es aceptado y queda como 200 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 124): *Ejecutoriada la nulidad del matrimonio, quedarán los hijos varones, mayores de tres años, al cuidado del padre, y las hijas al cuidado de la madre, si de parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe. Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo, quedarán bajo su poder y cuidado los hijos de ambos sexos. Los hijos é hijas menores de tres años se mantendrán en todo caso, hasta que cumplan esta edad, al cuidado de la madre.*

El artículo, que es el 94 del Proyecto de Gollena, es aprobado y queda como 201 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 125): *La mujer no puede contraer segundo matrimonio, sino hasta pasados trescientos días, después de la disolución del primero. En los casos de nulidad, puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.*

El artículo es aceptado y queda como 202 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza dice que con el artículo anterior termina el *Proyecto Sierra* el capítulo sobre nulidad de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

matrimonio. Mas como la Comisión ha aceptado intitular el suyo: *De los matrimonios nulos é ilícitos*, comprendiendo que no todas las infracciones de ley en esta materia deben ameritar la nulidad, es llegado el momento de tratar de los segundos, pues el que habla entiende no poderse decir más respecto de los primeros. El procedimiento para esto no puede ser más sencillo, reduciéndose á un trabajo de mera selección: todo lo que no amerite la nulidad es causa de ilicitud en el matrimonio: Así el que habla propone á la Comisión el siguiente artículo: *Hacen ilícito el matrimonio; pero no lo anulan, las circunstancias siguientes:*

1º Haber sido contraído mientras está pendiente la decisión sobre un impedimento denunciado. Si se probare la existencia del impedimento dirimente, habrá lugar á la nulidad.

2º La falta de consentimiento del tutor.

3º La falta de publicaciones no dispensadas, ó de cualquiera solemnidad no comprendida en el art. 101.

4º La falta de transcurso del tiempo entre la disolución del matrimonio anterior y el nuevo matrimonio.

En cualquiera de estos casos se impondrá una multa de cincuenta á tres mil pesos, ó de uno á treinta meses de prisión á los contrayentes, y á los que resulten culpados, incluso el oficial del registro civil.

El artículo es aceptado y queda como 203 del nuevo Código.

Después de promulgada la ley de 1.º de Noviembre de 1865, la Comisión Revisora del *Proyecto Sierra* incluyó en el Código del Imperio los siguientes:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS SOBRE EL MATRIMONIO.

Art. 204. Por ahora los matrimonios celebrados por la Iglesia reconocida como religión del Estado, surtirán los efectos civiles, siempre que reunan las condiciones siguientes:

1º Que no tengan contraído los cónyuges otro matrimonio anterior, ó puramente civil, ó según cualquier culto.

2º Que sean de la edad prescripta en el art. 103.

Art. 205. El Gobierno se reserva conceder el mismo favor que el artículo anterior concede á los matrimonios contraídos según la religión del Estado, á los que se contraigan con arreglo á las prescripciones de otros cultos que fueren reconocidos, si lo estimare conveniente.

Art. 206. El matrimonio eclesiástico no surte efectos civiles mientras no esté registrado; pero los cónyuges están obligados á registrarlo dentro de ocho días de su celebración con arreglo á las prescripciones de la ley, bajo pena de doscientos á mil pesos de multa, ó de dos meses á diez de prisión.

El registro se verificará sin solemnidad previa, por sólo la presentación del certificado del párroco, que se copiará en el libro del registro civil, sin otra averiguación por parte del oficial de éste, ni admitir oposición alguna que no sea sobre los dos puntos expresados en el artículo 204.

En caso que hayan pasado los ocho días, todavía podrá registrarse el matrimonio; pero se exigirá la multa ó impondrá la prisión.

En cualquier tiempo en que el matrimonio se registre, se retrotraerá el efecto del registro, de modo que los efectos civiles se entenderán producidos desde el día en que se contrajo el matrimonio eclesiástico. Después de la muerte de uno de los cónyuges, no puede registrarse el matrimonio.

Art. 207. En los matrimonios en que los dos cónyuges pertenezcan á una religión cuyos matrimonios estén autorizados conforme al art. 205 por el Gobierno, y que permita el divorcio en cuanto al vínculo, podrá verificarse este conforme á las disposiciones de dicha religión.

Art. 208. En general, si los cónyuges cuyo matri-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

monio religioso haya sido reconocido por el Estado, pertenecen á distintos cultos, el divorcio se regirá por las leyes del culto con arreglo al que se contrajo el matrimonio; y si se hubiere celebrado conforme á los dos cultos, por el que sea más favorable á la indisolubilidad del matrimonio.

Art. 209. En los casos de divorcio de que hablan los artículos anteriores, la condición y derecho de los hijos se sujetarán á lo prescripto respecto de ellos en este capítulo.

TITULO V.

De la Paternidad y Filiación.

CAPITULO I.

De los hijos legítimos.

Proyecto Sierra (art. 126): Se presumen legítimos los hijos nacidos *después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos siguientes á su disolución. Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han procedido al nacimiento.*

El Sr. Escudero pide que para mayor claridad del concepto expresado por la anterior redacción, que está de acuerdo con el art. 312 del Código Francés y 101 del Proyecto de Gollena, se substituyan las primeras palabras con las siguientes: *Se presumen hijos legítimos de los dos cónyuges los nacidos*, etc., etc.

La enmienda es aprobada y el artículo queda como 210 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que es necesario llenar una laguna muy notable en el *Proyecto* que se discute y de que adolecen también el Código Francés y el Proyecto de Gollena. Se refiere á la naturaleza de las presunciones que el artículo que acaba de aprobarse establece, y á sus efectos en caso de litigio sobre la legitimidad. ¿Son esas presunciones *juris et de jure?* ¿La legitimidad que ellas apoyan existe hasta contraria declaración de una sentencia ejecutoria? Evidentemente el *mínimum* y *máximum* de la preñez que se reconocen, son extremos de indiscutible verdad que la legislación civil debe aceptar de acuerdo con la experiencia médica, y para tener una base fija sobre que descansar en materia tan delicada como la presente. Pero eso no basta, tratándose de la legitimidad y en orden á determinada persona, porque las enfermedades, la ausencia y el adulterio pueden desmentir la regla romana: *pater est quem nuptiæ demonstrant.* ¿Qué hacer en este conflicto? No queda para resolverlo sino acogerse al principio que el Derecho Canónico, inspirado en altas miras de justicia estableció y fijó para siempre: *In favorem prolis potius inclinamus* (1). El antiguo Derecho tomó este principio, que se ve enunciado en estos términos: *In dubio prœvaleat ergo favor partus.* La legitimidad, en consecuencia, del hijo nacido después de ciento ochenta días de celebrado el matrimonio ó dentro de los trescientos posteriores á su disolución, constituye un derecho de ese hijo, que no puede ser privado de él sino por una sentencia ejecutoria y después del juicio correspondiente, como que la presunción está en su favor hasta la prueba en contrario. Así, el que habla propone lo siguiente: *En las cuestiones de legitimidad de un hijo nacido durante el matrimonio ó antes de los trescientos días posteriores, la presunción está a favor de la legitimidad, y para destruirla, el que la niega debe probar plenamente la imposibilidad de que sea hijo del mari-*

---

(1) *Decretales, cap. ex tenore—qui filii sint legitimi.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

monio religioso haya sido reconocido por el Estado, pertenecen á distintos cultos, el divorcio se regirá por las leyes del culto con arreglo al que se contrajo el matrimonio; y si se hubiere celebrado conforme á los dos cultos, por el que sea más favorable á la indisolubilidad del matrimonio.

Art. 209. En los casos de divorcio de que hablan los artículos anteriores, la condición y derecho de los hijos se sujetarán á lo prescripto respecto de ellos en este capítulo.

TITULO V.

De la Paternidad y Filiación.

CAPITULO I.

De los hijos legítimos.

Proyecto Sierra (art. 126): Se presumen legítimos los hijos nacidos *después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio y dentro de los trescientos siguientes á su disolución. Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han procedido al nacimiento.*

El Sr. Escudero pide que para mayor claridad del concepto expresado por la anterior redacción, que está de acuerdo con el art. 312 del Código Francés y 101 del Proyecto de Gollena, se substituyan las primeras palabras con las siguientes: *Se presumen hijos legítimos de los dos cónyuges los nacidos*, etc., etc.

La enmienda es aprobada y el artículo queda como 210 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que es necesario llenar una laguna muy notable en el *Proyecto* que se discute y de que adolecen también el Código Francés y el Proyecto de Gollena. Se refiere á la naturaleza de las presunciones que el artículo que acaba de aprobarse establece, y á sus efectos en caso de litigio sobre la legitimidad. ¿Son esas presunciones *juris et de jure?* ¿La legitimidad que ellas apoyan existe hasta contraria declaración de una sentencia ejecutoria? Evidentemente el *mínimum* y *máximum* de la preñez que se reconocen, son extremos de indiscutible verdad que la legislación civil debe aceptar de acuerdo con la experiencia médica, y para tener una base fija sobre que descansar en materia tan delicada como la presente. Pero eso no basta, tratándose de la legitimidad y en orden á determinada persona, porque las enfermedades, la ausencia y el adulterio pueden desmentir la regla romana: *pater est quem nuptiæ demonstrant.* ¿Qué hacer en este conflicto? No queda para resolverlo sino acogerse al principio que el Derecho Canónico, inspirado en altas miras de justicia estableció y fijó para siempre: *In favorem prolis potius inclinamus* (1). El antiguo Derecho tomó este principio, que se ve enunciado en estos términos: *In dubio prœvaleat ergo favor partus.* La legitimidad, en consecuencia, del hijo nacido después de ciento ochenta días de celebrado el matrimonio ó dentro de los trescientos posteriores á su disolución, constituye un derecho de ese hijo, que no puede ser privado de él sino por una sentencia ejecutoria y después del juicio correspondiente, como que la presunción está en su favor hasta la prueba en contrario. Así, el que habla propone lo siguiente: *En las cuestiones de legitimidad de un hijo nacido durante el matrimonio ó antes de los trescientos días posteriores, la presunción está a favor de la legitimidad, y para destruirla, el que la niega debe probar plenamente la imposibilidad de que sea hijo del mari-*

---

(1) *Decretales, cap. ex tenore—qui filii sint legitimi.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

do. El hijo continúa en posesión de la legitimidad hasta que haya sentencia ejecutoria en contra.

El Sr. Ramírez manifiesta que, á su juicio, toda cuestión de legitimidad, ya se trate de hijo nacido antes del *mínimum* de la preñez, ora después del *máximum* de la misma y á contar, en el primer caso, desde la celebración del matrimonio, como, en el segundo, desde su disolución, debe plantearse, considerándose al hijo en posesión de aquel derecho y no teniéndolo por privado de él sino hasta la sentencia última y definitiva. Para opinar así, invoca, además de los textos citados por el Sr. Lacunza, la discusión á que dió lugar el art. 315 del Código Francés, en la cual dijo Duveyrier, orador del Tribunado: «¿Por qué tal hijo no es de derecho ilegítimo y puesto en el número de los hijos naturales? *Porque todo interés particular no puede ser combatido sino por un interés contrario. La ley no está llamada á reformar lo que ignora*, y si el estado *del hijo no es atacado*, queda al abrigo del silencio que nadie está interesado en romper.»

Sin embargo de estas observaciones, la redacción del Sr. Lacunza es aprobada y queda como art. 211 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra [art. 127] *El marido no podrá alegar como causa de imposibilidad física su impotencia anterior al matrimonio; pero si la posterior con tal que no se funde en su vejez; ni desconocer á los hijos por causa de adulterio de la madre, aunque ésta declare contra la legitimidad.*

El Sr. Ramírez manifiesta que en su concepto debe suprimirse toda la primera parte de la anterior redacción, relativa á la impotencia del marido, concomitante con la celebración del matrimonio, porque una de dos: ó esa impotencia es causa de nulidad del matrimonio, como ya lo ha reconocido, aunque indirectamente; pero en términos

que no consienten duda, la Comisión (1), ó no lo es. Si lo primero, va á resultar con la aprobacicn del artículo del *Proyecto Sierra*, que la causa, bastante para anular un matrimonio, es insuficiente para determinar la ilegitimidad del hijo que de ese matrimonio se dice proceder, no obstante la estrecha y necesaria liga que la naturaleza ha establecido entre esa causa y el efecto que se le niega. Si no lo es, resulta lógico el artículo del *Proyecto*; pero debe la Comisión apresurarse á volver sobre sus pasos y modificar lo anteriormente establecido. Insiste en que lo más acertado y prudente sería suprimir toda esa primera parte del texto á discusión para evitar el escollo que señala. Cita, por último, las siguientes palabras de Gollena, con motivo del art. 102 de su *Proyecto*, del cual el Sr. Dr. Sierra tomó el que se discute: «Si ésta (la nulidad) llega á declararse, el hijo necesariamente será ilegítimo, porque no puede serlo de quien prueba y es declarado impotente antes y después de contraer matrimonio.»

El Sr. Lacunza contesta que es incontrovertible la observación del Sr. Ramírez, como que está fundada en la naturaleza misma; pero su señoría olvida que á pesar de ella, lo mismo que de todas las causas de nulidad del matrimonio, la Comisión ha aceptado la teoría del matrimonio putativo (2), en virtud de la cual y por especial favor á los hijos, éstos se consideran siempre como legítimos, no obstante la nulidad. El mismo Sr. Gollena, citado por el Sr. Ramírez, después de reconocer la contradicción que se hace notar y que el jurisconsulto español veía entre el Derecho Canónico y el Civil, dice: «De desear fuera la armonía de ambos derechos en este punto; pero como la legitimidad para los efectos civiles pende exclusivamente de la ley civil y como los arts. 48 y 90 son concesiones de gracia y de política, ha parecido conveniente esta modificación parcial

———

(1) Véase *supra*, págs. 188 á 191.
(2) Véase *supra*, págs. 199 á 200.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

en una de sus consecuencias » Además, el que habla cree que es oportuno invocar en el caso, para fundar la prohibición que contra el marido se pronuncia de prevalerse de su impotencia anterior al matrimonio, con el fin de desconocer al hijo nacido de la esposa, el conocido apotegma jurídico: *nemo admittitur allegare turpitudinem suam*, pues gran torpeza é imprudencia grande serían las del marido que, después de haber engañado á una mujer y héchola su víctima, todavía se atreviera á hacer caer la deshonra pública sobre el inocente hijo que no pudo engendrar.

El Sr. Ramírez replica que ni como ficción en favor del hijo puede aceptarse el artículo del *Proyecto*, porque la deshonra no dejará de caer sobre él, desde que se le haga pasar por hijo de tal hombre. El adagio latino tiene una excepción: nadie puede invocar su propia culpa, á menos que se trate de un interés social, por lo que se admite y lo ha admitido la Comisión, que los cónyuges mismos, con todo y ser culpables, soliciten la nulidad del matrimonio incestuoso ó bigamo. (1)

El Sr. Lacunza insiste en su opinión que comparten sus demás colegas de Comisión, excepto el Sr. Ramírez, y manifiesta que la razón de no deberse oír al marido que pretenda desconocer al hijo de su esposa, invocando su impotencia anterior al matrimonio, funda la decisión contraria si se trata de impotencia posterior, pues entonces, como lo nota Gollena, el marido no es culpable de superchería y la impotencia necesariamente ha de ser accidental ú ocasional, conforme al ejemplo que se ve en la ley 4, tít. 8, Partida 4ª. De esta impotencia misma, agrega, se elimina la vejez, porque es imposible fijar su realidad.

El Sr. Méndez manifiesta que, de acuerdo con la redacción del *Proyecto Sierra* en el punto que ocupa á la Comisión, no lo está respecto de la causa de adulterio, de

(1) Véanse *supra* arts. 189 y 191.

la cual se dice que no autorizará al marido para desconocer al hijo. El que habla comprende la imposibilidad en que se ha visto el legislador para dar á esta causa de ilegitimidad toda la importancia que tiene, y recuerda las siguientes reflexiones de Merlin: "Aunque pueda suceder que un hijo concebido durante el matrimonio no sea deudor de la vida sino al crimen de que su madre está convicta, sin embargo, como es posible también que él la deba á la unión de la mujer con su marido, se presume siempre la legitimidad, cuando su concepción data de un tiempo anterior á aquel al cual se refiere la acusación de adulterio. . . . ¿Quién osaría, en efecto, en un caso semejante, fijar la época de la concepción y asegurar que el marido, que ha podido entregarse á las caricias de su esposa al mismo tiempo en que ella no se avergonzaba de conceder las suyas á un extraño, no es el padre del hijo, de cuyo estado se trata? (1)" No cabe dudar de la prudencia y justificación de estas palabras; pero supóngase que el nacimiento del hijo se ha ocultado al marido; que la esposa ha hecho misterio de lo que natural y ordinariamente tiende y está interesada en comunicarle. ¿No habrá de verse en esto á lo menos un serio motivo para conceder al marido el derecho de hacer investigaciones acerca de una conducta tan rara é inmotivada de parte de su esposa? Indudablemente que sí, y tal ha sido la razón por que se redactó el art. 313 del Código Francés, el cual, rompiendo con la tradición que decía con el derecho Romano: *Non utique crimen adulterii quod mulieri objicitur infanti praejudicat, cum possit et illa adultera esse et impuber defunctum patrem habuisse* (1), se expresa así: . . . . "tampoco podrá el marido desconocer al hijo por causa de adulterio, á no ser en el caso en que se le haya ocultado el nacimiento: si sucediera esto podrá proponer todas las pruebas que tengan por objeto justificar que

(1) Merlin, *Rep.* "Legitimité," sect. 2, § 2, núm. 5.

(1) *Dig.* lib. 48, tít. 5, l. 11, § 9.

él no es el padre. . . ." El tribuno Duveyrier decía á propósito de este texto: "Si la mujer adúltera ha ocultado á su marido su preñez, su parto, el nacimiento del hijo, el sentimiento que le ha dictado este misterio é impuesto los cuidados y el embarazo que él exige, es de tal preponderancia, que sería injusto no tomarlo como testimonio sobre la cuestión de la verdadera paternidad. Una mujer, en este caso, no dice nada; no declara nada; al contrario, se calla y se oculta. Su corazón mismo es el que, á pesar de todo, descubre sus secretos más ocultos; su conciencia es la que deja escapar su más misterioso fallo. La mujer, entonces, se muestra toda entera dominada por la convicción íntima á que sacrifica su propio hijo y lo que él tiene de más caro: la legitimidad. En tales circunstancias, lo que puede exigirse en nombre de la presunción legal del matrimonio, es que la presunción contraria, llegada á tan alto grado de poder, no baste todavía para destruirla; pero no puede rehusarse al marido, que ha devorado ya el crimen de su mujer en el misterio con que ella ha envuelto el fruto de ese mismo crimen, la facultad de ofrecer á la justicia las demás pruebas que pueden completar la demostración y substraerlo á las cargas y á la vergüenza de una falsa paternidad (1)" El que habla, en consecuencia, pide á la Comisión se sirva aceptar la siguiente adición al texto del *Proyecto: á menos que el nacimiento se le haya ocultado, en cuyo caso será admitido á probar los hechos conducentes á justificar que el hijo no es suyo.*

La redacción del *Proyecto* con esta adición es aprobabada y queda como art. 212 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 128): *El marido podrá desconocer al hijo nacido trescientos días después que judicialmente y de hecho tuvo lugar la separación definitiva*

———

(1) *Discours*, núm. 27.

ó la provisional prescrita para los casos de divorcios y demandas de nulidad; pero la mujer puede proponer todos los hechos conducentes para probar la paternidad de su marido.

El Sr. Lacunza se manifiesta conforme con el artículo, que está tomado literalmente del 103 del Proyecto de Gollena.

La misma idea inspiró el art. 313 francés, así como las siguientes palabras del jurisconsulto Ulpiano: *Si constet maritum aliquandiu cum uxore non concubuisse infirmitate superveniente vel alia causa* (1), ... *ut generare non possit, hunc qui in domo natus est, licet vicinis scientibus, filium non esse*, pues por la expresión: *vel alia causa* han entendido algunos comentadores cualquier evento, capaz de impedir la rigurosa aplicación de la regla: *pater est quem nuptiæ demonstrant*. El que habla cree deber adicionarse el texto del *Proyecto* con lo siguiente: *El hijo nacido después de los trescientos días de la separación definitiva por nulidad ó muerte es ilegítimo*. La razón es que, si tratándose de la separación definitiva por divorcio ó de la provisional por divorcio y nulidad, se debilita la presunción basada en el *consortium omnis vitæ*, ó sea en la vida común de los cónyuges, por lo que el marido puede desconocer al hijo nacido de su esposa en tales circunstancias, la propia presunción ya no puede ni aún invocarse, cuando la nulidad definitiva del matrimonio ó la muerte de uno de los consortes ha fijado para siempre aquella separación, que en ningún sentido permite ni suponer la cohabitación posterior. La Comisión debe fijarse en que ya entonces no puede decirse con la ley de Partida: "Cuantos fijos ficiecen entretanto que tuvieren en esta dubda, serían legítimos [2]," porque en las hipótesis señaladas ya no existe esa duda, sino que se trata de hombre y mujer absoluta y definitivamente separados entre sí.

———

(1) *Dig.*, lib. 1, tít. 6, l. 6.
(2) *Partida* 4, tít. 13, l. 1.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Ramírez dice que no puede estar de acuerdo con la adición propuesta por el Sr. Lacunza, porque, como ya lo manifestó al discutirse el art. 211 del nuevo Código (1), toda cuestión de legitimidad debe plantearse, considerando al hijo en posesión de ella, mientras no venga á decidir lo contrario una sentencia última y ejecutoria. En este sentido, nuestra ley de 10 de Agosto de 1857 [art. 25, inciso 4] dice: «También será inhábil para heredar al marido de su madre el hijo nacido vividero *en el mes undécimo después de muerto el primero . . . . . si los herederos de éste se opusieren á que el hijo sea reputado como del marido.* La presunción, pues, de ilegitimidad no procede de pleno derecho, como quiere establecerla el Sr. Lacunza, fundado en el solo hecho del nacimiento del hijo después de trescientos días de la disolución del matrimonio, sino que es necesario reclamarla en el juicio correspondiente y que sobre ella se pronuncie sentencia definitiva.

A pesar de estas observaciones, la adición del Sr. Lacunza es aprobada y con el art. 128 del *Proyecto*, forma el 213 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 129): "*El marido no podrá desconocer la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes á la celebración del matrimonio: 1.º Si . . . . . supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa . . . . .* 2.º Si estando presente consintió en que se expresara su apellido en la partida de nacimiento. 3.º Si de cualquier otro modo ha reconocido expresa ó tácitamente por suyo al hijo de su mujer.

El Sr. Méndez manifiesta tener que hacer algunas observaciones á la redacción anterior. En cuanto al primer inciso, cree que es más claro decir: *Si se probare que supo*, etc. Además, no ignora la Comisión las grandes con-

---

(1) Véase *supra*, pág 206.

troversias á que en la práctica ha dado lugar el inciso 1.º del art. 314 francés, por no determinarse en él qué pruebas son suficientes para demostrar ese conocimiento previo al matrimonio de parte del marido del embarazo de su mujer. En el primer proyecto, la Comisión encargada de redactarlo, decía que esas pruebas no podían resultar sino de los *escritos del marido mismo*. La idea no se conservó en el proyecto presentado al Consejo de Estado; pero fué reclamada por Bigot-Preameneu, que observó cómo el artículo no decía de qué manera podría probarse contra el marido que había tenido conocimiento de la preñez de la mujer: «si hay que atenerse á la regla general, decía, es necesario un principio de prueba por escrito.» Al que habla parece deber conservarse el mismo principio, aunque no sea sino para evitar la arbitrariedad y los sistemas vagos en que sin él se caería irremisiblemente, pues simples relaciones más ó menos íntimas y frecuentes entre los futuros cónyuges no deben bastar para cerrar al marido las puertas de los tribunales, cuando, al ser sorprendido después por el nacimiento prematuro de un hijo de su esposa, pretenda desconocerlo como ilegítimo. Así, propone á la Comisión, además, se agregue al inciso 1.º del art. 129 del *Proyecto* la siguiente frase: *para esto se requiere un principio de prueba por escrito* (1).

En cuanto al segundo inciso, el que habla cree más conveniente y en armonía con el sistema del Registro del estado civil, decir, como el Código francés en el artículo citado: *Si asistió al acta de nacimiento, y si esta acta fué firmada por él, ó contiene su declaración de no saber firmar.*

En orden al tercer inciso, hay que observar que si se deja en los amplios términos del *Proyecto*, viene abajo la razón del inciso anterior. En efecto, ese reconocimiento "tácito," hecho "de cualquier modo," se presta á mil dudas y graves equívocos acerca de la verdadera intención del marido. Para evitar tal inconveniente, el que habla propone se diga:

---

(1) *Proyecto de Gollena*, sobre el art. 104.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer.

El Sr. Escudero pide se agregue un cuarto inciso, que tambien se encuentra en el art. 314 francés y que algunos Códigos omiten tal vez por su evidencia: *Si el hijo no nació viable.* Hay que decirlo, sin embargo, porque podría el marido fundarse siempre en él para lastimar la reputación de su mujer, lo que es inicuo por la falta de objeto. El abogado francés Bigot-Preameneu motiva aquella declaración, diciendo: "Cuando el hijo no es declarado viable, no hay ya certidumbre de que sea un parto natural, precedido del tiempo ordinario de la preñez. Toda investigación de parte del marido sería escandalosa y sin objeto. ¿Cuál podría proponerse desconociendo al hijo que no debe vivir, si no es atentar á la reputación de la mujer con quien se ha unido?"

Queda aprobado el artículo con las modificaciones propuestas é incorporado al nuevo Código con el número 214.

El Sr. Méndez dice que, aprobado ya por la Comisión el art. 213, cuya última parte pronuncia *a priori* y desde luego la ilegitimidad del hijo nacido después de los trescientos días de disuelto el matrimonio, el que habla cree conveniente se diga algo relativamente al tiempo en que la cuestión de ilegitimidad, en el otro supuesto, puede promoverse y por qué personas. La acción que con tal motivo haya de intentarse, se ve que no tendrá que luchar contra la sombra protectora del matrimonio, pues se supone que éste ha sido ya disuelto por la muerte ó por la nulidad; pero á favor de ella se levanta la presunción del *máximum* de la preñez, establecida por la Ciencia, sobre la cual el legislador moderno ha decidido, al fin, apoyarse para cerrar la puerta á los escandalosos litigios que en el antiguo derecho se empeñaron sobre el *partu undecimestri* y aún *duodecimestri.*

Como tales cuestiones tienen que promoverse, precisa decir, fundándose en la naturaleza misma del caso, que ellas podrán serlo en todo tiempo y por cualquiera á quien perjudique la posesión material de estado de aquel hijo y su legitimidad no disputada. Así, propone se diga: *Las cuestiones relativas á la filiación y legitimidad del hijo nacido trescientos días después de la disolución del matrimonio, podrán promoverse en cualquier tiempo por la persona á quien perjudique la posesión de estado de filiación ó legitimidad del hijo.*

La redacción es aceptada y queda como art. 215 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 130): «*En todos los casos en que el marido pueda contradecir la legitimidad del hijo deberá intentarlo en juicio* dentro de dos meses contados desde que tuvo noticia de su nacimiento.»

El Sr. Méndez propone se sustituya la última parte de la anterior redacción con la siguiente, tomada del art. 318 francés, como más clara: *1.º Dentro de un mes contado desde el dia del nacimiento, si estuviere presente en el lugar y lo supiere. 2.º Dentro de dos meses contados desde el día en que llegue al lugar del nacimiento, si estaba ausente. 3.º Dentro de dos meses contados desde el día en que descubra el fraude, si se le ocultó el nacimiento.*

El Sr. Escudero manifiesta que, á su juicio, debe preveerse en seguida la hipótesis de que el marido se halle sujeto á curatela por causa de demencia ú otro motivo. Al efecto, propone la siguiente redacción: *Si el marido está en curatela por causa de demencia, imbecilidad ú otro motivo que lo prive de conocimiento, este derecho puede ser ejercido por su curador. Si éste no lo ejerciere, podrá usarlo el marido después de salido de la curatela; pero siempre en los plazos antes designados.*

El Sr. Ramírez manifiesta que la redacción anterior quita su carácter personal á la acción de que se trata

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y que debe ser, por su naturaleza, peculiar y exclusiva para el marido.

El Sr. Escudero contesta que el tutor es la misma persona que el incapacitado á quien representa y cuya incapacidad suple. Hay, además, que fijarse en la consideración de que si se espera para el ejercicio de la acción la sanidad del marido, se corre el riesgo de que desaparezcan todos los elementos de prueba, necesarios para fundar la contradicción de la legitimidad.

El Sr. Méndez pregunta qué deberá hacerse si el marido fallece sin recobrar la razón. En su concepto, la acción tiene que pasar á los herederos, porque ella forma parte de la sucesión. Es el art. 317 francés. Así propone se diga: *Cuando el marido, teniendo ó no curador, ha muerto sin recobrar la razón, los herederos pueden contradecir la legitimidad en los casos en que podía hacerlo el padre.*

Todas las redacciones propuestas son aceptadas, y, unidas en el orden en que lo han sido, forman el art. 216 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 131): *Los herederos del marido.....no podrán contradecir la legitimidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, cuando él no haya comenzado esta demanda. En los demás casos, si el marido ha muerto sin hacer reclamación, dentro del término hábil para hacerla, los herederos tendrán para proponer la demanda dos meses contados desde el día en que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del marido, ó desde que los herederos se vean turbados por él en la posesión de la herencia.*

El Sr. Méndez pide á la Comisión que para mayor claridad y supuesto el art. 216 que acaba de aprobarse, se diga antes de la frase: "no podrán": *excepto en el caso del*

artículo anterior. Ve la Comisión que este artículo del *Proyecto Sierra* se aparta del sistema seguido por el art. 317 francés que no distingue entre el caso del nacimiento, precoz y el del tardío; pero no tienen respuesta las siguientes reflexiones de Gollena: "La diferencia de nuestro artículo (1) se funda en que el hijo nacido dentro de los ciento ochenta días puede ser del marido, y las más veces lo será, como que esto suele dar ocasión al matrimonio. Si el marido murió antes del nacimiento ¿quién podrá descorrer el velo de un misterio sabido únicamente por él y por su muer? Si murió después del nacimiento; pero antes de expirar los dos meses, sin haber reclamado, sería tan inhumano como inmoral arrojar el escándalo y el oprobio sobre una esposa y una hija contra los que nada había dicho el esposo y padre."

El artículo, con la adición propuesta por el Sr. Méndez es aprobado y queda como 217 del nuevo Código.

———

El Sr. Ramírez propone el siguiente artículo: «En ningún caso corresponde á los herederos ni serán admitidos á probar el adulterio de la mujer, aunque el marido haya dejado pendiente una acusación sobre esto, pues su muerte extingue el pleito, dejando á la mujer en la posesión de buena conducta.»

El Sr. Escudero no está de acuerdo con la proposición, por más que reconozca la idea eminentemente moral que la dicta. El pensamiento del Sr. Ramírez viene á significar un caso de excepción de lo establecido en la segunda parte del art. 217. Verdad es que el adulterio no puede ser invocado, ya como causa de divorcio, ora como delito, sino por el marido; pero aquí no se trata sino de una acción civil con el objeto de impugnar la legitimidad del hijo adulterino, y por muy personal que tal acción se suponga, se

(1) El 116 del *Proyecto español*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

convierte en acción de interés pecuniario al pasar á los herederos, á quienes puede perjudicar la concurrencia de aquel vástago espurio.

La Comisión se decide á no aceptar la proposición del Sr Ramírez.

El Sr. Méndez expone que falta por preveerse un caso de la mayor importancia: ¿quién es el padre del hijo nacido dentro de trescientos días de la disolución del matrimonio, cuando antes de ese tiempo la viuda ha contraido segundas nupcias? No ignora la Comisión los diversos sistemas inventados desde la antigua jurisprudencia para resolver la dificultad, llegando alguno á decidirse hasta por la mayor conveniencia del hijo. Mas como la ley ha establecido un *minimum y un máximum* de la preñez, el que habla considera lo más acertado fijarse en ésto para decidir, en la inteligencia de que cualquiera otro criterio tendrá que ser vago y peligrosamente arbitrario. Propone, por lo mismo, la siguiente redacción: *Si la viuda contrajere segundas nupcias dentro del período prohibido por el art. 202 y tuviere sucesión, la filiación del hijo que naciere se establecerá conforme á las reglas siguientes:*

1.ª Se presume que es hijo del primer marido, si nace dentro de los ciento ochenta días inmediatos á la muerte de éste, con una constitución física bastante robusta para que, á juicio de los peritos en la ciencia, pueda reputarse nacido en un término ordinario, y consta, además, que el primer marido se encontraba, al tiempo de su muerte, en estado de cohabitar con su esposa.

2.ª Se presume que es hijo del segundo marido, si naciendo dentro del expersado término puede presumirse que el primer marido, por razón de caducidad ó ausencia, no cohabitó con su esposa, y los peritos en la ciencia califican que ha nacido antes del término ordinario.

3.ª Igualmente se presume que es hijo del segundo marido, si nació entre los doscientos diez y doscientos cuarenta días inmediatos á la celebración de su matrimonio.

La redacción es aceptada y queda como art. 218 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone, también para llenar un vacío del *Proyecto*, el siguiente artículo: *Todo acto de desconocimiento de un hijo de parte del marido ó de sus herederos, que no sea una demanda en forma ante juez competente, se tendrá como nulo y no sucedido. En el juicio de contradicción de la legitimidad serán oídos la madre y el hijo, á quien si fuere menor se proveerá de un tutor ad hoc.*

El artículo es aceptado y queda como 219 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, por no estar previsto en los artículos anteriores el caso del hijo nacido después de los trescientos días de la separación de los cónyuges por divorcio, propone á la Comisión la redacción siguiente: *El hijo nacido durante la separación de los esposos, de lecho y habitación, puede ser desconocido por el padre; pero se admite, así á la madre como al hijo, ó á su tutor, á probar que ha habido cahabitación entre los cónyuges; y una vez probada ésta en tiempo que, según el art. 210 haga posible que el hijo sea del marido, se tendrá por tal, aún cuando la madre haya sido adúltera.*

La redacción es aceptada y queda como art. 220 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 132]: *Para los efectos legales sólo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, nace con figura humana y vive veinticuatro horas naturales.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El artículo es aceptado y queda como 221 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 133): *En ningún caso podrán el marido ni sus herederos proponer la demanda de legitimidad, si falta cualquiera de las circunstancias determinadas en el artículo anterior.*

El artículo es aceptado y queda como 222 del nuevo Código.

———

El Sr. Escudero propone el artículo siguiente: *No puede haber sobre la filiación legítima, ni transacción, ni compromiso en árbitros: esto no quita la facultad de los padres de reconocer á sus hijos, y de los hijos mayores de consentir en el reconocimiento; pero podrá haber transacción ó arbitramento sobre los derechos pecuniarios que sobre la filiación puedan deducirse, sin que las concesiones que se hagan al que se dice hijo, importen la adquisición del estado de hijo legítimo.*

El artículo es aceptado y queda como 223 del nuevo Código.

———

CAPITULO II

De las pruebas de la filiación de los hijos legítimos.

Proyecto Sierra (art. 134): *La filiación de los hijos legítimos se prueba por la partida de nacimiento, y en su defecto por la posesión constante del estado de hijo legítimo.*

El Sr. Lacunza manifiesta que, como ve la Comisión, va á tratarse en el presente capítulo de la legitimidad como atributo de la filiación. «No debe confundirse, dice Gollena, la *filiación* con la *legitimidad*: la primera es la simple calidad de hijo, que puede ser legítima para el nacido en matrimonio, é ilegítima para el nacido fuera de él (1).» Lo natural, en consecuencia, para probar la legitimidad, sería producir el acta de matrimonio de los padres, fuente única de la legitimidad. Sin embargo, el que habla acepta el texto del *Proyecto Sierra*, para ser consecuente con el art. 55 del nuevo Código (2); pero propone á la Comisión se adicione dicho texto previendo el caso de que se cuestione el matrimonio de los padres, pues entonces es inevitable la presentación del acta de matrimonio.

El Sr. Escudero manifiesta que hay que prever un caso, que aunque raro, es posible, como lo demuestra el hallarse mencionado en el Código francés (art. 197) y en el Proyecto de Gollena (art. 100). Es el de que hayan fallecido los padres de la persona de cuya legitimidad se trata, por lo que ésta no pueda presentar el acta de matrimonio, á causa de ignorar el lugar de la celebración. Si, en este supuesto, consta que dichos padres han vivido públicamente como marido y mujer y á esto no se opone el acta de nacimiento, sería una cruel injusticia privar á dicho persona de la legitimidad por solo el hecho de no poder presentar el acta de matrimonio de sus padres. Lo mismo debe decirse del caso de ausencia ó enfermedad. Gollena expone estas distintas hipótesis de la manera siguiente: «Cuando aquellos (los padres) murieron y se trata solamente del interés de sus hijos, habría exageración é injusticia en exigir de éstos la misma prueba (la del matrimonio de aquellos). Los esposos no pudieron ignorar el lugar en que celebraron el acto más importante de su vida. Los hijos, huérfanos muchas veces en edad muy tierna, ó transportados á países lejanos, pueden razonablemente ignorarlo, pues que se trata de hecho ajeno y pasado antes de su nacimiento. Bastará, pues, que prueben lo expresado en el artículo, ó lo que es lo mismo, la posesion de estado de sus difuntos padres

(1) *Proyecto*, sobre el art. 109.
(2) Véase *supra* pág. 79.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y que su calidad de hijos legítimos conste de sus partidas de nacimiento.» Respecto de los casos de ausencia ó enfermedad, el propio jurisconsulto agrega que también deben tomarse en consideración, "porque en tales circunstancias el caso viene á ser el mismo que si hubieran muerto los padres, pues tienen igual imposibilidad de manifestar el lugar en que se casaron y *ubi eadam est ratio, idem jus esse debet.*" El que habla recuerda á la Comisión que hay también en el *Proyecto Sierra* un artículo, el 121, que preve el caso de que se trata, y el cual, sin ser suprimido en la discusión, se convino en reservar para su oportunidad, que considera ser la presente. (1)

El Sr. Méndez hace observar que, para mayor claridad, en vez de la frase: «*en su defecto*,» se diga: "en los casos previstos por el art. 48 (2), pues, á no dudarlo, tal es el sentido del texto del *Proyecto Sierra*, que no sigue en el particular, al Proyecto de Gollena, quien, motivando la misma redacción, se expresa así: "Está conforme con lo dispuesto en la ley 9, tít. 4, lib. 5 del Código. *Si vicinis, vel aliis scientibus, quamvis neque nuptiales tábulæ, neque ad notam filiam pertinentes factæ sunt*; etc. Pueden no haber existido registros ó haberse perdido; puede haberse omitido ó falsificado en ellos la partida de nacimiento; todo esto puede haber sucedido por casualidad ó fuerza mayor, por *negligencia ó malicia*." El que habla entiende que no debe darse tal latitud á la eficacia de la posesión de estado, pues caería por tierra el principio ya aprobado por la Comisión y que se contiene en el art. 31 (3), según el cual el estado civil sólo puede demostrarse por las constancias del Registro, salvo los casos de excepción que menciona el art. 48, entre los cuales no se encuentra el de que el acta no exista "por negligencia ó malicia" como dice Gollena.

(1) Véase *supra* pág. 195.
(2) Véase *supra* pág. 73.
(3) Vease *supra* págs. 62 à 64.

El Sr. Lacunza expone que precisamente para evitarle al hijo un mal del que en ningún sentido resulta responsable, cree justo y conveniente dejar la frase: *y en su defecto* que abarca todos los casos posibles, por cualquiera causa que sea, de falta del acta de nacimiento. Locré, Secretario del Consejo de Estado en Francia, al discutirse el Código Civil, dice que el art. 320 francés había sido redactado y propuesto á la deliberación del Consejo en los siguientes términos: "si los registros se han perdido ó si no han sido llevados, la posesión constante, etc.;" pero que esta redacción, por demasiado limitativa, fué rechazada, prefiriéndose la que hoy tiene: "En defecto de este título, basta la posesión constante del estado de hijo legítimo (1)."

El Sr. Terán (Ministro de Justicia), designa al Sr. Escudero para que redacte el artículo, adicionado en el sentido de la discusión, advirtiendo que son tres los conceptos fundamentales á que la redacción debe responder: 1.º ¿cómo se prueba la filiación legítima?; 2.º ¿cómo, si se pone en duda el matrimonio de los padres? y 3.º ¿cómo, si no existe acta de matrimonio; pero sí posesión de estado de hijo legítimo.

El Sr. Escudero manifiesta que, en su concepto, los dos primeros puntos deben ser materia de un artículo, y el tercero reservarse para el siguiente en esta forma que propone á la Comisión: *La filiación de los hijos legítimos se prueba por la partida de nacimiento, y en su defecto, por la posesión constante del estado de hijo legítimo; pero si se cuestiona el matrimonio de los padres, debe presentarse el acta de matrimonio, sin perjuicio de lo prevenido en el artículo siguiente:*

El Sr. Ramirez indica que, en su concepto, bueno es prever en seguida un evento: no se cuestiona el matrimonio de los padres; pero se dice que el hijo nació después de trescientos días de disuelto aquél. Propone se agre-

(1) Locre, tomo 6, pag. 27.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

gue á la anterior redacción del Sr. Escudero la siguiente frase: *Si se afirma que el hijo nació después de trescientos días de disuelto el matrimonio, á la parte que afirma esto, toca probarlo.*

El Sr. Lacunza cree innecesaria la adición por haberse ya hablado de este punto en el art. 213 (1).

El Sr. Ramírez contesta que el art. 213 meramente pronuncia la ilegitimidad de tal hijo.

La redacción propuesta por el Sr. Escudero, y adicionada por el Sr. Ramírez, es aceptada y queda como art. 224 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone, como expresión del tercer punto indicado, la siguiente redacción: *Sin embargo, si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer, y ambos hubiesen fallecido, ó por ausencia ó enfermedad les fuese imposible manifestar el lugar en que se casaron, no puede disputarse á los hijos su legitimidad por sólo la falta de presentación del acta de matrimonio, siempre que se pruebe esta legitimidad por la posesión de estado de hijos legítimos, á la cual no contradiga el acta de nacimiento.*

La redacción es igualmente aceptada y queda como art. 225 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 135): "La posesión de estado de hijo legítimo se acredita por una reunión de circunstancias que concurren á probarla, tales, como el uso constante del apellido del padre con anuencia de éste y el trato que como tal hijo ha recibido de su padre, de su familia y del público.

El Sr. Ramírez propone la siguiente redacción en

(1) Vease *supra*, pág 211.

que se conserva la idea fundamental del texto anterior, no limitar los hechos inductivos de la posesión de estado; pero expresándola con mayor claridad y menor peligro de equívocas interpretaciones: "La posesión de estado de hijo legítimo se acredita por una reunión de circunstancias que concurren á probarla, tales como el uso constante del apellido del padre con anuencia de éste y el trato que como tal hijo ha recibido de su padre, de su familia y del público; pero no es necesario que concurran todas las circunstancias y queda al arbitrio del Juez calificar el valor de ellas."

El Sr. Lacunza propone otra redacción: *La posesión de estado de hijo legítimo se prueba por la reunión de circunstancias que concurran á establecerla. Las principales son las siguientes:*

1ª. Que el hijo haya usado constantemente el apellido del que pretende ser su padre, con su anuencia.

2.ª Que el padre lo haya tratado como á su hijo legítimo, proveyendo en esta calidad á su educación, subsistencia y establecimiento.

3.ª Que en la sociedad y por la familia haya sido reconocido constantemente como tal hijo legítimo.

La Comisión se decide por esta redacción, que queda como art. 226 del nuevo Código.

Proyecto Sierra. (art. 136): *Nadie puede reclamar un estado de filiación contrario al que resulte de su partida de nacimiento, si ésta guarda conformidad con la actual posesión de estado; y ninguno puede impugnarlo en el mismo caso.*

El Sr. Lacunza manifiesta que el texto anterior es el art. 111 del Proyecto de Gollena, quien lo tomó del art. 322 francés y lo motiva, diciendo: "El título ó partida de nacimiento y la posesión de estado constante, pública y

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

conforme con él, fijan irrevocablemente el estado de la persona: ni ésta puede pretender otro, ni nadie disputarle el que disfruta: la partida prueba el nacimiento y filiación legítima; la posesión asegura la identidad de la persona." Sin embargo el mismo autor reconoce una excepción: cuando el matrimonio sea declarado nulo *con mala fe de ambos cónyuges*, pues, entonces, como no hay matrimonio ni putativo (1), malamente puede pretenderse la legitimidad, que es su consecuencia. El que habla cree que por lo mismo debería agregarse al texto del *Proyecto* Sierra lo siguiente: *pero si el matrimonio se declarase nulo con mala fe de ambos cónyuges, no sería legítimo el hijo á pesar de la reunión de las circunstancias expresadas.*

El artículo, así adicionado, es aceptado y queda como 227 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza dice que, como el art. 226, antes aprobado (2), supone la existencia del matrimonio entre los pretendidos padres, el nacimiento, en tiempo, del hijo y su identidad, le parece que debe completarse el concepto jurídico de la posesión de estado de legitimidad, diciendo *verbi gratia: Cuando el hijo no está en posesión de la filiación legítima y la pretenda, debe acreditar tres cosas,*

1ª El matrimonio de la madre con la persona de quien pretende ser hijo legítimo.

2ª El nacimiento durante el tiempo del matrimonio, ó dentro de los trescientos días siguientes á su disolución.

3ª Su identidad personal con el hijo nacido del matrimonio de que se trata.

Ve la Comisión que estas ideas no son sino la confirmación de lo dicho con motivo del art. 192 del nuevo Código,

(1) Véase *supra*, págs. 199 á 200.

(2) Véase *supra*, pág 225.

agregándose el requisito de la *identidad*, porque no se quiere autorizar ningún efecto de la suposición de parto ó sustitución de un niño por otro.

La redacción propuesta es aceptada y queda como art. 228 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 137): *"A falta de los medios de justificación expresados en los artículos precedentes, ó si en el acta de nacimiento hay alguna falsedad ú omisión en cuanto á los nombres de los padres, puede acreditarse la filiación por testigos, siempre que haya un principio de prueba por escrito, ó indicios fundados en hechos* que consten desde luego y sean tales que recomienden la admisión de esta prueba. En el caso de este artículo, puede impugnarse la filiación con cualquiera prueba legal."

El Sr. Lacunza manifiesta que el texto que precede es casi literal reproducción del art. 112 del Proyecto de Gollena, quien lo tomó de los arts. 323 y 325 franceses y lo motiva diciendo: "Dícese en contra (de la prueba testimonial) que es la más frágil y peligrosa de las pruebas por el frecuente soborno ó excesiva complacencia de los testigos; que si no presenta inconvenientes en la posesión de estado, que se compone de hechos contínuos en cierto número de años, los tiene gravísimos para hacer depender la cuestión de estado de hechos particulares y aislados; que el estado de los hombres, este bien precioso, que forma, por decirlo así, una parte de nosotros mismos, quedará siempre en incertidumbre; que no habrá reposo para las familias, y la sociedad se encontrará en un caos, donde nadie podrá distinguirse ni reconocerse. Por la afirmativa se alega, que la ley debe socorrer al hijo desgraciado ó inocente, que por la indolencia y casi siempre por el crimen de sus padres se ve en la imposibilidad de dar la prueba del art. 109 y cu denuncia el crimen únicamente para ser oído le exigiréis la

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

prueba escrita que el mismo crimen le ha arrebatado? Si los instrumentos prueban por sí solos y sin el auxilio de testigos ¿por qué no probarán también estos sin el auxilio de aquellos?" El que habla se muestra partidario de este segundo criterio, por creerlo más humano y favorable á la legitimidad.

El Sr. Méndez manifiesta que otorgar tanta latitud á la prueba por testigos de la filiación legítima, es romper la armonía del Código y ponerse en contradicción con el art. 31, como ya lo manifestó al discutirse el art. 224. Enhorabuena que se acuda á la prueba testimonial, cuando el acta ha sido judicialmente declarada falsa ó presenta alguna omisión en cuanto á los nombres de los padres, porque entonces hay al menos una acta que combatir; pero admitir esa prueba en todos los casos, cuando falta acta y posesión de estado, es abrir una ancha brecha en la institución del Registro Civil, que se derrumbará á cada esfuerzo para introducir por ella todos los intentos de prueba de la legitimidad en otra forma que mediante las constancias oficiales.

El Sr. Lacunza responde que así es en efecto; pero ello no tiene remedio si se quiere rendir homenaje á la verdad, no privando de determinado estado civil al que puede probar que le pertenece. Observa, además, que la concesión de que se trata solo se verifica, cuando obra en favor del hijo un principio de prueba por escrito ó indicios suficientes á juicio del juez para ameritar la prueba testimonial. Acerca de este último punto de que habla propone se diga: ó indicios *fundados en hechos acacidos hacia la época del matrimonio, y constantes desde entonces*, reservando la parte última del *Proyecto* para artículo especial.

La redacción del *Proyecto* así modificada, es aceptada y queda como art. 229 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza dice que el *Proyecto Sierra*, siguiendo á Gollena y apartándose del Código Francés (art. 324) no define lo que debe entenderse por «principio de prueba por escrito,» definición que considera necesaria. Al efecto propone la siguienta redacción: *El principio de prueba por escrito resulta de los títulos de familia, de los registros y papeles domésticos del padre ó de la madre, de las escrituras públicas y aun privadas de una parte empeñada en la cuestión, ó que tendría interés en ella si estuviera viva.*

La redacción es aceptada y queda como art. 230 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza dice que el artículo especial sobre la naturaleza de la prueba contraria á la testimonial rendida por el hijo en los supuestos del art. 229, puede quedar redactado como sigue: *La prueba contraria podrá hacerse por todos los medios propios para esteblecer que él realmente no es hijo de la madre que pretende tener, ó bien, probada la maternidad, que no es hijo del marido de la madre.*

Aceptada esta redacción, queda como art. 231 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 138): *La acción que compete al hijo para reclamar su estado es imprescriptible; en su favor.*

El Sr. Lacunza expone que, de seguro, no será discutido el artículo del *Proyecto*, que está tomado del 113 del de Gollena, quien dice respecto de él: "La severidad de las pruebas en establecer la filiación legítima se compensa con la libertad de reclamarla en todo tiempo; la ley, por honrar más el matrimonio, hace aquí una excepción á las reglas generales sobre la prescripción. Además el objeto de ésta es que la propiedad no quede siempre incierta; y para

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que el estado civil deje de ser incierto, es necesario que pueda siempre reclamarse. La prescripción solo tiene lugar en las cosas que están en el comercio de los hombres; es decir, que pueden ser compradas y vendidas; el estado civil no está en el comercio, ni es enajenable." Esta última razón, dice el exponente, es indiscutible y fué muy bien comprendida por la jurisprudencia romana, la cual, aunque no refiriéndose precisamente al caso especial de que se trata; pero sí al derecho de libertad, derecho de naturaleza moral, lo mismo que el de filiación, expresó lo siguiente: *Sola temporis longinquitate, etiamsi sexaginta, annorum curricula excesserit, libertatis jura minime mutilari oportere congruit æquitati.* (1) Boileux desarrolla la misma idea por medio de ejemplos que la aclaran hasta la mayor evidencia: "El estado civil, dice, depende esencialmente del orden público; por consiguiente, no puede adquirirse ni perderse por prescripción. Así, no obstante una larga separación de hecho, los cónyuges no dejan de continuar unidos en matrimonio, y *vice versa*. Así, la cohabitación, por prolongada que haya sido, no puede conferir la cualidad de esposo; las buenas costumbres protestarían contra un hecho semejante. Del mismo modo, aquel que durante muchos años, ha pasado por hijo de tal persona, no puede presentarse á ejercer los derechos relativos á ese caracter, si está claramente demostrado que éste no le pertenece; é igualmente, por prolongado que haya sido el silencio de un individuo, siempre conserva el derecho de reclamar su estado. (2)

Pero esta misma naturaleza de la acción en reclamación de estado, demuestra que otro principio debe regirla, tratándose de los descendientes legítimos del hijo, ó de otros interesados, respecto de los cuales dicha acción tiene que ser prescriptible, por que ellos sólo reclaman intereses pecuniarios, ó al menos, no es el estado propiamente dicho, el

(1) *Cod.* lib. 7, tít. 22, l. 3.—Id. Id, tít. 14, l. 6.—Id. lib. 8, tít. 45, l. 21.
(2) Boileux, *Com. sur le Code Napoleón*, tomo 2, pág. 108.

objeto de sus reclamaciones, sino los derechos útiles á él inherentes. La acción, pues, cambia, en cierto modo, de caracter en el momento de la muerte del hijo. El exponente pide, en consecuencia, á la Comisión, apruebe el artículo del *Proyecto* con la sola modificación de sustituir las palabras: "en su provecho" con las: *en su favor*, para mayor claridad.

El Sr. Escudero manifiesta que no está conforme con la exclusión que se propone respecto de los descendientes legítimos del hijo y en orden á la imprescriptibilidad de la acción de estado, porque la verdadera razón dada por el Sr. Lacunza está en el carácter moral y de orden público de esa acción, que, en rigor, no puede cambiar de naturaleza por el solo hecho de no ser ejercida por el primer descendiente á quien correspondía. Otros descendientes de la misma sangre vendrán, y para ellos continuará subsistiendo el mismo interés moral que tal vez descuidó su antecesor, no siendo justo privarles de un derecho que les pertenece tan originariamente como á éste.

El Sr. Lacunza contesta que la objeción pierde su fuerza ante el interés social que exige poner un límite á demandas perturbadoras del reposo de las familias.

El Sr. Escudero responde, que si no se tratara sino de intereses, la consideración del interés social sería decisiva; pero hay de por medio, algo más que intereses, es á saber, el derecho de un hijo para reclamar el estado civil que Dios mismo le ha dado.

El Sr Lacunza replica que también los derechos de los individuos deben ceder al derecho máximo de la sociedad, representado por lo que se llama interés social, en una sabia organización de aquella.

El Sr. Méndez se manifiesta de acuerdo con esta opinión ,expresando que, por respetable que sea el derecho de los hijos para reclamar eternamente su estado, hay que considerar los mil inconvenientes de que siempre estuviese

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ©
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

abierta la puerta para provocar litigios escandalosos en contra de la tranquilidad de las familias. Aun propone se aclare un poco más el pensamiento del *Proyecto*, excluyendo terminantemente á los herederos del hijo y á otras personas. Indica la siguiente redacción: *La acción que compete al hijo para reclamar su estado es imprescriptible en su favor; pero no de sus herederos ú otras personas.*

Esta redacción es aceptada por mayoría y queda como art. 232 del nuevo Código.

El Sr Méndez. manifiesta que, antes de pasar adelante, llama la atención de la Comisión sobre que ésta sería la oportunidad para expresar que la imprescriptibilidad que acaba de declararse respecto de la acción de estado, no reza en orden á los intereses pecuniarios ó á las acciones civiles, anexas á dicho estado. El autor francés, antes citado por el Sr. Lacunza, tiene cuidado de agregar, después de la defensa que se hace de la mencionada imprescriptibilidad, que se habla solamente del estado civil: "Los derechos pecuniarios, dice, inherentes al estado reclamado no están fuera de la regla de la prescripción: por ejemplo, si el hijo ejercitaba una acción sobre petición de herencia, el heredero aparente, detentador de los bienes de la sucesión, estaría sin duda alguna en su derecho para rechazarlo por una excepción resultante de que la apertura de la sucesión remontaba á más de treinta años (1). Así, el que habla, propone la siguiente fórmula: "Pero los derechos pecuniarios que resultan del estado se prescriben conforme á las leyes: así, aunque el hijo reclame y obtenga la declaración de legitimidad, si esto se verifica pasado el tiempo necesario para la prescripción de la acción hereditaria, ésta se tendrá por prescripta."

---

(1) *Op. y loc cit.*

El Sr. Ramírez opina que es innecesario el artículo que se propone, pues ya se sabe que son prescriptibles todos los derechos, cosas y obligaciones que están en el comercio. Más bien deberíase decir algo respecto de las acciones civiles contra el hijo y por los bienes que hubiera adquirido durante su estado de hijo legítimo, si después resultaba no serlo. ¿La devolución de esos bienes es en todo caso obligatoria, independientemente del transcurso del tiempo? El que habla opina que no, porque se trata de derechos y cosas que están en el comercio y deben ser, en consecuencia, prescriptibles. Así, propone la siguiente redacción en vez de la propuesta por el Sr. Méndez: *Más las acciones civiles que se intentan contra el hijo, por los bienes que haya adquirido durante su estado de hijo legítimo, aunque después resulte no serlo, se sujetarán á las reglas comunes para la prescripción.*

El Sr Méndez contesta que la fórmula que propone debe subsistir, por más que ella sea clara y precisamente por ésto. Manifiesta estar de acuerdo con la redacción del Sr. Ramírez respecto de las acciones civiles contra el hijo.

La redacción del Sr. Ramírez es aprobada y queda como art. 233 del nuevo Código.

El Sr. Ministro de Justicia (Terán) invita al Sr. Méndez para que aclare un poco más su pensamiento, pues como él, opina que no está por demás expresarlo en el nuevo Código.

El Sr. Méndez, defiriendo á la invitación, propone el artículo en la siguiente forma: *La adquisición del nuevo estado de filiación no modifica la prescripción de las acciones pecuniarias que hubieran competido al hijo si hubiese tenido la posesión del estado que adquiere; de manera que se contará el tiempo ya corrido, respecto de*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las que se encuentren en vía de prescripción, y se tendrán por prescriptas las que tengan el término ya cumplido con las circunstancias legales: así, aunque el hijo reclame y obtenga la declaración de legitimidad, si esto se verifica pasado el tiempo necesario para la prescripción de la acción hereditaria, ésta se tendrá por prescripta.

La redacción es aceptada y queda como art. 234 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 139): «Los herederos y descendientes del hijo no pueden intentar esa acción, sino cuando éste ha muerto antes de cumplir veintiun años. También podrán intentarla cuando el hijo cayó en demencia antes de los veintiun años y haya muerto después en el mismo estado.»

El Sr. Lacunza opina que es conveniente ampliar siquiera por cuatro años el tiempo, después de la muerte del hijo, y á contar desde su mayor edad, para que los herederos y descendientes puedan intentar la acción de estado. Así, propone se reforme el artículo del *Proyecto* en los siguientes términos: *Los herederos y descendientes del hijo no pueden intentar la acción de estado, sino cuando éste ha muerto, ó en la menor edad, ó dentro de los cuatro años siguientes á su mayoría. También podrán intentarla cuando el hijo cayó en demencia antes de los veintiun años y ha muerto, sin haber convalecido de ella.*

La redacción es aprobada y queda como art. 235 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 140): "Los herederos y descendientes podrán continuar la acción intentada por el hijo en los casos en que éste podía hacerlo, y contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la condición civil de hijo legítimo."

El Sr. Lacunza manifiesta que la facultad de continuar la acción intentada por el hijo debe pertenecer no sólo á los herederos y descendientes, sino también á los acreedores, pues ya se ha dicho que, si dicha acción es de naturaleza moral para el hijo, conviértese en material ó pecuniaria para los descendientes y con mayor razón para los acreedores. Consecuencia de esto tiene que ser la facultad de unos y otros para continuar lo que el hijo ya había empezado, porque tal continuación constituye su más legítimo interés. Sin embargo, y por lo mismo que la repetida acción cambia de carácter al pasar del hijo á sus desendientes, herederos ó acreedores, hay que decir que tal facultad no será ejercida por ellos, sino en el caso de que el hijo no haya dejado bienes suficientes para que sean pagados. Así, el que habla propone la siguiente redacción: "Los herederos, descendientes ó acreedores, cuando el hijo no haya dejado bienes suficientes para pagarlos, podrán continuar la acción intentada por el hijo en los casos en que éste podía hacerlo y contestar toda demanda, etc."

El Sr. Escudero expresa que, en su concepto, no debe incluirse á los herederos en la taxativa que el Señor Lacunza propone para la continuación de la acción intentada por el hijo en demanda de su estado, pues aquellos son los sucesores universales de éste, y nada es, entonces, más lógico que el ejercicio por parte de los mismos de un derecho, que han encontrado en el patrimonio que se les transmite. *Nihil est aliud hereditas,* dice Gayo, *quam successio in universum jus, quod defunctus habuit* (1). Como igual cosa no puede decirse de los acreedores, ni tampoco de los legatarios y donatarios, porque éstos también tienen derecho á los bienes del hijo; pero sólo en una parte, respecto de ellos está de acuerdo con la proposición del preopinante.

El Sr. Méndez, en un todo conforme con lo mani-

---

(1) Dig. lib. 50, tit. 16, l. 24

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

festado por el Sr. Escudero, expone que sería conveniente hablar primero de los herederos, para ocuparse después de los acreedores, legatarios y donatarios. Al efecto propone se siga en este punto el Código Francés que, en su art. 330, no pone á los herederos otras taxativas para continuar la acción intentada por el hijo, que el desistimiento formal de éste y la prescripción trienal de la instancia. Verdad es que la Comisión ha aprobado ya el art. 223, según el cual no cabe transacción, renuncia ni compromiso en árbitros respecto de la filiación legítima; pero, como lo enseña Boileux, la posición de los herederos difiere esencialmente, en este particular, de la del autor de la herencia. Este, en efecto, habría sido admitido, no obstante su desistimiento, á renovar la instancia, puesto que no ha podido renunciar á su derecho. Tal es la interpretación que el artículo ha recibido en el Consejo de Estado. El Proyecto proponía que los herederos pudiesen continuar la acción "cuando ella hubiera sido intentada por el hijo." El sentido de la palabra *abandono* se explicaba en un artículo aparte, concebido en estos términos: "El abandono resulta, ó del desistimiento formal; ó de la cesación de las promociones durante tres años, á contar del último acto del procedimiento." El Tribunado manifestó temor de que la definición del abandono, en un artículo separado, permitiese suponer que el hijo mismo quedaba privado del derecho de renovar la instancia, y esto hizo reunir los dos artículos en uno solo, á fin de quitar todas las dudas y hacer comprender bien que sólo los herederos resultaban impedidos por tal privación [1]. El exponente propone, en consecuencia, se diga: *Los herederos podrán continuar la acción intentada por el hijo, á no ser que éste hubiese desistido formalmevte de ella, ó nada hubiere promovido judicialmeue durante un año, contado desde la última diligencia. También podrán contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la*

(1) *Op. cit.*, tomo 2, pág. 111.

condición de hijo legítimo. Los acreedores, legatarios y donatarios tendrán los mismos derechos que á los herederos concede este artículo, si el hijo no dejó bienes suficientes para pagarlos.

La redacción es aceptada y queda como art. 236 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone se llene un vacío del *Proyecto Sierra*, expresando cómo se pierde y cómo se adquiere la posesión de la filiación legítima y con qué recursos cuenta el poseedor, cuando fuere perturbado en esa posesión y por mientras es vencido definitivamente en el juicio. A tal fin, indica las siguientes fórmulas: *La posesión de la filiación legítima no puede perderse por el que la tiene, si no por sentencia ejecutoriada en juicio civil ordinario, que admitirá las apelaciones y recursos que dan las leyes en los juicios de mayor cuantía.*

La fórmula es aprobada y queda como art. 237 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza continúa: *La posesión de la filiación legítima no puede adquirirse por el que no la tiene, sino por los medios señalados en el art. 228 y siguientes, ó por sentencia ejecutoriada en los términos que expresa el artículo anterior.*

Igual aprobación, quedando la fórmula como art. 238 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza continúa: *Mas si el que está en posesión de los derechos de padre ó de hijo legítimo, fuere despojado ó perturbado en el uso de ellos, sin que preceda sentencia por la que deba perderlos, podrá usar de los recursos posesorios que establecen las leyes, para que se le ampare ó restituya en la posesión.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La fórmula es aprobada y queda como art. 239 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 240): *La prueba de la filiación no basta por sí sola para justificar la legitimidad, la cual se rige por las disposiciones generales que regulan la legitimidad de los matrimonios.*

Aprobado el artículo, queda como 240 del nuevo Código.

Capítulo III.

De la legitimación.

Proyecto Sierra (art. 142): "Los hijos naturales se legitimarán únicamente por el subsiguiente matrimonio de los padres."

El Sr. Lacunza propone que como idea fundamental en materia de legitimación se diga: *La legitimación tiene lugar solamente en favor de los hijos naturales.*

La redacción es aprobada y queda como art. 241 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza expone que el artículo siguiente debe ser el 142 del *Proyecto Sierra;* pero adicionado así: *y ésta legitimación tendrá lugar aunque haya mediado otro matrimonio. El matrimonio* nulo *produce la legitimación á favor de los hijos siempre que haya habido buena fe al celebrarlo en uno de los cónyuges.* Motivando Gollena que el matrimonio subsecuente de los padres sea el único medio de legitimación de los hijos naturales, dice: "Queda, pues, desterrada la legitimación por rescripto del Príncipe, elevada por Justiniano á derecho común en las Novelas 74, cap. 2 y 89, cap. 9, aunque en casos extraordinarios y por causas graves la habían concedido antes otros Emperadores, según la l. 57, §1, tít. 2, lib. 23 del Digesto. Nuestras leyes la habían adoptado; pero nuestra nueva organización política la rechaza. La tal legitimación no era un uso sino un abuso de la soberanía usurpada. Y como los abusos de usurpación no tienen límites, se llegó hasta legitimar á los hijos adulterinos; y los autores lo justificaban, escribiendo con simplicidad que, siendo los Príncipes superiores á las leyes, no se les podía disputar el derecho de dispensarlas. En toda sociedad en que la ley sola regula el estado de los ciudadanos, ninguna autoridad puede conceder los derechos de filiación legítima, cuando aquella los niega. Ni el mismo matrimonio subsiguiente podría darlos, si la ley no les concediera expresamente este privilegio, porque en el orden natural y social nada puede producir efecto ó consecuencias antes de haber existido (1)." En cuanto á que la mediación de un matrimonio entre la concepción de los hijos naturales y el destinado por la ley á operar su legitimación no sea obstáculo para este efecto, la idea es antigua, como se ve por las siguientes palabras de una Novela del emperador Justiniano: *omnino enim suis existentibus, deinde naturalibus procreatis, aut primitos natis, nequaquam legitimorum jus eis adjicitur: nisi fortitam per constitutiones nostras quæ dotalium instrumentorum introduxcerunt modum* (2). Pothier dice también: «Nadie duda que el matrimonio tiene la fuerza de legitimar los hijos habidos de un comercio carnal anterior, aun cuando entre este comercio y el matrimonio que legitima sus hijos, hubiese mediado otro matrimonio de una de las partes con otra persona extraña que después hubiese muerto. Hay, no obstante, una dificultad, y es que para la legitimación se supone retroceder la celebración del matrimonio al tiempo en que fueron habidos los hijos, y como

---

(1) Gollena, *Proyecto*, sobre el art. 118.

(2) *Novella* 74, cap. 2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hay otro matrimonio de por medio, la retroacción no puede concebirse. A esto se responde que la retroacción no es del todo necesaria para la legitimación, bastando que pueda suponerse favorablemente que al tiempo de tener las relaciones carnales abrigaban los interesados la idea de casarse más adelante, como que aun cuando uno de ellos hubiese cambiado después de propósito casándose con otra persona, al fin concluyeron por casarse. De otra suerte no hay inconveniente en considerar las relaciones carnales como una anticipación del matrimonio últimamente contraído, sin que sea obstáculo el otro matrimonio intermedio, ya que tampoco lo fué para que los que anteriormente se habían conocido carnalmente, después de la disolución se casasen (1)."

Al revisarse los trabajos de la Comisión durante el Imperio de Maximiliano, en 1866, el artículo propuesto por el Sr. Lacunza, en lo tocante á la legitimación operada por el matrimonio putativo, sufrió una alteración á virtud de indicación del Emperador, consistente en substituirse la palabra "nulo" con la: *anulado*.

Así quedó definitivamente el texto, que pasó á ser el art. 242 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 143): "Se comprenden solamente bajo el nombre de hijos naturales los nacidos fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquellos pudieron contraer matrimonio, aunque fuera con dispensa, con la restricción del art. 147."

El Sr. Lacunza manifiesta que no debe olvidar sobre este punto la Comisión la ley 11 de Toro que decía: "E porque no se pueda dubdar cuales son fijos naturales, ordenamos é mandamos que entonces se digan ser los fijos naturales, cuando al tiempo que nascieren ó fueren concebidos, sus padres podían casar con sus madres justamente, sin dispensación, con tanto que el padre lo reconozca por su fijo, puesto que haya tenido la mujer de quien la ovo en su casa, ni sea una sola: ca concurriendo en el fijo las calidades susodichas mandamos que sea fijo natural." Esta ley fué, sin duda, un importante progreso en favor de las inocentes víctimas de las uniones ilícitas, respecto del Derecho anterior. Según el Romano, por hijos naturales se entendían solamente los nacidos de concubina, que fuese única y sola y habitase en traje de tal en la misma casa del padre (1). Además se requería que tanto el padre como la madre ó concubina estuviesen hábiles para contraer matrimonio, es decir, habían de estar libres de todo impedimento como parentesco, matrimonio etc. (2), con la circunstancia de que no todas las mujeres hábiles naturalmente para el matrimonio podían ser concubinas, pues estaban excluidas las vírgenes, las viudas honestas, conforme á la ley Julia y Papia [3], en quienes se cometía estupro.—El derecho de las Partidas siguió en todo al Derecho romano, si se exceptúa el requisito de que la madre viviese en la casa del padre, pues sólo era necesario que fuese concubina ó barragana, con tal de que no comerciase con otros hombres [4].

Pero más amplio que estas disposiciones el Derecho Canónico, distinguiendo solamente los hijos espurios y los naturales [5], inspiró la ley de Toro, antes citada, la que, como se ve, no exigía que el hijo naciese de concubina ni que viviese en la misma casa con el padre, ni que fuese única y sola, ni aun que los padres, al tiempo de la concepción fuesen, capaces para contraer matrimonio, contentán-

---

(1) Pothier, *Traitè du mariage*, núm. 421.

(1) *Novella* 18, cap. 5.—Id, 89, cap. 12 § 4.
(2) *Cód.* lib. 5, tít. 17, l. l. 10 y 11.
(3) *Cód.* lib. 5, tít. 26, l. únic.—Id. lib. 9, tít. 9, l. 6.
(4) *Partida* 4, tit. 14, l. 2,—*Id*, tit. 15, l. 1.—Id 6, tít. 13, l. 8
(5) Cap. 10, *de renuntiatione*.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dose con que esa capacidad existiese indistintamente á ese tiempo ó al del parto. Este grado á que llegó la ley de Toro parece suficiente al que habla, no debiendo, en consecuencia, ser reformada sino en el sentido en que lo hace el Proyecto de Gollena, de donde el del Dr. Sierra tomó el artículo en cuestión. La idea es ésta: se entiende por hijo natural el nacido de padres que, al tiempo de la concepción, podían casarse, aunque fuera con dispensa, excepto sólo el impedimento que por razón de parentesco existe entre tio y sobrina ó *vice versa*. El jurisconsulto español motiva esta declaración recordando la ley romana: *Sororis proneptem non possum ducere uxorem, quia paparentis loco ei sum* [1] y agregando las siguientes reflexiones que la menos exigente moralidad tiene que abonar. "El tio ocupa frecuentemente el lugar del padre, y desde entonces debe llenar los deberes de tal. La tia no es siempre extraña á los cuidados de la maternidad. Los deberes del tio y los cuidados de la tia casi nunca podrían conciliarse con los procedimientos menos serios, que preceden y preparan el matrimonio. Por estos delicados motivos de pudor y moralidad había prohibido el Derecho Civil que se casaran [2].

El Sr. Escudero reconoce el alto espíritu de moralidad que guía al Sr. Lacunza, al proponer no se vaya más allá de la reforma consignada en el Proyecto del Código español; pero discrepa de su parecer, porque, como su Señoría lo sabe muy bien, aunque prohibido el matrimonio entre tíos y sobrinos, el impedimento es de los dispensables aun según el Derecho canónico (3), figurando entre las causas ó motivos para la dispensa la legitimación de la prole (4). Además, ya la Comisión aprobó el art. 114 y no cabe serle inconsecuente. En esta virtud pide se apruebe

(1) *Dig.* lib. 23, tit. 2, l. 39.
(2) Gollena, *Proyecto* art. 118.
(3) Sánchez, *De matrimonio*, lib. 8; disput. 7, núms. 14 á 19.
(4) *Conférences d' Angers, Traité du mariage* "Dispenses".

el artículo del *Proyecto*, suprimiendo la restricción que contiene.

Así fué aprobado; pero en la revisión á que se sujetaron de nuevo los trabajos del Código Civil en tiempo de Maximiliano, el Sr. Escudero recibió la siguiente indicación del Emperador: "En cuanto al art. 221 (1) encierra en sí la definición del hijo natural, y debemos aprovechar las luminosas discusiones que han tenido lugar en los países extranjeros, para redactarlo de una manera clara y precisa Creemos que no hay equívoco, formulándolo del modo siguiente: *Se comprende bajo el nombre de hijos naturales, á los concebidos fuera del matrimonio, en tiempo en que el padre y la madre pudieron casarse aunque fuese con disenpsa.* En efecto, los hijos nacidos de tio y sobrina ó de cuñado y cuñada, deben considerarse naturales y no incestuosos, porque el incesto es la unión criminal de dos personas á quienes la ley prohibe absolutamente casarse. Si no se concediera la legitimación á los hijos nacidos de tio y sobrina, y de cuñado y cuñada antes del matrimonio, resultaría, si se casaran después con dispensa los progenitores, que los hijos primogénitos estarían en casa de sus padres sin ser reconocidos, vivirían bajo el mismo techo que sus hermanos, hijos de un mismo padre y madre, comerían en la misma mesa, y sin embargo no participarian de los mismos derechos ni llevarían el mismo apellido; es decir, en el mismo hogar los hijos legítimos irían creciendo al lado de los incestuosos."

La redacción propuesta por Maximiliano fué aprobada y quedó como art. 243 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 144]: "Para que la legitimación tenga efecto, los padres del hijo natural han de reconocerle expresamente antes de la celebración del matrimonio ó en el acto mismo de celebrarlo."

(1) Era el número del artículo en los primeros trabajos de la Comisión (Nota. de A. V.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza manifiesta que está de acuerdo con el artículo del *Proyecto;* pero adicionado en los términos que expresará más adelante. Recuerda la Comisión que la necesidad del reconocimiento prévio ó concomitante con el matrimonio de los padres es un requisito para la legitimación, que data desde el Código de Napoleón, pues no se encuentra ni indicado siquiera en el antiguo derecho, que se guiaba en este particular por la máxima de una decretal del Papa Alejandro III: *Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post constratcum matrimonium legitimi habeantur*. La legitimación, pues, por subsecuente matrimonio, es una consecuencia necesaria de este acto, y así decía muy sabiamente Pothier cuyas doctrinas no siempre fueron fielmente seguidas por los Codificadores franceses de principios del siglo: "La legitimación de los hijos nacidos del comercio carnal que las partes han tenido antes de su matrimonio, se opera por la sola fuerza y eficacia del matrimonio que sus padres contraen.....No es, pues, necesario que intervenga para esta legitimación el consentimiento de los padres; no está en su poder privar á sus hijos del derecho que la ley les da, por el efecto de la legitimación que otorga á su matrimonio. (1)" En consecuencia, el que habla opina que, ya que el reconocimiento está imbibito, por decir así, en el matrimonio mismo, de conservar esa formalidad, no se la restrinja á las dos épocas que el artículo del *Proyecto* señala, sino que se adicione éste diciendo: "ó durante él."

El Sr. Méndez expone que es cierto que en el antiguo derecho, al menos en el Español, no era necesario el reconocimiento prévio ó simultáneo al matrimonio de los padres del hijo natural para que estos quedasen legitimados, pues cuando en el Código de las Partidas se habla de este punto, nada se dice de tal requisito (2), lo que hace creer que, como por derecho canónico, no era necesario.

(1) Pothier, *Traitè du mariage*, núm. 422.
(2) Partida 4ª, tít. 13, l. 1.

Pero no puede decirse lo mismo respecto del antiguo derecho francés y quizá ni aun del Romano. Beaumanoir y Loysel refieren que, al celebrarse el subsecuente matrimonio, los hijos naturales eran colocados bajo el velo nupcial, al mismo tiempo que sus padres por dos razones: la primera, de carácter religioso, para hacer participar á los hijos de las oraciones del sacerdote; y la segunda, puramente jurídica, para que no se les pudiera disputar su estado lo que, en el sentir de la época, se hacía público por esa ceremonia. En cuanto al derecho romano, aunque no se conserva ningún texto formal que hiciera necesaria la formalidad en cuestión, no faltan indicaciones sobre su existencia. Así vemos que Modestino decía: *Inviti filii naturales.... non rediguntur in patriam potestatam* (1). Justiniano parece haber respetado esta tradición cuando, refiriéndose á todos los modos de legitimación, dice: *Generaliter autem in omnibus qui per prædictos modos deducuntur ad legitimum jus, tunc hoc volumus obtinere, dum et filii hoc ratum habuerint. Nam si solvere jus patriæ potestatis invitis filiis non permissum est patribus, multo magis sub potestatem redigere invitum filium et nolentem, sive per aliam quamlibet machinationem, tanquam sortem metuentem paternam, justum non est: neque imperii et legislatoris ponimus proprium* [2]. El mismo Pothier, hablando de la ceremonia de colocar á los hijos naturales bajo el velo nupcial, después de afirmar su falta de necesidad, cuida de agregar: «Esta ceremonia es un reconocimiento solemne que las partes contratantes hacen de sus hijos; pero que no es necesaria, cuando ellas los han reconocido por suyos, de cualquier manera que sea, ya antes, ora después de su matrimonio (3).» Y de aquí, sin duda, tomaron los legisladores franceses el art. 331 del Código de Napoleón, que establece para la legitimación la necesidad del reconocimiento de los

(1) *Dig.* lib. 1, tit. 7, l. 11.
(2) *Novella* 89, cap. 11.
(3) Pothier, *Op.* y *loc. cits.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hijos, anterior ó concomitante con el matrimonio, pues, sea lo que fuere del antiguo derecho, el moderno, al proclamar la absoluta prohibición de investigar la paternidad natural, no podía menos, en rigurosa lógica, que establecer la formalidad de que se trata.—El que habla no está de acuerdo tampoco con el Sr. Lacunza en la latitud de tiempo que propone para el reconocimiento, pues, como lo enseña Boileux, si la ley rehusa al reconocimiento posterior al matrimonio el efecto de legitimar al hijo, es porque teme que los esposos introduzcan en la familia hijos extraños, haciendo de la legitimación un medio cómodo de adopción. Este fraude no es de temerse tanto en el momento del matrimonio, porque los esposos ignoran si tendrán ó no hijos (1)» «Atribuir efecto á los reconocimientos tardíos, sería, decía el Primer Cónsul, dejar las familias en la incertidumbre, y dar la facultad de crear hijos por consentimiento mutuo. (2)» "En el sistema opuesto, decía Portalis, un individuo podría, treinta años después del matrimonio, venir á reclamar la cualidad de hijo y cambiar el estado de la familia, lo que no sería admisible."

El Sr. Lacunza replica que no reprueba en absoluto el reconocimiento, además del matrimonio, porque al fin y al cabo contribuye á asegurar el estado civil de los hijos; pero insiste en que no se restrinja á las épocas, anterior y simultánea con el matrimonio, para poder efetuarlo, porque nada sería más frecuente que su inobservancia, á causa, unas veces de cierto pudor que á los padres retrajera de hacer pública manifestación de su irregular vida anterior; otras, del interés en no disgutar á padres de severa y exigente moralidad, y no pocas, del amor mismo de los hijos, víctimas inocentes de aquélla vida y á quienes se expondría á que una más ó menos legítima preocupación social señalase como hijos naturales en un tiempo y apenas re-

(1) Boileux, *Op. cit.* tom. 1, sur l' art. 331.
(2) Seance du 14 brumaire an X

cien llegados á los honores de la legitimidad. El que habla cree, en consecuencia, que debe dejarse á los padres el derecho de hacer ese reconocimiento cuando lo juzguen oportuno. El temor que se decora con el nombre del Primer Cónsul, en orden á que surjan hijos, no por la naturaleza sino por el efecto de una verdadera convención, es poco serio porque, aparte no ser imposible que así suceda, aún con el reconocimiento anterior y coetaneo con el matrimonio, ya se sabe que él tiene que hacerse de consentimiento del hijo, quien, si es menor, podrá reclamar en la mayor edad contra una paternidad que le es extraña.

El Sr. Ministro de Justicia (Terán) encuentra un medio de conciliación entre las dos opiniones extremas, diciéndose: *ó tres años después durante el matrimonio.* Entiende que ese plazo es suficiente para que los padres reflexionen sobre el requisito de que se trata y no lo llenen sino cediendo á la verdad y á la voz de la naturaleza. Llama la atención del Sr. Lacunza sobre que la formalidad del reconocimiento expreso, además del matrimonio, en la legitimación, no es nueva en nuestro derecho, pues claramente la prescribe el art. 29 de la ley de 10 de Agosto de 1857.

El Sr. Ramírez se muestra conforme con la idea del Señor Ministro de Justicia; pero manifiesta que ese reconocimiento habrá de hacerse por los padres junta ó separadamente.

El Sr. Ministro de Justicia invita al Sr. Ramírez para que redacte el artículo.

El Sr. Ramírez propone la siguiente redacción: *Para la legitimación, los padres del hijo natural han de reconocerle expresamente, antes de la celebración del matrimonio, ó en el acto mismo de celebrarlo, ó tres años después durante el matrimonio, haciendo en todo caso el reconocimiento ambos padres, conjunta ó separadamente.*

La redacción es aceptada por mayoría de votos y queda como art. 244 del nuevo Código.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ©
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Ramírez dice que, como la Comisión lo comprenderá muy bien, casi no es necesario el reconocimiento expreso de la madre, pues, aun fuera de matrimonio, ella es siempre conocida, porque la naturaleza, demasiado sábia en todo, así lo ha querido. Por manera que debe bastar para el reconocimiento por la madre que el padre, mencionando el nombre de ella, haya reconocido al hijo antes del matrimonio. Propone, en consecuencia, se diga: *Pero si el hijo fué reconocido por el padre antes del matrimonio, y en su acta de nacimiento se expresó el nombre de la madre, no se necesita el reconocimieuto expreso de ésta para que la legitimación surta sus efectos legales por el subsiguiente matrimonio.*

El Sr. Lacunza manifiesta que ya expresó sus ideas sobre la formalidad del reconocimiento, como requisito para la legitimación; pero que no encuentra lógico ni motivado el artículo propuesto por el Sr. Ramírez, pues en el anterior se dijo que ese reconocimiento debía ser hecho por *ambos* padres, *conjunta ó separadamente*. ¿A qué viene ahora hacer tan poco caso del reconocimiento expreso de la madre?

El Sr. Ramírez contesta que por el matrimonio subsecuente debe suponerse que el reconocimiento de la madre es aceptado por ésta.

El Sr. Escudero dice que, entónces, lo mismo debiera decirse respecto del padre, si antes del matrimonio la madre reconoce, expresando el nombre de aquél.

El Sr. Ramírez replica que el punto se vuelve más delicado tratándose del padre; pero que acepta, se haga constar, que tampoco se necesita el reconocimiento del padre, si se expresó su nombre en el acta de nacimiento.

El Sr. Méndez expone que no es necesario lo último que propone el Sr. Ramírez, pues entiende que la Comisión aceptará, entre los modos de reconocimiento, el acta de nacimiento.

El Sr. Ramírez retira su última proposión;

La primera es aceptada por mayoría de votos y queda como art. 245 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 145): «Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio son iguales á los legítimos para todos los efectos legales.»

El Sr. Lacunza manifiesta estar de acuerdo con el artículo que el Dr. Sierra tomó, al pie de la letra, del 120 del Proyecto español, motivándolo extensamente su esclarecido autor (1), y siendo sólo de extrañar no lo haya completado con la adición que ahora, el que habla viene á proponer. En cuanto á la idea fundamental, es indubable que la Comisión la aceptará, por su evidente justicia que aparece muy bien comprendida desde la antigüedad. *Damus habere succesiones, illas quas habent, eis qui ab initio legitimi sunt*, se lee en varias *Novelas* (2), por lo que Voet, concretando toda la legislación en ellas contenida, dice: *Filii per subsequens matrimonium legitimati habebant in universum jura legitimorum liberorum perinde ac si tales non facti, sed nati fuissent* (3). «Otro si son legítimos, afirma también una ley de Partida, los fijos que ome ha en la mujer que tiene por barragana, si después desso se casa con ella (4)» y en la glosa á esta ley hace Gregorio López la siguiente advertencia: "Son legítimos: *nota hoc verbum; et sic vere, et realiter sunt legitimi, et non per fictionem*. (5)"

A esto no obsta el que muchos jurisconsultos y, entre ellos, nuestro Couto, fundándose en las leyes 9 á la 12 de Toro, hayan creído que los hijos ilegítimos, scan de la clase y condición que fueren y aun cuando estuvieran legitimados

---

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 120.

(2) *Novella*, 12, cap. 4.—*Id.* 18, cap. 4.—*Id.* 19, *Id.* 74, cap. 1.—*Id.* 89, cap. 8.—*Inst. de Just.* lib. 3, tít. 52.

(3) Voet, *Ad Pandect*, lib. 25. tít. 7, núm. 6.

(4) Partida 4, tít. 13, lib. 1.

(5) Partida 4, lib. 13, l. 1, glosa 7.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

por el Soberano, nunca podían concurrir con la prole de matrimonio á heredar á sus padres ó madres por testamento ó abintestado, pues luego que había posteridad legítima, ningún bastardo podía ser heredero con ella, no teniendo capacidad para otra cosa en materia de herencia que para ser instituido legatario en la parte del caudal mortuorio en que podía serlo igualmente cualquier extraño, es decir, en el quinto (1). A este propósito bueno es recordar lo que dice Gollena: "El matrimonio y sus efectos son de derecho público, y éste no puede variarse por disposiciones ó pactos particulares. La ley, al igualar en todo á los legitimados de esta especie con los legítimos, se propone el fin santo de hacer cesar un comercio ilícito y estimular fuertemente al matrimonio; disminuir de cualquier modo la plenitud de derechos, el premio ó prima que concede la ley, equivale á contrariar su espíritu y santo objeto (2)."

Pero ¿desde cuándo empiezan á producirse esos efectos; desde el matrimonio ó desde el reconocimiento? El que habla cree que desde el matrimonio, porque es el que opera la legitimación y en este sentido está redactado el art. 333 del Código francés, respecto del cual dice Demolombe: "Esta disposición es clara; hay que atenerse á ella y rechazar todas las ficciones por las que se quisiera, ya hacer remontar el matrimonio á la época de la concepcion, ó más allá del nacimiento del hijo, ora hacer bajar la concepción ó el nacimiento á la época del matrimonio (3)." En consecuencia, propone á la Comisión que, para disipar dudas en el particular, se adicione el artículo del *Proyecto Sierra* diciendo: "y estos efectos se producen desde la fecha del matrimonio, aunque el reconocimiento sea posterior."

---

(1) Lando arbitral del Lic. D. Bernardo Couto, de 6 de Julio de 1850 (*Gaceta de los Tribunales*, tom. 4, núm. 5.)—Véanse otros autores citados por Sancho Llamas y Molina, *Coment. á las Leyes de Toro*, l. 12.

(2) Gollena, *Proyecto*, art. 120.

(3) Demolombe, *Cours du Code Napoléon*, tom. 5, núm. 368.—Boileux, *Op. cit*, tom. 2, sur l' art. 333.

El Sr. Ramírez dice que está en un todo de acuerdo con el Sr. Lacunza en la asimilación que defiende entre los hijos legitimados por subsecuente matrimonio y los legítimos; pero discrepa de su Señoría en cuanto al punto de partida desde el cual toman origen los efectos civiles producidos por la legitimación. Comprende toda la lógica con que el Sr. Lacunza hace su proposición, pues para él el matrimonio basta á producir por si sólo la legitimación, sin necesidad del reconocimiento. Sin embargo, la Comisión ha aprobado ya lo contrario en el art. 244 por motivos que dan suficientemente á entender cómo, á su juicio, no es completa la una sin el otro, porque el reconocimiento voluntario es lo único que establece la paternidad natural en el moderno derecho. Así, el exponente, con la mira también de evitar dudas, propone la siguiente redacción: *A los hijos legitimados corresponden los mismos derechos que si hubiesen nacido del matrimonio que los legitima, teniéndose estos derechos por adquiridos desde el día del matrimonio, si el reconocimiento fué anterior ó simultáneo, y desde la fecha del reconocimiento, si éste fué posterior á la celebración del matrimonio.*

El Sr. Méndez se manifiesta de acuerdo con la anterior redacción, contra la cual, dice, no cabe invocar el art. 333 del Código francés, porque éste no acepta sino dos épocas para efectuar el reconocimiento: antes ó en el acto mismo del matrimonio.

La redacción propuesta por el Sr. Ramírez es aceptada y queda como art. 246 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 146]: «*La legitimación puede hacerse también en favor de los hijos que, al tiempo de celebrarse el matrimonio, han fallecido dejando descendientes, en cuyo caso aprovechará á estos.*»

El Sr. Lacunza expone que era éste punto muy controvertido entre los antiguos intérpretes. Baldo, Albe

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

rico de Rosate, Pablo de Castro, Alejandro, Jason, todos citados por Fachino (1) y Gregorio López (2) sostenían que, no habiendo tenido jamás el hijo los derechos de familia, puesto que aun no vivía cuando el matrimonio de sus padres, únicos que podían hacerselos adquirir, mal podía trasmitirlos á sus descendientes, que no adquieren tales derechos sino por su conducto.—Otros profesaban la doctrina contraria, invocando una ley romana de casi exacta aplicación al caso: *si filium naturalem emancipavero, et alium adoptavero, non esse eos fratres: si filio meo mortuo, Ticium adoptavero, videri eum defuncti fratrem fuisse, Arrianus ait.* [3] Así Molina dice: *Quod autem diximus de filio majori natu, ex matrimonio subsequenti legitimato præferendo: non solum in ipso filio primogenito, qui tempore contracti matrimonii vivus supererat intelligendum est: sed etiam in ejus filio legitimo parente ipso naturali jam mortuo tempore contractus matrimonii locum habet. Is namque veluti pater ejus si viveret filium secundo genitum in casibus, quos præmissimus a majoratus succesione excludet. Sicut enim ex matrimonio subsequenti filius naturalis si vivere legitimus efficeretur. Ita etiam nepos legitimè ex eo, natus eo mortuo, legitimus efficitur ..... Quæ opinio vera et probabilis atque æquitate plena mi hi videtur ex juribus et rationibus quæ—a—præsatis scriptoribus adducuntur.* (4) Del mismo modo se lee en Pothier: "La legitimación ha sido establecida, no sólo en favor de los hijos nacidos de la unión que han tenido los padres antes de su matrimonio, sino en favor de todos aquellos que descienden de ella, porque estos no son menos dignos de ese favor que los nacidos antes. La ley, por la ficción de la legitimación, purga el vicio de la unión de los padres antes del matrimonio, haciéndola considerar como

(1) Fachinus, *Controversia*, III, núm. 56.

(2) Partida 4, tít. 13, l. 1, glosa 9.

(3) *Dig.* lib. 38, tít. 10, l. 5.

(4) Molina, *De hisp. primogeniis*, lib. 3, cap. 1, núm. 9.—Gómez, *Ad legem XII Tauri*, núm. 62.

una especie de anticipación de éste, que los padres han contraído después y á los hijos que de ella nacen lo mismo que á los que descienden después como hijos de ese matrimonio por anticipación. (1)" En el derecho moderno, toda controversia ha desaparecido, pues es bien terminante el art. 332 del Código Francés, según el cual «la legitimación puede verificarse, aun en favor de los hijos muertos que han dejado descendientes; y en este caso, ella aprovecha á estos descendientes.» Gollena, elogiando esta declaración, de la cual ha tomado el art. 121 de su *Proyecto*, hace estas acertadas reflexiones: «Es bien justo dar este consuelo á los hijos del que, durante su vida, fué privado injustamente de él. Por este medio la ley conserva en la familia unos bienes que pasarían á extraños, y repara en cierto modo el agravio que su abuelo había hecho á la memoria de su padre por un silencio demasiado largo y cuyo efecto había sido arrebatarles su estado. La ley ha querido por la legitimación crear un jefe de familia: si este jefe ha dejado de existir, deben ser admitidos sus descendientes á representarlo. En fin, esta medida es buena, puesto que es justa, y sólo haciendo resplandecer en las leyes el espíritu de justicia, es como se les concilia el amor.»

El Sr. Ministro de Justicia (Terán) manifiesta que tan equitativa declaración había ya sido hecha por nuestra ley de 10 de Agosto de 1857, cuyo art. 30 dice: «La legitimación producirá efecto en favor de los descendientes de un hijo natural, aun cuando se verifique después de la muerte de éste el matrimonio y el reconocimiento de que se habla en el artículo que precede.» Pero, ante esta declaración tan absoluta, debe fijarse la Comisión, á fin de encontrar una fórmula más precisa, en una no poco grave dificultad: ¿El sólo hecho de la legitimación del hijo premuerto, que ha dejado descendientes, basta, conforme al artículo del *Proyecto*, para que éstos sean legitimados? ¿Qué sucederá si tales descendientes ni siquiera han sido

(1) Pothier, *Op. cit.* núm 413.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

reconocidos como naturales por su padre? Una de dos: ó no es cierto que sean legitimados ó hay, además del matrimonio subsecuente de los padres, otro modo de legitimación. El que habla sabe demasiado como se desata el nudo de tal dificultad; pero querría que en el nuevo Código se contuviese una fórmula que absolutamente le cerrase la puerta.

El Sr. Escudero expone que la dificultad señalada por el Sr. Ministro de Justicia no podría ser suscitada, en la práctica, sino por una excesiva sutileza jurídica. Seguramente, no habiendo otro medio de legitimación que el subsecuente matrimonio de los padres, al decirse que puede también ser legitimado de ese modo el hijo ya muerto con tal de que haya dejado descendientes, y que entonces la legitimación aprovechará á éstos, no es posible entender otra cosa sino que se trata de descendientes legítimos ó legitimados, que, aun siéndolo ya respecto de sus padres, no vienen á serlo respecto de sus abuelos hasta la legitimación de que trata el artículo del *Proyecto*. En otros términos: tres hipótesis pueden formularse: El hijo premuerto, al verificarse su legitimación por el matrimonio de sus padres, dejó descendientes habidos en mujer legítima; antes de la legitimación, esos descendientes eran legítimos respecto de su padre; pero como éste no estaba aun legitimado por los suyos, aquellos no pertenecían á la familia legítima de éstos; eran hijos legítimos; pero no nietos de igual condición.—El hijo premuerto dejó descendientes naturales meramente reconocidos; la legitimación de que ahora se trata, hace entrar á tales descendientes en la familia de sus abuelos; pero sin que por esto dejen de ser naturales.—El hijo premuerto dejó descendientes naturales, á quienes ni siquiera reconoció; la legimación de aquel no aprovecha en ningún sentido á éstos, que le son jurídicamente extraños.—El que habla considera innecesario aclarar más el concepto del artículo del *Proyecto*, pues se incurriría de redundancias, ya que las

tres hipótesis referidas están previstas en otros textos.

El Sr. Ramírez dice que no está de acuerdo con lo expuesto por el Señor Escudero, pues el artículo que se discute, evidentemente no se refiere á la primera hipótesis de las propuestas por su señoría, por la sencilla razón de que es inútil dar lo que ya se tiene por derecho; en el caso, la legitimidad. Pero el artículo sí se refiere á la hipótosis segunda, en el sentido de que esos que el Sr. Escudero llama nietos naturales, porque su padre muerto, al casarse sus abuelos, tan sólo los había reconocido, se vuelven, en realidad, legítimos respecto de sus abuelos, es decir, que, por un favor de la ley, ocupan el lugar de su padre y son entonces tan legítimos como él lo habría sido si hubiese vivido.

El Sr. Ministro de Justicia (Terán) no se muestra conforme con esta interpretación del Sr. Ramírez, que va muy mucho más allá de la naturaleza de las cosas, lo que es demasiado, tratándose, como él mismo lo reconoce, de un favor de la ley, y, podría decirse de una ficción.

El Sr. Ramírez contesta que también es una ficción de la ley la legitimación directa operada por el matrimonio sub-secuente de los padres, pues por medio de ella se supone que hijos nacidos antes del matrimonio han nacido durante él.

El Sr. Ministro de Justicia (Terán) replica que la legitimación directa no es precisamente una ficción, como la llama impropiamente el Sr. Ramírez y con él otros jurisconsultos, sino más bien una retroación sobre hechos pasados, suficientemente justificados por toda clase de consideraciones del órden moral y jurídico. El que habla insiste en que la Comisión investigue, de todos modos, una fórmula más precisa que el artículo que se discute, pues ya se está viendo que no es tan claro como lo piensa el Sr. Escudero.

El Sr. Méndez manifiesta que no cree necesaria la aclaración propuesta por el Sr. Ministro de Justicia, pues el artículo que se discute no dice que los descendientes del

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

hijo muerto y legitimado serán en todo caso legítimos, sino que la legitimación les *aprovechará*, es decir, que gozarán de todas las ventajas pertenecientes á su padre, como legítimo, siendo ellos á su vez legítimos en su caso. Agrega que sería bueno adicionar el artículo con la siguiente declaración: *Asímismo puede hacerse, aunque sea condicionalmente, en favor de los hijos no nacidos, si el padre al casarse declara que reconoce al hijo de que está embarazada la mujer, ó que lo reconoce si estuviere embarazada.* Esta declaración se funda en el concepto altamente justo de la siguiente ley romana: *Qui in útero est, perinde ac si in rebus humanis esset, custoditur, quotiens de commodius ipsius partus quœritur* [1], concordante, en nuestro derecho patrio, con la ley 3, tít. 23, Partida 4.

El artículo del *Proyecto Sierra*, así adicionado, es aprobado y queda como art. 247 del nuevo Código.

Capítulo IV.

Del reconocimiento de los hijos naturales.

El Sr. Méndez manifiesta que el *Proyecto Sierra*, siguiendo en esto al Código Francés, guarda silencio, al tratar de la importante materia del reconocimiento de los hijos naturales, respecto de un punto cardinal: la edad á que tal reconocimiento puede ser hecho. Gollena se ocupa en este particular incidentalmente; pero tampoco le dedica un texto especial de su *Proyecto*. (2) Pero el que habla cree deber llenarse tal omisión en el nuevo Código, siquiera sea para evitar las dudas que en otros países ha hecho nacer. Dos opiniones han surgido acerca de esto. La una quiere que el reconocimiento no pueda ser hecho sino por el mayor de edad, razonando así: «Por regla general nada es menos cierto que la paternidad fuera de matrimonio, y, por una consecuencia necesaria, el reconocimiento de un

(1) *Dig.* lib. 1, tít. 5, lib. 7.
(2) Gollena, *Proyecto*, sobre el art. 129.

hijo natural, hecho por un menor, no tiene evidentemente por base y fundamento sino su voluntad. Ahora bien, como el menor, por este reconocimiento, ha enagenado una parte de su fortuna, al menos en cuanto á la capacidad de dar, debiendo considerarse tal reconocimiento como una restricción á su derecho absoluto de propiedad, como una verdadera enajenación, hay que admitir que la incapacidad de que todo menor está afectado cuando se trata de una enajenación, debe producir la nulidad del reconocimiento. Se agrega que el menor que tiene la debilidad de reconocer á un hijo natural, si no pierde enteramente la consideración que tanto interés tenía en conservar, le infiere al menos un atentado grave; y es ésta, además, una de esas enajenaciones á las que convierte en radicalmente nulas la incapacidad del menor. El reconocimiento hace nacer un obstáculo que puede ser insuperable para un matrimonio conveniente por razón de categoría y fortuna. Finalmente, sí, cuando se trata de matrimonio, la ley exige que el menor haya alcanzado la edad de diez y ocho años cumplidos; si, según las discusiones del Consejo de Estado y la doctrina de todos los autores, el nacimiento ó más bien la concepción de un hijo atribuida á un matrimonio contraído entre una mujer puber y un hombre impuber no origina una excepción, ya contra los padres que no han consentido en el matrimonio, ya contra el Ministerio público ¿no debería al menos decirse de nulidad del reconocimiento hecho por un menor que no había cumplido diez y ocho años en la época de la concepción presunta del hijo natural? (1)» La otra opinión defiende el reconocimiento, aun hecho por el menor de edad, fundándose en que el menor puber puede ser padre: "Reconocer el hijo á quien se ha dado la existencia, dice Merlin, es seguir el primer movimiento, es llenar el primer deber de la naturaleza. Todo individuo que se halla en estado de ser padre, está, pues, por esto sólo, en con-

(1) Malpel, *Rev. de Legislat.* an 1836, tom. 4, pág. 45.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

dición de seguir ese primer movimiento, de llenar ese primer deber. ¿Qué importa que el art. 1124 del Código Civil declare á los menores incapaces de contratar? Esta disposición no se aplica evidentemente sino á las obligaciones convencionales, y sería forzar su sentido querer extenderla á las obligaciones que, por la naturaleza de las cosas y por la ley, resultan de hechos á los que es absolutamente extraña la voluntad de aquellos en cuyo favor han sido creadas. Así, el menor que por malicia ó imprudencia causa un daño cualquiera á otro, no está menos obligado á repararlo, que si fuese mayor. Del mismo modo y por la propia razón, el menor que, sin ser casado, da nacimiento á un hijo, no está menos obligado hacia él con todos los deberes de la paternidad que si hubiera cumplido veintiún años (1).» Demolombe asegura ser ésta la opinión que ha prevalecido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia (2), y el que habla se permite recordar á la Comisión que nuestra ley de 10 de Agosto de 1857, previendo este caso, establece [arts. 33 y 38] que, para que el reconocimiento sea valedero, el padre ó la madre ha de ser mayor de dieciocho años. Como no se encuentra razón plausible para que una misma edad se exija á ambos padres para el reconocimiento, el cual, en último análisis no viene á ser otra cosa que la reparación de una falta para la cual se ha sido capaz por la naturaleza, el exponente considera que es más lógico fijarse en la edad núbil, ya del hombre, ya de la mujer. En consecuencia, propone á la Comisión el siguiente artículo: *Sólo el que tenga la edad para casarse puede reconocer á sus hijos naturales.*

El artículo es aprobado y queda como 248 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 147): «*Los padres de un hijo natural podrán reconocerle de común acuerdo.* No po-

(1) Merlin, *Questions de droit*, "Paternité" § 2.

(2) Demolombe, *Op. cit.*, tom. 5, núm. 387.—Boileux, *Op. cit.*, tom. 1, pág. 123.

drá ser reconocido el hijo habido por un tío en su sobrina carnal.»

El Sr. Lacunza manifiesta que, supuesta la aprobación del art. 243 en el nuevo Código, entiende que no hay dificultad en proceder del mismo modo respecto de la primera parte del artículo, desechando la segunda (1).

Así es aprobado el artículo, que queda como 249 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 148]: *Para el reconocimiento por uno solo de los padres, bastará que el que lo reconoce haya sido libre para contraer matrimonio en cualquiera de los .....ciento veinte días de los trescientos que precedieron al nacimiento. La ley presume para este caso que el hijo es natural.*

El Sr. Lacunza suplica al Sr. Lic. Méndez se sirva dar lectura al comentario que Gollena hace del art. 123 de su Proyecto, del cual tomó el Sr. Dr. Sierra el anterior.

El Sr. Méndez lee: "Este artículo, con los 125, 126 y 127 que son sus consecuencias, abre la puerta al reconocimiento de hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Por lo tanto, son de más bulto, y pueden serlo de mucho mayor escándalo los inconvenientes del reconocimiento aislado ó por uno sólo de los padres; la madre soltera ó viuda podrá reconocer al hijo que hubo de un casado; el tío y sobrina carnales y hasta el hermano y hermana al fruto de su unión incestuosa. ¿Diré más todavía? A la sombra de este artículo podrá ser reconocido y pasará por hijo natural el fruto del incesto en línea recta. El escándalo llegará á su colmo en los pueblos cortos, donde es casi imposible ocultar la verdadera filiación, y la repugnante latitud de este artículo contrasta con haber mejorado la condición de los hijos naturales en las herencias intestadas, sin hacerse más

(1) Véase *Supra*, págs. 240 á 243.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que la pequeña diferencia del art. 777 entre los reconocidos de común acuerdo y por uno solo de los padres.—No se ocultaron ni pudieron ocultarse á los legisladores franceses tamaños inconvenientes y tan horribles eventualidades; sin embargo, de los tres discursos motivados sobre el título de la paternidad y filiación, sólo en el 27 se presta alguna atención á ellos y se hace como de paso y con vergüenza. "Fácil es de ver, se dice, todo lo que puede producir esta facultad de una declaración solitaria. Pero vale más para la sociedad tolerar lo que ignora, que saber lo que debe castigar." Tengo por completamente falso y frívolo este raciocinio, tanto bajo el aspecto de la verdad, como de la moral.

El Sr. Lacunza dice que ha querido se dé lectura á las precedentes observaciones de Gollena, no para tomar pie de ellas impugnando el artículo del *Proyecto Sierra*, sino para que la Comisión comprenda toda la gravedad del asunto. Efectivamente, como lo asienta el jurisconsulto español, si se autoriza el reconocimiento aislado ya por el padre, ora por la madre, puede suceder que queden reconocidos hijos adulterinos ó incestuosos, pues nada más fácil con sólo no revelar en el primer caso el nombre del padre casado y en el segundo, el del pariente con quien el hijo de que se trate fué habido.

El Sr. Ramírez manifiesta que ciertamente los inconvenientes que menciona Gollena y reproduce el Sr. Lacunza son graves y existen, sin que puedan evitarse por el momento, toda vez que se acepte el reconocimiento aislado. Este, por lo demás, es una medida de equidad que no debe rehusarse á los frutos inocentes de las uniones ilícitas, pues sería inhumano que, cuando uno de los padres quisiera mostrarse á la faz del mundo como tal respecto del hijo á quien había dado vida, para cumplir en orden á él todas las obligaciones de la paternidad, no pudiera hacerlo sin contar con el consentimiento del otro, que, inspirado sólo en su egoísmo, se rehusaba á echar sobre sí tal responsabilidad, que, sin embargo, impone fuertemente la naturaleza. Contra el medio que el *Proyecto Sierra* propone para orillar éste grave mal, se dice que él puede dar lugar hasta al reconocimiento de los hijos adulterinos é incentuosos; pero el que habla cree lo contrario, porque el artículo no hace sino establecer una presunción *juris* que, como todas las de su especie, cederá á la prueba en contrario.

El Sr. Escudero se muestra conforme con el artículo; pero indica que para mayor claridad del pensamiento que expresa se diga: "en los *primeros* ciento veinte días," como consta en Gollena, quien motivando esta parte, dice: "La naturaleza no varía su curso y leyes porque el hijo sea ó no legítimo: los períodos de ciento ochenta y de trescientos días, favorables á la filiación legítima, deben también favorecer á la natural; siempre que, según las leyes de la naturaleza, pueda presumirse que el hijo es natural, ó pudo ser concebido siendo libre el padre que lo reconoce, ha de admitirse esta interpretación ó presunción benigna, sobre todo en favor del hijo inocente: *semper in dubiis benigniora preferenda sunt* (1); pero esta presunción es simplemente *juris* y cederá siempre á la prueba en contrario (2)."

El Sr. Ministro de Justicia [Terán] expone su conformidad con el artículo en cuestión; pero no con el sentido que ha parecido darle el Sr. Ramírez, pues, en concepto del exponente, la idea es que aquel de los padres, autor del reconocimiento, si él, separadamente considerado, podía contraer matrimonio en el plazo presumible de la concepción del hijo, cargue con toda la responsabilidad de sus actos. En otros términos, un hombre libre puede reconocer al hijo que ha tenido en mujer casada.

El Sr. Ramírez insiste en la opinión que ha expresado, pues, aunque es muy posible lo que expresa el Sr. Terán, una vez esclarecido que el hijo era adulterino, el reco-

(1) *Dig.*, lib. 50, tít. 17, l. 56.
(2) Gollena, *Proyecto*, sobre el art. 123.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nocimiento vendría por tierra, porque sólo pueden ser reconocidos los hijos naturales.

El artículo, con la adición propuesta por el Sr. Escudero, es aprobado y queda como art. 250 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que el art. 336 francés: «El reconocimiento hecho por el padre sin indicación y conformidad de la madre, no produce efecto sino respecto del primero» fué precedido de serias vacilaciones que persuaden de la necesidad de consignar en el nuevo Codigo un artículo que responda á la idea expresada por aquel. Era, según Boileux, una cuestión muy debatida en otro tiempo la de si el reconocimiento del padre sin la indicación y la confesión de la madre era válido (1). Locré refiere que la sección de legislación había propuesto un artículo redactado así: "Todo reconocimiento sólo de el padre, no confesado por la madre, no tendrá ningún efecto ni respecto del padre ni respecto de la madre, sin perjuicic, sin embargo, de la prueba de la maternidad y de sus efectos contra sólo la madre." En la sesión de 26 de brumario, año X, se adoptó la redacción siguiente: "El reconocimiento del padre, si es desaprobado por la madre, no producirá ningún efecto." El objeto de los autores de estas proposiciones parece que era solamente prevenir el escándalo de muchos reconocimientos de un mismo hijo, y poner á la madre al abrigo de los desagrados que resultarían para ella de una falsa declaración. Sin embargo, en apoyo de otra idea, la importancia de la conformidad de la madre, decía el Primer Cónsul: "El reconocimiento del padre recae sobre un hecho cuya certidumbre no se tiene sino por la confesión de la madre: así, este reconocimiento no prueba nada cuando es aislado. La madre, siempre mejor instruida, podría venir después y dar con más verdad un padre á su hijo."

(1) Boileux, *Op. cit.* tom. 2, pág. 140.

En la discusión se entrevió otro aspecto del debate: ¿es justo subordinar el reconocimiento del padre á la confesión de la madre? Emmery decía: "¿Qué desesperación no sería para un padre no poder reconocer á su hijo si la desaparición ó la muerte de la madre hacía imposible la condición de su confesión?" Podría agregarse á esto que el reconocimiento aislado del padre no presenta mayor inconveniente, puesto que puede ser combatido por la madre y por el hijo. A consecuencia de la observación de Emmery se propuso la siguiente redacción: "El reconocimiento de un hijo natural no tendrá efecto sino respecto de aquel que lo hubiera reconocido." Finalmente, la disposición quedó en los términos del art. 336 antes mencionado. Ve la Comisión por estos precedentes la necesidad de colmar un vacío en el nuevo Código, mediante la siguiente fórmula: *El reconocimiento del padre, sin la confesión de la madre, no produce efectos sino respecto del padre.*

El Sr. Escudero expone que no ve la necesidad del artículo propuesto por el Sr. Méndez, pues ya en el artículo anterior se ha dicho que los padres pueden reconocer separadamente al hijo. Además, podría creerse por argumento *a contrario sensu* que sí era válido aun respecto de la madre el reconocimiento hecho por el padre con la confesión de aquella, ó lo que es lo mismo, que el padre puede revelar el nombre de la madre al reconocer separadamente al hijo, lo que, por ser escandaloso, prohibe un artículo del *Proyecto Sierra* que la Comisión verá más adelante y sin duda aprobará. Tal interpretación es doblemente de temerse después de que ya la Comisión ha aprobado el art. 245 á propósito de la legitimación, aunque allí se halla justificada por el matrimonio posterior entre el padre y la madre, cuyo nombre se supone que aquel mencionó en el acta de nacimiento sin el consentimiento expreso de ella.

El Sr. Méndez contesta que precisamente porque ya se dijo, al hablar del reconocimiento como requisito para la legitimación, que bastaba que él se hubiese hecho por

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el padre, mencionando á la madre con quien después contrae matrimonio, para que ella no tuviera la necesidad de verificarlo expresamente, se hace preciso decir que esa facultad no pertenece al padre cuando se trata de un simple reconocimiento, por la misma razón expresada por el Sr. Escudero.

El Sr. Ramírez cree que para evitar equívocos convendría expresar la idea del Sr. Méndez con una de las fórmulas consultadas en Francia antes de fijarse la redacción definitiva del art. 336. Por ejemplo, la siguiente: «El reconocimiento no produce efecto sino respecto del que lo hace.»

Sujeto el punto á votación, es aprobada por mayoría la redacción propuesta por el Sr. Méndez, la cual queda como art. 251 del nuevo Código.

———

El Sr. Méndez manifiesta que propone también á la Comisión se llene otro vacío del *Proyecto Sierra* relativamente á un punto que es consecuencia del artículo que acaba de aprobarse. Se trata del principio expresado por el art. 337 francés: *El reconocimiento hecho durante el matrimonio por uno de los esposos en favor de un hijo natural que haya tenido antes de contraerlo de otro que no sea su esposo, no podrá perjudicar ni á éste ni á los hijos nacidos de este matrimonio. Sin embargo, surtirá su efecto después de la disolución del matrimonio si no quedan descendientes de él.*

Justificando esta disposición decía Bigot-Preameneu: "No puede depender de uno de los esposos cambiar después de su matrimonio la suerte de su familia legítima, llamando hijos naturales que pedirían una parte de los bienes. Hijos extraños á uno de los esposos no pueden adquirir derechos contrarios á los de los hijos legítimos." Los términos, sin embargo, del texto francés dan lugar á pensar, y es lo justo, que la falta de eficacia del reconocimiento hecho en tales condiciones no llega hasta ser completamente

inútil para el hijo, quien, si bien no puede menguar en lo más mínimo los intereses del cónyuge y de los hijos legítimos, tiene el derecho de llevar el nombre del que lo ha reconocido y de ser alimentado por el mismo. Es la opinión de Boileux, que dice á este respecto: "El reconocimiento de que se trata, aunque comprueba la filiación, no produce sino los efectos compatibles con el interés del cónyuge y con el de los hijos legítimos nacidos ó por nacer: así, el hijo toma el nombre del esposo que lo ha reconocido, porque el interés moral que los hijos nacidos del matrimonio y el cónyuge podrían tener en oponerse á esto, no ha parecido suficiente para impedir un efecto necesario de la comprobación de la filiación; está sometido á la autoridad paterna, á todas las obligaciones y todos los deberes que de ella resultan; puede aun pretender alimentos; pero solamente sobre los bienes de que su autor tiene la administración y el goce. Por ejemplo, si el hijo ha sido reconocido por el marido común en bienes, la pensión alimenticia será soportada por la comunidad según los arts. 1409-1421 (1). Si ha sido reconocido por su madre, dicha pensión se tomará de los bienes personales de que ella tiene la administración y el goce, según los arts. 1449, 1536 y siguientes, 1574 y siguientes (2).

Se aprueba la proposición del Sr. Méndez, y el texto del art. 337 francés viene á ser el art. 252 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra. (Art. 149): *Sólo producirá efecto legal el reconocimiento de un hijo natural cuando se*

(1) Art. 1409. Se forma la comunidad pasivamente: 5° De los alimentos de los esposos, educación y sostenimiento de los hijos y de toda otra cualquiera carga del matrimonio.—Art. 1421. El marido es el único administrador de los bienes de la comunidad. Puede venderlos, enajenarlos ó hipotecarlos sin el consentimiento de la mujer.

(2) Art. 1449. La mujer separada de cuerpo y bienes, ó de éstos solamente, tiene la libre administración de ellos. Puede disponer de sus muebles y enajenarlos. No puede vender sus inmuebles sin consentimiento de su marido, ó sin autorización judicial en el caso de que éste rehuse el consentimiento.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

haga en la partida de nacimiento por ante el encargado del registro civil.....en escritura pública ó testamento.

El Sr. Lacunza manifiesta que indudablemente hay que adicionar el artículo con otros dos modos ó formas de reconocimiento: uno, de que ya hablaba la ley de 10 de Agosto de 1857, es á saber: *la confesión judicial;* y el otro: *acta especial de reconocimiento*, mencionada en el art. 63 ya aprobado por la Comisión.

El Sr. Méndez propone se agreguen á las palabras *confesión judicial* los siguientes calificativos: *directa y expresa*, pues debiendo procurarse en el acto de que se trata como principal requisito la autenticidad, ésta no se obtiene mediante declaraciones que, aunque dadas ante un juez, sólo por incidente se refieran al reconocimiento de un hijo natural.

Con estas adiciones el artículo queda aprobado y pasa á ser el 253 del nuevo Código.

El Sr. Méndez propone que, antes de pasar adelante y para evitar las dudas á que pudiera dar lugar el art. 250, ya aprobado, dudas que se manifestaron de parte del señor Ministro de Justicia, se diga terminantemente: *El reconocimiento no puede hacerse en favor de los hijos naturales de uniones incestuosas ó adulterinas*, reproducción del art. 335 francés.

La proposición es aprobada y queda como art. 254 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (Art. 150): *Cuando el padre ó la madre reconozcan separadamente un hijo, no podrán revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con quien fué habido, ni exponer ninguna circunstancia por donde pueda ser conocida. Además de la pena en que incurran el oficial del registro civil y el escribano*

que consientan en la violación de este artículo, se testarán de oficio las palabras que contengan aquella revelación.

El Sr. Lacunza manifiesta que en su concepto debe aprobarse este artículo, que es consecuencia del 36 y de la prohibición de investigar la paternidad fuera de matrimonio, pues, como asienta Gollena: "no pueden permitirse en el reconocimiento aislado designaciones de nombres ni de circunstancias que sólo pueden conducir á la difamación y al escándalo." (1)

El artículo es aprobado y queda como 255 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 151). "Se prohibe en todo caso la investigación de la paternidad y la maternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio. Sin embargo, todo reconocimiento del padre ó de la madre, ó de los dos juntos, podrá ser contradicho por un tercero interesado, después de muerto él ó los que hicieren el reconocimiento."

El Sr. Ramirez expone que toca el *Proyecto* en el texto anterior uno de los puntos más delicados del Derecho Civil. En el antiguo derecho, del que se conservan algunos restos en nuestra ley de 10 de Agosto de 1857, era cosa corriente la facultad de investigar la paternidad fuera de matrimonio, pues esa ley dice: después de establecer los modos voluntarios de reconocimiento de los hijos naturales (art. 33) .... "Queda, en consecuencia, prohibida toda otra averiguación judicial acerca de ella, á no ser en el caso de que el padre haya sido raptor ó forzador de la madre y la concepción del hijo coincida con el rapto ó la violación forzada, ó cuando el hijo nazca de una mujer durante el tiempo en que un hombre habite con ella una misma casa teniéndola públicamente como su concubina, ó haciéndola pasar por su esposa; pues se admitirá prueba sobre es-

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 125.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tos hechos, y probados que sean plenamente, quedará también probada la paternidad." Esto era retroceder hasta más allá de la ley 11 de Toro, según la cual, á no dudarlo, se entendían hijos naturales los reconocidos por sus padres "con tanto que el padre lo reconozca por su hijo," aunque otra interpretación se haya dado en la práctica á esta ley. En el derecho moderno el punto debe quedar muy claro, pues en ello están interesados la vida privada de los hombres y el honor y tranquilidad de las familias. "Mujeres impudentes, dice Gollena, que especulan sobre las gracias de su sexo y las pasiones del nuestro, sobre el ardor y la inexperiencia de la juventud, como sobre la debilidad de la vejez, y á veces, como yo he visto, sobre la imbecilidad ó mengua intelectual de algún desdichado, escandalizan todos los días al público y á los tribunales clamoreando un honor que jamás conocieron y pidiendo reparaciones pecuniarias, la sola causa y único objeto de su pretendida seducción, porque es muy notable que jamás se dejan seducir por un pobre. La paternidad en el orden de la naturaleza es un misterio; en la imposibilidad de obtener este signo ó sello natural se ha recurrido al sello social y legal del matrimonio; y precisamente fuera de éste se pretendería forzar la naturaleza y penetrar sus misterios para descubrir la paternidad. (1)" Debemos, pues, borrar de la nueva jurisprudencia el principio antiguo: *Creditur virgini prægnanti*, cerrando para siempre la puerta á investigaciones judiciales que, basadas en una dudosa posesión de estado, daban pasto á la maledicencia pública y muy frecuentemente se esforzaban en derivar la paternidad de hechos y actos indiferentes. Esto hizo que los autores del Código francés, rompiendo con el pasado, se resolvieran á incrustar en aquel el principio que se contiene en el art. 340, cuyo sentido absoluto se ha encargado de fijar la jurisprudencia de las sentencias en cuanto á que la prohibición de investigar la paternidad natural

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 128.

comprende aun el caso en que se trate de favorecer al hijo. Como las consideraciones anteriores no militan con igual fuerza tratándose de la mujer, pues como dice Demolombe: "La preñez y el parto son hechos exteriores y positivos que la mujer no casada se esfuerza, ciertamente, y con frecuencia, en ocultar; pero, sin embargo, son susceptibles de prueba," conviene tratar de la investigación de la maternidad en texto aparte del destinado para el padre, pues aquella necesariamente debe gobernarse por otros principios. Así, el que habla propone á la Comisión se diga primero: *Se prohibe absolutamente la investigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio. La prohibición de investigar es absoluta, tanto en favor como en contra del hijo.*

El Sr. Lacunza reconoce que el texto propuesto por el Sr. Ramírez es una consecuencia de los artículos 31 y 253, ya aprobados por la Comisión; pero no puede menos de hacer notar los funestos resultados á que está llamado, si no se le agregan algunas excepciones. Recuerda á este respecto el siguiente caso resuelto por la Corte de Bastía, Córcega: Una joven menor de edad fué seducida por un hombre de más de treinta años, quien, no sólo le hizo promesa de matrimonio, sino que se presentó con ella al pie de los altares y comprometió su fe delante de Dios. Hecha madre dicha joven, que se creía casada, fué abandonada por su seductor, á quien después demandó alimentos. La Corte de Bastía, por sentencia de 3 de Febrero de 1834, rehusó la demanda con fundamento del art. 340 francés (1). Comprenderá la Comisión que esto es horrible y clama porque los legisladores cedan un poco, en casos semejantes, del rigor del principio prohibitivo de la investivación de la paternidad.

El Sr. Méndez manifiesta que el caso resuelto por la Corte de Bastía demuestra la necesidad de acudir siem-

(1) Dalloz, *Rep.* "mariage" núm. 82 11°.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pre al registro del estado civil para legalizar la unión de los sexos, á fin de evitar acontecimientos que no pueden ser más lamentables. Pero desgracias individuales y aisladas, á las que, por lo demás, ha cuidado de proveer con todo el posible celo el legislador, no deben hacerlo retroceder de un principio que, fundado en la misma naturaleza física del hombre, constituye el escudo de su honra y la prenda de su tranquilidad. Esas desgracias no pueden evitarse sino levantando el nivel moral de la sociedad, y no conviene, para remediar un crimen, abrir la puerta á otros iguales, ó quizá mayores, y siempre más escandalosos. Sobre el particular no hay que olvidar las siguientes palabras de Bigot-Preameneu: "El hombre, cuya conducta era la más pura y cuyos cabellos se habían emblanquecido en el ejercicio de todas las virtudes, no estaba al abrigo del ataque de una mujer impudente ó de hijos que le eran extraños. Este género de calumnia dejaba siempre huellas aflictivas, (1)" ó estas otras del tribuno Lahary: "¡Cuán poderosamente una ley prohibitiva de la investigación de la paternidad habría influido sobre nuestras costumbres hace medio siglo! Débese lamentar que tal ley no haya sido promulgada sino hasta nuestros días. Pero, aunque tardía, ella no producirá menos los felices resultados que debemos esperar, puesto que el efecto de las buenas leyes es traer insensiblemente las buenas costumbres. (2)

El artículo propuesto por el Sr. Ramírez es aceptado y queda como art. 256 del nuevo Código.

———

El Sr. Ramírez dice que, como queda ya expresado, todo lo que tiene de peligroso la investigación de la paternidad natural, aparece obvia y hasta conveniente la de la maternidad, cuyos signos exteriores son por sí solos de-

(1) Bigot-Preameneu, *Exp. des motifs*, núm. 33.
(2) Lahary, *Rdpport au Tribunat*, núm. 38.

masiado manifiestos para que pueda temerse el escándalo y el ultraje á la honra privada. La posesión de estado, tratándose de la madre, es susceptible de establecerse mediante la prueba de hechos y circunstancias que no dejan lugar á la menor duda. Sin embargo, como la prudencia aconseja no ir más allá, ni en este punto, de lo que permite el respeto de la vida íntima y privada, aun la facultad de investigar á la madre natural debe sujetarse por el legislador á ciertas restricciones dentro de las cuales tal investigación resulte, no sólo fácil, sino hasta conforme con los deseos de la pretendida madre. A tal efecto, el que habla cree que conviene aclarar un poco más el concepto expresado por el art. 341 francés, que parece dar exclusiva importancia á la *identidad* del hijo, defecto en el cual incurre también nuestra ley de diez de Agosto de 1857, cuyo art. 38 dice: que para probar la maternidad "es preciso que el que se dice hijo natural justifique su identidad con el que parió su pretendida madre, y que ésta no esté casada al tiempo de hacerse la averiguación. La prueba de testigos sólo se admitirá para acreditar dicha identidad, y únicamente cuando haya un principio de prueba que consista en un escrito emanado de la madre ó de cualquiera otra persona interesada en oponerse á la averiguación, ó un certificado del registro civil si el asiento se hubiere hecho sin intervención de la madre ó de su apoderado, etc. Así, propone la siguiente redacción: *Solamente el hijo tiene el derecho para investigar la maternidad, á fin de obtener el reconocimiento de la madre; y únicamente podrá hacerlo concurriendo simultáneamente todas las circunstancias siguientes: 1ª Si tiene en su favor la posesión de estado de hijo natural de aquella, 2ª Si la persona cuya maternidad se reclama no está ligada con vínculo conyugal al tiempo en que se pide el reconocimiento. La posesión de estado, para los efectos de este artículo, se justifica probando simultáneamente que la pretendida madre cuidó de su lactancia y educación y que lo reconoció*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y trató como tal hijo. La prueba de estos hechos podrá hacerse con testigos que no sean de oídas, habiendo un principio de prueba por escrito.

El Sr. Escudero manifiesta que, aunque los hechos en que según la proposición del Sr. Ramírez consiste la posesión de estado de hijo natural respecto de la madre, son ciertamente por todo extremo significativos de ésta, acusando casi, como lo ha dicho el proponente, una verdadera conformidad entre la investigación por parte del hijo y los deseos por parte de la pretendida madre, hay, sin embargo, que fijarse en que se trata del caso en que la madre rehusa confesar su maternidad, por lo cual el hijo se ve precisado á demandarla judicialmente. En estas circunstancias, según el Sr. Ramírez, el hijo que logra probar su identidad con el producto de determinada mujer, que ésta cuidó de su lactancia y educación, y que lo trató y reconoció como tal hijo, llegando hasta afirmar esto en un escrito, debe detenerse en su intento legítimo y nobilísimo de encontrar á su madre si ésta se encuentra ligada con vínculo conyugal con una persona absolutamente extraña. Esto mismo dice la ley de 10 de Agosto de 1857; pero el que habla hace notar con Regnier, que los miramientos debidos á la madre no deben llegar hasta rehusar al hijo la facultad de probar el estado que le pertenece. Por esta razón no fué aceptada en el Código francés la indicación de Maleville, que decía: "que la prueba de la maternidad no sea admitida cuando la mujer contra quien se dirija esté casada con otro individuo que aquel de quien el reclamante se pretende hijo, si ella, además, esmadre de otros hijos (1).»

El Sr. Ramirez contesta que las observaciones del Sr. Escudero son muy atendibles, y puede la Comisión aceptarlas, si lo estima conveniente; pero el que habla insiste en la taxativa de que se trata en debido respeto á la paz de los matrimonios, que pudiera perturberse con el escán-

(1) Locré, *La Legislat. civ. comm. et crim. de la France*, tom. 6, pág. 125 á 126.

dalo de un juicio sobre investigación de la maternidad en contra de la esposa. Ésta, por lo demás, puede, si tal es su voluntad, reconocer al hijo natural habido antes de su matrimonio, en ejercicio de la facultad que le otorga el art. 252 ya aprobado.

La redacción propuesta por el Sr. Ramírez es aprobada y queda como art. 257 del nuevo Código.

El Sr. Ramírez manifiesta que, aunque ya la Comisión acaba de aprobar los dos artículos referentes á la prohibición de investigar la paternidad y maternidad fuera de matrimonio, no está por demás asentar en artículo especial que esa prohibición subsiste, á pesar de la obligación contraída por el pretendido padre ó madre, de dar alimentos al que reclama la filiación, pues la ley 7.ª, tít. 19, Partida 4.ª no ha dejado de autorizar, en concepto de algunos, la investigación de que se trata, en aquellas circunstancias. La Comisión no ha de ignorar los pormenores de cierto litigio ventilado ante nuestros tribunales en los años de 1854 á 1855 y fallado respectivamente por el Juez 2.º de lo Civil y 3.ª Sala del Tribunal Supremo de Justicia, pues de él da extensamente cuenta nuestro compañero el Sr. Méndez en la *Gaceta de Tribunales* de que es Director (1). Se trataba de una demanda sobre continuación de pensiones alimenticias en favor del hijo de una mujer con quien se afirmaba haber tenido relaciones ilícitas el demandado, fruto de las cuales se decía ser tal hijo, á quien éste había siempre alimentado. El actor afirmaba que la citada ley de Partida daba entrada á la prueba de presunciones y conjeturas, entre las cuales se cuenta la dación de alimentos. El demandado había contestado que ese antecedente sólo era efecto de caridad y filantropía por tratarse de la familia de un criado ó servidor suyo. La sentencia de 5 de Agosto de

(1) *Gaceta de Tribunales*, tomo 3, páginas 244 á 248.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

1854, que puso fin á este litigio, declaró que el demandado no estaba obligado á la prestación alimenticia, porque no aparecía que "hubiera protegido directa y exclusivamente á la madre del pretendido hijo con alguna mensualidad fija y segura, sino que esa protección fué extensiva á toda la familia de aquella con el carácter de socorro," lo que quiere decir que, si lo contrario hubiera resultado de las actuaciones, la paternidad natural hubiera quedado al menos provisionalmeste establecida, á reserva de lo que se decidiese en el juicio ordinario sobre filiación. Como demandas así fundadas, en el deleznable é indiferente motivo de dádivas anteriores, pudieran presentarse todavía ante nuestros tribunales, principalmente contra las mujeres, el que habla propone se diga: *La obligación contraida de dar alimentos, será eficaz para exigir su cunplimiento, mas no para constituir prueba, ni aun presunción de paternidad ó maternidad. Tampoco para investigarla.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 258 del nuevo Código.

El Sr. Ramirez propone que el artículo siguiente sea la segunda parte del 151 del *Proyecto Sierra*, que quedó pendiente y dice: *Todo reconocimiento del padre ó de la madre, ó de los dos juntos, podrá ser contradicho por un tercero interesado, después de muerto él ó los que hicieron el reconocimiento.* Motivando Gollena esta disposición, dice: "El art. 339 francés permite también impugnar la reclamación del hijo; pero según nuestro artículo queda desechada, aun para el caso de maternidad. Es imposible prever y designar los diversos intereses que pueden atravesarse en esta materia; el artículo salva todos; pero es necesario que el interés sea *actual* y de presente; no bastará un interés eventual y de futuro. Un hermano, por ejemplo, no podrá impugnar el reconocimiento de un hijo natural hecho por otro hermano, mientras éste viva, aunque

después de su muerte y en su herencia intestada pueda resultar perjudicado por los derechos hereditarios que el reconocimiento ha atribuido al hijo natural. El perjuicio puede por mil causas no resultar cierto, y de todos modos no puede resultar hasta la muerte del hermano; tendrá, pues, que aguardar hasta esta época para impugnar el reconocimiento; y deberá hacerlo, atacando la forma del instrumento por no ser auténtica ó ser irregular, ó bien, su contexto, si ha sido dictado por el fraude ó la mentira; pero sin entregarse por esto á excepciones odiosas ni á pesquisas infamantes, de las que no hubiera prueba ni aun indicio en el mismo instrumento." (1)

La proposición del Sr. Ramírez es aprobada y queda como art. 259 del nuevo Código.

El Sr. Méndez propone se llene un vacío en el *Proyecto Sierra*, rindiendo el debido homenaje á la declaración de la madre respecto de la paternidad natural. Al efecto, presenta la siguiente redacción: *Siempre que la madre contradiga el reconocimiento que se haya hecho, ó pretenda hacerse de la paternidad de un hijo que ella reconoce por suyo, bastará su sola contradicción para invalidar aquel reconocimiento con tal que el hijo consienta en reconocerla por madre. En tal evento no podrá conservar el hijo ninguno de los derechos que le diera aquella paternidad.*

La redacción es aceptada y queda como art. 260 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 152]: *El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento.*

---

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 127.—Demolombe, tomo 5 ,núms. 435 y 452.—Ballena, tom. 2, art 333, pág. 163.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra [art. 153]: *Si el hijo reconocido es menor, podrá reclamar contra el reconocimiento cuando llegue á la mayor edad. El término para proponer esta acción, será el de cuatro años, que comenzarán á correr desde que el hijo sea mayor, si antes tenía noticia del reconocimiento; si no la tenía, desde la fecha que la adquirió.*

El Sr. Lacunza manifiesta con Gollena que, aunque el reconocimiento por punto general sea favorable al hijo, *invito beneficium non datur*, y además, si el reconocimiento da derechos al hijo, también le impone obligaciones y á nadie pueden imponerse contra su voluntad. Hace observar á la Comisión que, como el *Proyecto Sierra* no dice en qué forma ha de hacerse el reconocimiento del hijo menor de edad, bueno sería expresarlo en el nuevo Código. A este fin, propone se agregue la siguiente frase: *ni el menor sin el de su tutor, si lo tiene, ó de uno que se le nombrará especialmente para el caso.*

El artículo, así adicionado, es aprobado y queda como 261 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, aunque ya se deja entender con lo expresado por el art. 247 del nuevo Código, no cree por demás expresar en términos claros que puede reconocerse al hijo no nacido y al muerto que ha dejado descendientes. Así propone se diga: *Puede hacerse reconocimiento de un hijo que aún no ha nacido y también del que está ya muerto, si hay descendientes de él.*

La redacción es aprobada y queda como art. 262 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone á la Comisión apruebe el art. 153 del *Proyecto Sierra*, que es el 129 del de Gollena,

remitiéndose para los motivos á los expuestos por el jurisconsulto español.

El artículo es aprobado y queda como 263 del nuevo Código.

El Sr. Méndez propone se proclame en el nuevo Código un principio que tiende á triunfar en la jurisprudencia francesa, después de haber sido muy dudoso en la doctrina: la irrevocabilidad del reconocimiento, aun hecho en testamento. "Nos parece, dice Duranton, que el estado del hijo no puede serle arrebatado; el reconocimiento no es otra cosa que la declaración del hecho de la paternidad. Esta no puede estar, como la disposición acerca de los bienes, subordinada á la condición de la perseverancia de la voluntad del declarante, porque no importa una liberalidad. Los efectos pecuniarios que de ella derivan vienen de la ley más bien que del hombre, quien, al hacerla, no hace sino pagar homenaje á lo que ha creído ser la verdad. El principio de esta declaración no está en el testamento, sino en el hecho de la paternidad; el acto no es sino el modo de manifestación de este hecho, y, puesto que él es auténtico, ha fijado el estado del hijo como si el reconocimiento se hubiera efectuado mediante cualquiera otro acto público. Se ha adquirido el estado y ya no debe depender de las variaciones del testador, es decir, de la instabilidad de su voluntad. Que así sea para las disposiciones sobre los bienes, nada más justo; la ley lo ha querido y con razón; pero en esto sólo consiste el testamento; mientras que el reconocimiento del hijo no es una disposición sobre los bienes, por más que la ley, por vía de consecuencia, le atribuye efectos pecuniarios. Ahora bien, así como esta confesión sería irrevocable, si se hubiera hecho en cualquier otro acto auténtico, debe serlo igualmente, aunque verificada en un testamento (1)." Al que habla parece esto evidente, por lo

(1) Duranton, tomo 2, núm. 119, edic. de 1841.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cual propone á la Comisión se diga: *El reconocimiento una vez hecho no es revocable por el que lo hizo, y si se ha verificado en testamento, aunque éste se revoque, no se tiene por revocado el reconocimiento.*

La redacción es aprobada y queda como art. 264 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 154]: *El hijo reconocido por el padre ó la madre, ó por los dos de común acuerdo, tiene derecho:* 1.° *A llevar el apellido del que le reconozca.* 2.° *A ser alimentado por éste; y* 3.° *A percibir la porción hereditaria que le señala* el Código Civil en el título de las herencias sin testamento.

La Comisión acuerda aprobar este artículo, que queda como 265 del nuevo Código, con la sola modificación del último inciso, que se conviene en redactar como sigue: "á percibir la porción hereditaria que le señala *la ley*."

Proyecto Sierra (art. 155): *Siempre que en virtud de sentencia ejecutoria resultare que el hijo reconocido procede de unión adulterina ó incestuosa, no dispensable, será nulo el reconocimiento y aquel no tendrá más derecho que á los alimentos.*

El Sr. Lacunza expone que para evitar dudas y atento que el siguiente artículo del *Proyecto Sierra* trata de las excepciones del principio prohibitivo de la investigación de la paternidad, se agregue al texto la siguiente frase: "lo mismo sucederá cuando no habiendo reconocimiento de éste, resulte probada su filiación según el artículo siguiente y las calidades de incestuoso y adulterino."

El Sr. Ramírez manifiesta que no considera necesaria la adición consultada por el Sr. Lacunza, pues el concepto que ella entraña se desprende claramente del art. 254 ya aprobado por la Comisión.

El Sr. Méndez dice que tal vez fuera necesaria la adición que consulta el Sr. Lacunza, pues el art. 335 del Código francés no impidió se pusiera el 342 que textualmente dice: "No se admitirá la demanda del hijo con relación á la paternidad ó maternidad en los casos en que, según el artículo 335, no proceda el reconocimiento." Se inclina, sin embargo, á la opinión del Sr. Ramírez, pues desde el momento en que los hijos espurios, dado el sistema seguido por la Comisión, no pueden tener filiación, para este fin hay que prohibir la revelación de la paternidad ó maternidad incestuosa ó adulterina, lo mismo en el reconocimiento voluntario que en el forzoso, porque, como decía Lahary ante el Tribunado: "El nacimiento de un hijo, fruto del incesto ó del adulterio, es una verdadera calamidad para las costumbres. Lejos de conservar ninguna huella de su existencia, sería de desear que pudiera extinguirse hasta su recuerdo." (1)

La adicion propuesta es rechazada, quedando aprobado el artículo del *Proyecto*, que pasa á ser el 266 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 156): "La prohibición de inquirir la paternidad ó maternidad no impide la declaración que de ella hagan los tribunales á instancia de las partes interesadas, cuando la época de la concepción coincida con los delitos que puedan suponerla violenta."

El Sr. Ramírez manifiesta que el texto anterior adolece de cierta vaguedad, no poco ocasionada á graves inconvenientes en la práctica. En esta virtud, propone se diga: *En los casos de rapto ó violación, cuando la época del delito coincida con la concepción, podrán los tribunales, á instancia de las partes interesadas, declarar la paternidad ó maternidad.* Es la idea de nuestra ley de 10 de Agosto de 1857 (art. 33), expresada con mayor claridad.

---

(1) Locrè, tom. 3, pág. 215.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esta redacción comprende las dos especies conocidas de rapto: el de violencia y el de seducción á que se refieren nuestras leyes patrias (1), y es preferible al art. 340, francés, que sólo habla de rapto, aunque la mayor parte de los autores lo hace extensivo también á la violación (2).

La redacción propuesta por el Sr. Ramírez es aprobada y queda como art. 267 del nuevo Código.

TITULO VI.

De la menor edad.

Proyecto Sierra (art. 157): *Las personas de ambos sexos que no hayan cumplido veintiún años, son menores de edad.*

El artículo es aprobado y queda como 268 del nuevo Código.

TITULO VII.

De la patria potestad.

Capítulo I.

De los efectos de la patria potestad respecto á las personas de los hijos.

Proyecto Sierra (art. 158): *Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condición, deben honra y respeto á sus padres.*

Es el art. 143 del Proyecto de Gollena que, aprobado por la Comisión, pasa á ser el 269 del nuevo Código.

---

(1) L. 15, tít. 2, Part. 4ª.

(2) Boileux, tom. 2, pág. 160.—Toullier, núm. 941.—Demolombe, tom. 5, número 491.

Proyecto Sierra (art. 159): "Los hijos menores de edad, están bajo la patria potestad del padre."

El Sr. Lacunza cree que este texto, que es el artículo 144 del Proyecto de Gollena, obedece á un sistema sobre el personal para la patria potestad, que es necesario cambiar, de acuerdo con la naturaleza y nuestras costumbres cristianas. Según ese sistema, la patria potestad sólo pertenece al padre y de ninguna manera á la madre y menos á los abuelos. Pero la Comisión comprenderá cómo es debido dar entrada también á esos seres y conforme á una rigurosa gradación en el ejercicio de una autoridad para la cual tanto los recomiendan su innegable afecto por los hijos, su desinterés y respetabilidad. Además, no se toma en cuenta que la emancipación otorgada al menor de edad, lo liberta de la patria potestad. En consecuencia, el que habla, propone la siguiente redacción: *Los hijos menores de edad y que no hayan sido emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que puedan tenerla.*

La redacción es aprobada y queda como art. 270 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, supuesta la aprobación anterior, se hace necesario, en consonancia con el capítulo sobre reconocimiento, expresar no sólo quiénes ejercen la patria potestad sino también sobre quiénes se ejerce. Al efecto, propone se diga: *La patria potestad se ejerce sobre..... los hijos legítimos y los naturales reconocidos. Se ejerce por el padre, ó en su falta por la madre: en falta de ambos, por el abuelo paterno: en su falta, por el materno: en su falta, por la abuela paterna, en su falta, por la abuela materna.*

El Sr. Ramírez se muestra de acuerdo con la anterior redacción; pero, como la patria potestad comprende

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Esta redacción comprende las dos especies conocidas de rapto: el de violencia y el de seducción á que se refieren nuestras leyes patrias (1), y es preferible al art. 340, francés, que sólo habla de rapto, aunque la mayor parte de los autores lo hace extensivo también á la violación (2).

La redacción propuesta por el Sr. Ramírez es aprobada y queda como art. 267 del nuevo Código.

TITULO VI.

De la menor edad.

Proyecto Sierra (art. 157): *Las personas de ambos sexos que no hayan cumplido veintiún años, son menores de edad.*

El artículo es aprobado y queda como 268 del nuevo Código.

TITULO VII.

De la patria potestad.

Capítulo I.

De los efectos de la patria potestad respecto á las personas de los hijos.

Proyecto Sierra (art. 158): *Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condición, deben honra y respeto á sus padres.*

Es el art. 143 del Proyecto de Gollena que, aprobado por la Comisión, pasa á ser el 269 del nuevo Código.

---

(1) L. 15, tít. 2, Part. 4ª.

(2) Boileux, tom. 2, pág. 160.—Toullier, núm. 941.—Demolombe, tom. 5, número 491.

Proyecto Sierra (art. 159): "Los hijos menores de edad, están bajo la patria potestad del padre."

El Sr. Lacunza cree que este texto, que es el artículo 144 del Proyecto de Gollena, obedece á un sistema sobre el personal para la patria potestad, que es necesario cambiar, de acuerdo con la naturaleza y nuestras costumbres cristianas. Según ese sistema, la patria potestad sólo pertenece al padre y de ninguna manera á la madre y menos á los abuelos. Pero la Comisión comprenderá cómo es debido dar entrada también á esos seres y conforme á una rigurosa gradación en el ejercicio de una autoridad para la cual tanto los recomiendan su innegable afecto por los hijos, su desinterés y respetabilidad. Además, no se toma en cuenta que la emancipación otorgada al menor de edad, lo liberta de la patria potestad. En consecuencia, el que habla, propone la siguiente redacción: *Los hijos menores de edad y que no hayan sido emancipados, están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que puedan tenerla.*

La redacción es aprobada y queda como art. 270 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, supuesta la aprobación anterior, se hace necesario, en consonancia con el capítulo sobre reconocimiento, expresar no sólo quiénes ejercen la patria potestad sino también sobre quiénes se ejerce. Al efecto, propone se diga: *La patria potestad se ejerce sobre..... los hijos legítimos y los naturales reconocidos. Se ejerce por el padre, ó en su falta por la madre: en falta de ambos, por el abuelo paterno: en su falta, por el materno: en su falta, por la abuela paterna, en su falta, por la abuela materna.*

El Sr. Ramírez se muestra de acuerdo con la anterior redacción; pero, como la patria potestad comprende

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

las personas y bienes de los hijos, pide se diga: se ejerce sobre *las personas y los bienes* de los hijos, etc.

Así es aprobada y queda como art. 271 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que para evitar el inmerecido éxito de los reconocimientos tardíos y las más veces interesados de los hijos naturales, convendría declarar que la patria potestad no puede ser la consecuencia de ellos, para lo cual habría que fijar una cierta edad del hijo, desde la cual, en adelante, el reconocimiento ya no produce la patria potestad.

El Sr. Ramírez dice que comprende la idea del Sr. Méndez y la encuentra muy justa y conveniente, pues hasta contribuirá á que los autores de esas desgracias que arrojan al mundo seres privados de un nombre, se apresuren á reparar su falta, sin esperar á que el tiempo ó tal vez la fortuna del hijo les indiquen que es llegado el momento de hacerlo. Sin embargo, el que habla estaría porque tal declaración no se hiciese extensiva á la madre, por razones que no se ocultarán á la Comisión.

El Sr. Méndez expone que su mente está de acuerdo con el Sr. Ramírez y propone la siguiente redacción: *La patria potestad sobre los hijos naturales reconocidos no corresponderá al padre ó á los abuelos paternos, sino cuando el reconocimiento ha sido hecho por el primero, antes de que el hijo cumpla siete años. Fuera de este caso, la patria potestad sobre los hijos naturales se ejercerá por la madre que los reconozca, y en su defecto, por los abuelos maternos, en el orden establecido en el artículo anterior.*

La redacción es aprobada y queda como art. 272 del nuevo Código.

Proyecto Sierra [art. 160]: Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar voluntariamente la casa paterna sin permiso de su padre."

El Sr. Lacunza manifiesta que el texto anterior requiere necesariamente algunas reformas en consonancia con el art. 271 del nuevo Código, y atento que puede la autoridad ordenar la separación del hijo de la casa de sus padres, unas veces por servicio público, otras por indignidad de los padres para continuar ejerciendo la patria potestad. Así, el que habla, propone se diga: *Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar voluntariamente la casa del que la ejerce, sin permiso de éste ó decreto de la autoridad pública competente.*

La redacción es aprobada y queda como art. 273 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 161): "El padre dirige la educación de sus hijos, y es su legítimo representante en juicio."

El Sr. Lacunza manifiesta que hay que concretar el artículo al punto de educación, dejando para precepto posterior lo relativo á la representación del hijo en juicio y fuera de él. Como la educación es principalmente la formación moral del niño, evidentemente á nadie mejor que al padre puede confiarse el ministerio de darla; pero tanto porque á ese importante y trascendental trabajo no podrá menos que contribuir la madre, cuanto porque la Comisión ha acordado encomendarle también á ella la patria potestad, en defecto del padre, precisa emplear también en este texto una frase genérica, que abrace todos los incisos del art. 271. Si en la *educación*, base del porvenir del hijo, toda autoridad debe otorgarse á los padres, no sucede lo mismo con la *instrucción*, ó sea con los estudios que el hijo emprenda para proporcionarse una carrera ú oficio. Para éstos es justo y conveniente dejar al hijo cierta independen-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

cia; pero siempre dentro de la autoridad paterna. La fórmula menos equívoca puede encontrarse en el art. 148 del Código austriaco, bastando, en concepto del que habla, expresar la idea de la libertad del hijo, una vez llegado á la mayor edad, para abrazar la carrera que más le acomode, sin necesidad de decir que podrá el hijo acudir á los tribunales, cuya intervención es ya entonces innecesaria. Así propone se diga: *El que tiene al hijo bajo su patria potestad, dirige su educación y puede educarle para la carrera á que le destina; pero el hijo, llegado á la mayor edad, puede tomar la que le acomode.*

La fórmula es aprobada y queda como art. 274 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 162): "El padre tiene la facultad de corregir y castigar mesuradamente á sus hijos, y cuando esto no baste, podrá imponerles con intervención del juez del domicilio, hasta un mes de detención en los establecimientos correccionales destinados al efecto."

El Sr. Lacunza se muestra de acuerdo con el artículo, que es el 147 del Proyecto de Gollena, quien lo motiva invocando leyes romanas y españolas. Estas últimas, inspiradas en el más acendrado espíritu cristiano, no se ocupan tanto en los derechos y prerrogativas de la autoridad paterna, cuanto en sus deberes y graves obligaciones en favor de los hijos, seres débiles y sin experiencia colocados por Dios bajo la protección de aquella, á fin de que con la educación y su necesario complemento, la corrección, se preparen á ser miembros útiles del cuerpo social. Así, la ley 18, tít. 18, Partida 4.ª dice que "el castigamiento deue ser con mesura e con piedad," agregando, como dice la glosa, que *si pater crudeliter castigat..... cogitur eos* [los hijos] *a patria potestate liberare.* El mismo concepto fundamental se contiene en la ley 9, tít. 8, Partida 7.ª la cual conmina con pena de destierro por cinco años

y hasta con la capital al padre cruel y desmesurado en el castigo. Este deber, más bien que derecho de corrección, pertenece á los padres respecto de los hijos, en toda edad, como fundado en la piedad del amor paterno, y ninguna indicación siquiera se nota en las leyes patrias sobre intervención de la autoridad pública en los asuntos domésticos. En este particular la legislación de las Partidas, tan fiel en lo general al Derecho Romano, se separa de él, pues en éste sí se habla, como á manera de restricción, del deber del padre de acudir á la autoridad, si los primeros castigos inferidos al hijo no son suficientes para corregirlo. En este sentido, no pueden ser más terminantes las dos siguientes leyes romanas: *Quem* (el hijo), *si pietœtem patri debitam non agnoscit, castigare jure patriœ potestatis non prohiberis: acriore remedio usurus, si in pari contumacia perseveraverit; eumque prœsidi provinciœ oblaturus, dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris.* (1) *Congruentius quidem videtur, intra domum inter te ac filios tuos, si quœ controversiœ oriuntur, terminari. Sed ita res fuerit, ut* [*pro*] *injuriis eorum et ad jus experiendum, et ad vindictam processeris, aditus prœses provinciœ super disceptationibus quidem pecuniariis consuetum exerceri jubebit ordinem juris* etc. (2) Fácil es ver que el texto del *Proyecto Sierra* no se separa en lo substancial de estas tradiciones, que desde luego se recomiendan por la confianza que parecen tener en los padres en cuanto al buen ejercicio de la patria potestad. Simplemente se permitiría el que habla proponer á la Comisión, agregase al texto la siguiente frase que se encuentra en Gollena: "En este caso no se extenderá ninguna diligencia por escrito, y bastará la orden del padre con el visto bueno del juez," que el jurisconsulto español motiva diciendo: Es una precaución sabia y delicada para salvar el decoro del hijo y aun el de

(1) Cod., lib. 8, tít. 47, l. 3.
(2) Cod., lib. 8, tít. 47, l. 4.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la familia: no conviene dejar rastros de una corrección ó castigo que debe mirarse como doméstico; los males ó desgracias de esta especie *tristitia operiundœ.*

El Sr. Ramírez expone que encuentra mucho mejor y más práctico el sistema del Código francés sobre el derecho de castigar. Cree que no debe desatenderse del todo la edad del hijo en este punto, pues si en los primeros años cualquier castigo discurrido por el padre tiene que ser racional y conveniente, á cierta edad él puede volverse causa de desesperación é irritabilidad para el hijo y resultar, por lo mismo, contraproducente, si no se le acompaña, á modo de prestigio y respetabilidad, con la orden de la autoridad pública. Hay también que tomar en cuenta la posibilidad de que el padre no obre siempre con toda justificación, sino, como decía una de las leyes de Partida citadas por el Sr. Lacunza, con crueldad y desmesuradamente. El que habla propone, en consecuencia, se abandone el sistema de Gollena y se diga: *El padre tiene la facultad de corregir y castigar á sus hijos templada y mesuradamente; mas si esto no bastare para enmendarlos, y las faltas que cometieren fuesen graves, podrán emplear los siguientes medios de corrección: 1.º Hacer arrestar, hasta por un mes en un hospicio, casa de corrección ú otro lugar semejante, al hijo culpable que haya cumplido once años y no exceda de diez y seis. 2.º Hacerlo arrestar hasta por seis meses, desde la edad de diez y seis años hasta la emancipación. En el primer caso, la facultad del padre es absoluta, y el juez á quien pida la orden de arresto la expedirá sin dilación y sin investigar sus motivos. En el segundo es igualmente absoluta la facultad por el mismo período; mas para prolongar el arresto, y estrecharlo si así conviniere, inquirirá el juez los motivos, y encontrándolos fundados, decretará la prolongación dentro del límite fijado.*

La Comisión se decide por esta redacción, que queda como art. 275 del nuevo Código.

———

El Sr. Ramírez propone también que, en vez de la adición indicada por el Sr. Lacunza, se siga en artículo aparte: *Los procedimientos á que diere lugar el artículo anterior, se ejecutarán verbalmente, sin forma ni figura de juicio, y sin dejar otra constancia por escrito que la minuta de la orden de arresto, en la cual tampoco se expresarán sus motivos.*

La fórmula es aprobada y queda como art. 276 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 163). *Si el padre ha contraído segundas ó ulteriores nupcias y el hijo es uno de los habidos en los anteriores matrimonios, deberá manifestar al juez los motivos de disgusto que el hijo le haya dado; y el juez á su instancia ordenará la detención, si encuentra fundadas las quejas del padre. Esto mismo se observará cuando el hijo esté ejerciendo algún cargo .... ú oficio, aunque el padre no haya contraído segundo matrimonio.*

El Sr. Ramírez manifiesta que las prevenciones del art. 275 deben sufrir alguna modificación tratándose de padre ó madre que ha pasado á segundas nupcias y en orden á los hijos del primer lecho, pues el cambio de situación en la familia engendra motivos de descontento que frecuentemente no acusan culpabilidad en los hijos. Estos, además, en lo general, son dignos de mayor consideración cuando ya ejercen algún cargo, oficio ó profesión. Así propone se diga: *La madre ejercerá, en su caso, la facultad concedida al padre en el art. 275, si no contrajere segundas nupcias. Contrayéndolas, la ejercerá con la restricción que impone el artículo siguiente.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 277 del nuevo Código.

———

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Ramírez dice que por su parte acepta el art. 163 del *Proyecto Sierra;* pero indica, para comprender, en su última parte, todos los casos debidos, que se diga: *cargo industrial, oficio ó profesión.*

Con esta modificación el artículo es aprobado y pasa á ser el 278 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 164): Serán de cuenta del padre los gastos y alimentos devengados por el hijo detenido de su orden ó en virtud de sus reclamaciones. El padre siempre es árbitro de levantar la detención del hijo."

El Sr. Ramírez dice que el texto anterior está tomado del art. 149 del Proyecto de Gollena, quien á su vez lo tomó de los arts. 378 y 379 franceses. Motivando el jurisconsulto español esta doble disposición, dice, en cuanto al primer punto: "El padre interpela ó invoca la autoridad pública: justo es, pues, que pague los gastos á que da ocasión y que se hacen para servirle: los alimentos son siempre una carga natural y civil del padre." En cuanto al segundo punto, arbitrio del padre para levantar la detención del hijo, el mismo jurisconsulto da por razón, que "aquí no se trata de delito público sino de indisciplina ó faltas domésticas; no es la sociedad sino el padre quien castiga." El que habla cree que el texto debe hacerse extensivo á la madre, y en cuanto al arbitrio de que se trata, declarar que, si el padre no lo ejerce, la detención subsistirá por el tiempo fijado, aun cuando antes de su vencimiento el hijo llegue á la mayor edad. Así propone, quede el artículo: *Serán de cuenta del padre ó de la madre los gastos y alimentos devengados por el hijo detenido de su orden ó en virtud de sus reclamaciones. Ellos siempre son árbitros de levantar la detención del hijo; pero si no lo hicieren, deberá ésta cumplirse, aun cuando el hijo llegue á la mayor edad durante el término de ella.*

El Sr. Escudero pregunta por qué se habla solamente del padre y de la madre, y no de los abuelos á quienes la Comisión ha decidido otorgar la patria potestad, en cuyo ejercicio pueden también verse obligados á castigar á sus nietos.

El Sr. Ramírez contesta que es justa la observación del Sr. Escudero; pero que, para no aglomerar muchas ideas en un mismo texto, podría ponerse uno aparte.

La redacción propuesta por el Sr. Ramírez, es aprobada y queda como art. 279 del nuevo Código.

El Sr. Escudero, como resultado de su anterior observación, propone se diga: *Todo el que está en ejercicio de la patria potestad, tiene las facultades que señalan los artículos anteriores.*

La proposición es aceptada y queda como art. 280 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, para terminar este capítulo, conviene, volviendo á la segunda parte del art. 161 del *Proyecto Sierra* que quedó pendiente, establecer la prohibición del sujeto á patria potestad para comparecer en juicio; pero no sólo para esto, sino también, para contratar, acerca de lo cual no son suficientemente explícitos ni el Proyecto Sierra ni el Goyena. La Comisión comprenderá, en efecto, que no es bastante decir que el padre es el administrador legal de los bienes de sus hijos menores, para que se entienda que la incapacidad de estos se extiende hasta celebrar contratos. Así, el que habla propone se diga: «*Los hijos que estan bajo la patria potestad no pueden contraher ni hacer acto alguno judicial ó extrajudicial,*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sin consentimiento del que los tiene en ella. Este es el legítimo representante de ellos y administrador legal de los bienes que les pertenecen.»

El Sr. Escudero se muestra de acuerdo con la anterior redacción; pero por una parte cree estar mejor colocada en el capítulo siguiente sobre *efectos de la patria potestad en cuanto á los bienes* y por otra, piensa que debe ser adicionada, expresando algunas excepciones. Desde luego, y de esto tendrá oportunidad de hablar más adelante, una evidente justicia exige se le deje al hijo toda independencia respecto de su padre, al menos en cuanto á aquellos bienes que él ha adquirido con su personal trabajo ó con una profesión ó industria. Si el hijo, aunque menor de edad, ha demostrado ser capaz de labrar una fortuna con sus esfuerzos propios y personales, parece natural que no se le declare incapaz para conservar aquella, impidiéndole celebrar contratos y aun comparecer en juicio en defensa de bienes que le pertenecen, á no ser con el consentimiento del que le tiene bajo patria potestad. Era ésta una excepción reconocida desde el Derecho romano, pues, dando una idea el jurisconsulto Ulpiano, en sus Comentarios al Edicto, de toda la fuerza del Senado-consulto Macedoniano, cuya aplicación alcanzaba hasta los Consules, dice: *nisi forte castrense peculium habeat; tunc enim Senatusconsultum cessavit* (1). En el mismo sentido se expresa la legislación española: «Ca los dueños dellas pueden fazer destos bienes atales lo que quisieren; e non han derecho en ellas, nin gelas pueden embargar, padre, nin hermano,

(1) *Dig.* lib. 14, tít. 6, l. 1, § 3.

nin otro pariente que ayan (1).» La segunda excepción que, en concepto del que habla, debe expresarse, se refiere al caso en que el hijo sea perito en alguna ciencia ó arte. Sujetarlo, en tales circunstancias, para contratar ó comparecer en juicio, al consentimiento del padre, es ponerse en contradicción abierta y flagrante con la realidad. Supóngase, por ejemplo, que se trata de un menor, abogado, que quiere defender sus particulares bienes en juicio. El que puede comparecer validamente ante los Tribunales en servicio de intereses ajenos, ¿no lo podrá, tratándose de los propios? Esto parece un contrasentido que ya se comprendía desde la jurisprudencia romana, como es de verse en el Enchiridion (Manual) de Pomponio, quien pone en boca del jurisconsulto Quinto Mucio estas palabras: *turpe esse patricio, et nobili, et causas oranti jus, in quo verseretur ignorare* (2).

El Sr. Lacunza responde que su idea ha sido asentar un principio general, cuya colocación no puede ser otra que el Cap. 1º sobre *patria potestad*, puesto que se trata de incapacidades del sujeto á ella. Está conforme con las dos excepciones de que ha hablado el Sr. Escudero; pero encerrándolas dentro de ciertos límites, según aconseja la razón y lo ha acreditado la experiencia. Asi, en cuanto á la primera, el que habla, á reserva de repetirlo cuando se trate de las excepciones del principio sobre incapacidad del hijo, entiende que por muchas que sean las consideraciones que hayan de guardársele toda vez que ha sido capaz de labrar una fortuna con sus propios esfuerzos, siempre su menor edad aconseja someterlo á la autoridad pa-

(1) Partida 4, tít. 17, l. 1. 6 y 7.
(2) *Dig.* lib. 1, tít. 2, l. 2. § 43.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

terna, en lo que respecta á ciertos contratos y sobre determinados bienes. Así el Código Francés (art. 482) declara que el menor, aun emanicipado, no podrá intentar acciones sobre bienes inmuebles ni contestar á las que en este punto se entablen contra él. Del mismo modo el art. 255 del Código Civil Chileno dice: «No se podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aun pertenecientes á su peculio profesional, sin autorización del Juez con conocimiento de causa.» La razón de estas disposiciones no es otra que la importancia y trascendencia de los contratos sobre bienes inmuebles, que sin las precauciones tomadas por la ley, podrían ser fácil é impunemente arrebatados al menor. En cuanto á la segunda excepción propuesta por el Sr. Escudero, parece á primera vista incontestable; pero, como asienta Vinnio que ha tratado magistralmente este punto, la profesión del derecho y de las artes no tiene nada de común con la administración de los bienes, adquiriéndose la prudencia con la práctica de los negocios (1): «Acerca de buscar dinero y de emplearlo y de hacer buen uso de él, decía Ciceron, se disputa mejor por algunos buenos varones de los que están sentados en medio de la plaza de Jano, que no por los filósofos en escuela ninguna (2)» Puede, pues, el hijo de familia ser todo lo ilustrado que se quiera suponer; puede aún llevar dignamente el título de abogado; siempre la prudencia aconseja no permitirle comparezca en juicio, ya como actor, ya como reo, en defensa de sus propios intereses, por más que se muestre capaz de patrocinar los ajenos, respec-

(1) Vinnio *Quæst select.* cap. 13.
(2) Ciceron, *De offic.* 2, *in fine.*

to de los cuales no hay igual peligro de que la pasión y la inexperiencia lo arrastren y extravien.

El Sr. Ministro de Justicia (Teran) indica que el punto principal, por el momento, es saber si el artículo propuesto por el Sr. Lacunza queda en el capítulo aun pendiente ó se traslada al siguiente. Opina porque se haga lo primero, en cuanto á la primera parte del artículo; y se reserve la segunda para el capítulo siguiente.

La Comisión acepta que, en principio y salvas las excepciones que deberán expresarse después, los hijos sujetos á patria potestad no pueden contraer judicial ni extrajudicialmente, sin consentimiento del que ejerce aquella. Aprobado así el artículo, queda como 281 del nuevo Código.

CAPITULO II

De los efectos de la patria potestad respecto de los bienes del hijo.

Proyectc Sierra (art, 164) «El padre es el administrador legal de los bienes de sus hijos menores.»

El Sr. Ministro de Justicia (Terán) presenta modificada la segunda parte del artículo anterior, que quedó pendiente, en los siguientes términos: *El que ejerce la patria potestad es el legítimo representante de los que están en ella, y el administrador legal de los bienes que les pertenecen, según las prescripciones de este Código.*

La redacción es aprobada y queda como art. 282 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art 166): «Los bienes que el hijo adquiere con el caudal del padre, mientras está bajo la patria potestad, pertenecen al padre en propiedad y usufruc-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tu, salva la facultad que el padre tiene en todo caso de hacer al hijo alguna donación de estos bienes ó señalarle alguna parte en sus utilidades».

Proyecto Sierra (art. 167): «Los bienes que el hijo adquiere con su trabajo ó industria, estando en poder ó compañía del padre, pertenecen al hijo en propiedad y al padre en usufructo».

Proyecto Sierra (art. 168): «Los bienes que adquiere el hijo por cualquier título lucrativo pertenecen á éste; pero el padre tiene su usufructo mientras el hijo esté en su compañía».

Proyecto Sierra (art. 169): «Los bienes donados ó legados al nijo para seguir una carrera ó ejercer alguna profesión ó arte liberal, ó con la condición de que el padre ó la madre en su caso no ganen el usufructo, pertenecen en propiedad y usufructo al hijo. Sin embargo, esta condición no puede imponerse sobre la legítima».

Proyecto Sierra (art. 170: «También pertenecen al hijo en propiedad y usufructo los bienes que adquiera con su trabajo é industria, no hallándose en compañía del padre.»:

Proyecto Sierra (art. 171): «Pertenecen al hijo igualmente en propiedad y usufructu los bienes que adquiera por ocasión de la milicia ó en el ejercicio de cargos ó empleos civiles, de profesiones ó artes liberales».

Proyecto Sierra (art. 172): «En los casos especificados en los dos artículos precedentes, el hijo tendrá también la administración de los bienes, para cuyo efecto se le considerará como emancipado».

El Sr. Escudero está por una clasificación más clara de los bieues del hijo, tomando por base para formularla los derechos que sobre esos bienes pertenecen al padre ó á

aquél. Se sabe que en el último desenvolvimiento del Derecho Romano se distinguían cuatro clases de peculios: el *profecticio*, ganado por los hijos con los bienes de los padres ó por razón de sus padres que los tenían en su poder; el *adventicio*, ganado por el hijo con obra de sus manos por donación, legado ó herencia de su madre ó de cualquiera otro modo como el hallazgo de un tesoro ó de otra cosa; el *castrense*, ganado por el hijo en la guerra y el *cuasi-castrense* formado de las ganancias del hijo en el ejercicio del profesorado, de la abogacía ó de cualquier empleo. El primero, según las leyes de Partida, pertenecía en propiedad, usufructo y administración al padre (1). El segundo, dicen las mismas leyes, pertenece en propiedad al hijo, siendo la admintstración y el usufructo del padre, «en su vida, por razón del poderío que ha sobre el fijo» y «deue defender e guardar estos bienes aduenticios de su fijo..... también en juyzio como fuera del juyzio (2).» El tercero y cuarto pertenecen en un todo, es decir, en cuanto á la propiedad, usufructo y administración al hijo, porque tales ganancias como estas fazen los homes con grand trabajo e con grand peligro e porque las fazen en tan nobles lugares, por ende son quitamente de los que las ganaron e son más franqueadas que las otras ganancias (3)» Muy poco, en concepto del que habla, debe cambiarse á esa clasificación, si se exeptua el cuarto peculio, es decir, el llamado *cuasi-castrense* que, sin el menor inconveniente, puede refundirse en el tercero. El principio, en esta materia, tiene que ser el derecho del padre, derecho que de-

(1) Partida 4, tít. 17, l. 5.
(2) Partida id., id., id.
(3) Partida id., tít. id., l. 6.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

be irse restringiendo, en la contemplación de los bienes, á medida que estos van siendo el resultado de un trabajo más y más personal é independiente por parte del hijo. Así, el que habla propone á la Comisión el siguiente proyecto de redacción: *Los bienes del hijo, mientras está en la patria potestad, se dividen en tres clases. 1ª Bienes cuya propiedad, administración y usufructo corresponden al que ejerce la patria potestad; 2ª Bienes cuya propiedad es del hijo y la administración y usufructo del que tiene la patria potestad; 3ª Bienes que corresponden en propiedad, administración y usufructo al hijo. En la primera clase se compreden los bienes que el hijo adquiere con el caudal del que lo tiene bajo su potestad. En la segunda clase se comprenden: 1º Los bienes que el hijo adquiere de cualquier persona por título lucrativo, aunque sea por donación hecha en consideración al que ejerce la patria potestad ó por los parientes de éste; 2º Los que adquiere con su trabajo ó industria en compañía del que lo tiene en la patria potestad. Se comprenden en la tercera clase: 1º Los bienes que el hijo adquiere con su trabajo ó industria, sin tener sociedad con el que ejerce la patria potestad; 2º Los que se han donado ó legado al hijo para seguir una carrera ó ejercer alguna profesión ó arte liberal, ó con la condición de que él solo tenga la propiedad, administración y usufructo. Sin embargo la condición no puede imponerse sobre la legítima; 3º Los que haya adquirido con ocasión del servicio militar, en la clerecía, en el ejercicio de cargos ó empleos civiles ó de profesiones científicas ó liberales. Sin embargo, la adminisiración de los bienes donados ó legados que se conprenden en la fracción 2ª de esta tercera clase, corresponderá al padre si en la donación ó legado no se dispuso otra cosa.*

El Sr. Ramírez se manifiesta de acuerdo con el anterior proyecto de redacción; pero hace observar al Sr. Escudero que es por demás la frase final de la fr. 2ª anterior, relativa á la condición sobre la legítima, la cual, tanto según la legislación romana, como la española, era insusceptible de condición. En la primera vemos que se decía: *Postquam reliquerint filiis partem quæ lege debetur, quod reliquum est suæ substantiæ,* podían dejarlo *sub hac conditione, ut pater aut qui omnino habent in potestate..... neque usufructum, neque quodlibet penitus habeant participium* (1). La segunda es más terminante: «Libremente e sin ningund agrauiamiento, e sin ninguna condición deue auer el fijo su legitima parte de los bienes de su padre (2).» La razón es dada por Goyena que dice: «Cada cual puede imponer á su liberalidad la condición que más le plazca; pero no, al pago de una deuda, y la legítima lo es respecto de los que tienen herederos forzosos (3).

El Sr. Méndez propone que en vez del art. 172 del *Proyecto Sierra* se diga: *Cuando el hijo tenga la administración en los casos del artículo anterior, se le considerará respecto de ella como emanicipado. Sin embargo, necesitará del consentimiento del que ejerce la patria potestad para enajenar inmuebles ó comparecer en juicio, aun tratándose de bienes cuya administración tenga.*

Los motivos de esta disposición son ya conocidos de la Comisión (4).

(1) *Novella* 117, cap. 1.
(2) Partida 6, tít. 4, l. 11.
(3) Goyena, *Proyecto*, sobre el art. 154.
(4) Veáse *supra* págs. 290 á 293.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La redacción es aceptada y queda como art. 284 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que no considera por demás decir en el nuevo Código desde cuándo empieza el usufructo otorgado por los artículos anteriores al que ejerce la patria potestad sobre tales y cuales bienes de los hijos. Supóngase que tales bienes han estado arrendados ó que, consistiendo en cantidades de dinero, han estado produciendo intereses antes que el padre tomase posesión de ellos; ¿las rentas y réditos vencidos en ese período habran de ingresar también al usufructo? No parece natural ni justo, supuesto que éste es otorgado por las leyes al padre, no sólo como homenaje de respeto á su carácter de tal, sino también como recompensa de los trabajos y cuidados que el ejercicio de la patria potestad trae consigo. En consecuencia, el que habla propone la redacción del siguiente artículo: *Los réditos y rentas vencidos antes de la posesión de los bienes, forman parte del capital del hijo y no son frutos que debe gozar el que tiene la patria potestad.*

La redacción es aprobada y queda como art. 285 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 173): «De los bienes del hijo en que tiene el usufructo el padre, éste tiene las obligaciones de todo usufructuario, excepto la de afianzar.»

El Sr. Lacunza antiende que el artículo del *Proyecto* debe ser ampliado á otras obligaciones. La dispensa de dar fianza, como lo nota Demolombe, se funda en la cualidad del usufructuario legal, porque se ha pensado que el cariño paterno ofrecía suficientes garantías y que la fianza

tenía un carácter de sospecha que la ley no debe imprimir á las relaciones de los hijos con sus padres (1). En este sentido está redactado el art. 601 del Código francés. Pero, imitando este texto, el que habla entiende, que las cargas del usufructo legal deben ser además las de alimentación y educación del hijo en proporción á su fortuna, y los gastos de la última enfermedad y funerales de la persona de quien procedan los bienes. Lo primero no importa una redundancia, como lo cree Goyena (2), siguiendo á Duranton (3), pues no se trata de la obligación alimenticia que tanto el padre como la madre tienen en favor de sus hijos á causa de la procreación, sino de la que deriva del usufructo mismo, el cual lleva anexo ese deber. Desde luego hay dos diferencias entre una y otra deuda alimenticia. La que llamaremos deuda natural y de la cual se ha tratado ya en el capítulo IV, título. IV, libro primero del nuevo Código, debe ser cumplida según la fortuna personal de los padres; al contrario, la deuda alimenticia de que ahora se trata, debe serlo, atenta la fortuna del acreedor alimentista, que es el propietario de los bienes cuyo usufructo goza el deudor alimentista. Aquella deuda ha de cubrirse en tanto que el acreedor no tenga bienes suficientes ó carezca de ellos en lo absoluto; ésta, al contrario, pesa sobre el usufructuario legal, aun cuando el hijo tenga bienes personales (4). En cuanto á la obligación de costear los gastos mortuorios, está justifica-

---

(1) Demolombe, tom. 6. núm. 533—*Cód.* lib. 6, tít. 61, l. 8, §4 (*paterna reverentia eum excusante*).

(2) Goyena, *Proyecto*, art. 156.

(3) Durantou, tom. 3, núm. 308.

(4) Demolombe, tom. 6, núm. 540.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

da con sólo fijarse en que se trata de tales gastos, no en órden al hijo, sino respecto de la persona de quien él ha habido los bienes. Propone, en consecuencia, se sustituya el art. 173 del *Proyecto Sierra* con la siguiente redacción: *El goce del usufructo del que ejerce la patria potestad, lleva consigo las siguientes obligaciones: 1ª Las impuestas al usufructuario, con excepción de la de dar fianza; 2ª La alimentación y educación del hijo ó hijos á quienes pertenezcan los bienes; 3ª Los gastos de la última enfermedad y funerarios de la persona á quien pertenecieron los bienes. Las obligaciones impuestas en este artículo..... se entienden sin perjuicio de las establecidas en el art. 144 y siguientes del cap. 4º tít. IV.*

El Sr. Lacunza agrega que no incluye, entre las cargas del usufructo legal, como lo hace el art. 385 francés, el pago de los atrasos de rentas ó réditos insolutos de los bienes ó capitales del hijo, porque este punto ha sido muy discutido en la doctina y jurisprudencia francesas, pudiéndose citar tantas opiniones en el sentido de que tal carga pesa sobre el hijo, como al contrario, es decir, sobre el usufructo, y además, porque ya la Comisión se decidió implícitamente por el primer extremo, al aprobar el art. 285, pues, si los réditos y rentas vencidos antes de la posesión de los bienes, forman parte del capital del hijo y no son frutos que debe gozar el padre, lógico y racional es que, si se trata de pagar esos mismos réditos y rentas, ellos no graviten sino sobre el mismo capital del hijo, que es quien resulta beneficiado en el otro supuesto.

La redacción propuesta por el Sr. Lacunza es aceptada y queda como art. 286 del nuevo Código; pero se conviene en separar la parte final, para que constituya el art. 287.

Proyecto Sierra (art. 174): *El padre no puede enajenar los bienes inmuebles del hijo en que le corresponden el usufructo y la administración, ó ésta sola, ni gravarlos de ningún modo, sino por causa de absoluta necesidad ó evidente utilidad y previa la autorización del Juez competente..*

El Sr. Lacunza defiende la aprobación del artículo, invocando los antecedentes romano y patrio. *Non autem licentia*, decía una ley del Código, *parentibus danda res quarum dominium apud eorum potestatem est alienare, vel pignori vel hypotecæ título donare; sed si hoc fecerint, scituris quod necesse est eos in legum laqueos incidere quibus hujusmadi venditiones vel hypotecæ sunt interdictæ* (1). Después que el Fuero Juzgo pronunció de una manera absoluta la prohibición para el padre de vender los bienes del hijo, tanto muebles como inmuebles (2), el Código de las Partidas relajó tal rigor estableciendo que la venta podía verificarse en caso de necesidad, como para el pago de dinero ajeno, de legados ó cuando las cosas eran dañosas ú onerosas á la herencia, ejemplos que pone Gregorio López, agregando que entónces el padre puede vender, sin decreto del Juez, por más que esta solemnidad sea necesaria tratándose del tutor, *neque enim absurdum est, si patria patestas, quæ naturalis est, et primitiva, plús possit, quám tutoris potestas* (3). Esta ley, según Goyena, ha dado lugar á discusiones entre los intérpretes, sosteniendo unos que el padre podía vender los inmuebles del hijo; y otros que

---

(1) *Cód.* lib. 6, tít. 61, l. 8, § 5.

(2) Fuero Juzgo, lib. 4. tít. 2, l. 13.

(3) Partida 5, tít. 13, l. 24 y glosa de Gregorio López v.º «en ninguna manera.»

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la prohibición era absoluta (1). La verdad es que la ley de Partida no se presta á equívocos de ninguna especie. Tan es terminante la prohibición que ella impone al padre de vender los bienes del hijo que, en seguida de formularla, dice que si, á pesar á ella (por auentura) los enajenase «fincarian por ende obligados é empeñados al fijo los bienes del padre, después de su muerte,» hasta que recibiese devolución de los que indebidamente había enagenado (de aquello que el padre le ouiesse enagenado ó malmetido). ¿Cómo puede explicarse este derecho del hijo á recobrar sus bienes en especie, sino reconociendo la nulidad de la venta hecha por el padre? Esta interpretación se confirma leyendo lo que más adelante dice la misma ley: «entonce pueden demandar (los hijos) sus bienes á quienquier que los fallen e deuenlos cobrar». Sin embargo, el que habla reconoce ameritar alguna mayor claridad y no poca enmienda esta ley, en el sentido de no dejar al padre juez el mismo de la absoluta necesidad para la venta de los bienes y de no referirse sino á los raíces, pues si la prohibición se hace extensiva á los muebles, se imposibilitaría á los padres para la administración.

El artículo del *Proyecto Sierra* es aceptado y queda como 288 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 289): *En todos los casos en que el padre tenga un interés opuesto al de sus hijos menores, serán estos representados en juicio y fuera de él, por un procurador nombrado judicialmente para cada caso.*

El artículo es aprobado y queda como 289 del nuevo Código.

---

(1) Goyena, *Proyecto*, art. 158.

CAPITULO III.

De los modos de acabarse la patria potestad.

Proyecto Sierra (art. 176): *La patria potestad se acaba:* 1º por la muerte del padre ó del hijo; 2º *por la emancipación; 3º por la mayor edad del hijo:*

El Sr. Lacunza cree que es inútil decir que la patria potestad se acaba «por la muerte del hijo» y que hay necesidad de decir, de acuerdo con lo declarado ya en el art. 271: *por la muerte del que la tiene, si no hubiera otro en quien recaiga.*

El artículo, con esta reforma, es aceptado y queda como 290 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 177): *El padre perderá la patria potestad; 1º cuando sea condenado á alguna pena que lleve consigo la pérdida de este derecho; 2º cuando declarado el divorcio tenga lugar la pérdida de la patria potestad.*

Es el art. 161 del Proyecto de Goyena, que la Comisión acepta, quedando como 291 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 178): «Los tribunales podrán también privar de la patria potestad al padre, ó modificar su ejercicio si tratase á sus hijos con excesiva dureza, ó si siendo viudo les diere preceptos, consejos ó ejemplos corruptores.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza pide se modifique el artículo en consonancia con el 271. Los motivos de la pena civil de que se trata, están, con toda claridad expuestos por Goyena (1). En consecuencia propone se diga: *Los Trtbunales pueden privar de la patria potestad al que la tiene ó modificar su ejercicio, si trata á los que están en ella con execsiva dureza, no los educa, ó les da consejos, preceptosó ejemplos corruptores.*

Proyecto Sierra (art. 179): *La patria potestad se suspende: 1º Por la incapacidad del padre declarada judicialmente; 2º por la ausencia declarada en forma; 3º por haber sido condenado á alguna pena que lleve consigo esta suspensión.* Fuera del caso en que la suspensión de la patria potestad proceda de demencia, perderá el padre el usufructo de los bienes del hijo.

El Sr. Lacunza propone la supresión de la parte final del artículo, todavía una vez más, por exigirlo así la armonía con el 271. En efecto, esa parte final tiene razón de ser, no pasando la patria potestad á la madre en caso de interdicción del padre. La opinión contraria es sustentada por Demolombe; pero sus razonamientos no convencen de que el usufructo legal debe pertenecer al que no administre (2).

El artículo es aceptado, suprimida la parte final y queda como 293 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 180): «La madre sucede al padre en la patria potestad con todos sus derechos y obligaciones.

[1] Goyena, *Proyecto*, art. 162.

(2) Demolombe tom. 6, núm 483.

Suprimido por causa de estar su concepto contenido ya en el art. 271.

———

Proyecto Sierra (art. 181): «El padre podrá nombrar á la madre en su testamento uno ó más consultores, cuyo dictamen haya de oir ésta para todos los actos que el padre determine. No gozará de esta facultad el padre qne, al tiempo de morir, no se hallare en el ejercicio de la patria potestad, salvo si fuere por causa de locura ó ausencia; ni valdrá el nombramiento hecho en testamento anterior á la pérdida ó suspensión de la patria potestad.»

El Sr. Lacunza manifiesta estar tomado este artículo del 165 del Proyecto de Goyena, necesitando solamente ser adicionado respecto de las abuelas á quienes el art. 271 del nuevo Código otorga también la patria potestad, pues hay la misma razón de decidir. En efecto, como la nota Demolombe á propósito del art.. 391 francés, el motivo de esta disposición es la debilidad del sexo, la inexperiencia ordinaria de la mujer en los negocios de la vida civil (1). El jurisconsulto español explica con toda claridad los fundamentos del artículo, que desde luego se recomienda como muy superior al francés, pues no declara, como este, que la madre nada podrá hacer sin la aprobación de los consultores, sino que meramente le impone la obligación de oirlos. Véase lo que Goyena dice al respecto del texto de que se trata: «Puede el padre determinar actos especiales, puede expresar que sea para todos, y así se entenderá, cuando no haya expresado ni uno ni otro. Esta facultad

(1) Demolombe, tom. 7, núm. 79.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

del padre alcanza á todos los actos, ora recaigan sobre las personas, ora sobre los bienes de los hijos, pues las primeras no son menos importantes que los segundos... no siendo obligatorio el parecer del consultor, hay utilidad en oirle y no se lastima ningún derecho. No tiene, pues, la madre necesidad ni obligación de seguir el dictámen del consultor; en otro caso vendría á quedar privada de parte de sus derechos por un medio indirecto; la ley permite que se ilustre á la madre; pero presume que obrará siempre en el interés de sus hijos. Vivos y repetidos fueron los debates de la Comisión General sobre este punto. Querían unos conservar al padre la facultad de nombrar tutor á sus hijos con absoluta exclusión de la madre, fundandose no solamente en la incapacidad y debilidad exageradas del sexo, sino en suposiciones repugnantes á la naturaleza y desmentidas las más veces por la experiencia: el nombramiento de un consultor, cuyo parecer no era obligatorio para la madre, era insuficiente para tranquilizarlos. Pero esto equivalía á dar en tierra con el artículo anterior (1), adoptado ya como base para establecer á la madre en toda su dignidad y derechos naturales; sin embargo, no se atrevían á tanto. El mismo inconveniente resultaba, dando al dictámen del consultor fuerza obligatoria, y el art. 391 francés, conforme con nuestro primer párrafo, no les satisfacía. Adoptóse, por fin, á manera de transacción y como término medio, el del artículo siguiente 166 (2); pero temo que ha de

(1) «La madre sucede al padre en la patria potestad, con todos sus derechos y obligaciones».

(2) «La madre que maliciosamente dejare de oir el dictamen del consultor ó consultores, podrá ser privada de toda su autoridad y derechos sobre sus hijos, á instancia de aquellos ó del consejo de familia.»

encontrar con graves dificultades en la práctica y que tal vez no llene su objeto; ¿cómo se probará la malicia de la madre en no oir, cuando sin recurrir á ella, puede no conformarse con el dictámen del consultor? De todos modos, si el consultor muere, ó no admite, nadie puede nombrar otro, porque este derecho es privado del padre, y el nombramiento arguye confianza personalísima. En cuanto á que no goce de la facultad de nombrar consultor ó consultores el padre que, al tiempo de morir, no se hallare en el ejercicio de la patria potestad, el principio se justifica, en lo general, con solo considerar que tal facultad procede de la patria potestad y se supone la pérdida ó suspensión de los derechos de ella. Las excepciones que de este principio se señalan ó sean los casos de locura ó ausencia, se motivan respecto de la primera, atendiendo á que no se ha de añadir aflicción al afligido—*afflicto non est addenda afflictio; sed miseria miserenda*—ni agravar la desgracia del desgraciado, y á que el loco puede testar en sus intervalos lúcidos con toda la libertad y plenitud del hombre sano, subsistiendo con mayor razón su testamento anterior á la locura. Respecto de la ausencia, aunque en su caso, se suspende la patria potestad (1), esto debe entenderse en orden á los derechos útiles para el ausente, como el usufructo legal, porque se supone que hubo de su parte culpa en ausentarse sin dejar apoderado y porque no tiene las molestias y cuidados de la administración. Pero aquí se trata del ejercicio de un derecho útil á los hijos, y así como el ausente podría nombrarles tutor testamentario, si no tuvieran madre, pueden nombrar á esta consultor.

(1) Véase *supra* pág. 304.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Excusado es decir que valdrá el nombramiento hecho en testamento anterior á la ausencia. Fuera de estos dos casos de excepción, en todos los otros de pérdida ó de suspensión de la patria potestad, al tiempo de morir el padre, es nulo el nombramiento que haga ó haya hecho en testamento anterior, pues obra la regla *incidit in eum casum a quo incipere non poterat* y en la *testamentifacción* se atiende generalmente, no solo al tiempo de otorgarse el testamento, sino al de la muerte del testador (1)». En consecuencia, el que habla propone quede el artículo del *Proyecto Sierra* en la forma siguiente: *El padre podrá nombrar en su testamento á la madre y á las abuelas en su caso, uno ó más consultores, cuyo dictámen hayan de oir para todos los actos que el padre determine. No gozará de esta facultad el padre que al tiempo de morir no se hallare en el ejercicio de la patria potestad, salvo si fuere por causa de locura ó de ausencia. En los demás casos de pérdida ó suspensión no valdra el nombramiento, aun cuando se haya hecho en testamento anterior.*

La redacción es aprobada y queda como art. 294 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 182): *La madre..... que maliciosamente dejare de oir el dictámen del consultor ó consultores, podrá ser privada de toda su autoridad y derechos sobre sus hijos..... á instancia de aquellos.....*

El Sr. Lacunza dice que, en concordancia con el artículo anterior, debe adicionarse éste, haciendo su declaración extensiva á *la abuela* y á los *nietos*. Además, como hemos visto, lo nota Goyena, el precepto que impone á la

---

(1) Goyena, *Proyecto*, art. 165.

madre el de oir al cousultor ó consultores es muy dificil de hacerse efectivo por la casi imposibilidad de probar que su infracción sea maliciosa. Sin embargo, supóngase que á la desobediencia del precepto añada la madre el hecho de haber concertado un negocio ruinoso para el hijo, acerca del cual los consultores le advirtieron é ilustraron oportunamente. La malicia de la desobediencia ya podrá entonces decirse probada; más como la patria potestad corresponde á la madre, en defecto del padre, no por voluntad de éste sino por ministerio de la ley, aun la conducta maliciosa mejor comprobada de aquella, en cuanto á no oir el dictamen de los consultores, sería insuficiente para invalidar el acto, pues la personalidad de la madre, como representante del hijo y de sus bienes, es íntegra y perfecta mientras no sea privada de la patria potestad. He aquí, en consecuencia, la única sanción posible del art. 264 que la Comisión ha aprobado. Sin embargo, para evitar dudas á que el texto que ahora se examina pudiera dar lugar, principalmente atendiendo á las que se ban suscitado con motivo del art. 391 francés (1), el que habla opina se adicione también el artículo del *Proyecto Sierra* con la siguiente frase: *pero el acto ejercido no se anula por este solo motivo.*

Con las adiciones expuestas es aprobado el artículo, que queda como 295 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 183): *La madre viuda que diere á luz un hijo ilegítimo, pierde los derechos que le concede* el art. 180.

---

(1) Demolombe, tom. 7, núm. 98.—Merlin, *Rep.* «minorite», núm. 90.—Delvincourt, pág. 107, núm. 4.—Boileau, tom. 2, pág. 302

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Lacunza manifiesta estar tomado este texto del art. 167 del Proyecto de Goyena, que lo motiva con razones incontestables. El pensamiento original data del Fuero Juzgo (1) y se encuentra también en una de las Novelas (2). Una ley de Partida lo indica igualmente; pero la verdadera razón de la disposición se encuentra en Goyena: «Como veremos en el artículo siguiente, las segundas nupcias de la madre viuda hacen, por lo menos, que se disminuya para ella el conjunto de los derechos que forman la patria potestad, y dice el jurisconsulto español: *non debet melioris esse conditionis luxuria, quam castitas, quæ est in secundo matrimonio.* No hay que olvidar que, estando prohibida la investigación de la maternidad fuera de matrimonio, á no ser para el hijo y aún entónces dentro de ciertas condiciones (3), la comprobación de la falta de la viuda no podrá hacerse sino presentando el acta del reconocimiento que ella haya hecho del hijo ó de la declaración judicial en su caso.

La redacción del *Proyecto*, cambiándose el número del artículo de referencia por el 271, es aprobada y queda como art. 297 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 184): *La que contrajere segundas nupcias conservará todos los derechos de la patria potestad, menos la administración de los bienes, á no ser que el consejo de familia se la defiera. Si no se la defiere y acepta con conocimiento de su marido, responderá éste mancomunadamente con la mujer, por lo que resulte de la administración posterior al matrimonio. Si no se la defiere, el mismo consejo nombrará administrador con todas las obligaciones que tiene el tutor respecto de los bienes del menor.*

(1) *Fuero Juzgo*, lib. 3. tít. 2, l. 1.
(2) *Novella* 18, cap. 2.
(3) Véanse *supra* págs. 270 á 273.

El Sr. Lacunza manifiesta que el texto anterior está tomado al pie de la letra del art. 168 del Proyecto de Goyena, quien ha sabido guardar un término medio prudente y acertado, en concepto del que habla, entre las dos teorías extremas que han pretendido resolver este delicadísimo aspecto de la patria potestad. En el derecho romano imperial y tomado en cuenta que la madre viuda no ejercía la patria potestad, prevalecía el principio de que ella debía salir de la tutela del hijo por sólo el hecho de contraer segundas nupcias, las cuales eran vistas con horror, probablemente á causa de la falsa creencia sobre que ellas constituian bigamia, creencia no poco esparcida en los primeros siglos del Cristianismo y sustentada por talentos tan esclarecidos como Tertuliano, S. Ambrosio y S. Gerónimo (1). Así, vemos en el Código: *lex enim non solum contra tutores, sed etiam contra fæminas immoderatas atque intemperantes prospexit minoribus; quæ plerumque novis maritis non solum res filiorum, sed etiam vitam addicunt* (2). Aún esclarecido el error sobre este punto, continuó observándose el principio por vía de cautela en favor de los hijos, pues Justiniano, en una de sus Auténticas, dice: *Sacramentum quidem non exigitur, sed contractis secundis nuptiis expelli eam a tutela convenit: salva minoribus*

(1) Tertulliano, *De monogam.*—S. Ambrosio, I, Cór. 7.—S. Gerónimo, *contra Jovinian*, lib. 1.—Sánches, *De matrim.* lib. 7, disput. 81.
(2) *Cód.* lib. 5, tít. 37, l. 22.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

omni alia, prout juris est, cautela (1). Esta pena era llevada á cabo contra la viuda binuva, aunque el padre hubiera dispuesto expresamente lo contrario, en su testamento, porque se decía: *Nemo potest in testamento suo cavere, ne leges in suo testamento locum habeant; nihil veniet in eam stipulationem; quia qualis sit talis ex testamento præstari debet: nec ullum in legato damnum facere intelligeretur* (2). El espíritu de esta legislación pasó al Fuero Juzgo (3) y de allí á las Partidas, donde leemos: «Casando la madre de mientra que sus fijos tuuisen en guarda.....el Juez del lugar do acaesciere, deue sacar los mozos luego de su guarda, e de su poder, e darlos á alguno de sus parientes de los mozos, al más cercano que ouieren, que sea ome bueno e sin sospecha, e que non sea de aquellos, á quien defiendan las leyes deste nuestro libro, que non lo pueda ser. E si el Juez fallare, que alguna cosa deue dar la madre a los mozos, por razon de sus bienes que touo en guarda, o por otra manera cualquier, fincan porende obligados tambien los bienes della, como los de aquel que casó con ella (4).»

Este rigor tradicional en que se palpa la mayor desconfianza respecto de la mujer que pase á segundas nupcias, se ha templado, sin embargo, en el seno de la misma legislación de nuestra madre patria, á juzgar por la Real Orden de 12 de Abril de 1839, según la cual la mujer que contrae nuevo matrimonio puede solicitar dispensa de ley, para continuar en el cargo de tutora y curadora de sus hijos, haciendo constar en el expediente que promueva:

(1) *Cod.* lib. 5, tít. 35, l. 2.
(2) *Dig.* lib. 30, l. 55.
(3) *Fuero Juzgo*, lib. 3, tít. 2, l. 1.
(4) Partida 6ª, tít. 16, l. 5.

1º La conducta moral, capacidad, profesión ó condición civil de la madre, tutora ó curadora y del sujeto con quien se ha casado últimamente ó trata de casarse; 2º La edad de estos mismos sujetos y la de los pupilos ó menores; 3º El importe, clase y naturaleza de los bienes, así de estos como los de su madre y de su nuevo ó futuro cónyuge; 4º El dictámen de la persona que á falta de madre debería entrar en el cargo de tutor ó curador con arreglo á derecho, á quien deberá oirse, ofreciéndole al efecto el expediente sin dar á éste el carácter contencioso bajo ninguna forma (1).

Ya desde el Código de Napoleon se había comprendido la injusticia de arrebatar á la madre viuda la patria potestad por el solo hecho de contraer segundas nupcias, pues este nuevo estado podía ser efecto, no de su intemperancia y disolución de costumbres como se afirmaba en el antiguo derecho, sino del afán mismo de asegurar mejor el bienestar de los hijos del primer lecho, para quienes, en muchos casos, el padrastro sería, no un perseguidor y dilapidador de sus bienes, sino un leal amigo y protector suyo en su orfandad ya irremediable por la muerte. Sin duda llegó á pensarse que era irritante la desigualdad establecida á este respecto por las leyes, pues mientras se obraba, como queda dicho, con la madre, las segundas nupcias del padre no causaban la menor modificación en el ejercicio por su parte de la patria potestad ni en el aprovechamiento de todos sus derechos y ventajas, siendo así que era mil veces más peligrosa una madrastra que un padrastro, sobre quien, al fin y al cabo, habría de influir

(1) Escriche, *Dicc.* «Tutora ó tutriz.»

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

por la prudencia y la ternura domésticas la madre en favor de sus hijos. En este sentido pidió Tronchet en el Consejo de Estado que se igualase al padre y á la madre (1); pero prevaleció la opinión de Berlier, que, en la exposición de motivos del art. 395 francés, dice: «Sin querer desfavorecer los segundos matrimonios que, en los campos y entre los artesanos, tienen frecuentemente por objeto dar un nuevo protector á los huérfanos, resulta siempre que la mujer entra á una nueva sociedad cuyo gefe es extraño á los hijos de ella; y si este hecho no podría, sin injusticia, hacerle perder la tutela de pleno derecho, basta á lo menos para apelar á la familia, á fin de que delibere sobre si aquella debe serle conservada (2).» En derecho francés la madre, que pasa á segundas nupcias, pierde el usufructo de los bienes del hijo (art. 386, y sólo conserva la tutela, en caso de que el nuevo matrimonio no sea un obstáculo para la conservación de la tutela por la madre, en concepto del consejo de familia, á quien aquella debe previamente consultar. Si así no lo hace, la madre pierde de pleno derecho la tutela y queda solidariamente obligada con su nuevo marido á todas las consecuencias de aquella investidura que indebidamente haya conservado. Tal es el orígen del texto que Goyena pone en su Proyecto; pero, como es fácil verlo, el jurisconsulto español invierte, con todo acierto, los términos de la responsabilidad solidaria de la madre y de su nuevo esposo, pues, mientras en el Código francés esa responsabilidad no existe sino á contar desde el momento del nuevo matrimonio, cuando la madre lo hubiera contraido antes de que el consejo de fomilia hubiese decidido que continuara en la tutela, Goyena establece, rindiendo el debido homenaje á la madre, ser irreemplazable en la en la educación de los hijos, que, por el hecho de pasar á segundas nupcias, ella no pierde la patria potestad, sino sólo la administración, la cual aun puede conservar, si en ello consiente el consejo de familia; pero á condición de que el nuevo marido quede solidariamente responsable por todo lo que resulte de la administración posterior al matrimonio. El que habla repite hallarse en este texto un término medio prudente entre las opiniones extremas antes indicadas y que por este modo, á la vez que se guardan los indiscutibles respetos hacia la madre, se garantizan y prueban contra abusos siempre posibles los intereses de los menores de edad.

(1) Locré, tom. 3, pág. 412.
(2) Locré, tom. 3, pág. 386.

El artículo es aprobado y queda como 298 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 185): *La madre que volviere á enviudar recobrará los derechos perdidos por haber contraído segundas nupcias, salvo lo dispuesto respecto de bienes sujetos á reserva.*

El artículo es aprobado y queda como 299 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 186): «Los hijos naturales reconocidos menores de edad, están bajo la patria potestad del padre ó madre que los reconoce; pero no tendrán estos el usufructo de sus bienes, ni aun su administración,

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

si previamente no aseguran sus resultas á satisfacción del Juez competente.».

Se está de acuerdo en suprimir este texto, por haberse aprobado el art. 271 (1).

TITULO VIII.

De la tutela.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Proyecto Sierra (art 187): *La tutela tiene por objeto la guarda de la persona y bienes del menor que no está sujeto á la patria potestad ni ha sido emancipado.*

El Sr. Lacunza, motivando la aprobación del artículo, dice que está tomado del 171 del Proyecto de Goyena, quien lo razona suficientemente. Tiene de particular el texto que se separa de los Códigos modernos, especialmente del francés, en cuanto á no reconocer la tutela de la madre, pues se sigue el principio romano y patrio: *Patrem habenti tutor non datur.*

El artículo es aprobado y queda como 300 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 188): «La tutela se ejercerá

(1) Véase *supra* págs. 281 á 282.

por el tutor bajo la vigilancia del pro-tutor y del consejo de familia en los casos y en la forma que determina la ley.»

El Sr. Escudero pide se omita este artículo por innecesario, pues supone que más adelante se tratará del protutor ó curador y del consejo de familia.

La Comisión defiere á la petición por razón de economía de textos.

Proyecto Sierra (art. 189): «La tutela es un cargo personal de que ninguno puede excusarse, si no tiene legítima excusa, y que tampoco puede ejercerse conjuntamente por más de una persona.»

El Sr. Lacunza manifiesta que el texto anterior está tomado del art. 173 del Proyecto de Goyena, quien á la vez se inspiró para redactarlo, desde luego en el art. 417 francés (1) y después, cuando ménos, en la tendencia de toda la antigua legislación. En efecto, en cuanto al Código de Napoleón, aunque el texto citado no es terminante, en el punto de la unidad de la tutela, pues por su letra sólo se refiere á la hipótesis de que el menor domiciliado en Francia posea bienes en las Colonias ó viceversa, el espíritu bien claro que lo ha dictado, basta á convencer de que esa unidad fué principio aceptado por los legisladores franceses, sobre todo si se atiende á que, al expresar su voto sobre este particular la sección de legislación del Tribunado, pensó, dice Locrè, que las otras disposiciones de la ley darían á conocer suficientemente que el menor no

1 Demolombe, tom. 7, núms. 221 y 222.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

si previamente no aseguran sus resultas á satisfacción del Juez competente.».

Se está de acuerdo en suprimir este texto, por haberse aprobado el art. 271 (1).

TITULO VIII.

De la tutela.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

Proyecto Sierra (art 187): *La tutela tiene por objeto la guarda de la persona y bienes del menor que no está sujeto á la patria potestad ni ha sido emancipado.*

El Sr. Lacunza, motivando la aprobación del artículo, dice que está tomado del 171 del Proyecto de Goyena, quien lo razona suficientemente. Tiene de particular el texto que se separa de los Códigos modernos, especialmente del francés, en cuanto á no reconocer la tutela de la madre, pues se sigue el principio romano y patrio: *Patrem habenti tutor non datur.*

El artículo es aprobado y queda como 300 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 188): «La tutela se ejercerá

(1) Véase *supra* págs. 281 á 282.

por el tutor bajo la vigilancia del pro-tutor y del consejo de familia en los casos y en la forma que determina la ley.»

El Sr. Escudero pide se omita este artículo por innecesario, pues supone que más adelante se tratará del protutor ó curador y del consejo de familia.

La Comisión defiere á la petición por razón de economía de textos.

Proyecto Sierra (art. 189): «La tutela es un cargo personal de que ninguno puede excusarse, si no tiene legítima excusa, y que tampoco puede ejercerse conjuntamente por más de una persona.»

El Sr. Lacunza manifiesta que el texto anterior está tomado del art. 173 del Proyecto de Goyena, quien á la vez se inspiró para redactarlo, desde luego en el art. 417 francés (1) y después, cuando ménos, en la tendencia de toda la antigua legislación. En efecto, en cuanto al Código de Napoleón, aunque el texto citado no es terminante, en el punto de la unidad de la tutela, pues por su letra sólo se refiere á la hipótesis de que el menor domiciliado en Francia posea bienes en las Colonias ó viceversa, el espíritu bien claro que lo ha dictado, basta á convencer de que esa unidad fué principio aceptado por los legisladores franceses, sobre todo si se atiende á que, al expresar su voto sobre este particular la sección de legislación del Tribunado, pensó, dice Locrè, que las otras disposiciones de la ley darían á conocer suficientemente que el menor no

1 Demolombe, tom. 7, núms. 221 y 222.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

puede tener sino un solo tutor en los departamentos continentales de la Francia (1). Y ciertamente, no hay más que leer esas otras disposiciones (arts. 397 y 403) en que se habla de un solo tutor, para que ya no quede ni la menor duda sobre que el enunciado principio forma regla en dicho Código. Por lo que hace al derecho antiguo, romano y patrio, no puede decirse lo mismo por más que se reconozca la tendencia á unificar la tutela, concentrando sus labores en una sola persona. En Roma sucedía que ó se dividía la gestión de los bienes, ó se nombraba un solo administrador, cuidando de la persona del pupilo otras personas ó se consideraba como solidaria, y, por consiguiente, exigible á uno solo de ellos la responsabilidad por el desempeño de la tutela á cargo de varios. En el primer supuesto cada tutor administraba en la región que le era señalada, reputándosele como honorario respecto de los otros tutores (2), á quienes, en tal carácter, vigilaba en sus trabajos y hasta podía hacer destituir (3). En la segunda hipótesis, los varios tutores convenían en entregar á uno solo, á manera de gerente ó representante común, toda la administración mediante un fiador de su buen manejo y entonces se les consideraba como honorarios y vigilantes del tutor administrador (4). Este podía ser nombrado ó por el testador, ó como acaba de decirse, por sus compañeros de tutela; pero si no se ponían de acuerdo, hacía el nombramiento el pretor (5).

---

(1) Locré, tom. 7, pág. 220.

(2) *Dig.* lib. 26, tít. 2, l. 15.—*Id.* tít. 7, l. 3., § 9.—*Id.* tít. 7, l. 4—*Cod.* lib. 5, tít. 52, l. 2.

(3) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l 3, § 2.

(4) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 3, § 7.

(5) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 3, § 7.

Cuando el desempeño de la tutela era común, bastaba la autorización de uno solo para que el acto fuese válido (1).

Nuestra legislación patria permitió también el nombramiento de varios tutores para un solo pupilo; pero, fué entonces obligatorio que ó todos ellos se pusiesen de acuerdo para entregar á uno solo la administración ó en el defecto de ese acuerdo, que el Juez hiciese la designación en favor de aquel «entendiere que lo fara mejor e que será más provechoso á los mozos (2).»

Por nuestra parte no puede negarse que es necesario fijar de una vez, en términos claros, el principio de la unidad de la tutela, pues así lo exigen de consuno la mejor administración de los intereses del huerfano, la responsabilidad del tutor y la conveniencia de los terceros que ya no verán tantos domicilios del menor como sean las personas encargadas de administrar sus bienes, si estos se hallan radicados en distintos lugares.

Queda la primera parte del artículo, relativa á la inexcusabilidad del cargo de tutor. El que habla está por su aprobación también en este punto, pues como Goyena lo reconoce, citando la tradición romana y patria, la tutela es un verdadero cargo público, porque «toda sociedad está obligada á proveer de defensa al ser desgraciado que por su orfandad y tierna edad no puede él mismo defenderse». Tal es el espíritu de una ley de Partida: «Maguer el Rey es tenudo de guardar todos los de su tierra, señaladamente lo debe fazer á estos (los huerfanos), porque son assi como desamparados, e mas sin consejo que los otros (3).

---

(1) Cod. lib. 5, tít. 59 l. 5.

(2) Partida 6, tít. 16, l. 11.—Hevia Bolaños, *Curia Philipica*, part. I, § 118. núm. II.

(3) Partida 3ª, tít. 23, l. 20.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El artículo es aprobado; pero se conviene en darle la siguiente redacción: *La tutela es un cargo personal de que ninguno puede eximirse si no tiene legítima excusa, y que tampoco puede ejercerse por más de una persona*, que queda como 301 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 190): «El alcalde ó Juez de paz del domicilio del huérfano proveerá al cuidado de su persona y bienes, hasta que acuerde lo conveniente el consejo de familia en su primera reunión.»

El Sr. Lacunza encuentra que no hay inconveniente en confiar de una vez al Juez de primera instancia y, en su defecto, al Juez municipal la provisión provisional del cuidado de los bienes y persona del huérfano, mientras se nombra el tutor definitivo, sin que haya necesidad de duplicar los interinatos. Así propone, se diga: *El Juez de primera instancia del domicilio del huérfano, y si no lo hubiere el Juez municipal, proveerá provisionalmente al cuidado de la persona y bienes, hasta que se nombre el tutor que debe encargarse definitivamente de la tutela.*

Esta redacción es aprobada y queda como art. 302 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 191): *Si al deferirse la tutela se encuentra el menor fuera de su domicilio, el alcalde ó Juez de paz del pueblo en que se hallare, hará inventariar y depositar los bienes muebles que el menor tenga en su poder y oficiará* al alcalde ó Juez de paz del *domicilio, remitiéndole un testimonio de estas diligencias. Esta misma obbligación tiene siempre que sepa haber quedado vacante la tutela por cualquiera causa y que el pro-tutor y el*

consejo de familia no pueden atender á la defensa de los intereses del huérfano. En todo caso el alcalde ó juez de paz responderán de los daños que vengan al menor por su falta y abandono.

La Comisión acuerda sustituir á las palabras: «alcalde ó juez de paz,» *juez de primera instancia y en su falta el juez municipal*, quedando aprobado el artículo que pasa á ser el 303 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 192): *Los parientes del menor están obligadas á poner en noticia del alcalde ó juez de paz el caso de orfandad ó la vacante de la tutela; y si fueren negligentes, quedarán privados del derecho de ser tutores, pro-tutores ó miembros del consejo de familia.....*

El Sr. Lacunza indica la necesidad de hacer en el texto las mismas variaciones hechas en el anterior.

El Sr. Escudero manifiesta que no sería sino muy conveniente y justo castigar la negligencia de los parientes con una pena más grave que la mencionada por el *Proyecto*. Recuerda, al efecto, la siguiente ley romana: *Sciant, qui ad successionem vocantur pupilli mortui, si defuncto ejus patre, tutorem ei secundum legem non patierint intra annum, omnen eis, sine ab intestato, sive jure substitutionis, sucessionem ejus, si impubes moritur, denegandam esse* (1), de la cual fué tomada la siguiente española: Desamparado fincando el mozo, que fuesse menor de catorce años, de guisa que su padre non le ouiesse dexado guardador en su testamento, nin ouiesse pariente cercano que

---

1 *Cod.* lib. 6, tít. 58, l. 10.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lo quisiesse guardar, estonce la madre e los otros parientes que heredaren á este mozo, si moriesse sin testamento, deuen é pueden pedir al juez del lugar que le de guardador atal que sea bueno e rico e que entienda que lo recibe mas por pro del mozo, que de si mismo. E si estos atales non piden guardador á tal mozo, como sobredicho es, pierden por ende aquel derecho que auian, de heredar en los bienes del huérfano, si muriesse sin testamento (1). A semejanza de estas disposiciones, el que habla, propone se adicione el artículo del *Proyecto* con esta frase: *y del de suceder sin testamento si no hubiere llegado á darse el aviso por cualquier otra persona.*

El artículo, así adicionado, es aprobado y queda como 304 del nuevo Código.

CAPITULO II.

De la tutela testamentaria.

Proyeoto Sierra (art. 193): "El padre, aun siendo menor de diez y ocho años, tiene derecho de nombrar en testamento tutor para sus hijos menores, con inclusión del desheredado y el póstumo."

El Sr. Lacunza manifiesta que, habiendo aceptado la Comisión á la madre, lo mismo que á los abuelos maternos, para el ejercicio de la patria potestad (2), debe re-

1 Partida 6, tít. 16, l. 12.
2 Véase *supra* art. 271 del nuevo Código.

formarse en ese sentido el artículo del *Proyecto*. Igualmente debe serlo en cuanto á la mención de edad que contiene, pues basta que se trate de nombramiento de tutor en testamento, para que se entienda que el menor de edad ha de ser capaz, como se requiere para que teste. No hay necesidad tampoco de expresar que el tutor testamentario puede ser nombrado á los hijos menores, pues los mayores, por razón de edad, no lo necesiten. Por lo demás, tomada la idea fundamental del artículo, del 177 del Proyecto de Goyena, no hace sino seguir la tradición del antiguo derecho, que la mayor parte de los Códigos modernos respeta muy especialmente en este punto. Así, se recordará que desde el primer monumento de la legislación romana (XII Tablas, tít. 18) se dijo: *Pater familias uti legassit super pecunia, tutelave suæ rei, ita jus esto* (1). La facultad de nombrar tutor testamentario al desheredado y al póstumo se remonta también á las leyes romanas, al primero porque la tutela es una consecuencia de la patria potestad, y al segundo por el principio de que al simplemente concebido se le considera como nacido para todo lo que pueda serle útil (2). En consecuencia propone que el artículo quede redactado en los siguientes términos: *Los que ejercen patria potestad, aunque sean menores, tienen derecho de nombrar tutor en su testamento á aquellos sobre quienes la ejercen, con inclusión del desheredado y del póstumo.*

El Sr. Escudero se muestra de acuerdo con la redacción anterior; pero propone, en debido respeto al derecho de propiedad, que también se permita nombrar tutor tes-

1 *Dig.* lib. 50, tít. 16, l. 120.-Partida 6, tít. 16, l. 3.
2 *Dig.* lib. 26, tít. 2, l. l. 4 y 10, § 2.-*Id.* lib. 1, tít. 5, l. 7.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

lo quisiesse guardar, estonce la madre e los otros parientes que heredaren á este mozo, si moriesse sin testamento, deuen é pueden pedir al juez del lugar que le de guardador atal que sea bueno e rico e que entienda que lo recibe mas por pro del mozo, que de si mismo. E si estos atales non piden guardador á tal mozo, como sobredicho es, pierden por ende aquel derecho que auian, de heredar en los bienes del huérfano, si muriesse sin testamento (1). A semejanza de estas disposiciones, el que habla, propone se adicione el artículo del *Proyecto* con esta frase: *y del de suceder sin testamento si no hubiere llegado á darse el aviso por cualquier otra persona.*

El artículo, así adicionado, es aprobado y queda como 304 del nuevo Código.

CAPITULO II.

De la tutela testamentaria.

Proyeoto Sierra (art. 193): "El padre, aun siendo menor de diez y ocho años, tiene derecho de nombrar en testamento tutor para sus hijos menores, con inclusión del desheredado y el póstumo."

El Sr. Lacunza manifiesta que, habiendo aceptado la Comisión á la madre, lo mismo que á los abuelos maternos, para el ejercicio de la patria potestad (2), debe re-

1 Partida 6, tít. 16, l. 12.
2 Véase *supra* art. 271 del nuevo Código.

formarse en ese sentido el artículo del *Proyecto*. Igualmente debe serlo en cuanto á la mención de edad que contiene, pues basta que se trate de nombramiento de tutor en testamento, para que se entienda que el menor de edad ha de ser capaz, como se requiere para que teste. No hay necesidad tampoco de expresar que el tutor testamentario puede ser nombrado á los hijos menores, pues los mayores, por razón de edad, no lo necesiten. Por lo demás, tomada la idea fundamental del artículo, del 177 del Proyecto de Goyena, no hace sino seguir la tradición del antiguo derecho, que la mayor parte de los Códigos modernos respeta muy especialmente en este punto. Así, se recordará que desde el primer monumento de la legislación romana (XII Tablas, tít. 18) se dijo: *Pater familias uti legassit super pecunia, tutelave suæ rei, ita jus esto* (1). La facultad de nombrar tutor testamentario al desheredado y al póstumo se remonta también á las leyes romanas, al primero porque la tutela es una consecuencia de la patria potestad, y al segundo por el principio de que al simplemente concebido se le considera como nacido para todo lo que pueda serle útil (2). En consecuencia propone que el artículo quede redactado en los siguientes términos: *Los que ejercen patria potestad, aunque sean menores, tienen derecho de nombrar tutor en su testamento á aquellos sobre quienes la ejercen, con inclusión del desheredado y del póstumo.*

El Sr. Escudero se muestra de acuerdo con la redacción anterior; pero propone, en debido respeto al derecho de propiedad, que también se permita nombrar tutor tes-

1 *Dig.* lib. 50, tít. 16, l. 120.-Partida 6, tít. 16, l. 3.
2 *Dig.* lib. 26, tít. 2, l. l. 4 y 10, § 2.-*Id.* lib. 1, tít. 5, l. 7.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tamentario al que no tiene patria potestad, si instituye al menor heredero ó legatario y para solo el efecto de la administración de los bienes. Goyena acepta este pensamiento, aunque deja de formular un texto especial sobre él (1).

El Sr. Lacunza está conforme; pero entiende que conviene, para mayor claridad, formular primero el principio de la tutela testamentaria, como consecuencia de la patria potestad. Advierte, además, que el nombramiento de tutor á que se refiere el Sr. Escudero, se supone, que no ha de tener efecto en menoscabo de la patria potestad, la cual debe ser siempre respetada por la ley.

El Señor Ministro de Justicia (Teran) indica que primero se apruebe la redacción propuesta por el Sr. Lacunza, y en seguida redacte el Sr. Escudero su pensamiento.

Queda aprobada la redacción presentada por el Sr. Lacunza, la cual pasa á ser el art. 305 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone, en el sentido de sus ideas manifestadas antes, la siguiente redacción: *El que no tiene patria potestad y deja por herencia bienes á un menor que no está sujeto á la patria potestad, puede nombrarle tutor para sólo la administración de los bienes que le deja.*

La redacción es aprobada y queda como art. 306 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 194): "En defecto del padre corresponde á la madre el mismo derecho. Pero si en virtud de haber pasado á segundas nupcias no se le hubiere deferido la administración de los bienes del hijo menor y nombrase por tutor á su marido, para que valga el nombramiento, será necesaria la confirmación del consejo de familia.»

1 Goyena, *Proyecto*, art. 177.

El Sr. Lacunza expone que la primera parte del artículo debe suprimirse, por innecesaria, supuesto lo dicho ya en el art. 305 del nuevo Código, en relación con el 271 del mismo. En cuanto á la segunda, recordará la Comisión el art. 298 del mismo Código con el cual está, en perfecto acuerdo, en este punto, el *Proyecto Sierra*. El que habla, sin embargo, propondría, como requisitos para la validez de este nombramiento de tutor, la aprobación del consejo de familia y la confirmación del juez. En consecuencia, propone la siguiente redacción del artículo: *Si la madre á quien no se le hubiere deferido la administración de los bienes del hijo menor, á virtud de haber contraído segundas nupcias, nombrase por tutor á su marido, para que valga le nombramiento será mecesaria la aprobación del consejo de familia y confirmación del juez.*

Esta redacción es aceptada y queda como art. 307 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 195): «El padre y en su caso la madre, puede nombrar un solo tutor para sus hijos menores ó encargar la tutela de cada uno de estos á persona diferente, aunque le sobreviva su consorte, siempre que éste no pueda entrar en el ejercicio de la patria potestad; pero cesando la incapacidad ó impedimento, cesará también el tutor testamentario.»

El Sr. Lacunza no encuentra inconveniente en la aprobación del artículo en cuanto á su primera parte, que

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

está literalmente tomada del art. 179 del Proyecto de Gollena, pues ella enuncia un principio justo, de acuerdo con el art. 301 del nuevo Código sobre unidad de la tutela en orden á la persona que ha de ejercerla. No opina del mismo modo respecto de la segunda parte, pues no guarda armonía con el art. 271 también del nuevo Código, según el cual, á falta de los padres. deben entrar al ejercicio de la patria potestad los abuelos.

El Sr. Ramírez cree que la observación del Sr. Lacunza se satisfará completamente con sólo preveer que falten también los abuelos.

El Sr. Lacunza dice que él propondría la supresión de la primera parte del artículo del *Proyecto* por innecesaria, toda vez que ya se preceptuó la unidad de la tutela en el art. 301. En cuanto á la segunda, diría: «Cuando los que tienen patria potestad nombren tutor sobreviviendo otra persona que podría entrar en ella porque ésta tenga impedimento de ejercerla, cesando el impedimento cesará el tutor y el ascendiente á quien toque ejercerá la patria potestad.»

El Sr. Méndez indica que tal vez fuera conveniente limitar á los padres, sin extenderla á los abuelos, la prerrogativa de no poder ser excluidos de la patria potestad por el nombramiento de un tutor, pues los primeros, titulares inmediatos de aquella, pueden, en algunos casos, tener serias razones para que la dirección moral y la administración de los bienes de sus hijos pasen á cargo de un tutor. El silencio del testador sobre este punto es lo único que puede justificar la severa aplicación que el Sr. Lacunza propone del art. 271 del nuevo Código. En cuanto á la facultad de nombrar tutor testamentario que excluya de la patria potestad á los abuelos, el que habla no la otorgaría sino á los padres. Conforme á estas ideas, podría redactarse el artículo así: «El padre y la madre solamente y no los demás que ejercen la patria potestad tienen derecho de nombrar tutor que excluya de ella á aquellos en quienes hubiera de recaer á falta del padre y de la madre á un mismo tiempo.»

(Durante el Imperio de Maximiliano y á propuesta del Emperador se redactó el artículo en la siguiente forma: *El nombramiento de tutor testamentario hecho por el padre ó por la madre, excluye de la patria potestad á los ascendientes en quienes hubiera de recaer en defecto de padre y madre. El padre no puede excluir de la patria potestad á la madre*).

Esta redacción pasó á ser el art. 308 del nuevo Código.

El Sr. Escudero no está de acuerdo con el Sr. Lacunza en cuanto á la supresión de la primera parte del art. 195 del *Proyecto Sierra*, por el motivo de que la idea esté ya comprendida en la declaración del art. 301 del nuevo Código. Se trata ahora de otra fase del principio sobre unidad de la tutela. Un menor no puede tener al mismo tiempo más de un tutor; pero ¿bastará un solo tutor para varios menores? Esto es necesario decirlo para evitar equivocaciones. Porque, así como la unidad de la tutela, en el primer caso, se justifica atendiendo á que muchos tutores podrían no estar de acuerdo entre sí, con grave daño de la administración de los intereses del menor; del mismo modo, en el segundo caso, podría haber oposición entre los intereses de unos menores con los de otros, conflicto que, siendo uno mismo el tutor de todos, necesariamente colocaría á éste en perplegidades insolubles. ¿Qué hacer en esta emergencia? El que habla no encuentra otra salida que acudir al juez para que nombre un procurador es-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pecial. Así, propone la siguiente redacción: «Los que pueden nombrar tutor pueden hacerlo nombrando uno solo para todos los descendientes ó uno para cada uno de estos. En el caso en que, nombrado un mismo tutor para diversas personas, los intereses de éstas se hallaren opuestos los de unas á los de otras, el Juez designará á quienes sigue representando el tutor y nombrará un procurador especial que defienda á los otros.»

El Sr. Lacunza defiere á la opinión del Sr. Escudero, indicando que fuera mejor que el nombramiento del procurador especial se hiciese por el consejo de familia á reserva de ser aprobado judicialmente.

El señor Ministro de Justicia (Terán) encomienda al Sr. Lacunza la redacción definitiva del artículo.

El Sr. Lacunza propone la siguiente: *El que tenga la facultad de nombrar tutor, podrá hacerlo nombrando uno común para todos los menores, ó para cada cual en particular. Si en el primer caso los intereses de alguno ó algunos de los menores fueren opuestos á los de los otros, el tutor lo pondrá en conocimiento del consejo de familia para que nombre un procurador especial que defienda los intereses de aquellos menores que designará el mismo consejo, sujetando el nombramiento á la aprobación judicial.*

La redacción es aprobada y queda como art. 309 del nuevo Código.

El Sr. Ramírez manifiesta que queda pendiente el caso de que habla la segunda parte del art. 195 del *Proyecto Sierra* y acerca de la cual propuso ya una redac-

ción (1). Puede suceder, en efecto, que el padre ó madre testadores nombre tutor, aun sobreviviendo el cónyuge ó los abuelos, no precisamente para excluir á aquél ó á estos de la patria potestad, sino porque se hallan incapacitados. En tal caso, cesando la incapacidad, no es justo que continúe la tutela. «Cuando el cónyuge sobreviviente, dice Gollena, no puede entrar en el ejercicio de la patria potestad, se reputa para los efectos de ésta como si no existiera; pero la ficción no puede llevarse más allá de lo que dura la incapacidad, y cesando la causa, deben cesar sus efectos (2).»

El Sr. Lacunza dice que, en su oportunidad, impugnó la segunda parte del art. 195 del *Proyecto Sierra* (3) y aun propuso él también una redacción; pero eso fué antes de aprobarse el art. 308 del nuevo Código, según el cual los abuelos pueden ser privados de la patria potestad, mediante el nombramiento de tutor testamentario hecho por los padres. Aprobado ya este texto, el que habla entiende que la adición propuesta por el Sr. Ramírez sería contraria á aquél. En consecuencia, acepta el artículo, sin referirse á los abuelos.

El Sr. Ramírez insiste en que se acepte su pensamiento pues si bien reconoce haber aprobado ya la Comisión lo que dice el Sr Lacunza, hay que prever el caso de que el nombramiento de tutor sea condicional en el sentido de que subsista, mientras el consorte supérstite ó el ascendiente á quien correspondiera la patria potestad se halle incapacitado para ejercerla. Así enunciado su pensamiento el que

---

(1) Véase *supra*. pág. 326
(2) Gollena, *Proyecto*, art. 179.
(3) Véase *supra*, pág. 325.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

habla no ve la antonomia señalada por el Sr. Lacunza, y al efecto propone la siguientere dacción: *Cuando se hiciere nombramiento de tutor sobreviviendo uno de los consortes á otro que tenga patria potestad; pero que esté impedido para ejercerla, cesando el impedimento cesará también el tutor y se recobrará la patria potestad.*

La redacción es aceptada y queda como art. 310 del nuevo Código.

Proyecto Sierra. (art. 196): Si el padre ó la madre nombrasen *más de un tutor* á un hijo suyo, *con el fin de que los nombrados se sustituyan unos á otros en caso de muerte, incapacidad, excusa ó separación de alguno de ellos, recaerá la tutela en el primer llamado, salvo que el testador designe el lugar en que deban entrar á desempeñarla. Siempre que se nombre más de un tutor, se entenderán nombrados por su órden y sustituyéndose unos á otros.*

El Sr. Lacunza encuentra muy justificado el artículo, que es el desenvolvimiento del 391 sobre unidad de la tutela. Está tomado literalmente del 180 del Proyecto de Gollena. Sin embargo propone se reforme, de acuerdo con los arts. 271 y 305, diciéndose: *Nombrado más de un tutor con el fin de que los nombrados se sustituyan* etc., etc., pues de otra manera podría creerse que el pensamiento del texto se refiere tan solo á los tutores nombrados por los padres.

Así reformado el artículo, es aprobado y queda como 311 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza expresa que no considera por demás establecer ciertos límites á la facultad de nombrar tutor

testamentario que se concede á los que ejercen la patria potestad, ó dejan bienes á un menor no sujeto á ella, por los arts. 305 y 306 del nuevo Código, pues podría creerse que esa facultad es omnímoda aun en daño del menor. Además, es necesario preveer el caso de que el tutor testamentario falte temporalmente por cualquier motivo. Al efecto, el que habla propone, como último artículo que cierre la materia de la tutela testamentaria, la siguiente redacción: *Cualquiera condición ó limitación en la administración de la tutela ó prevención que hiciere el que nombra el tutor, debe observarse, á menos que el juez, oyendo al consejo de familia, la estime dañosa al menor, en cuyo caso podrá suprimirla ó alterarla. Si por un nombramiento condicional de tutor ó por cualquier otro motivo, faltare temporalmente el tutor testamentario, el consejo de familia, con aprobación del juez, proveerá de tutor interino al menor.*

La redacción es aprobada y queda como art. 312 del nuevo Código.

CAPITULO III.

De la tutela legítima.

Proyecto Sierra (art. 197): *Tiene lugar la tutela legítima: 1º Cuando no haya tutor testamentario; 2º Cuando debe nombrarse tutor por causa de divorcio.*

El Sr. Lacunza encuentra digno de aprobación el artículo, pues el primer inciso es demasiado claro y el segundo se refiere al supuesto de que los dos cónyuges sean cul-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

habla no ve la antonomia señalada por el Sr. Lacunza, y al efecto propone la siguientere dacción: *Cuando se hiciere nombramiento de tutor sobreviviendo uno de los consortes á otro que tenga patria potestad; pero que esté impedido para ejercerla, cesando el impedimento cesará también el tutor y se recobrará la patria potestad.*

La redacción es aceptada y queda como art. 310 del nuevo Código.

Proyecto Sierra. (art. 196): Si el padre ó la madre nombrasen *más de un tutor* á un hijo suyo, *con el fin de que los nombrados se sustituyan unos á otros en caso de muerte, incapacidad, excusa ó separación de alguno de ellos, recaerá la tutela en el primer llamado, salvo que el testador designe el lugar en que deban entrar á desempeñarla. Siempre que se nombre más de un tutor, se entenderán nombrados por su órden y sustituyéndose unos á otros.*

El Sr. Lacunza encuentra muy justificado el artículo, que es el desenvolvimiento del 391 sobre unidad de la tutela. Está tomado literalmente del 180 del Proyecto de Gollena. Sin embargo propone se reforme, de acuerdo con los arts. 271 y 305, diciéndose: *Nombrado más de un tutor con el fin de que los nombrados se sustituyan* etc., etc., pues de otra manera podría creerse que el pensamiento del texto se refiere tan solo á los tutores nombrados por los padres.

Así reformado el artículo, es aprobado y queda como 311 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza expresa que no considera por demás establecer ciertos límites á la facultad de nombrar tutor

testamentario que se concede á los que ejercen la patria potestad, ó dejan bienes á un menor no sujeto á ella, por los arts. 305 y 306 del nuevo Código, pues podría creerse que esa facultad es omnímoda aun en daño del menor. Además, es necesario preveer el caso de que el tutor testamentario falte temporalmente por cualquier motivo. Al efecto, el que habla propone, como último artículo que cierre la materia de la tutela testamentaria, la siguiente redacción: *Cualquiera condición ó limitación en la administración de la tutela ó prevención que hiciere el que nombra el tutor, debe observarse, á menos que el juez, oyendo al consejo de familia, la estime dañosa al menor, en cuyo caso podrá suprimirla ó alterarla. Si por un nombramiento condicional de tutor ó por cualquier otro motivo, faltare temporalmente el tutor testamentario, el consejo de familia, con aprobación del juez, proveerá de tutor interino al menor.*

La redacción es aprobada y queda como art. 312 del nuevo Código.

CAPITULO III.

De la tutela legítima.

Proyecto Sierra (art. 197): *Tiene lugar la tutela legítima: 1º Cuando no haya tutor testamentario; 2º Cuando debe nombrarse tutor por causa de divorcio.*

El Sr. Lacunza encuentra digno de aprobación el artículo, pues el primer inciso es demasiado claro y el segundo se refiere al supuesto de que los dos cónyuges sean cul-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pables del divorcio, y del cual trata el art. 174 del nuevo Código.

El artículo es aprobado y queda como 313 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra. (art. 198): «La tutela legítima corresponde á los abuelos y hermanos del menor en este orden: 1º al abuelo paterno; 2º al abuelo materno; 3º á las abuelas paterna y materna por el mismo orden, mientras se conserven viudas; 4º á los hermanos varones, siendo preferidos los que sean por ambos lados, y entre estos el de mayor edad. Todas estas personas se reemplazarán en la tutela por el orden que van designadas».

El Sr Lacunza hace notar que, otorgada ya á los abuelos por el art. 271 la patria potestad, en defecto de los padres, no puede aprobarse el artículo del *Proyecto* que, tomado en este punto del art. 182 del de Gollena, sigue un sistema absolutamente diverso del que ha aceptado la Comisión. Indica tambien la conveniencia de introducir en la tutela legítima á los tíos, hermanos de padre ó de madre, pues son miembros de la familia y parientes bastante inmediatos al menor. En consecuencia propone la siguiente redacción: *La tutela legítima corresponde á los hermanos varones del menor, prefiriéndose á los que lo sean por ambos lados. En defecto de hermanos á los tíos, hermanos de padre ó de madre. Si hubiere varios hermanos ó tíos en igualdad de preferencia, el juez elegirá entre ellos el que le parezca más útil para el menor.*

La redacción es aprobada y queda como art. 314 del nuevo Código.

———

CAPITULO IV.

De la tutela dativa.

Proyecto Sierra (art. 199): *El tutor dativo deberá ser nombrado por el consejo de familia.....*

El Sr. Lacunza opina por que el nombramiento de tutor dativo sea hecho directamente por el Juez, por ser la tutela dativa de caracter urgente las más veces y no ser mny expeditiva ni fácil la reunión del consejo de familia. Además, cree que el artículo debe expresar á petición de quien ha de hacerse tal nombramiento, pues, en su concepto, él debe ser pedido por el menor mismo, si tiene cierta edad, por los parientes, por los acreedores ó deudores del menor, sin perjuicio de que el mismo Juez lo nombre, tan luego como llegue á su noticia la falta de tutor. En consecuencia, propone la siguiente redacción: «El tutor dativo será nombrado por el Juez. Este debe nombrarlo á petición del menor ó de algún pariente, ó acreedor ó deudor suyo, ó aún de oficio siempre que de cualquier modo llegare á su noticia la falta de tutor.»

El Sr. Escudero manifiesta que no debe sacrificarse el verdadero interés del huerfano que consiste en una buena elección de tutor, á la consideración del menor tiempo que emplearía el Juez en proveerlo de representación. El consejo de familia está, pues, indicado para intervenir antes que nadie en esto; pero el que habla opinaría porque el nombramiento siempre fuese confirmado por el Juez. Así, propone, se adicione el artículo del *Proyecto* con la siguiente frase: *y confirmado por el Juez.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Con esta adición es aprobado el artículo, que queda como 315 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 200): «La tutela dativa tiene lugar, cuando no lo tiene, segun las disposiciones de la ley la legítima y la testamentaria».

El Sr. Ramírez opina por que el artículo debe ser adicionado, pues á falta de tutor testamentario, después de muerto el testador, pudiera creerse lo contrario si no se dice claramente, que tiene entrada el tutor legítimo, cuando, en verdad, esto corresponde al dativo, toda vez que, como lo advierte Gollena, «el nombramiento de tutor por el padre ó madre es un tácito y desfavorable testimonio contra los llamados á la tutula legítima (1)» Llama la atención de la Comisión sobre que este caso no es igual al de falta de tutor testamentario, antes de la muerte del testador, pues entonces se cae bajo el precepto del art 313, porque es lo mismo que si realmente no se hubiera nombrado tutor en testamento. El que habla propone, en consecuencia, á la Camisión la siguiente fórmula: *La tutela dativa tiene lugar: 1º Cuando no haya tutor legítimo, ni se haya nombrado testamentario. 2º Cuando el testador nombró tutor en su testamento, y el nombrado falta ó no puede desempeñar su cargo; pues una vez hecho tal nombramiento, no tiene lugar la tutela legítima, á menos que el testador disponga expresamente que, en defecto del tutor testamentario, éntre el legítimo.*

La fórmula es aceptada y queda como art. 316 del nuevo Código.

---

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 184.

El Sr. Ramírez considera que no es por demás explicar también como debe entenderse la falta de la tutela legítima para que en su lugar éntre la dativa. Para este efecto es necesaria la falta no solo del primero llamado á ejercerla, sino de todos los parientes á quienes la ley otorga esta atribución. Así, propone, se diga: *Cuando ha tenido lugar la tutela legítima, si el tutor que la desempeñaba laltare perpetua ó temporalmente, continúa dicha tutela, llamándose al pariente que corresponda; más si llegan á faltar enteramente los parientes llamados en el art. 314, tiene lugar la tutela dativa.*

La redacción es aprobada y queda como art. 317 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza cree que sería muy conveniente dar al menor el derecho de nombrar él mismo al tutor dativo, pues, á cierta edad no hay razón para negarle ese derecho, siempre á reserva de la aprobación judicial. Propone, en consecuencia, se diga: «Siempre que haya de nombrarse tutor dativo para un menor que hubiere pasado de los catorce años siendo varón y de doce siendo mujer, el menor podrá designar la persona que quiera que sea tutor, y el juez nombrará á ésta si la creyere útil al menor, ó podrá prevenir á éste que designe otra; si ésta tampoco fuere aprobada por el juez, el menor será requerido para nombrar una tercera persona; pero si aun ésta no fuere aprobada por el juez, ya él mismo nombrará de oficio sin consultar al menor.»

El Sr. Escudero llama la atención de la Comisión sobre que el espíritu de la proposición del Sr. Lacunza es contrario al art. 315 ya aprobado, pues para redactar éste se ha pensado que ninguna mejor garantía de acierto pa-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

ra el nombramiento del tutor dativo podía encontrarse que el consejo de familia, confirmado aquél por el juez.

La Comisión no acepta la proposición del Sr. Lacunza.

CAPITULO V.

Del protutor.

Proyecto Sierra (art. 201): *En todos los casos de tutela, el consejo de familia nombrará un protutor, siempre que no haya sido nombrado* por el padre ó por la madre.

El Sr. Lacunza, después de manifestar con Gollena que el protutor ó tutor sustituto, como lo llama el art. 420 del Código francés, es un vigilante y centinela del menor contra el tutor infiel ó negligente; que da el grito de alarma al consejo de familia para prevenir el daño en el momento mismo que amenaza (1),» opina que, en su concepto, el artículo del *Proyecto* debe aclararse, pues por sus términos parece que se refiere sólo á la tutela testamentaria. Además el mismo artículo nada dice sobre las personas más á propósito para este cargo, que seguramente son los parientes del menor, no debiendo designarse á extraños, sino cuando aquellos no asistieren ó no fueren idoneos en concepto del juez. Así, propone la siguiente redacción: «En todos los casos de tutela legítima ó dativa precisamente y en los de testamentaria si el Juez lo creyere oportuno, nombrará un protutor. La misma facultad tienen los testadores que nombren tutor. El Juez nombrará para protutor á alguno de los parientes, si á juicio del mismo Juez fuere idoneo para este cargo.»

(1) Gollena «*Proyecto*» 172.

El Sr. Méndez no está de acuerdo con la anterior proposición, pues no ve la necesidad de especificar las tutelas para que se entienda que á todas ellas se aplica la pro-tutela, bastando expresar que ésta existirá en todo caso de tutela. No cree tampoco que la testamentaria deba ser un excepción de este principio, porque el protutor está llamado, como se ha reconocido por el Sr. Lacunza, á vigilar y cuidar del buen manejo del tutor, cualquiera que éste sea. En cuanto á ligar al Juez para que nombre de toda preferencia protutor á algún pariente del menor, considera el que habla que ello no tiene razón de ser y puede aun perjudicar al huérfano. Así, entiende que el artículo del *Proyecto Sierra* quedaría bien con solo modificar las últimas palabras que obedecen á un sistema especial sobre patria potestad, que no se ha seguido en el nuevo Código. Propone, se diga al fin del artículo: *siempre que no haya sido nombrado por el testador.*

Con esta modificación es aprobado el artículo del *Proyecto* y pasa á ser el 318 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 202): «En el caso de tutela dativa, el consejo de familia nombrará el protutor en la misma sesión en que nombre al tutor.»

El Sr. Escudero hace observar que no hay necesidad de festinar el nombramiento del protutor como una medida de desconfianza y sólo para el caso de tutela dativa. Basta decir, como se expresa en el artículo siguiente del

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto, que ningún tutor puede desempeñar su encargo sin hacer que antes se nombre protutor.

Se conviene en suprimir el artículo.

Proyecto Sierra (art. 203): «El tutor testamentario y el legítimo no pueden empezar á ejercer sus cargos sin hacer que antes se convoque el consejo de familia para el reconocimiento de su cargo y nombramiento de protutor. El tutor que no llenase esta formalidad, será responsable de los perjuicios que cause al menor, y además separado de la tutela.»

El Sr. Lacunza nota que no hay razón para que se imponga al tutor la obligación de hacer convocar el consejo de familia bajo la pena de destitución. Esto debe dejarse al Juez, que procederá á la convocación del consejo, inmediatamente que llegue á su noticia la necesidad del caso. Para que la tutela sea desempeñada debidamente, basta, á juicio del que habla, declarar que el tutor no puede desempeñar su encargo sin que haya protutor. Sin embargo, hay que prever que el tutor no cumpla con la obligación de hacer que se nombre el protutor. ¿Se paralizará por esto la administración de la tutela? Sería llevar la sanción de un principio sano como el de que se trata hasta convertirlo en pernicioso para los intereses del huérfano. Conviene, pues, fijarse en un término medio y prudente que el que habla encuentra en la siguiente redacción: *El tutor de cualquiera clase no puede ejercer su cargo sin hacer que antes se nombre protutor. El tutor que no llenare esta formalidad, será responsable de los perjuicios que cause al menor, y además separado de la tutela; más ningún extraño puede rehusarse á tratar con él, en juicio ó fuera de*

él, como tutor, alegando la falta de nombramiento ó de existencia del protutor.

La redacción es aceptada y queda como art. 319 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 204): *El protutor está obligado 1º á defender los derechos del menor en juicio y fuera de él siempre que estén en oposición con los del tutor; 2º á vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del consejo de familia cuanto crea que puede ser dañoso al huérfano en su educación é intereses; 3º á reunir el consejo de familia para el nombramiento de tutor cuando éste faltare ó abandonare la tutela;... .....4º á ejercer las demás obligaciones que la ley le señala.*

El Sr. Lacunza está por la aprobación del artículo que contiene en sus tres primeros incisos las principales obligaciones del protutor, de que hablan generalmente los Códigos (1). Propone, sin embargo, para la mayor claridad del inciso 3º, que se agreguen las dos frases siguientes: *«más aunque falte el tutor no puede el protutor tomar la administración de la tutela, si el consejo de familia no le nombra en forma tutor.* En caso de que por falta de tutor el consejo nombrare tutor al protutor nombrará también otro protutor.»

El Sr. Escudero considera innecesaria la última parte por estar ya comprendida en el art. 318.

La comisión aprueba el artículo con la adición propuesta por el Sr. Lacunza, que retira la última parte, pasando á ser aquel el art. 320 del nuevo Código.

---

(1) Goyena, *Proyecto*, art. 188.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 205): *El protutor que no llene los deberes prescritos en el artículo anterior, es responsable de los daños y perjuicios que por ello resultaren al menor.*

Aprobado, quedando como art. 321 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto Sierra* nada dice sobre el término de las funciones del protutor, lo que conviene expresar, pues si bien es natural que ellas deban finalizar con la tutela, esto no ha de entenderse por el solo hecho de cambiar las personas. Así se evitarán las dudas á que ha dado lugar el art. 425 del Código francés. En consecuencia, propone se diga: *Los funciones del protutor cesarán cuando el menor salga de la tutela; pero si solamente hay mudanza en las personas de los tutores, seguirá el protutor.*

La redacción es aprobada y queda como art. 322 del nuevo Código.

CAPITULO VI.

Del consejo de familia.

Proyecto Sierra (art. 206): *El consejo de familia se establece para proveer mejor y con más seguridad de acierto á los intereses del huérfano.*

Antes del Imperio, la Comisión revisora no se manifestó favorable á la institución del consejo de familia, por considerarla ocasión de desavenencias entre los parientes y causa de moratorias perjudiciales á los intereses del menor. Sin necesidad del consejo de familia, se creyeron suficientemente garantizados esos intereses con el nombramiento del protutor y las satisdaciones del tutor. Pero, al

someterse de nuevo á revisión los trabajos anteriores, á moción del Emperador se incluyó en el nuevo Código el consejo de familia, atentas las siguientas consideraciones de Goyena: «El consejo de familia ha pasado por pensamiento nuevo y original de los legisladores franceses, mereciendo grandes elogios de los más célebres jurisconsultos y publicistas, entre ellos del célebre lord Brougham, nuestro contemporáneo en el Parlamento inglés. Sin embargo, aunque se me tache de maniático por nuestras antiguas leyes, puramente españolas y sin la mezcla ó liga de Romanismo, yo creo entrever en ellas algunos rasgos informes, si se quiere, y groseros del consejo de familia. La ley 3, tít, 3, lib. 4 del Fuero Juzgo da la tutela en primer lugar á la madre viuda, mientras permanezca tal; en segundo á los hermanos del huérfano, si fueren de edad perfecta, es decir, de veinte años; en tercero, al tío, hermano del padre difunto, ó á su hijo; faltando éstos, dispone que los parientes del huérfano elijan tutor, *tunc tutor ab aliis parentibus in præsentia judicis eligatur.*»

«La ley 3, tít. 7, lib. 3 del Fuero Real ordena que la madre viuda y tutora de sus hijos haga el inventario de los bienes de estos *ante los parientes mas propíncuos del* (*padre*) *muerto, y si pasare á segundas bodas, el alcalde con los parientes más propincuos del muerto den á ellos* (*los huérfanos*) *é á sus bienes quien los tenga en guarda.*»

«Se ve, pues, que por los dos Códigos mencionados correspondía á los parientes el acto más importante que el Francés atribuye al consejo de familia, á saber, el nombramiento de tutor; y correspondía también la intervención en otro acto de no menor importancia, cual es la formación de inventario. Estos rasgos, aunque toscos é imperfectos, encierran y descubren un gran pensamiento, que al mismo tiempo de ser beneficioso al menor, guarda armo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 205): *El protutor que no llene los deberes prescritos en el artículo anterior, es responsable de los daños y perjuicios que por ello resultaren al menor.*

Aprobado, quedando como art. 321 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que el *Proyecto Sierra* nada dice sobre el término de las funciones del protutor, lo que conviene expresar, pues si bien es natural que ellas deban finalizar con la tutela, esto no ha de entenderse por el solo hecho de cambiar las personas. Así se evitarán las dudas á que ha dado lugar el art. 425 del Código francés. En consecuencia, propone se diga: *Los funciones del protutor cesarán cuando el menor salga de la tutela; pero si solamente hay mudanza en las personas de los tutores, seguirá el protutor.*

La redacción es aprobada y queda como art. 322 del nuevo Código.

CAPITULO VI.

Del consejo de familia.

Proyecto Sierra (art. 206): *El consejo de familia se establece para proveer mejor y con más seguridad de acierto á los intereses del huérfano.*

Antes del Imperio, la Comisión revisora no se manifestó favorable á la institución del consejo de familia, por considerarla ocasión de desavenencias entre los parientes y causa de moratorias perjudiciales á los intereses del menor. Sin necesidad del consejo de familia, se creyeron suficientemente garantizados esos intereses con el nombramiento del protutor y las satisdaciones del tutor. Pero, al

someterse de nuevo á revisión los trabajos anteriores, á moción del Emperador se incluyó en el nuevo Código el consejo de familia, atentas las siguientas consideraciones de Goyena: «El consejo de familia ha pasado por pensamiento nuevo y original de los legisladores franceses, mereciendo grandes elogios de los más célebres jurisconsultos y publicistas, entre ellos del célebre lord Brougham, nuestro contemporáneo en el Parlamento inglés. Sin embargo, aunque se me tache de maniático por nuestras antiguas leyes, puramente españolas y sin la mezcla ó liga de Romanismo, yo creo entrever en ellas algunos rasgos informes, si se quiere, y groseros del consejo de familia. La ley 3, tít, 3, lib. 4 del Fuero Juzgo da la tutela en primer lugar á la madre viuda, mientras permanezca tal; en segundo á los hermanos del huérfano, si fueren de edad perfecta, es decir, de veinte años; en tercero, al tío, hermano del padre difunto, ó á su hijo; faltando éstos, dispone que los parientes del huérfano elijan tutor, *tunc tutor ab aliis parentibus in præsentia judicis eligatur.*»

«La ley 3, tít. 7, lib. 3 del Fuero Real ordena que la madre viuda y tutora de sus hijos haga el inventario de los bienes de estos *ante los parientes mas propíncuos del* (*padre*) *muerto, y si pasare á segundas bodas, el alcalde con los parientes más propincuos del muerto den á ellos* (*los huérfanos*) *é á sus bienes quien los tenga en guarda.*»

«Se ve, pues, que por los dos Códigos mencionados correspondía á los parientes el acto más importante que el Francés atribuye al consejo de familia, á saber, el nombramiento de tutor; y correspondía también la intervención en otro acto de no menor importancia, cual es la formación de inventario. Estos rasgos, aunque toscos é imperfectos, encierran y descubren un gran pensamiento, que al mismo tiempo de ser beneficioso al menor, guarda armo-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN © DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nía con las afeciones de la naturaleza, y hasta con los cálculos del interés personal. El huérfano gana, porque en vez de hallarse entregado exclusivamente á un tutor, que con el tiempo (ya que no abuse de su encargo, puede adolecer de negligencia), está rodeado de un consejo de sus más próximos parientes que vigilan al tutor, y cuyo concurso será necesario en los actos más importantes de la tutela; de modo que se prevendrán los perjuicios del huérfano, cuando en el sistema actual solo le queda el triste y tardío recurso de pedir su separación, llegado el tiempo de la mayoría.»

La sencilla razón dicta que mirarán más por la persona y bienes del menor los que le tocan más de cerca por los vínculos de la sangre; y á lo piadoso y moral de esta presunción se agrega respecto de los bienes el interés que deben tener por su conservación y fomento los que generalmente han de tener mayores esperanzas de heredarlos. Es moral este pensamiento, porque lo es cuánto sigue el orden de los afectos ó sentimientos de la naturaleza y procura su desarrollo: es además político y social, porque conserva y aviva el espíritu de familia, alejando en lo posibe y razonable la intervención judicial.»

«Como quiera, no podemos ocultarnos que vamos hacer un grande ensayo *¿cuáles serán sus resultados?* Puede casi asegurarse que serán desde luego felices en las provincias de *Fueros*, cuya legislación ha creado y conserva más vivo el espíritu de familia; en las otras provincias serán más lentos y tardíos; pero al fin se creará ese mismo espíritu, *porque las buenas leyes acaban siempre por crear buenas costumbres.*»

«Ni fué desconocida en Derecho Romano la conveniencia y utilidad de contar con los parientes del menor en ocasiones dadas. Con ellos se contaba para que la viuda menor de veinticinco años pudiese repetir matrimonio,—ley 18, tít. 4, lib. 5 del Código—para variar el lugar ó persona señalada por el padre para la educación del pupilo—*præsentibus cæteris propinquiis liberorum*—ley 1, § 1, tít. 2, lib. 27 del Digesto. *Evocandi sunt ad prætorem tortores pupilli ut defandant: si autem non habet tutores, requirendi cognati vel affines, et si qui alii forte sunt, quos verosimilé est defensionem pupilli, pupillæ, non omissurus, vel propter necessitudinem, vel propter charitatem, vel qua alia ratione*—ley 5, § 1, tít. 4, lib. 42 del Digesto (1)»

El artículo del *Proyecto Sierra* es aceptado y queda como 323 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 207): *Se procederá á la formación del consejo de familia, siempre que se haya de nombrar tutor, protutor, y en los demás casos que la ley requiere su reunión.*

El artículo es aprobado y queda como 324 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone se conceda al padre y solamente á él, como titular de la patria potestad, el derecho de nombrar en testamento á los miembros del consejo de familia y aún de fijar su número. Propone también que el nombramiento testamentario pueda hacerse aun de personas que no sean parientes del menor, pues la confianza que debe tenerse en el padre aleja toda duda acerca del acierto

---

(1) Gollena. *Proyecto*, Art. 172.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

y honorabilidad de los nombrados. En consecuencia, indica la siguiente redacción: *El padre puede en su testamento nombrar, además del tutor y protutor, los vocales del consejo de familia, y aun fijar el número de estos, siempre que no sean menos de dos. El nombramiento puede hacerlo de parientes del menor ó no. Esta facultad no corresponde á ningun otro, aun cuando tenga patria potestad.*

La redacción es aprobada y queda como art. 325 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 208): «Compondrán el consejo de familia el alcalde ó juez de paz del domicilio del huérfano, y los cuatro parientes más allegados de éste: dos de la linea paterna y dos de la materna, que estén avecindados en el mismo pueblo ó en otro que no diste mas de seis leguas. Entre los parientes se comprenden los maridos de las hermanas del menor, mientras éstas vivan.»

El Sr. Escudero dice que hay que poner este artículo en relación con el anterior. Así propone la siguiente redacción: *Cuando el padre no haya ejercido la facultad del artículo anterior ó falten los llamados por él, compondrán el consejo de familia cuatro de los parientes más allegados del menor, dos de la línea paterna y dos de la materna, mayores de edad, que estén avecindados en el mismo pueblo del domicilio del huérfano, ó en otro que no diste más de seis leguas. Entre los parientes se comprenden los maridos de las hermanas del menor, mientras estas vivan.*

La redacción es aceptada y queda como art. 326 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 209): «En igualdad de grados será preferido el pariente de más edad al más joven. Los

ascendientes varones de qualquier grado serán preferidos á las abuelas.»

El Sr. Escudero pide la modificación del artículo, en cuanto á los abuelos y por lo que respecta á la edad, pues entre estos puede haber ancianos, incapaces por sus muchos años, de cumplir con las obligaciones del consejo de familia. Así, propone quede el artículo en la siguiente forma: *Serán llamados á formar el consejo en el orden siguiente: 1º Los abuelos, prefiriendo los varones á las hembras, y el de menos edad al de mayor; 2º Los hermanos y hermanas carnales; 3º Los hermanos ó hermanas de padre ó de madre; 4º Los tíos, hermanos de padre ó de madre, y en defecto de ellos sus hijos. En igualdad de grados, en cada una de las tres fracciones precedentes, se dará la preferencia á la mayor edad.*

La redacción es aprobada y queda como art. 327 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 210): «Sin embargo de lo dispuesto en el art. 208, todos los hermanos carnales y los maridos de las hermanas carnales, serán vocales natos del consejo de familia; y si son tres ó más no se les agregará otro pariente. El tutor no puede ser vocal del consejo de familia.»

Se conviene en suprimir este artículo.

Proyecto Sierra (art. 211); «El alcalde ó juez de paz tiene obligación de proceder á la reunión del consejo de familia dentro del termino de seis dias, contados desde la muerte del padre ó la madre, sea de oficio, á petición de los interesados ó por acción popular.»

Se conviene en aplazar la discusión de este artículo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 212): «Cuando los parientes más cercanos del menor tengan su domicilio en un pueblo que diste más de seis leguas del domicilio del huérfano, los convocará el alcalde ó juez de paz; pero no los podrá obligar á aceptar contra su voluntad el encargo de vocales del consejo de familia.»

El Sr. Escudero cree que es menos ocasionado á demoras fijarse en parientes que no vivan tan lejos como el artículo del *Proyecto* supone, por lo cual indica la siguiente redacción: *Cuando los parientes más cercanos del menor tengan su domicilio en un pueblo que diste más de una legua del domicilio del huérfano; pero no de seis, los convocará el Juez de Primera Instancia ó el Municipal; mas no los podrá obligar á aceptar contra su voluntad el encargo de vocales del consejo de familia.*

La redacción es aceptada y queda como art. 328 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 213): *Si en el domicilio del huérfano y á* seis leguas *de distancia no se encuentra suficiente número de parientes para formar el consejo de familia y los que vivan en pueblos más distantes no se prestan á aceptar el encargo, se completará ó formará el consejo con vecinos honrados que eligirá el alcalde ó juez* entre *los que hayan sido amigos de los padres del menor.*

El Sr. Escudero consulta algunas modificaciones del artículo. En vez de «seis leguas» propone se diga *una legua*. En vez de «no se prestan á aceptar el encargo» *no concurren al llamamiento*. Propone también se supriman las palabras «alcalde ó.» En vez de «entre los que» *prefiriendo los que.*

Con estas modificaciones el artículo es aceptado y queda como 329 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 214): «El alcalde ó juez de paz *señalará un término breve, en proporción á las distancias, para que los llamados comparezcan personalmente ó por apoderado especial que no podrá representar más que uno solo.*

Se sustituyeron las primeras palabras por *el juez*. El artículo pasa á ser el 330 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art 215): «El alcalde ó juez de paz *puede multar hasta en la cantidad que le permiten las leyes, al pariente que no comparezca en el término que se le prefijó. Sin embargo, cuando la no comparecencia proceda de justa causa y el* alcalde ó juez de paz *estime útil al menor, que se aguarde al ausente, podrá diferir la reunión. La misma facultad de multar podrá ejercer sobre los que dejen de concurrir á cualquiera otra reunión del consejo de familia.*

Sustituidas las palabras: «el alcalde ó juez de paz» por las *el juez*, es aceptado el artículo, que queda como 331 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone que, en vez del art. 211 del *Proyecto Sierra* que quedó pendiente (1), se diga: *El juez*

(1) Véase *supra*, pag. 345.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

procederá á formar el consejo de familia dentro del término de seis días, contados desde la fecha en que falte al menor la patria potestad, y lo hará á petición de los interesados, ó por acción popular ó de oficio.

La redacción es aceptada y queda como art. 332 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 216) «Esta reunión y todas las demás del consejo de familia se celebrarán en la casa, morada del funcionario que debe presidirla, si no designa otro local; y para deliberar y acordar bastará la mayoría.»

El Sr. Escudero opina por que en la primera reunión del consejo el juez pueda resolver toda duda acerca de su formación. Así propone se diga: *La primera reunión del consejo se celebrará ante el juez. Este resolverá en el acto cualquiera duda ó cuestión que se ofrezca sobre su formación. Las siguientes reuniones se celebrarán en el local que acuerde el consejo.*

La redacción es aprobada y queda como art. 333 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 217): «El Alcalde ó Juez de paz presidirá siempre el consejo de familia, tendrá en él voto consultivo y aún decisivo en caso de empate.»

El Sr. Escudero cree que es más conveniente, por lo rápido y atenta la verdadera naturaleza del consejo de familia, encomendar la presidencia al protutor, y solamente en su defecto, al Juez. Así propone, se diga: *El protutor será el presidente del consejo. En él tendrá voto consultivo, y, en caso de empate, decisivo. Las resoluciones del consejo se*

acordarán por la mayoría de las personas que deben componerlo. A falta de protutor, el Juez presidirá el consejo.

La redacción es aprobada y queda como art. 334 del nuevo Código.

El Sr. Méndez dice que, como la falibilidad es herencia humana, las resoluciones del consejo de familia no pueden tener el caracter de irrevocables; que, en esta virtud, cuando la unanimidad de votos no acompañe una decisión, bueno sería dejar á los disidentes el derecho de promover lo que estimaran conveniente para el menor, á fin de nulificar el acuerdo con el cual no han estado conformes. Así propone se diga: *Cuando la resolución del consejo no sea unánime se hará constar en el acta, expresando los nombres y votos de los disensientes. En tal evento, cualquiera de estos, ó el tutor, podrá promover lo que estime conveniente en beneficio del menor, para hacer revocar la resolución del consejo.*

La redacción es aprobada y queda como art. 335 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 218): *Ningún individuo del consejo de familia tendrá voto, ni asistirá á las reuniones, cuando se trate de negocio en que tenga interés propio ó de sus hijos; pero podrá ser oído si el consejo lo estima conveniente.*

El artículo es aprobado y queda como 336 del nuevo Código.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Escudero propone la siguiente redacción: *El consejo se reunirá todas las veces que lo estime necesario para proveer lo que mejor convenga á los intereses del menor; y en los casos que lo requiera la ley para ejercer las facultades que ella le concede.*

La redacción es aprobada y queda como art. 337 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (219): *Todas las actas del consejo de familia se llevarán en un libro foliado y rubricado en todas sus fojas por el* Alcalde ó Juez de paz. *Las actas se firmarán por todos los vocales que sepan escribir, expresándose quiénes no sepan ó no puedan firmar, y custodiará dicho libro el protutor, y en su defecto el vocal de más edad.*

El artículo es aprobado y queda como 338 del nuevo Código.

El Sr. Méndez opina que, en el caso de tutela de hijos ilegítimos, muy frecuentemente sucederá que se perjudique al huérfano, si se observa con todo rigor el orden de convocación expresado en el art. 327, pues tales hijos suelen suscitar desavenencias y aun odios en las familias. En esta virtud la prudencia y la previsión aconsejan que en este caso, se deje la facultad del nombramiento al Juez. Este funcionario, atendiendo ante todo al mayor bien del pupilo, elegirá de entre sus parientes á los que considere más apropósito. Presenta, en consecuencia, la siguiente redacción: *Los miembros del consejo de familia, en el caso de tutela de los hijos ilegítimos, serán designados por el Juez*

La redacción es aceptada y queda como art. 339 del nuevo Código.

El Sr. Escudero dice que, debiendo tratarse en este capítulo de todo lo relativo al consejo de familia, sería bueno anticipar en esta oportunidad el art. 222 del *Proyecto Sierra;* pero redactándolo en la siguiente forma: *El tutor ó protutor, separado por cualquiera de las causas comprendidas en el art.....* (1), *no puede ser vocal del consejo de familia.*

La redacción es aprobada y queda como art. 340 del nuevo Código.

El Sr. Escudero formula la misma observación respecto del art. 223 del *Proyecto Sierra.* Lo presenta en la siguienta forma: *Al consejo de familia corresponde declarar sobre las causas de impedimento y separación de sus vocales, salvo el recurso, dentro del término de diez días, al Juez de Primera Instancia del partido.*

El artículo es aprobado y queda como 341 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone se coloque en seguida, como relativo también á la materia de que se trata, el artículo 224 del *Proyecto Sierra,* que dice: *El consejo de familia fundará su resolución expresando las causas y oyendo antes al interesado, cuando esto pueda hacerse sin grave inconveniente.*

---

(1) Es el art. 347 del nuevo Código.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El artículo es aprobado y pasa á ser el 342 del nuevo Código.

El Sr. Escudero presenta por el mismo motivo anterior, para que se incluya en este capítulo, el art. 225 del *Proyecto Sierra*, que dice: *Si el consejo declara la inhabilidad ó acuerda la separación, y el interesado se conformase, se procederá inmediatamente á su reemplazo. Si el interesado apelare, se seguirá la instancia con el consejo á expensas del menor; pero el consejo no podrá ser condenado en costas ni multado, sino en el caso de calumnia manifiesta.*

El artículo es aprobado y queda como 343 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone se incluya también en el presente capítulo el art. 226 del *Proyecto Sierra*, que dice: *Contra la declaración del consejo de familia favorable al interesado, no se admitirá apelación, ni ningún otro recurso.*

Se acepta el artículo, y pasa á ser el 344 del nuevo Código.

El Sr. Escudero hace igual proposición á las anteriores, respecto del art. 227 del *Proyecto Sierra*, con la sola modificación de los artículos en él citados: *En los casos de los artículos.....*(1) *si el tutor no ha entrado en el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá al cuidado de la persona y bienes del menor, hasta que se resuelva definitivamente sobre el impedimento; si el tutor ha entrado ya á ejercer su cargo; podrá el Juez proveer al mismo cuidado.*

El artículo es aceptado y queda como 345 del nuevo Código.

---

(1) Son los 346 y 347 del nuevo Código.

CAPITULO VII.

De las personas inhabiles para ser tutores, protutores y vocales del consejo de família (1) y de su separación.

Proyecto Sierra. (art. 220): «No pueden obtener estos cargos: 1º *las mujeres*, á excepción de las abuelas del menor que sean viudas; 2º *los menores de edad*; 3º *los mayores de edad que se encuentren bajo la curaduría*; 4º *los que hayan sido removidos de otra tutela anterior por sospechosos*; 5º *los que por sentencia hayan sido condenados á alna pena que lleve consigo la privación ó inhabilitación de este cargo*; 6º *los que no tengan oficio ó modo de vivir conocido ó sean notoriamente de mala vida*; 7º *los que, al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el menor* sobre su estado civil ó sobre sus bienes; 8º *los deudores del menor en cantidad considerable.....*; 9º *los parientes negligentes de que habla el art.* 192 *y* 10º *los Jueces ó Magistrados que tengan jurisdicción ordinaria en el lugar ó lugares en que se hallen los bienes del menor.....*»

El Sr. Lacunza acepta en lo general la redacción anterior; pero propone algunas modificaciones y adiciones que motiva de la siguiente manera: Desde luego indica que debe ser cambiada la frase inicial del artículo, de forma que quede bien establecida la diferencia entre los impedimentos y las excusas para la tutela. Propone, en con-

---

(1) Habiéndose tratado en el capítulo anterior de todo lo relativo al consejo de família, se suprimió en el nuevo Código la parte del título relativa á los vocales del mismo consejo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

secuencia, se diga: *No pueden ser tutores ni protutores, aunque esten anuentes en recibir estos cargos.* En seguida, refiriéndose al inciso 1º, propone se suprima la excepción que contiene en favor de las abuelas del menor que sean viudas, porque, si ella está en armonía con el sistema seguido por el *Proyecto Sierra*, no lo está de ninguna manera con declaraciones anteriores del nuevo Código, ya aprobadas en todo su alcance por la Comisión (1). El primero, separándose del antiguo derecho romano (2) y siguiendo el de la época imperial, así como á nuestro derecho patrio (3), si bien concede la patria potestad á la madre viuda (4), llama igualmente á la tutela legítima á las abuelas, lo cual no hace el nuevo Código, que ha preferido otorgarles la patria potestad (5), en el orden que marca el art. 271. So pena, pues, de incurrir en una flagrante contradicción, se hace inevitable la supresión indicada. En cuanto al inciso 7º, el que habla propone se suprima también la especificación que contiene de la materia sobre que ha de ser el pleito entre el pretendido tutor y el pupilo. Verdad es que ambas especies tienen en su favor la respetable tradición del derecho romano (6) y patrio (7); pero, aparte de que en el primero esto pudiera ser el resultado de

(1) Véase *supra* sobre el art. 198 del *Proyecto Sierra*.

(2) *Tutela plerumque virile officium est. Et sciendum est, nullam tutelam hereditario jure ad alium transire; sed ad liberos virilis sexus perfectæ ætatis descendunt legitimæ, cæterœ non descendunt* (*Dig.* lib. 26, tít. 1, l. 16—Id. tít. 2, l. 26—Id, tít. 5. l. 21.)

(3) *Cod.* lib. 5, tít. 35, l. 1—*Novella* 94 y 118, cap. 5—Partida 6ª tít. 16, l. 4.

(4) Véase *supra* art. 180 del Proyecto Sierra, pags. 304 á 305.

(5) Véase *supra* pags. 281 á 282.

(6) Dig. lib. 27, l. 1. 6. § 18 y 21.

(7) Partida 6ª, tít. 17, l. 2.

la exageración con que se consideró desde los primitivos tiempos á la tutela como una función pública, debe hoy atenderse á que cualquier pleito pendiente, y ya no solo sobre el estado civil del pupilo, entre él y la persona que ha de ser su tutor, basta para impedir, en una sabia y prudente legislación, que aquella proceda á encargarse de la tutela, por el peligro, cuando menos muy posible, de que abuse en su favor y con daño de los intereses del huérfano. Respecto del inciso 8º, el que habla propone se adicione, dejando el importe de la deuda á la calificación del juez, porque esta circunstancia necesariamente es muy relativa, debiendo atenderse para graduarla, en orden á la tutela, á las personas y á los casos, y expresando la excepción de que habla el Goyena, de la tutela testamentaria (1), excepción ya establecida por una ley de Partida. Así, propone que el inciso quede en los siguientes términos: *Los deudores del menor en cantidad considerable, á juicio del Juez, á no ser que el que nombra tutor testamentario lo haya hecho con conocimiento de la deuda, declarandolo así expresamente al hacer el nombramiento.* Respecto del inciso 9º propone se cambie el artículo de referencia, citando el 304 del nuevo Código. (3).

El Sr. Escudero dice que está de acuerdo con todas y cada una de las modificaciones y adiciones propuestas por el Sr. Lacunza; pero que, siguiendo la jurisprudencia tradicional, debiera expresarse, como causa de incapacidad para la tutela, la cualidad de extranjero de la perso-

(1) Goyena, *Proyecto*, sobre el inciso 8 del art. 202.

(2) Partida 6ª tít. 16 lib. 14.

(3) Véase *supra*, pags. 321 á 322.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

na designada para su desempeño (1), siempre que no estuviese domiciliada en el país. No quiere el proponente motivar esta causa de incapacidad, como lo hace aquella jurisprudencia, en el carácter de función pública que se atribuia á la tutela, sino en la consideración de que en interés del pupilo debe procurarse que el tutor reuna todos los requisitos necesarios para atender con asiduidad sus deberes y podersele exigir cuentas de su administración. En consecuencia propone se diga como inciso 11°: *El extranjero, á menos que no esté domiciliado en la República.*

El Sr. Ramírez manifiesta que, en interés tambien de los menores, propone á su vez, se agregue como inciso 12°, otra causa de impedimento para la tutela de que ya hablaban las leyes antiguas, la de encontrarse la persona de que se trata ligada con el Estado por razón de administración ó manejo de las rentas públicas. Este impedimento se justifica con solo atender á que la responsabilidad de los empleados de la Hacienda Pública habrá de hacerse efectiva en favor de ésta, de toda preferencia á cualesquiera intereses privados que estuvieran implicados con ella (2). En consecuencia propone se diga: *Los empleados públicos de Hacienda que por su empleo tengan responsabilidad pecuniaria actual, ó la hubieren tenido y no la hayan cubierto.*

Las distintas modificaciones y adiciones propuestas son aprobadas, quedando al tenor de ellas redactado el art. 346 del nuevo Código.

---

(1) Pothier, *Traite des person.* núm. 158.

(2) Dig. lib, 26, tít. 3, l. 9—Cod. lib. 5, tít. 54, l. 13 y tít. 41—Partida 6ª, tít. 16, l. 14.

Proyecto Sierra (art. 221): *Serán separados de la tutela: 1º Los que se hallen en el caso del art.* 203 por no haber convocado el consejo de familia; 2º *Los que sin haber* suscrito *la hipoteca legal del menor, se ingiriesen en la administración de la tutela; 3º Los que se condujeren mal en la tutela respecto de la persona ó administración de los bienes del menor y 4º* Los inhabiles, *desde que sobrevenga ó se averigüe su incapacidad.*

El Sr. Lacunza propone las siguientes modificaciones al artículo anterior: En cuanto al inciso 1°, que se sustituya el artículo de referencia con el 319 ya aprobado por la Comisión, en lugar del 203 del *Proyecto Sierra* (1); respecto del inciso 2º, que se diga *registrado*, en vez de «suscrito,» pues lo primero evoca la idea del complemento de la hipoteca y supone lo segundo; respecto del inciso 4º, que, en vez de decirse los «inhabiles,» palabra genérica y que parece referirse á casos imprevistos, se diga para mayor claridad y precisión: *los contenidos en el artículo anterior.*

Proyecto Sierra (art. 222) «El tutor ó protutor separado por cualquiera de las causas comprendidas en el articulo precedente, no puede ser vocal del consejo de familia.»

Suprimido en este capítulo, por haberlo ya aceptado la Comisión en otro lugar (2).

---

(1) Véase *supra*, pags. 338 á 339.

(2) Véase *supra*, art. 340 del nuevo Código, pag. 351.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 223): «Al consejo de familia corresponde declarar sobre las causas de impedimento y separación, salvo el recurso, dentro del término de diez días, al Juez de 1ª instancia del partido.»

Proyecto Sierra (art. 224): «El consejo de familia fundará su resolución expresando las causas y oyendo antes al interesado, cuando esto pueda hacerse sin grave inconveniente.»

Proyecto Sierra (art. 225): «Si el consejo declara la inhabilidad ó acuerda la separación, y el interesado se conformase, se procederá inmediatamente á su reemplazo. Si el interesado apelare, se seguirá la instancia con el consejo á expensas del menor; pero el consejo no podrá ser condenado en costas ni multado, sino en caso de calumnia manifiesta.»

Proyecto Sierra (art. 226): «Contra la declaración del consejo de familia favorable al interesado, no se admitirá apelación ni ningun otro recurso.»

El Sr. Lacunza manifiesta que, debiendo procurarse la mayor expedición en esta materia para beneficio del menor, cree más conveniente encomendar al Juez de 1ª instancia las atribuciones de que tratan los artículos anteriores, que al Consejo de familia. Por tal motivo propone, en vez de esos testos, la siguiente redacción: «Al Juez de 1ª instancia del partido corresponde decidir las cuestiones sobre nombramiento, excusa y remoción de los tutores de todas clases, y descernir el cargo, y sobre administración de los bienes de los menores. Las resoluciones del Juez se dictarán en juicio sumario, y no puede admitirse apelación ni en las interlocutorias ni en las definitivas sino en el efecto devolutivo.»

El Sr. Ramírez expresa que, aceptada ya en el nuevo Código la institución del consejo de familia, precisa hacerlo también con todas sus consecuencias y aplicaciones, pues la armonía y correlación de los preceptos de un Código son indispensables para su mejor inteligencia y recta interpretación. Ahora bien, si el consejo de familia, presidido por el protutor, se ha establecido, como lo dice el art. 323 del nuevo Código (1), para proveer mejor y con más seguridad de acierto á los intereses del huerfano, cuya educación é intereses están inmediatamente encomendados al tutor, nada es mas consecuente que cometer también al mismo consejo todo lo relativo al impedimento y separación de los tutores, así como á su excusa y remoción, á reserva de acudir, en caso de inconformidad, al Juez de 1ª instancia. Así el que habla, para evitar repeticiones, propone se diga: *Las disposiciones de los arts. 341, 342, 343 y 344 son aplicables al nombramiento, impedimento, excusa y remoción de los tutores de todas clases.*

La redacción es aceptada y queda como art. 348 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 227): «En los casos de los arts 220 y 221, si el tutor no ha entrado en el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá al cuidado de la persona y bienes del menor, hasta que se resuelva definitivamente sobre el impedimento; si el tutor ha entrado ya á ejercer su cargo, podrá el Juez ó tribunal proveer al mismo cuidado.»

---

[1] Véase *supra*, pág. 340 á 343.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ® DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Se suprime este artículo por estar ya reproducido anteriormente en el nuevo Código. (1)

CAPITULO VIII.

De las excusas de la tutela y protutela.

Proyecto Sierra (art. 228): «Podrá excusarse de estos cargos: 1° el Presidente de la República, Ministros del despacho y Gobernadores de los Estados; 2º *los militares en activo servicio; 3º los que tengan bajo su patria potestad cinco hijos legítimos; 4º los que fueren tan pobres que no puedan atender á la tutela sin menoscabo de su subsistencia; 5º los que por el mal estado habitual de su salud, ó por no saber leer ni escribir, no pudieren prestar igual atención; 6º los que tengan sesenta años cumplidos; el que sea ya tutor, protutor ó curador de otra persona.....Los excusados por alguna de las causas de este artículo, luego que cesare la causa, podrán ser compelidos á encargarse de la tutela ó protutela.*

El Sr. Lacunza presenta las siguientes observaciones á la anterior redacción: Propone que, aclarando el pensamiento del *Proyecto*, se diga: *Tienen excusa para ser tutores ó protutores de cualquiera clase.* Respecto del inciso 1º, propone se diga: «los individuos de los supremos poderes de los Estados ó de la Federación.» (Esta redacción se cambió durante el Imperio, á moción del Sr. Escudero por la siguiente: *Los empleados superiores del Estado*). Respecto del inciso 3º propone se agregue: «contando para este efecto como vivos y en patria potestad á los muertos en campaña defendiendo la patria.» Esta adición, dice el proponente, obedece á la tradición de recompensar la fecundidad en el matrimonio y los servicios patrióticos, con la exención de cargas personales como la tutela y protutela, considerándose á los hijos muertos como vivos. Así se lee en las Institutas de Justiniano: *hi enim qui pro república ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur* (1), texto á que se refiere una de las leyes de Partida (2) y reproduce otra, explicándolo bastante claramente (3). Opina, por el mejor servicio de la tutela, que se añada un 8º inciso en estos términos: *Los que tengan su domicilio, ó ejerzan cargo público, á más de cinco leguas del lugar en que esté la mayor parte de los bienes del menor.*

La redacción así modificada, es aceptada y queda como art. 349 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 229): *El que teniendo excusa legítima para ser tutor ó protutor, acepta el encargo, se entiende que renuncia á la excusa que le concede la ley.*

La redacción es aceptada y queda como art. 350 del nuevo Código.

---

(1) Véase *supra*, art. 345, del nuevo Código, pág. 356.

(1) *Inst. de Just*, lib. 1, tít. XXV inic.
(2) *Partida* 2, tít. 25, l. 3.
(3) *Partida* 6, tít. 17, l. 2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Se suprime este artículo por estar ya reproducido anteriormente en el nuevo Código. (1)

CAPITULO VIII.

De las excusas de la tutela y protutela.

Proyecto Sierra (art. 228): «Podrá excusarse de estos cargos: 1° el Presidente de la República, Ministros del despacho y Gobernadores de los Estados; 2º *los militares en activo servicio; 3º los que tengan bajo su patria potestad cinco hijos legítimos; 4º los que fueren tan pobres que no puedan atender á la tutela sin menoscabo de su subsistencia; 5º los que por el mal estado habitual de su salud, ó por no saber leer ni escribir, no pudieren prestar igual atención; 6º los que tengan sesenta años cumplidos; el que sea ya tutor, protutor ó curador de otra persona.....Los excusados por alguna de las causas de este artículo, luego que cesare la causa, podrán ser compelidos á encargarse de la tutela ó protutela.*

El Sr. Lacunza presenta las siguientes observaciones á la anterior redacción: Propone que, aclarando el pensamiento del *Proyecto*, se diga: *Tienen excusa para ser tutores ó protutores de cualquiera clase.* Respecto del inciso 1º, propone se diga: «los individuos de los supremos poderes de los Estados ó de la Federación.» (Esta redacción se cambió durante el Imperio, á moción del Sr. Escudero por la siguiente: *Los empleados superiores del Estado*). Respecto del inciso 3º propone se agregue: «contando para este efecto como vivos y en patria potestad á los muertos en campaña defendiendo la patria.» Esta adición, dice el proponente, obedece á la tradición de recompensar la fecundidad en el matrimonio y los servicios patrióticos, con la exención de cargas personales como la tutela y protutela, considerándose á los hijos muertos como vivos. Así se lee en las Institutas de Justiniano: *hi enim qui pro república ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur* (1), texto á que se refiere una de las leyes de Partida (2) y reproduce otra, explicándolo bastante claramente (3). Opina, por el mejor servicio de la tutela, que se añada un 8º inciso en estos términos: *Los que tengan su domicilio, ó ejerzan cargo público, á más de cinco leguas del lugar en que esté la mayor parte de los bienes del menor.*

La redacción así modificada, es aceptada y queda como art. 349 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 229): *El que teniendo excusa legítima para ser tutor ó protutor, acepta el encargo, se entiende que renuncia á la excusa que le concede la ley.*

La redacción es aceptada y queda como art. 350 del nuevo Código.

---

(1) Véase *supra*, art. 345, del nuevo Código, pág. 356.

(1) *Inst. de Just*, lib. 1, tít. XXV inic.
(2) *Partida* 2, tít. 25, l. 3.
(3) *Partida* 6, tít. 17, l. 2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 230): *Las excusas.....deben proponerse ante el consejo de familia.*

El Sr. Lacunza propone se diga: las excusas, *así necesarias como voluntarias*, para comprender también los impedimentos de que se ha hablado en el cap. VII.

La redacción es aceptada y queda como art. 351 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 231): «El tutor y protutor deben proponer dichas excusas en la primera reunión del consejo de familia á que asistan, so pena de no ser oidos después. No asistiendo al consejo, deben proponerlas dentro de diez días después de sabido el nombramiento, y un día más por cada cinco leguas de la distancia que medie entre su domicilio y el del huérfano, para lo cual deberán pedir que se convoque al consejo de familia. Los mismos términos y las mismas formalidades se observarán, cuando la causa de excusa hubiese sobrevenido después de la admisión de la tutela ó protutela.

El Sr. Lacunza propone algunas reformas de la anterior redacción. Desde luego indica la supresión de la primera parte, por creerla innecesaria, después del art. 350 del nuevo Código: En cuanto á la segunda parte, considera indiferente atender al domicilio del huérfano, pues se trata de que las excusas sean propuestas al consejo de familia. Así propone la siguiente redacción: *El tutor ó protutor deben proponer sus excusas voluntarias, dentro de diez días después de sabido el nombramiento, y un día más por cada cinco leguas que medien entre su domicilio y el lugar de la reunión del consejo de familia. Los mismos términos tendrán cuando la excusa hubiese sobrevenido después de la admisión de la tutela ó protutela.*

El Sr. Méndez propone se establezca alguna sanción al deber que se impone al tutor en la declaración anterior. Al efecto indica se diga: *Por el lapso de los términos se entiende renunciada la excusa, si no se propone dentro de ellos.* Añade que, á su juicio, también sería conveniente agregar: *Si el tutor ó protutor tuviere dos ó más excusas, las propondrá simultáneamente dentro del plazo, y si propone una sola, se tendrán como renunciadas las demás.*

Todas estas redacciones son aceptadas y quedan como art. 352 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 232): «Cuando el consejo deseche las excusas, podrá el interesado acudir dentro de diez días al Juez de 1ª instancia, el cual decidirá con audiencia del consejo, y contra su providencia no se admitirá más recurso que el de responsabilidad.»

Se conviene en suprimir este artículo, por haberse ya aceptado para el nuevo Código el art. 348 (1).

Proyecto Sierra (art. 233): *Durante el juicio de excusa, el que la proponga está obligado á ejercer su cargo, y si no lo hiciere, el consejo de familia nombrará otra persona que lo sustituya, quedando el primero responsable de la gestión del substituto si la excusa fuere desechada.*

Se acepta el artículo, que es el 216 del Proyecto de Go-

---

(1) Véase *supra* pág. 359

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

yena y por las razones que allí mismo se expresan, pasando á ser el 353 del nuevo Código.

Proyecto Sierra. (art. 224): *El tutor testamentario que se excusare de la tutela, perderá todo derecho á lo que le hubiese legado el testador.....*

El Sr. Lacunza propone se adicione el artículo, penando á cualquier tutor ó protutor que, sin excusa ó desechada la propuesta, no desempeñe la tutela ó protutela, sin perjuicio de la responsabilidad que le resulte por los males causados al menor con tal conducta. Esa pena, propone el que habla, sea la pérdida del derecho de heredar *ab-intestato*. El artículo del *Proyecto* se limita á reproducir el pensamiento de la ley romana: *amittere id quod testamento meruit et cum placuit, qui tutur excusavit se a tutela* (1). La razón de esta disposición nos la da Goyena: el que voluntariamente falta á la confianza del testador, no es acreedor á su liberalidad, que probablemente le fue hecha en atención al mismo encargo con que se le gravó y honró (2). Pero ¿no será también indigno de heredar *ab-intesto* el que sin excusa y sin razón perjudica al menor de quien es tutor ó protutor, abandonando completamente su persona y bienes? La justicia más evidente impone aquí un castigo contra ese negligente y despiadado, que tras su incalificable incuria, todavía viniera á recoger bienes para cuya conservación en nada ha contribuido.

El Sr. Ministro de Justicia (Terán): Hace observar al Sr. Lacunza que su razonamiento descansa sobre

(1) *Dig.* lib. 34, tít. 9, l. 5, § 2.
(2) Goyena, *Proyecto*, sobre el art. 618.

un falso supuesto: el de que el derecho de los herederos *ab-intestato* derive de sus servicios prestados al autor de la herencia, cuando, en realidad, deriva de la ley. Por esto, mientras nada es mas justo que castigar al tutor testamentario cuando se excusare de la tutela, con la pérdida del legado que le hubiere dejado el testador, aparece contrario á la ley imponer ese mismo castigo á cualquier tutor, aunque sea por el hecho más grave de no desempeñar la tutela, ni aun proponiendo excusa ó desechada la propuesta; pero sobre los derechos que él tiene por la ley.

El Sr. Lacunza contesta que, efectivamente, los derechos de los herederos *ab-intestato* derivan de la ley y no de la voluntad del testador; pero esto no es obstáculo para la disposición que consulta, porque, por esto mismo y atentas las consideraciones expuestas, es la ley misma la que establece ciertas condiciones para heredar *ab-intestato*.

La mayoría de la Comisión acepta la idea del Sr. Lacunza, quien la formula en los siguientes términos: *Todo tutor ó protutor que sin causa, ó desechada la que hubiese propuesto, no desempeñe la tutela ó protutela, pierde el derecho de heredar al menor si muere intestado, sin perjuicio de ser responsable de los daños y perjuicios que por su renuencia hayan sobrevenido al menor.*

Esta redacción se añade al art. 234 del *Proyecto* y ambas pasan á formar el art. 354 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone se adicione el *Proyecto Sierra*, declarando la responsabilidad que pesa sobre los herederos ó ejecutores testamentarios del tutor ó protutor que fallezca, de dar aviso de este acontecimiento á la per-

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sona que debe seguir en la tutela ó al consejo de familia, y de continuar en el cuidado y administración de los bienes del menor, mientras entra á administrar el nuevo tutor. Esta declaración es necesaria en beneficio del menor, para evitar que el cuidado de su persona y la administración de sus bienes se interrumpan, y conviene además sancionarla de una manera enérgica y eficaz. Así el que habla propone se diga: *Muerto un tutor ó protutor que esté administrando la tutela, los herederos ó albaceas que administren sus bienes, están obligados á dar aviso al que debe seguir en la tutela ó al consejo de familia; y mientras entre en la administración el nuevo tutor, los expresados herederos ó albaceas, con la responsabilidad de sus propios bienes, continuarán administrando los del menor y cuidando de este. Si los herederos y albaceas no dieren el aviso expresado, tendrán sobre sus bienes, además de la responsabilidad de su propia administración, toda la que resulte á cargo del difunto tutor.*

La redacción es aprobada y pasa á ser el art. 355 del nuevo Código.

CAPITULO IX.

De la administración de la tutela.

Proyecto Sierra (art. 235): *El tutor cuidará de la persona del menor y le representará en todo acto civil.....*

El Sr. Lacunza manifiesta que el artículo anterior está tomado literalmente del 218 del Proyecto de Goyena, y consulta se le haga una adición, para que el concepto que expresa quede más claro y mejor definido. Esa

adición se encuentra en los motivos que expone el mismo jurisconsulto español y se refiere á excluir de la representación tutelar todos aquellos actos del pupilo, que por ser esencialmente personales, no admiten intervención ajena. En esta virtud, propone se complete el artículo, diciendo:..... *excepto las puramente personales, como el matrimonio, reconocimiento de hijos, y otros de la misma clase.*

La adición es aceptada y con el texto del *Proyecto* pasa á ser el art. 356 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 226): *El menor debe respeto y obediencia al tutor y éste podrá corregirlo moderadamente.....*

El Sr. Ramírez propone se adicione el artículo, previendo el caso de que la corrección moderada de que se trata, no baste. Recuerda, á este respecto, lo que propuso á la Comisión en orden á la patria potestad; pero observa que, á su juicio, no conviene otorgar al tutor las mismas extensas facultades que al padre, por el peligro de que su ejercicio no sea templado, como en éste, por el natural amor hacia los hijos (1). Así propone se diga: *Si no bastare la corrección moderada, el tutor dará parte al Juez, y éste, sin instruir expediente escrito, podrá por una simple orden no motivada, destinar al menor á alguna casa de corrección, por un tiempo que no exceda de un mes: una vez puesto allí, solo el Juez puede sacarle antes del mes.*

La redacción es aprobada y unida al art. 236 del *Proyecto Sierra*, pasa á formar el art. 357 del nuevo Código.

---

(1) Véase *supra*, págs. 248 á 287.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sona que debe seguir en la tutela ó al consejo de familia, y de continuar en el cuidado y administración de los bienes del menor, mientras entra á administrar el nuevo tutor. Esta declaración es necesaria en beneficio del menor, para evitar que el cuidado de su persona y la administración de sus bienes se interrumpan, y conviene además sancionarla de una manera enérgica y eficaz. Así el que habla propone se diga: *Muerto un tutor ó protutor que esté administrando la tutela, los herederos ó albaceas que administren sus bienes, están obligados á dar aviso al que debe seguir en la tutela ó al consejo de familia; y mientras entre en la administración el nuevo tutor, los expresados herederos ó albaceas, con la responsabilidad de sus propios bienes, continuarán administrando los del menor y cuidando de este. Si los herederos y albaceas no dieren el aviso expresado, tendrán sobre sus bienes, además de la responsabilidad de su propia administración, toda la que resulte á cargo del difunto tutor.*

La redacción es aprobada y pasa á ser el art. 355 del nuevo Código.

CAPITULO IX.

De la administración de la tutela.

Proyecto Sierra (art. 235): *El tutor cuidará de la persona del menor y le representará en todo acto civil.....*

El Sr. Lacunza manifiesta que el artículo anterior está tomado literalmente del 218 del Proyecto de Goyena, y consulta se le haga una adición, para que el concepto que expresa quede más claro y mejor definido. Esa

adición se encuentra en los motivos que expone el mismo jurisconsulto español y se refiere á excluir de la representación tutelar todos aquellos actos del pupilo, que por ser esencialmente personales, no admiten intervención ajena. En esta virtud, propone se complete el artículo, diciendo:..... *excepto las puramente personales, como el matrimonio, reconocimiento de hijos, y otros de la misma clase.*

La adición es aceptada y con el texto del *Proyecto* pasa á ser el art. 356 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 226): *El menor debe respeto y obediencia al tutor y éste podrá corregirlo moderadamente.....*

El Sr. Ramírez propone se adicione el artículo, previendo el caso de que la corrección moderada de que se trata, no baste. Recuerda, á este respecto, lo que propuso á la Comisión en orden á la patria potestad; pero observa que, á su juicio, no conviene otorgar al tutor las mismas extensas facultades que al padre, por el peligro de que su ejercicio no sea templado, como en éste, por el natural amor hacia los hijos (1). Así propone se diga: *Si no bastare la corrección moderada, el tutor dará parte al Juez, y éste, sin instruir expediente escrito, podrá por una simple orden no motivada, destinar al menor á alguna casa de corrección, por un tiempo que no exceda de un mes: una vez puesto allí, solo el Juez puede sacarle antes del mes.*

La redacción es aprobada y unida al art. 236 del *Proyecto Sierra*, pasa á formar el art. 357 del nuevo Código.

---

(1) Véase *supra*, págs. 248 á 287.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 237): *Los gastos de alimentos y educación del menor, deben regularse de manera que nada necesario le falte según su condición y riqueza.*

El artículo es aprobado y pasa á ser el 358 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 238): *Cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el consejo de familia fijará la cantidad que ha de invertirse en los alimentos y educación del menor, sin perjuicio de alterarla, según el aumento ó diminución de su patrimonio y otras circunstancias. Por las mismas razones podrá el consejo de familia modificar lo que el padre ó la madre hubieren señalado para igual objeto.*

Es el art. 221 del proyecto de Goyena, que la Comisión acepta, pasando á ser el 359 del nuevo Código.

El Sr. Méndez propone que se supla un vacío del *Proyecto Sierra* respecto de los gastos ordinarios de la administración á semejanza de lo determinado por el art. 454 del Código Francés. Es cuando menos una prudente precaución no dejar en este particular toda libertad al tutor. Así propone la siguiente redacción: *El tutor, dentro del primer mes del ejercicio de su encargo, fijará, con apreciación del consejo de familia, la cantidad que ha de invertirse en gastos de administración; y el número y sueldo de los dependientes que sean necesarios para la administración de los bienes del menor y no podrán después aumentarse los empleados permanentes ni sus sueldos, sino con aprobación del consejo. La aprobación de estas cantidades no excusa al tutor de probar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido gastadas.*

La redacción es aprobada y queda como art. 360 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 239): «El tutor deberá oír al consejo de familia sobre la carrera ú oficio que haya de darse al huérfano, cuando el padre ó la madre no lo haya designado, ó para variar la designación hecha por estos.»

El Sr. Escudero opina por que no hayque se pararse en este punto de las tradiciones de nuestra jurisprudencia, inspiradas, á no dudarlo, en nuestras costumbres. Según estas toda autoridad debe dejarse al tutor para que destine al menor á la carrera ú oficio que juzgue más conveniente, dadas las circunstancias del segundo, en orden ó aptitudes, elementos de fortuna y condición social. ¿Quién mejor que el tutor, aleccionado por la experiencia, puede enderazar la actividad del pupilo hacia el porvenir que más cuadre con sus legítimas conveniencias? Así una ley de Partida decía: «Después de esto debe poner que aprenda ó use aquel menester que más le conviniere (1.)» Si el tutor no acierta en este asunto, como es muy posible, aun que no menos remoto, para eso está el pro-tutor (2); pero de todos modos, las más veces es indudablemente lo aconsejado por la prudencia acogerse, como principio, á la autoridad del tutor.

Una excepción, sin embargo, reconoce el que habla, en esta materia: cuando el padre hubiera dedicado ya al menor á alguna carrera, porque entonces no es natural suponer en el tutor mayor interés por la felicidad del pupilo

---

(1) Partida 6, tít. 16, l, 16.

(2) Véase *supra* sobre el art. 320, pág. 339.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

que en el autor de sus días. Pero, aun en esta hipótesis, y atento que los padres no son infalibles sobre lo que más conviene á sus hijos, no estaría por demás declarar que subsiste la autoridad del tutor, aunque con la taxativa de obtener la aprobación del consejo de familia. Así, el que habla propone la siguiente redacción: *El tutor destinará al menor á la carrera ú oficio que crea conveniente, según sus circunstancias. Si el que tenía patria potestad sobre el menor lo hubiere dedicado á alguna carrera, el tutor no la variará sino con aprobación del consejo de familia.*

El Sr. Lacunza manifiesta que ya tuvo oportunidad de expresar sus ideas sobre esta materia, al tratarse de la patria potestad (1), exponiendo que debe distinguirse entre la educación y la instrucción, porque si respecto de la primera toda autoridad debe dejarse á los padres ó tutores, en orden á la segunda se necesita dejar al menor la facultad de elegir, pues nadie mejor que él, después de hecha su educación, puede comprender su vocación. Así el que habla propone se diga: «El tutor destinará al menor á la carrera ú oficio que éste elija, según sus circunstancias.»

El Sr. Escudero insiste en su redacción, manifestando que, en su concepto, el legislador debe esperar mucho de la prudencia del tutor.

El Sr. Méndez propone se agregue á la redacción del señor Escudero, que deberá oírse al menor siempre que se trate de variar la carrera á que su padre lo había destinado. Así, formula su idea en la siguiente forma: *Siempre que el consejo haya de determinar sobre este punto, oirá al mismo menor en persona.*

——

(1) Véase *supra* pág. 283.

Las redacciones de los señores Escudero y Méndez, son aprobadas y ambas pasan á formar el art. 361 del nuevo Código.

——

Proyecto Sierra (art. 240): *Si las rentas del menor no alcanzan á cubrir los gastos de sus alimentos y educación, el consejo de familia decidirá si ha de ponérsele en oficio, ó adoptarse otro medio para evitar la enajenación de sus bienes.*

El artículo es aprobado y pasa á ser el 362 del nuevo Código.

——

Proyecto Sierra (art. 241:) «Todo tutor, antes de entrar en la administración de su cargo, asegurará las resultas de su administración de la manera que se previene en los títulos de este código relativos á hipotecas.»

El Sr. Escudero propone se emplee una frase más genérica que la del *Proyecto* v. g.: *Todo tutor, antes de entrar en la administración de su cargo, caucionará su manejo,* á fin de que en ella se comprenda también la fianza.

La redacción es aceptada y queda como art. 363 del nuevo Código.

——

Proyecto Sierra (art. 242:) *El tutor está obligado á formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio del menor, en el término que el consejo de familia le designe y con intervención del protutor.*
Nadie puede dispensar de esta obligación.

El Sr. Lacunza manifiesta que ciertamente es antigua y muy justa la obligación para el tutor de formar inventario solemne y circunstanciado de los bienes del

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

menor: *Tutores vel curatores*, se lee en el Código, *non quam fuerint ordinati, sub presentia publicarum personarum inventarium solemniter facere curabunt* (1). «Luego, ordena una ley de Partida, ante que otra cosa fagan, deven fazer escrito de todos los bienes de los mozos, con otorgamiento del juez del logar, é sea fecho por mano de alguno de los Escribuanos públicos.... E en tal escritura como esta deuen ser trasladados todos los preuillejos é las cartas de las heredades de los mozos (2).» Pero, ni la ley romana ni la patria señalaban términos para el cumplimiento de esta obligación, lo que ha hecho decir á los intérpretes que el tutor debía hacer el inventario luego que pudiese (3). Ante este silencio y buscando siempre las mayores garantías de buen manejo de los bienes del pupilo, el que habla opina por que se escoja entre dos extremos: ó se declara terminantemente que la formación del inventario debe ser previa al desempeño de la tutela ó se fija cuando menos un término máximo, pasado el cual, sin que el inventario quede concluido, deberá ser removido el tutor como sospechoso. Lo primero fué establecido por los Pretores en Roma, proveyendo así á una necesidad del estricto derecho. Digna es de recordarse esta disposición: *Tutor qui repertorium non fecit, quod vulgo inventarium appellatur, dolo fecisse videtur: nisi forte aliqua necessaria et justissima causa allegari possit, cur id factum non sit. Si quis igitur dolo inventarium non fecerit, in ex conditione est, ut teneatur in id quod pupilli interest: quod*

(1) Cód. lib. 5, tít. 37, l. 24.
(2) Partida 6, tít. 16, l. 15.
(3) Gutiérrez, *de tutel.* part. 2, cap. 1, núm. 10.

ex jurejurando in litem æstimatur. Nihil itaque gerere ante inventarium factum eum oportet: nisi id quod dilationem nec modicam expectare possit (1). Pero lo segundo parece más equitativo y evita toda duda. Así el que habla propone se adicione la primera parte del artículo del *Proyecto* diciendo: *Este término no podrá ser mayor de seis meses.* En cuanto á la segunda parte del mismo artículo, no ignora la Comisión que en el derecho romano imperial podían los testadores dispensar del inventario solemne á los tutores, para no exponer á la envidia al pupilo si era rico, ó al desprecio si era pobre: *nisi testatores qui substantiam transmittunt, specialiter inventarium conscribi vetuerint* (2). El inventario entonces se sustituía con una descripción privada pero exacta de los bienes. Este antecedente, que no ha dejado de ejercer influencia en el derecho posterior, como es de verse en algunos testamentos en que pocas veces falta, en la cláusula relativa al nombramiento de tutor, la ritual frase; «y dispensándole de la obligación de inventario solemne y aun privado, etc., le nombro tutor etc.» pudiera aun dar lugar á dudas que es preciso evitar, pues el inventario, en el caso de tutela, reviste tal importancia, que él constituye la base de la futura responsabilidad del tutor. Así el que habla propone que, en vez de la frase final del artículo del *Proyecto*, se diga: *La obligación de hacer inventario no pueden dispensarla ni los que tienen derecho de nombrar tutor testamentario.*

(1) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 7.
(2) Cód. lib. 5, tít. 51, l. 13.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Con estas modificaciones es aprobado el artículo, y pasa á ser el 364 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 243): «El tutor está obligado á inscribir en el inventario, y el escribano á requerirle que lo haga, el crédito que tuviere contra el menor. El escribano sufrirá una multa de veinticinco pesos si no hace tal requerimiento, y el tutor perderá su crédito, sí, requerido por el escribano, no lo inscribiese en el inventario.»

El Sr. Lacunza manifiesta que este artículo está tomado del 225 del Proyecto de Goyena, quien á su vez lo tomó del 451 francés, que ha dado lugar á algunas contradicciones en la jurisprudencia de los tribunales. Porque una de dos: ó el escribano no cumple con la obligación que se le impone de requerir y mandar al tutor que declare si tiene algún crédito y cuál sea éste contra el menor, ú observa tal deber. Si lo primero, la lógica obliga á decidir que el silencio del tutor, caso de ser realmente acreedor, no lo hace sospechoso y por tanto no pierde su crédito; si lo segundo, tal silencio, en las mismas circunstancias, produce una presunción contraria y causa la pérdida del crédito. Pero una superficial reflexión basta á considerar igualmente doloso al tutor en uno y otro caso, y en ambos también surje la sospecha de si el crédito que más tarde aparezca sea falso ó esté prescrito. Lo más claro, en consecuencia, parece al que habla que se suprima la formalidad del requerimiento por el escribano y simplemente se obligue al tutor á inscribir en el inventario su crédito contra el menor, so pena de perderlo. Así propone, se diga: *El tutor está obligado á inscribir en el inventario el crédito que tenga contra el menor; si no lo hace, pierde el crédito.*

La redacción es aprobada y pasa á ser el art. 365 del nuevo Código.

———

Proyecto Sierra (art. 244); «Los bienes que el memenor adquiera después, se inventariarán con la misma formalidad.»

El Sr. Escudero propone, como más clara, la siguiente redacción: *Los bienes que el menor adquiera después de la formación del inventario, se incluirán en él con la misma formalidad.*

La redacción es aceptada y queda como art. 366 del nuevo Código.

———

El Sr. Méndez propone se llene un vacío, que en esta materia es de notarse en el *Proyecto* que se revisa. Se refiere á la inadmisibilidad de prueba de parte del tutor contra el inventario. El principio viene desde el antiguo derecho, que era terminante en este punto: *Non esse aliud*, se lee en el Código, *inspiciendum nisi id quod scripserit; cum nemo tam simplex, imo stultus, inveniatur, ut in público inventario aliquid scribi contra se patiatur.* (1) «Tal contradecimiento del tutor, dice una ley de Partida, non sea cabido, nin vala magüer quisiese probar lo que dice (2).» Sin embargo, como lo nota Goyena, los intérpretes de es-

(1) *Cód.* lib. 5, tít. 51, l. 13.
(2) Partida 3, tít, 18, l. 120.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tas dos leyes opinaron comunmente por admitir al tutor la prueba de un error justo y de hecho, pues que se admite contra la propia confesión hecha en juicio..... y toda la fuerza del inventario se reduce á esta (1). Pero el que habla cree que, sin negar la posibilidad de un error de buena fe en el tutor, sería ocasionado á graves abusos permitirle objetar su propio inventario. Como no puede decirse lo mismo respecto de terceros, habrá que exceptuarlos de dicho principio, conforme á la regla: *res inter alios acta aliis nec nocet, nec prodest.* Así propone la siguiente redacción: *Una vez hecho el inventario, no se admite al tutor á probar contra él, en perjuicio del menor, antes ó después de la mayoría, ya sea que litigue á su propio nombre ó con la representación del menor. El inventario no hace fe contra tercero.*

La redacción es aprobada y queda como art. 367 del nuevo Código.

El Sr. Escudero hace observar que, supuesta la redacción aprobada, sí se admite al tutor á probar contra el inventario; pero en favor del menor. Supóngase el caso de omisión de bienes. Es que entonces cesaría toda razón de sospecha en contra de la honorabilidad del tutor. Hay que preever, sin embargo, que el tutor no reclamara contra esa omisión. ¿Será justo permitirle á él solo tal facultad? No parece debido ni conveniente al que habla, aunque opta por que, de concederse el derecho de reclamación al menor, al protutor ó á cualquier pariente, sea á condición de que se oiga al tutor. En consecuencia, el que habla propone la siguiente redacción: *Si se hubieren omitido algunos bienes en el inventario, el menor mismo, antes ó después de la mayoría de edad, y el protutor ó cualquier pariente, pueden ocurrir al Juez pidiendo que se listen, y el Juez, oido el tutor, determinará en justicia.*

(1) Goyena, *Proyecto*, art. 224.

La redacción es aprobada y queda como art. 368 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 245): *Si el padre ó madre de menor ejercieren algún comercio ó industria, el consejo de familia decidirá si ha de continuarse ó nó, a menos que aquellos hubiesen dispuesto algo sobre este punto, en cuyo caso se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente, á juicio del consejo.*

Se acepta este artículo que pasa á ser el 369 del nuevo nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 246): «Cuando después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, resultare algún sobrante de dinero, el consejo de familia determinará el modo de emplearlo en beneficio del menor. Si por omisión ó culpa del tutor no se empleare el dinero sobrante, responderá de sus intereses legales.»

El Sr. Lacunza encuentra incompleto el pensamiento contenido en este artículo, que está tomado del 228 del Proyecto de Goyena. En concepto del que habla, hay que ser más explícito en orden al dinero de cuyo empleo se trata, refiriéndose no solo al que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, porque

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

quizá podría entenderse que el legislador solo ha querido referirse al efectivo del pupilo en determinado tiempo generalmente al principio, sino á todo el dinero sobrante, ya sea el existente al empezar la labor tutelar, ya el que proceda de la redención de capitales ó venta de bienes ó cualquiera otro, pues la mente de la ley debe ser aquí que ningún dinero efectivo del pupilo esté ocioso, sino que todo él, una vez asegurado el presupuesto de los gastos ordinarios y necesarios, se emplee para hacerlo producir, ora imponiéndolo mediante buenas hipotecas, ora comprando con él fincas productivas. Hay, en consecuencia, que ampliar la idea del artículo.

El Sr. Ramírez manifiesta que en la generalidad de términos empleada por el *Proyecto*, entiende que se comprende el pensamiento del Sr. Lacunza, pues no ve que se fije época ninguna determinada en que ha de existir el dinero de cuyo empleo se trata. Simplemente se dice: que todo sobrante del dinero del pupilo, después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, se empleará, etc. El que habla entiende que, en este particular como en otros, debe abstenerse la ley de entrar en especificaciones, pues son muchos los canales por donde puede venir á aumentarse el capital pecuniario del sujeto á tutela.

El Sr. Escudero opina por la idea del Sr. Lacunza, porque, ciertamente, los modos de adquisición de dinero para el pupilo, redención de capitales y venta de bienes, son los más frecuentes, y basta expresar después, por medio de una frase genérica, que la prescripción reza también con el dinero adquirido de cualquiera otro modo. Pero, el que habla tiene que hacer, respecto de otros puntos, dos observaciones. Cree que para el fincamiento del dinero se basta á sí mismo el tutor, sin que sea necesario

hacer intervenir al consejo de familia directamente sino para emplear el caudal de otra manera, menos segura y tal vez problemática. Además entiende que para la mayor ventaja del pupilo, es conveniente fijar un plazo para que el tutor cumpla con este deber. Al exponente le parecen suficientes tres meses.

El Sr. Lacunza se muestra conforme con estas observaciones, y agrega, que no desconoce la necesidad de guardar siempre algún dinero en caja para gastos imprevistos, el cual, sin embargo, en una buena y previsora administración, debe emplearse también en su oportunidad para que sea productivo.

El Sr. Méndez indica la idea de que se fije una cantidad mínima, desde la cual, en adelante, empieze para el tutor la obligación de que se trata, pues de otra manera se conseguiría hacer operaciones tan insignificantes, que resultarían hasta ruinosas para los intereses del huérfano, y todo por no esperar á reunir una suma adecuada, v. g. dos mil pesos.

El Sr. Ramírez dice que no hay que descender á tantos detalles y que el punto tocado por el señor Méndez es más conveniente dejarlo á la prudencia del tutor.

El Sr. Lacunza propone la siguiente fórmula: *El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, el que proceda de la redención de capitales ó venta de bienes y el que se adquiriere por cualquiera otro modo, lo fincara el tutor dentro de tres meses, ó con acuerdo del consejo de familia lo empleará de un modo productivo, á no ser que el mismo consejo determine invertirlo en objeto determinado. Cuando el consejo de familia señale las cantidades que se han de invertir en alimentos y dependientes, designará también la cantidad que debe conservarse en caja;*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

quizá podría entenderse que el legislador solo ha querido referirse al efectivo del pupilo en determinado tiempo generalmente al principio, sino á todo el dinero sobrante, ya sea el existente al empezar la labor tutelar, ya el que proceda de la redención de capitales ó venta de bienes ó cualquiera otro, pues la mente de la ley debe ser aquí que ningún dinero efectivo del pupilo esté ocioso, sino que todo él, una vez asegurado el presupuesto de los gastos ordinarios y necesarios, se emplee para hacerlo producir, ora imponiéndolo mediante buenas hipotecas, ora comprando con él fincas productivas. Hay, en consecuencia, que ampliar la idea del artículo.

El Sr. Ramírez manifiesta que en la generalidad de términos empleada por el *Proyecto*, entiende que se comprende el pensamiento del Sr. Lacunza, pues no ve que se fije época ninguna determinada en que ha de existir el dinero de cuyo empleo se trata. Simplemente se dice: que todo sobrante del dinero del pupilo, después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, se empleará, etc. El que habla entiende que, en este particular como en otros, debe abstenerse la ley de entrar en especificaciones, pues son muchos los canales por donde puede venir á aumentarse el capital pecuniario del sujeto á tutela.

El Sr. Escudero opina por la idea del Sr. Lacunza, porque, ciertamente, los modos de adquisición de dinero para el pupilo, redención de capitales y venta de bienes, son los más frecuentes, y basta expresar después, por medio de una frase genérica, que la prescripción reza también con el dinero adquirido de cualquiera otro modo. Pero, el que habla tiene que hacer, respecto de otros puntos, dos observaciones. Cree que para el fincamiento del dinero se basta á sí mismo el tutor, sin que sea necesario

hacer intervenir al consejo de familia directamente sino para emplear el caudal de otra manera, menos segura y tal vez problemática. Además entiende que para la mayor ventaja del pupilo, es conveniente fijar un plazo para que el tutor cumpla con este deber. Al exponente le parecen suficientes tres meses.

El Sr. Lacunza se muestra conforme con estas observaciones, y agrega, que no desconoce la necesidad de guardar siempre algún dinero en caja para gastos imprevistos, el cual, sin embargo, en una buena y previsora administración, debe emplearse también en su oportunidad para que sea productivo.

El Sr. Méndez indica la idea de que se fije una cantidad mínima, desde la cual, en adelante, empieze para el tutor la obligación de que se trata, pues de otra manera se conseguiría hacer operaciones tan insignificantes, que resultarían hasta ruinosas para los intereses del huérfano, y todo por no esperar á reunir una suma adecuada, v. g. dos mil pesos.

El Sr. Ramírez dice que no hay que descender á tantos detalles y que el punto tocado por el señor Méndez es más conveniente dejarlo á la prudencia del tutor.

El Sr. Lacunza propone la siguiente fórmula: *El dinero que resulte sobrante después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, el que proceda de la redención de capitales ó venta de bienes y el que se adquiriere por cualquiera otro modo, lo fincara el tutor dentro de tres meses, ó con acuerdo del consejo de familia lo empleará de un modo productivo, á no ser que el mismo consejo determine invertirlo en objeto determinado. Cuando el consejo de familia señale las cantidades que se han de invertir en alimentos y dependientes, designará también la cantidad que debe conservarse en caja;*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

fijará la fecha desde la cual empieza la obligación de emplearla, y hasta cuando puede estar en reserva para gastos imprevistos. Si por omisión del tutor no se emplease el dinero sobrante, responderá de sus intereses legales.

La redacción es aprobada y queda como art. 370 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 247): «No puede el consejo de familia autorizar al tutor para enajenar ó gravar los bienes inmuebles del huérfano, sino por causa de absoluta necesidad ó evidente utilidad, que el tutor hará constar debidamente.»

El Sr. Lacunza manifiesta que el artículo debe se reformado, haciendo extensiva la prohibición para el tutor á los muebles preciosos y á los derechos reales anexos, pues estos derechos son de la misma naturaleza que los inmuebles mismos. En cuanto á los muebles preciosos, como que constituyen ejemplares de indiscutible riqueza, merecen conservarse también con el mayor celo por el tutor. Esta idea toma su origen del derecho Romano (*cæteraque mobilia pretiosa*). como es de vérse en la ley 22, tít. XXXVII, lib. 5 del Código, y su simple enunciación basta á justificarla. El que habla propone tambien que se complete el pensamiento del *Proyecto*, diciéndose que la necesidad y utilidad han de hacerse constar ante el Juez y que la enajenación ó gravamen de que se trata han de ser autorizados por el juez. Así propone la siguiente redacción: «No puede el tutor enajenar ó gravar los bienes inmuebles, ni los derechos reales anexos á ellos ni los muebles preciosos, sino por causa de absoluta necesidad ó evidente utilidad del menor, que hará constar ante el Juez y prévia la autorización de éste.»

El Sr. Mendez, se muestra partidario de la idea enunciada por el Sr. Lacunza; pero indica, supuesta la institución del consejo de familia, la conveniencia de hacerlo intervenir en los actos de que se trata, á semejanza de lo preceptuado por el art. 457 del Código Francés. Así propone la siguiente redacción: *Los bienes inmuebles, los derechos reales anexos á ellos y los muebles preciosos, no pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad ó evidente utilidad para el menor, que se harán constar debidamente y prévia la conformidad del consejo de familia y la autorización judicial.*

El Sr. Escudero pregunta si no parecería conveniente á la Comisión limitar la vaguedad de las expresiones «absoluta necesidad ó evidente utilidad» que pueden ser entendidas de muy diversas maneras, según los diversos criterios.

El Sr. Lacunza responde que eso debe dejarse á la decisión del Juez, pues sería imposible hacer una especificación completa de los casos en que tales extremos pueden tener verificativo. Verdad es que la ley 18, tít. 16, Partida 6ª intentó lo que indica el Sr. Escudero; pero no pasó de intentarlo, pues aún el Rey Sabio, después de enumerar algunos casos, concluye con la inevitable frase: «ó por otra razón derecha que lo ouiesse de fazer,» palabras que Goyena explica, con las que siguen: «no lo pudiendo excusar en ninguna manera,» diciendo que la absoluta necesidad de que se trata *puede* proceder, no solo para el pago de deudas, sino de otras justas causas, como para casar la hermana del menor, para alimentos ó reparaciones urgentes; pero ella ha de ser absoluta, de modo que, sin la venta del inmueble no pueda salirse de

ella. (1.) En cuanto á la utilidad, el que habla cree que menos puede formularse una regla fija, pues ella necesariamente depende de los tiempos y de las circunstancias. Las leyes 60, tít. 18, Partida 3 y 4, tít. 5, Partida 5ª se contentan con decir: «por gran pro de ellos (los huerfanos),» idea que fué tomada de la ley 3, tít. 31, lib. 11 del Código, que autoriza la venta de los bienes de las ciudades para su mayor utilidad (*pro suo commodo, licet debitum non sit*), y aplicada á la tutela. El mismo Goyena, explicando las palabras: «evidente utilidad» dice: «evidente y grande utilidad respectivamente al objeto de la venta; no basta cualquiera pequeña utilidad. (2).

La redacción propuesta por el Sr. Méndez es aprobada y pasa á ser el art. 371 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza propone se adicione el texto del nuevo Código, en la materia que ocupa á la Comisión, con el siguiente artículo: *Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto un objeto determinado, el juez señalará al tutor un plazo, dentro del cual deberá acreditar ante el juzgado, que el producto de la enajenación se ha invertido en su objeto.* La oportunidad y razón de ser de este precepto se comprenden á primera vista, pues, tratándose de la enajenación ó gravámen de los inmuebles ó muebles preciosos del menor por el tutor, que invoca la extrema necesidad ó la grande utilidad de tales operaciones, la ley

(1) Goyena, *Proyecto*, sobre el art. 229.—*Digesto*, lib. 27, tít. 9, l. 5, §§. 9, 10 y 11.

(2) Goyena, *Proyecto*, loc. cit.

que, en tales circunstancias, las autoriza, debe cuidar de que ellas den el resultado previsto, lo que no se obtendrá, sino justificando el tutor la inversión del producto en el objeto señalado de antemano. Así estaba prescrito por la jurisprudencia romana: *Ne tamen título tenus tutores ære alieno allegato pecunia abutantur, quam mutuam acceperunt, oportebit Prœtorum curare, ut pecunia accepta creditoribus solvatur, et de hoc decernere, dareque viatorem, qui ei renuntiet, pecuniam istam ad hoc conversam, propter quod desiderata ut alienatio vel obligatio* (1).

La Comisión acepta el artículo, que queda como 372 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 248): «La autorización, en caso de darse en los términos del artículo anterior, ha de recaer sobre fincas determinadas y concederse en instrumento público, al que se unirán originales los papeles presentados por el tutor para acreditar la necesidad ó utilidad,»

Proyecto Sierra (art. 249): «Obtenida la autorización del consejo de familia, acudirá el tutor al juez de primera instancia del partido donde se administra la tutela para su confirmación en debida forma. Del auto confirmatorio ó denagatorio sólo hay el recurso de responsabilidad. Cuando el juez confirme la autorización del consejo, se procederá á la venta en subasta pública ó judicial.»

[1] Digesto, lib. 27, tít. 9, l. 5. § 13.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proyecto Sierra (art. 250). «La autorización del consejo de familia no será necesaria cuando la enajenación se haga en virtud de providencia judicial y de derecho anterior de tercero, ó por expropiación forzosa en los casos prescritos por la ley.»

Proyecto Sierra (art. 251). «La enajenación hecha contra lo dispuesto en los artículos precedentes será nula.»

El Sr. Lacunza propone se diga, puesto que se trata de la autorización del juez, que ella ha de concederse por auto en forma. El instrumento público será necesario para el otorgamiento de la escritura de enajenación, cuyo expediente judicial es cosa muy diversa. En cuanto á los papeles presentados por el tutor para acreditar la necesidad ó utilidad de la operación, ellos deben figurar también en dicho expediente, á reserva de insertarlos en la escritura y sin perjuicio de devolverlos; pero quedando en el expediente copia íntegra de ellos. Hace observar también que, no ocupándose el Proyecto Sierra en lo relativo á los muebles preciosos, muy natural es que no haga ninguna referencia á ellos, al tratar del requisito de la subasta pública y judicial, el cual el exponente no cree absolutamente necesario, tratándose de esos muebles, por manera que, respecto de ellos, el juez puede dispensarlo, en los casos en los que lo estime conveniente.

El Sr. Escudero manifiesta que el concepto del artículo del Proyecto Sierra sobre que la autorización del juez ha de recaer sobre fincas determinadas, le parece innecesario, pues, así tiene que ser, desde el momento en que, como ya se ha dicho á propuesta del Sr. Lacunza (art. 372), el juez tiene obligación de comprobar que el producto de la venta se ha invertido en el objeto, para obtener el cual se decretó ó autorizó la enajenación. Hace observar, además,

que, formulado en términos tan absolutos, como lo hace el Proyecto, el principio de la nulidad de las enajenaciones de bienes del menor por el tutor, hechas de otra manera que la prescrita por el Código, puede llegarse hasta á sancionar las mayores injusticias, sin que esto sea motivado ni siquiera por la utilidad del menor. El antiguo derecho procuró y consiguió evitar esas injusticias, como es de verse en varias leyes del Digesto y del Código (1) que, refiriéndose á diversas hipótesis, coinciden todas en la conocida regla de derecho: *nemo debet locupletari injusté cum jactura aliena* (2). En consecuencia, el que habla propone la siguiente redacción del artículo, de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Lacunza: *Al expediente de enajenación se unirán originales los papeles presentados por el tutor, para acreditar la necesidad ó utilidad, y si fuere preciso devolvérselos, quedarán agregados testimonios íntegros. La venta se hará precisamente en subasta pública y judicial cuando se trate de bienes inmuebles. Solamente cuando la enajenación recaiga sobre muebles preciosos, podrá el juez dispensar la subasta. La enajenación hecha de otro modo que el prevenido en los artículos precedentes, será nula; mas, al deshacerla, debe pagarse al que recibió la cosa enajenada, lo que él probare que hizo más rico al menor.*

La redacción es aprobada y pasa á ser el art. 373 del nuevo Código.

---

(1) Dig. lib. 27, tít. 9, l. 1. 7, § 5 y 13.—*Cód.* lib. 5, tít. 71, l. 1. 14 y 16.

(2) *Dig.* lib. 50, tít. 17, l. 206.—*Dig.* lib. 26, tít. 8, l. 5, § 1.—Partida 7ª, tít. 34, reg. 17.—Gollena, *Proyecto*, art. 235.

Proyecto Sierra (art. 252): «El tutor no puede comprar por sí mismo, ni por mano de tercero, la finca subastada, sin obtener prévia autorización del tribunal, que resolverá sobre ella, oyendo al consejo de familia.»

Proyecto Sierra (art. 253): «El tutor no puede hacer arrendamiento de los bienes del menor por más de diez años, sino con autorización del juez, que la concederá oyendo al consejo de familia, en caso de necesidad ó utilidad evidente.»

Proyecto Sierra (art. 254): «El arrendamiento hecho en conformidad del artículo anterior, subsistirá por el tiempo convenido aun cuando se acabe la tutela; pero será nula toda anticipación de rentas ó alquileres hecha al tutor por más de tres años.»

El Sr. Lacunza manifiesta que, aunque por el más antiguo derecho, era permitido á los tutores comprar los bienes de los menores á ellos sujetos, mediante ciertas formalidades (1), es bien sabido de la Comisión que posteriormente vino la ley recopilada que, de una manera absoluta, prohibe tal contrato, ya se haga en público ó en secreto, y hasta castiga al tutor, aparte la nulidad de la venta, con la obligación de pagar el cuádruplo del precio (2). El que habla encuentra esta disposición, que probablemente aconsejó una dolorosa experiencia, perfectamente justa, motivada y conveniente para los huérfanos, pues, aunque se diga que no sería el tutor mismo quien interviniese á nombre del pupilo en la compra de sus bienes, porque esto se verificaría por el protutor ó el consejo de familia, como lo previene el art. 450 francés, lo que basta á alejar, toda sospecha de parcialidad, máxime cuando habría de observarse siempre el requisito de la autorización judicial, no puede negarse al menos la posibilidad de que el tutor prepare con toda la adecuada anterioridad y por medios eficaces y ocultos la adquisición de los bienes que le están encomendados, ya descuidando su conservación ó desarrollo, ora presentando otros que, á su juicio, sean más convenientes para el pupilo. El legislador debe quitar, hasta donde sea posible, toda tentación al tutor que lo haga ver en los bienes cuya guarda y administración se le confía un elemento posible de sus propios medros, pues, como enseña Gutiérrez, *non potest tutor auctoritatem præstare in actu qui tendere possit principaliter in ejus commodum.* (1) Por esta razón el que habla cree que en el nuevo Código debe seguirse la ley recopilada, expresando que la prohibición se hace extensiva aún á los casos en que la compra se verifique para la esposa del tutor ó sus hijos, pues si bien es cierto que así podría deducirse de los términos de dicha ley, porque *quod meo non licet nomine, neque alieno licebit, et qui per alium facit, per seipsum facere videtur*, como lo han entendido Acevedo (2), entre otros, es mejor, para evitar cualquier duda, decirlo claramente en términos precisos é inequívocos, á semejanza de una ley del Código (3), aunque ésta limitaba

(1) *Dig.* lib. 36, tít. 8, l. 5, § 2.—Partida 5ª, tít. 5, l. 4.
(2) *Nov. Recop.* lib. 10, tít. 12, l. 1.

(1) Gutiérrez, *De tutel. et cur.* part. 2, cap. 15, núm. 4.
(2) Azevedo, *In Recop.* lib. 5, tít. 11, l. 23, núm. 4.
(3) *Cód.* lib. 4. tít. 38, l. 5.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

la prohibición á sólo la mujer del tutor. La Comisión comprenderá que las mismas razones pueden invocarse respecto de otros contratos, como el arrendamiento por ejemplo.

El Sr. Escudero califica de muy atendibles las reflexiones del Sr. Lacunza; pero desearía verlas aplicarse también á los hermanos del tutor por consaguinidad ó afinidad, pues este parentesco es todavía bastante próximo para tentar la parcialidad de aquel.

El Sr. Lacunza contesta que no lo considera así; pero la Comisión obrará en esto, como le parezca más prudente, teniendo sólo que advertir que las prohibiciones de que se trata han de afectar exclusivamente al tutor á quien se ha otorgado ya la administración de los bienes, pues el colocado en otras circunstancias debe considerarse como una persona extraña y así lo llaman Azevedo (1), Matienzo y otros [2]. Propone, en consecuencia de todo lo expuesto, la redacción siguiente: *Ni con licencia judicial, ni en almoneda ó fuera de ella, puede el tutor comprar, arrendar ni hacer contrato alguno respecto de los bienes del menor, para sí, para su mujer ó hijos, ni aún tratando con el protutor.*

La redacción es aprobada y queda como art. 374 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 255): «También será necesaria al tutor la licencia del consejo de familia para solicitar la partición de una cosa ó herencia común; pero no la necesita para contestar á una demanda de partición que se proponga contra el menor. En uno y otro caso, la partición, si se verifica, ha de ser judicial, prévios el inventario y tasación de las fincas ó bienes.»

(1) Azevedo, *Ob* y *loc. cit.* núm. 8.
(2) Matienzo, *Glos.* 1, ist. leg.

El Sr. Lacunza manifiesta que el caso á que se refiere el Proyecto, en la primera parte del artículo, es una excepción del anterior que la Comisión acaba de aprobar. En concepto del que habla, basta que se suponga un derecho prévio de propiedad por parte del tutor en cosa que se trata de enajenar, para que dicha excepción sea aceptada, con tanta más razón con cuanta que, como lo nota Gollena, la comunión es ocasión de negligencia y discordias, reputándose por lo mismo odiosa, hasta el grado de que nadie puede ser compelido á permanecer en ella, y el pacto en contrario es nulo (1). Sin embargo, si bien esta consideración justifica que el tutor compre, no es bastante á otorgarle toda autoridad en el caso, por lo que desde luego ocurre invocar el principio de que *tutor non potest esse auctor in rem suam*. Para evitar esto, propone el que habla que el protutor represente al menor en la licitación y el tutor solicite la licencia del juez. No cree necesario el exponente que se diga cosa alguna respecto del caso en que la partición sea pedida por persona extraña, pues entonces se entra en la hipótesis general y habrá que aplicar el art. 371. Así, propone la siguiente redacción: *En caso que el tutor fuese co-heredero, ó comunero con el me-*

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 288.—*Dig.* lib. 10, tít. 3, l. 1. 14 § 2 y 15.—*Id.* lib 31, l. 77 § 20.—*Cód.* lib. 3, tít. 37, l. 5 —Partida 6ª, tít. 15, l. 1.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nor, podrá en pública almoneda, representando el protutor al menor y con licencia expresa del juez, pujar la cosa común y rematarla.

El Sr. Escudero se manifiesta conforme con la redacción anterior; pero propone se añadan las siguientes palabras: «abonando al menor lo que fuere justo, según el remate.»

El Sr. Ramírez observa no ser necesaria la adición, pues siempre se procede así en los remates.

La redacción propuesta por el Sr. Lacunza es aceptada y queda como art. 375 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 256): «El tutor necesita igualmente del consentimiento del consejo de familia para retirar un capital del menor que le está produciendo interés.»

El Sr. Lacunza opina por la supresión del precedente artículo, que está tomado del 239 del Proyecto de Goyena y el cual considera innecesario, una vez aprobado ya por la Comisión el 370, según el cual es obligación del tutor imponer el dinero que resulte sobrante en favor del pupilo, cuando esten cubiertas las cargas y atenciones de la tutela ó emplearlo de un modo productivo, de acuerdo con el consejo de familia. Entiende que esto basta para la idea del artículo.

Proyecto Sierra (art. 257): «*El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el menor sin la intervención del protutor.*

El Sr. Lacunza hace observar que este texto, toma-

do del art. 242 del Proyecto de Goyena, dispone absolutamente todo lo contrario de lo que preceptuaba el derecho romano y el patrio, que se fiaba, para el remedio de los abusos que el tutor podía cometer con la facultad de pagarse á sí mismo sus propios créditos, á la rendición definitiva de sus cuentas, llegando hasta castigarlo con la pérdida de los intereses, si, teniendo el pupilo sobrante de capital pecuniario, aquel no se hacía pago de su deuda (1.) Pero no cabe duda que es mejor en todo prevenir que tener que remediar, y como se dijo en el art. 320 inciso 1º que el protutor está obligado á defender los derechos del menor, en juicio ó fuera de él, siempre que estén en oposición con los del tutor (2), el que habla está por la aprobación del artículo del Proyecto.

La Comisión aprueba el artículo, que pasa á ser el 376 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que en seguida del artículo acabado de aprobar por la Comisión, cree conveniente se ponga uno que prohiba al tutor adquirir créditos ó derechos contra el menor, pues dicho artículo no puede referirse sino á los créditos que el tutor tenga ya adquiridos al encargarse de la tutela. De otra manera se violaría el principio esencialmente tutelar de los intereses del huérfano: *tutor non potest esse auctor in rem suam.* Así lo reconoce la parte final del art. 450 del Código francés, res-

---

(1) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 9, §§ 5 y 7.
(2) Véase *supra* pág. 339.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ©
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

nor, podrá en pública almoneda, representando el protutor al menor y con licencia expresa del juez, pujar la cosa común y rematarla.

El Sr. Escudero se manifiesta conforme con la redacción anterior; pero propone se añadan las siguientes palabras: «abonando al menor lo que fuere justo, según el remate.»

El Sr. Ramírez observa no ser necesaria la adición, pues siempre se procede así en los remates.

La redacción propuesta por el Sr. Lacunza es aceptada y queda como art. 375 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 256): «El tutor necesita igualmente del consentimiento del consejo de familia para retirar un capital del menor que le está produciendo interés.»

El Sr. Lacunza opina por la supresión del precedente artículo, que está tomado del 239 del Proyecto de Goyena y el cual considera innecesario, una vez aprobado ya por la Comisión el 370, según el cual es obligación del tutor imponer el dinero que resulte sobrante en favor del pupilo, cuando esten cubiertas las cargas y atenciones de la tutela ó emplearlo de un modo productivo, de acuerdo con el consejo de familia. Entiende que esto basta para la idea del artículo.

Proyecto Sierra (art. 257): «*El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el menor sin la intervención del protutor.*

El Sr. Lacunza hace observar que este texto, toma-

do del art. 242 del Proyecto de Goyena, dispone absolutamente todo lo contrario de lo que preceptuaba el derecho romano y el patrio, que se fiaba, para el remedio de los abusos que el tutor podía cometer con la facultad de pagarse á sí mismo sus propios créditos, á la rendición definitiva de sus cuentas, llegando hasta castigarlo con la pérdida de los intereses, si, teniendo el pupilo sobrante de capital pecuniario, aquel no se hacía pago de su deuda (1.) Pero no cabe duda que es mejor en todo prevenir que tener que remediar, y como se dijo en el art. 320 inciso 1º que el protutor está obligado á defender los derechos del menor, en juicio ó fuera de él, siempre que estén en oposición con los del tutor (2), el que habla está por la aprobación del artículo del Proyecto.

La Comisión aprueba el artículo, que pasa á ser el 376 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que en seguida del artículo acabado de aprobar por la Comisión, cree conveniente se ponga uno que prohiba al tutor adquirir créditos ó derechos contra el menor, pues dicho artículo no puede referirse sino á los créditos que el tutor tenga ya adquiridos al encargarse de la tutela. De otra manera se violaría el principio esencialmente tutelar de los intereses del huérfano: *tutor non potest esse auctor in rem suam.* Así lo reconoce la parte final del art. 450 del Código francés, res-

---

(1) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 9, §§ 5 y 7.
(2) Véase *supra* pág. 339.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ©
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

pecto del cual dice Demolombe: «Si el tutor quiere hacer adquisiciones, si quiere especular, traficar, que vaya á buscar otra manera, y no empleando su capital y habilidad sobre el patrimonio del menor, cuyos intereses son confiados á su guarda y cuyos títulos, papeles y secretos posee y conoce perfectamente. La prohibición es tanto más sabia, cuanto que 1º estas especies de cesiones no se hacen de ordinario sino á un precio más ó menos inferior al valor nominal ó presunto del derecho cedido, y si se ejecuta con esto un buen negocio, el tutor debe hacerlo para el menor y no para si mismo y 2º sería de temer que el tutor suprimiese los títulos, las quitas, las remisiones, los reconocimientos etc. por los que el menor pudiera rechazar, en todo ó en parte, el derecho ó pretensión contra él cedidos (1). «El orígen de esta disposición remonta á la novela 72, cap. 5º de Justiniano, que prohibía, no sólo todas las cesiones que fueran hechas al curador, á título de venta, de donación *aut alio quolibet modo*, sino las hechas después de la expiración de la tutela, *ne curator abscondat rem, et prœordinans illud male..... rem maligne disponat.*

La misma Novela declaraba nula la cesion, en el sentido de que el menor no quedaba desde entonces como deudor ni respecto del cedente, que había cesado de ser acreedor, ni respecto del curador, que no había logrado adquirir ese carácter.... *lucrum fieri adolescentis, et hoc minorem lucrari.* El que habla no cree necesario extremar tanto la prohibición y desde luego opina por que ella no se extien-

(1) Demolombe, tom. 7, núm. 756.

da á los derechos ó créditos que el tutor adquiera por herencia, pues, como lo enseña el jurisconsulto citado, el tutor, en ese caso, no sería cesionario, sino heredero, propietario, independientemente de toda aceptación, de los diversos elementos de la sucesión; él no habría, pues, aceptado una cesión, ni, en fin, hecho nacer, por sí mismo y voluntariamente, la situación que la ley quiere impedir. (1) Por todo lo expuesto el que habla propone se diga, como artículo siguiente: *El tutor no puede aceptar para sí mismo, á título gratuito ú oneroso, la cesión de ningún derecho ó crédito contra el menor. Solo puede adquirir esos derechos por herencia.*

El Sr. Escudero indica que es ésta la oportunidad de declarar también que la prescripción no corre, durante la tutela, entre el tutor y el menor, pues sería odioso que el tutor perdiera su derecho por no hacerlo valer contra el pupilo lo mismo que á éste sucediera otro tanto, por no satisfacerlo el tutor. La prescripción carece de términos hábiles entre personas tan estrechamente ligadas por el lazo de la sujeción y del respeto como son el pupilo y el tutor. Así, el que habla propone, se adicione la redacción del Sr. Méndez con la siguiente frase: *Durante la tutela no corre prescripción entre el tutor y el menor.*

Ambas redacciones son aprobadas y pasan á formar el art. 377 del nuevo Código.

El Sr. Escudero manifiesta que, desechados los arts. 253 y 254 del Proyecto Sierra respecto de los arrendamien-

(1) Demolombe, tomo 7, núm. 759.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

tos que el tutor pudiera hacer de los bienes del pupilo para sí, su mujer ó hijos (1), es conveniente volver á examinarlos con respecto á personas extrañas. ¿Pueden éstas tomar en arrendamiento tales bienes? La simple razón basta á contestar afirmativamente, porque lo contrario importaría privar al pupilo de legítimas utilidades. Sin embargo, como lo nota Gollena (2), siguiendo á Godofredo, por derecho romano tales arrendamientos, si habían sido hechos de buena fé, duraban según la costumbre de la tierra y por un tiempo módico (3). Los autores y la jurisprudencia franceses fijan el plazo de nueve años para la duración de los arrentamientos hechos por el tutor (4), dando por razón que los concertados por más largo tiempo pierden el carácter administrativo y asumen el de verdadera enajenación. Para el que habla el punto es de una precaución más en favor del pupilo y para asegurar mejor la buena administración tutelar. Pero, como no convendría sentar en esta materia una prohibición absoluta, pues las circunstancias y teniendo siempre en mira los intereses del huérfano, pueden justificar en más de un caso los arrendamientos largos, v. g. cuando se tratara de inquilinatos ventajosos, el exponente cree más previsor dejar esto á la decisión del consejo de familia y á la del juez. En consecuencia, propone se diga: *El tutor no puede hacer arrendamiento de los bienes del menor, por más de diez años,*

(1) Véase *supra* pags. 386 á 388.
(2) Gollena, *Proyecto*, art. 237
(3) Godofredo á la l. 8, tít. 9, lib. 26 del *Digesto*.
(4) Demolombe, tomo 7, núm. 638.

sino en caso de necesidad ó utilidad, previa la conformidad del consejo de familia y con autorización del juez.

Y, como de dejarse al tutor la facultad que se indica, todavía habría un peligro que no es por demás conjurar hasta cierto punto, el exponente propone se diga en seguida: *El arrendamiento hecho en conformidad del artículo anterior, subsistirá por el tiempo convenido, aun cuando se acabe la tutela; pero será nula toda anticipación de rentas ó alquileres hecha al tutor por más de tres años.* Con estas dos declaraciones cree el proponente cortar las dudas que han surgido en la jurisprudencia francesa. (1)

Las dos redacciones son aceptadas y quedan la primera como art. 378 y la segunda, como art. 379 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 258): «El tutor no podrá hacer préstamos del dinero del menor, ni tomarlo en nombre de éste, sin previa autorización del consejo de familia. Sin embargo, el prestamista podrá reclamar su pago en tanto cuanto el menor se hubiese hecho más rico.»

El Sr. Lacunza cree que el artículo debe concretarse á que el tutor no podrá tomar dinero en préstamo á nombre del pupilo, pues, en cuanto á darlo á personas extrañas, entiende que la hipótesis está ya prescrita por el art. 370 que impone al tutor la obligación de fincar el dinero del pupilo que resulte sobrante, después de cubiertas las atenciones de la tutela (2).

El Sr. Escudero no opina de la misma manera, pues

(1) Demolombe, tomo 7, núm. 640 bis.—Duranton. núm. 545.
(2) Véase *supra* págs. 377 á 380.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

el precepto de que hoy se trata, tomado del art. 243 del Proyecto de Gollena, se refiere á dos especies concretas en la administración tutelar, y el art. 370 ya aprobado por la Comisión habla, en general, del empleo que debe darse al dinero del pupilo, después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela. En otros términos, se trata ahora del contrato de préstamo sobre el dinero del pupilo ó sobre el dinero ajeno que se preste al pupilo; y como quiera que puede ser peligroso dejar al tutor toda libertad para esta clase de contratos, aun suponiendo que se constituyera hipoteca, bueno es establecer el requisito de la autorización del consejo de familia.

El Sr. Méndez se manifiesta de acuerdo con el Sr. Escudero; pero cree que no hay necesidad de la última parte del artículo del Proyecto Sierra, por importar una declaración doctrinal impropia de un Código y la cual se sobreentiende.

El Sr. Ministro de Justicia (Teran) invita al Sr Escudero para que redacte el artículo.

El Sr. Escudero propone la redacción siguiente: *Sin la previa autorización del consejo de familia, no podrá el tutor dar ni recibir dinero prestado en nombre del menor, ya sea que se haya constituido ó no hipoteca en el contrato.*

La redacción es aprobada y queda como art. 380 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 259): *El tutor no puede admitir la herencia deferida al menor, sino con beneficio de inventario.*

El Sr. Lacunza expresa su conformidad con el artículo del Proyecto, que está tomado de la primera parte

del art. 244 del Proyecto de Gollena, quien asienta que, con el requisito del inventario, se aleja el peligro de incorporar á los bienes del menor una herencia gravosa.

El artículo es aceptado y pasa á ser el 381 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 260): «Para admitir ó desechar legados ó donaciones á nombre del menor, y repudiar una herencia que se le defiera, necesita el tutor autorización del consejo de familia. En el caso de no conformidad entre el consejo y el tutor, acudirá éste al Juez de primera instancia, el cual decidirá sin ulterior recurso, oyendo al consejo.»

El Sr. Lacunza cree que es meior exigir la conformidad del consejo de familia y la autorización del Juez, necesitándose también estos requisitos para cualquier renuncia de derechos. Propone, en consecuencia, que quede el artículo, como sigue: *Para admitir ó desechar legados ó donaciones, á nombre del menor, y repudiar una herencia que se le defiera, necesita el tutor la conformidad del consejo de familia y la autorización del Juez. También la necesita para cualquiera renuncia de derechos.*

El artículo, así redactado, es aceptado y pasa á ser el 382 del nuevo Código (1).

Proyecto Sierra (art. 261): *Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación ó reparación, necesita el tutor autorización del consejo de familia.*

---

[1] Gollena, *Proyecto* art. 244, segunda parte.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Es el art. 246 del Proyecto de Gollena, que queda aceptado y pasa á ser el 383 del nuevo Código.

El Sr. Escudero cree conveniente expresar, como lo hace Gollena, que el tutor no puede hacer donaciones gratuitas á nombre del pupilo (1). Varias disposiciones, en el antiguo derecho, se encuentran sobre este punto, todas encaminadas á evitar que el tutor menoscabe los intereses del pupilo á título de donación, pues, siendo un administrador de bienes ajenos, no puede faltar á su principal deber, que es el de la conservación de los intereses que se le confían: *Donationes a tutore factæ pupillo non nocent* (2). *Tutoribus concessum est: non etiam donare* (3). *Donandi nulla ratione res eorum, quorum administrant negotia potestatem habent* (4). Sin embargo, hay donaciones que no son gratuitas, sino remuneratorias, las cuales no ve el que habla porque debieran prohibirse al tutor, toda vez que ellas, no recayendo sobre bienes raíces, entran en el desempeño general y administración de la tutela, siendo, en rigor, el pago de servicios, tal vez útiles, al pupilo. Además, hay donaciones de poca entidad, como los regalos, que tampoco deben, en concepto del que habla, impedirse al tutor, como lo enseña Gollena (5), pues ellas repre-

---

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 245.
(2) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 22.
(3) *Dig.* lib. 26, tít. 7, l. 46, § 7.
(4) *Cod.* lib. 5, tít. 37, l. 16.—*Dig.* lib. 2, tít. 14, l. 28.—Id., lib. 39, tít. 5, l. 7 inic.—Id., lib. 26, tít. 7, l. 13.—Id., lib. 27, tít. 2, l. 1, § 5.
(5) Gollena, *Proyecto*, art. 1259.

sentan una costumbre social, en relación con la dignidad de la persona. En consecuencia, propone el que habla la siguiente redacción: «El tutor no puede hacer, ni aun á nombre del pupilo, donaciones que no fueren remuneratorias y de poca cantidad que quepa en la señalada para sus alimentos, sin menoscabo de éstos. Si creyere oportuno hacer alguna gratuita ó mayor, pedirá la aprobación del Juez.»

El Sr. Lacunza se manifiesta, en lo general del pensamiento, de acuerdo con el Sr. Escudero; pero observa que, como indudablemente no se trata de prohibir al tutor que haga donaciones de lo suyo propio sino de los bienes del huérfano, la idea debe expresarse con mayor claridad. No está conforme en que se asiente el principio de que el tutor puede hacer donaciones gratuitas de cantidad considerable, aunque esto sólo se haga con la aprobación judicial, pues entiende que, de obrar el Juez en cualquier caso con riguroso apego á la ley, siempre habría de negar su aprobación á tales actos, por importar menoscabo de los intereses del pupilo. Como el tutor es responsable de su conducta y además ha de estar vigilado por el protutor (1), cree el que habla ser más conveniente no poner otro límite á las donaciones gratuitas que el que quepan en el acervo alimenticio. Así, propone se diga: *El tutor no puede hacer, á nombre del pupilo, donaciones que no fueren remuneratorias y que quepan en la cantidad señalada para sus alimentos, sin menoscabo de éstos.*

---

(1) Véase *supra* art. 320, inciso 2.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La redacción es aprobada y queda como art. 384 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 262): *Se requiere la aprobación del consejo de familia para transigir y comprometer en árbitros las cosas ó negocios del menor.*

El Sr. Lacunza se manifiesta conforme con el artículo, que es el 247 del Proyecto de Gollena, quien se inspiró para redactarlo, aparte del 467 francés, en varias leyes romanas que, aunque no muy decisivas sobre la materia, dan suficiente idea de que la transacción sobre los derechos del pupilo permitida al tutor no debía ser ruinosa para aquel, sino aconsejada por la necesidad del caso é indicada además por lo dudoso de los derechos en cuestión (1).

El artículo es aceptado y pasa á ser el 385 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 263): *Para obtener la autorización de transigir, el tutor presentará al consejo de familia nota ó papel firmado por él, en que se expresen todas las condiciones y términos de la transacción.*

El artículo es aceptado y queda como 386 del nuevo Código.

---

(1) *Dig.* lib. 47, tít. 2, l. l. 54, § 5 y 56, § 4.—Id., lib. 26, tít. 7, l. 46, § 7.—*Cod.* lib. 5, tít. 71, l. 4.

El Sr. Ramírez llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de no olvidar en esta materia lo prescrito ya por los arts. 371 y 373 del nuevo Código (1), respecto de la enajenación de inmuebles y muebles preciosos del pupilo por el tutor. Entiende que, si la transacción implica tal enajenación, debe estarse á lo mandado por esos textos sin necesidad de inventar nuevas formalidades.

El Sr. Lacunza manifiesta que no es posible lo que pretende el Sr. Ramírez, porque la subasta pública desnaturalizaría la transacción, que, se supone, tiene por objeto bienes determinados. Por lo demás, y no desconociendo el que habla lo expuesto á errores que es una transacción, crée, como el Sr. Ramírez, que en esencia, deben observarse en ella las mismas formalidades ó precauciones que en la enajenación. Va aun más allá y propone con Gollena, que, en vez de referirse á muebles preciosos, el nuevo Código haga alusión á muebles en general, con tal que su valor exceda de cierta suma, quinientos pesos por ejemplo. Propone, en consecuencia, se diga, después del artículo aprobado: *Si la transacción recayese sobre propiedad de bienes inmuebles ú otro derecho real, ó sobre bienes muebles, cuyo valor exceda de quinientos pesos, ó sean inestimables, no podrá llevarse á efecto hasta que el juez de primera instancia, á petición del tutor y oyendo al Ministerio Público, confirme la autorización del consejo de familia* (2).

La redacción es aprobada y pasa á ser el art. 387 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 264): «La autorización del con-

(1) Véase *supra* págs. 380 á 382.
(2) Gollena, *Proyecto*, art. 250—Cod. lib. 2, tít. 4, l. 38.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

sejo de familia se concederá en instrumento público, uniendose al original el papel presentado por el tutor al solicitarla.»

Proyecto Sierra (art. 265): «En caso de compromiso, el laudo no será obligatorio para ninguna de las partes hasta que, oídos el tutor y el consejo de familia, lo apruebe el juez de primera instancia. Su resolución causa ejecutoria».

Suprimidos.

———

Proyecto Sierra (art. 266): "El tutor no podrá entablar demanda de mayor cuantía, en nombre del menor, ni oponerse á la entablada contra éste, sin la autorización del consejo de familia.»

El Sr. Escudero está por la supresión de este artículo que entorpece y restringe grandemente las facultades del tutor. Está tomado de la primera parte del art. 252 de Gollena, que pretende justificarlo con la ley 9, § 6., tít. 7, lib. 26 del Dizesto: *si per vacaneam litem instituisset, cum convineretur a vero creditore* y con la 6, tít. 37, lib. 5 del Codigo: *Non est ignotum, tutores vel curatores, si nomine pupillorum vel adultorum scientes calumniosas instituant actiones, eo nomine condemnare oportere: ne sub praetextu nominis eorum propter suas simultates secure lites suas exercere posse existiment.* Como se ve, estas disposiciones pueden ser innecesarias, tratándose del desempeño de la tutela é importarían un exceso de minuciosidad inmotivado, pues el tutor está obligado á rendir cuentas de todos los gastos hechos durante su gestión.

El artículo queda suprimido.

———

El Sr. Lecunza manifiesta que, para complemento de lo dicho en el art. 385 del nuevo Código, juzga conveniente se agregue que *la decisión de los árbitros deberá en todo caso ser homologada por el juez, oyendo también al Ministerio público y hasta entonces no será obligatoria para ninguna de las partes.* Es el art. 251 de Gollena.

La proposición es aceptada y queda como art. 388 del nuevo Código.

———

El Sr. Méndez expone que, ya que el protutor es el vigilante de la conducta del tutor, según el art. 320 del nuevo Código, sería bueno darle intervención en todos aquellos casos en que el tutor necesita de la licencia del juez, estableciéndose que, si había diferencia entre uno y otro, se sustanciaría un juicio sumario, de cuyas decisiones aun meramente interlocutorias, no habría más recurso que el de responsabilidad. En cuanto á la hipótesis de que estuviesen de acuerdo el tutor y el protutor, si á pesar de eso el juez negaba la licencia, el que habla opina por que se concediesen todos los recursos conforme á derecho. Así propone la siguiente redacción:

En todos los casos en que el tutor necesita para algún acto de la licencia del juez ó de su aprobación, éste no la dará, sino previa audiencia del protutor, con el cual, en caso de oposicion, se sustanciará un juicio sumario. En este juicio, en que se decidirá solamente la diferencia entre el tutor y protutor, no se admitirá, ni de las sentencias difinitivas, ni de las interlocutorias, apelación ni otro recurso que el de responsabilidad. De la denegación de la licencia, en cuya petición estén de acuerdo el tutor y protutor, se admitirán las apelaciones y recursos conforme á derecho.

La redacción es aceptada y queda como art. 389 del nuevo Código.

sejo de familia se concederá en instrumento público, uniendose al original el papel presentado por el tutor al solicitarla.»

Proyecto Sierra (art. 265): «En caso de compromiso, el laudo no será obligatorio para ninguna de las partes hasta que, oídos el tutor y el consejo de familia, lo apruebe el juez de primera instancia. Su resolución causa ejecutoria».

Suprimidos.

———

Proyecto Sierra (art. 266): "El tutor no podrá entablar demanda de mayor cuantía, en nombre del menor, ni oponerse á la entablada contra éste, sin la autorización del consejo de familia.»

El Sr. Escudero está por la supresión de este artículo que entorpece y restringe grandemente las facultades del tutor. Está tomado de la primera parte del art. 252 de Gollena, que pretende justificarlo con la ley 9, § 6., tít. 7, lib. 26 del Dizesto: *si per vacaneam litem instituisset, cum convineretur a vero creditore* y con la 6, tít. 37, lib. 5 del Codigo: *Non est ignotum, tutores vel curatores, si nomine pupillorum vel adultorum scientes calumniosas instituant actiones, eo nomine condemnare oportere: ne sub praetextu nominis eorum propter suas simultates secure lites suas exercere posse existiment.* Como se ve, estas disposiciones pueden ser innecesarias, tratándose del desempeño de la tutela é importarían un exceso de minuciosidad inmotivado, pues el tutor está obligado á rendir cuentas de todos los gastos hechos durante su gestión.

El artículo queda suprimido.

———

El Sr. Lecunza manifiesta que, para complemento de lo dicho en el art. 385 del nuevo Código, juzga conveniente se agregue que *la decisión de los árbitros deberá en todo caso ser homologada por el juez, oyendo también al Ministerio público y hasta entonces no será obligatoria para ninguna de las partes.* Es el art. 251 de Gollena.

La proposición es aceptada y queda como art. 388 del nuevo Código.

———

El Sr. Méndez expone que, ya que el protutor es el vigilante de la conducta del tutor, según el art. 320 del nuevo Código, sería bueno darle intervención en todos aquellos casos en que el tutor necesita de la licencia del juez, estableciéndose que, si había diferencia entre uno y otro, se sustanciaría un juicio sumario, de cuyas decisiones aun meramente interlocutorias, no habría más recurso que el de responsabilidad. En cuanto á la hipótesis de que estuviesen de acuerdo el tutor y el protutor, si á pesar de eso el juez negaba la licencia, el que habla opina por que se concediesen todos los recursos conforme á derecho. Así propone la siguiente redacción:

En todos los casos en que el tutor necesita para algún acto de la licencia del juez ó de su aprobación, éste no la dará, sino previa audiencia del protutor, con el cual, en caso de oposicion, se sustanciará un juicio sumario. En este juicio, en que se decidirá solamente la diferencia entre el tutor y protutor, no se admitirá, ni de las sentencias difinitivas, ni de las interlocutorias, apelación ni otro recurso que el de responsabilidad. De la denegación de la licencia, en cuya petición estén de acuerdo el tutor y protutor, se admitirán las apelaciones y recursos conforme á derecho.

La redacción es aceptada y queda como art. 389 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza manifiesta que, aunque el Proyecto Sierra trata en otra parte (arts. 1215 á 1234) del beneficio de restitución *in integrum*, cree oportuno ocuparse de él ahora, por estar en todas las legislaciones que lo han aceptado, íntimamente ligado con la tutela. El habla opina por la supresión de esa garantía, que ya no tiene razón de ser en la organización de la tutela, según las leyes modernas y que, de continuar, se convertiría las más veces en causa de ruina para los menores, con quienes, aún asistidos de su tutor y protegidos por la autoridad judicial, nadie se resolvería á contratar, si no es bajo condiciones muy onerosas, que compensasen los perjuicios que más tarde originase la restitución. Enhorabuena que en el antiguo derecho establecido por los Pretores se hubiera acudido al beneficio de que se trata respecto de los mayores de siete años y menores de veinticinco, pues salidos á esa edad de la tutela y entrando bajo la curatela, se les consideraba jurídicamente como personas perfectas, lo que no impedía que, en la realidad de la vida, fuesen muchas veces perjudicados en sus intereses. Por esto se decía: *minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam lœsus.* Pero, hablar ahora todavía de restitución, cuando el menor vive sujeto á tutela hasta llegar á la mayor edad, no pudiendo entre tanto obligarse por ningún acto sino mediante la intervención del tutor, la aprobación judicial y otras garantías que el nuevo Código reconoce, aparece á primera vista superabundante é injustificado, tornándose, como se dijo al principio, en daño del menor mismo, con quien ó nadie se atreverá á contratar, temeroso de que una futura restitución lo obligue á devolver lo adquirido con sus frutos ó sólo lo hará bajo condiciones tan gravosas que compensen los daños y perjuicios. Lo verdaderamente justo y debido en la materia es que se deje al menor á salvo su

acción ó excepción de nulidad si no se han llenado los requisitos de forma y esencia que la ley prescribe para cada acto ó si se han llenado, su acción de indemnización contra el tutor, el pro-tutor ó el juez. En consecuencia propone se diga: *Nunca habrá recurso de restitución para el menor. Para indemnizarse el menor de los perjuicios que reciba en sus negocios, solamente podrá dirigirse contra su tutor, pro-tutor ó juez que haya intervenido; pero nunca contra un tercero.*

La proposición es aceptada y queda como art. 390 del nuevo Código.

El Sr. Lacunza continúa y propone: *Los menores en sus negocios sólo tendrán los mismos derechos que se conceden á los mayores de edad y el recurso de nulidad del acto, cuando hayan faltado en él los requisitos que como necesarios para la validez se determinan en este título:*

La proposición es aceptada y queda como art. 391 del del nuevo Código.

El Sr. Lacunza continúa y propone: *Este recurso de nulidad pueden alegarlo, por vía de acción ó de excepción, el tutor ó los que representen al menor; pero no puede ser alegado antes ni después de la mayor edad contra los menores por los que hayan contrado con ellos. Tampoco puede alegarse por los fiadores ni mancomunados del menor durante la minoría; pero, cumplida ésta, podrá alegarla el mismo menor, mientras no esté prescrita la acción, según las reglas generales de la prescripción, que en este caso correrá desde la mayoría de edad.*

La proposición es aprobada y queda como art. 392 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 267): *Para conformarse el tutor con la demanda entablada contra el menor, sobre propiedad de bienes inmuebles, ú otro derecho real, cualquiera que sea su cuantía, necesita, á más de la autorización del consejo de familia, de la aprobación judicial.*

Este artículo es la segunda parte del 252 del Proyecto de Gollena y se impone como una consecuencia del 371 del nuevo Código.

Queda, pues, aprobado y pasa á ser el 393 del nuevo Código.

El Sr. Escudero expone que hay tres casos en los que no puede ser necesaria, dado el supuesto del artículo que acaba de aprobarse, la autorización del consejo de familia, so pena de ponerla frente á frente de la ley, de la autoridad judicial ó de la justicia. Esos tres casos son el de providencia judicial, el de derecho anterior de tercero y el de expropiación forzosa por causa de utilidad pública (1). Así propone se diga: *La autorización no será necesaria cuando la enajenación se haga á virtud de providencia judicial y por derecho anterior de tercero ó por expropiación forzosa.*

La proposición es aceptada y queda como art. 394 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que en el art. 375 del nuevo Código se previó el caso de que el tutor fuese coheredero ó comunero con el menor. ¿Qué hacer, si se trata de

(1) Gollena, *Proyecto* art. 233.

una cosa ó herencia común entre el menor y un extraño?

O provoca la partición el tutor ó la persona extraña. Si lo segundo, parece al que habla que se está en el caso del artículo que acaba de aprobarse; pero si lo primero, el exponente opina con Gollena que, siendo entonces voluntaria la partición por parte del tutor que la provoca y como cosa de algún momento, conviene á los intereses del menor la autorización del consejo de familia (1). Así propone se diga: *Será necesaria la licencia del consejo de familia para la partición de una cosa ó herencia común, cuando no la provoque otro tercero que tenga derecho para ello. La partición ha de ser judicial, previos el inventario y tasación de las fincas ó bienes.*

La redacción es aprobada y queda como art. 395 del nuevo Código.

El Sr. Escudero hace presente á la Comisión, que nada se ha resuelto con respecto al art. 256 del Proyecto Sierra, relativo al caso de que el tutor quisiera retirar un capital del menor, que estubiese produciendo intereses. El argumento expuesto por el Sr. Lacunza para suprimir ese texto en el nuevo Código (2), no parece al que habla convincente, pues no se trata de colocar el dinero del pupilo, sino de retirar el dinero ya colocado, para emplearlo tal vez en alguna empresa insegura. Cree, en consecuencia, que no está por demás prever esa hipótesis. Así es que propone se incluya dicho artículo en el nuevo Códi-

(1) Gollena, *Proyecto*, art. 238.
(2) Véase *supra* pág. 390.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

go, bajo la siguiente forma: *También necesita el tutor la autorización del consejo de familia, para retirar un capital del menor, que le está produciendo intereses.*

Se acepta el artículo, y pasa á ser el 396 del nuevo Código.

El Sr. Méndez manifiesta que, para asegurar mejor el cumplimiento del art. 370 por parte del tutor, estima conveniente que los pagos que se le hagan de más de mil pesos y que no procedan de rentas, intereses ó venta de frutos, no sean válidos, si ellos se verifican sin intervención del protutor. En consecuencia propone se diga *Será necesaria la intervención del protutor, cuando los deudores del menor paguen más de mil pesos, si el pago no procede de rentas, intereses ó venta de frutos. En este caso, el tutor dará cuenta inmediatamente al consejo de familia para que disponga lo previsto en el art. 370.*

La proposición es aceptada y queda como art. 397 del nuevo Código.

El Sr. Escudero propone se agregue, de acuerdo con la idea del Sr. Mendez: *El pago hecho al tutor contra lo prevenido respectivamente en los artículos anteriores, no libera al deudor.*

La proposición es aceptada y queda como art. 398 del nuevo Código.

Proyecto Sierra (art. 268): *El tutor tiene derecho á una retribución sobre los bienes del menor, que podrán fijar el padre ó la madre en su testamento, y en su defecto el consejo de familia. En ningún caso bajará la retribución del cuatro, ni excederá del diez por ciento de las rentas líquidas de dichos bienes.*

Es el art. 253 del Proyecto de Gollena, que lo motiva, diciendo: «Entre los Romanos, la tutela era por regla general un cargo gratuito; pero el testador ó magistrado, que nombraba tutor, podía en consideración á su pobreza, ó á las grandes molestias de la administración, señalarle un salario proporcionado á las facultades del pupilo (l.33 §3, tít. 7, lib. 26 del Digesto). Esta ley usaba de la delicada expresión *solatium*, en lugar de *salario: nisi ab eo, qui eum* (tutorem) *dat, certum solatium ei constitutum est.*

«La ley 3, tít. 3, libro 4 del Fuero Juzgo, trasladada á la 2, tít. 7, lib. 3 del Fuero Real, señaló al tutor la décimal parte de los frutos de los bienes del pupilo, para estimularle á la diligencia y economía, *ut non hæc, quæ debet minoribus reservare, nimis evertat expensis*, no en renumeración de su trabajo: los autores entendieron la palabra *frutos* de dicha ley en el sentido del art. 399, que equivale al de *rentas líquidas* de este 253.»

El art. 268 del Proyecto Sierra es aceptado por la Comisión y queda como art. 399 del nuevo Código.

El Sr. Méndez hace observar que el artículo acabado de aprobar trata, á no dudarlo, de la remuneración ordinaria del tutor, para lo cual se fijan un mínimun y un máximun. Pero es necesario y justo prever también el caso de que el tutor aumente extraordinariamente los bienes del pupilo, ya sea aumentándolos con su industria ó diligencia, ora libertando los existentes de gravámenes antiguos ó desembarazándolos de pleitos intrincados y difíciles. En ese caso el que habla, cree que debe señalarse al tutor una remuneración extraordinaria, además de la ordinaria que se ha fijado, lo cual servirá para estimular á los tutores á hacer productivos los bienes que se les entreguen.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Escudero está de acuerdo con el Sr. Méndez: pero desearía que el artículo sobre este punto se restringuiese dentro de límites precisos, para no dar lugar á abusivas interpretaciones, tomandose por trabajos extraordinarios, dignos de una recompensa extraordinaria también, los que no eran sino la gestión ordinaria y obligatoria del tutor. Así el que habla opina por que no se considere como un servicio extraordinario que el tutor defienda en juicio los bienes del pupilo, porque esto no es sino su deber. En el mismo sentido opina en cuanto al aumento de bienes por herencia ó donación ó por acumulación de productos.

El Sr. Méndez declara estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Escudero, pues su idea es solamente que se recompense de una manera extraordinaria; pero fijada de antemano por el Código, para evitar arbitrariedades, el verdadero y positivo aumento de los bienes del pupilo. Propone la siguiente redacción:

Cuando el tutor, por su industria ó diligencia, aumente los bienes del menor, haciendo entrar en ellos, en fincas ó capitales, fondos nuevos que no eran poseídos ni litigados antes de la tutela, y que no procedan de herencia ó donación posterior, ni de productos acumulados de los bienes del menor, tendrá el tutor una remuneración de veinte por ciento sobre los valores que hayan llegado á entrar efectivamente en los bienes del menor, sin perjuicio de la que le corresponda por las rentas de los mismos bienes..

La redacción es aprobada y queda como art. 400 del nuevo Código.

INDICE.

La verdad histórica sobre la formación del Código Civil. (Carta del Sr. Lic. Don Luis Mendez á los redactores del Foro)..... 9 á 29

Carta del Sr. Lic. Don Luis Méndez al Lic. Agustín Verdugo ..... 29 á 33

De la ley y sus efectos con las reglas generales de su aplicación

PROMULGACIÓN DE LA LEY (art. 1 del nuevo Código.

DISCUSIÓN: .....

Señores: Lacunza
Ramírez
Terán
Escudero..... ..... 37 á 39

RETROACTIVIDAD DE LA LEY (art. 2.)

Proposición del Sr. Méndez..... 39 á 40

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Sr. Escudero está de acuerdo con el Sr. Méndez: pero desearía que el artículo sobre este punto se restringuiese dentro de límites precisos, para no dar lugar á abusivas interpretaciones, tomandose por trabajos extraordinarios, dignos de una recompensa extraordinaria también, los que no eran sino la gestión ordinaria y obligatoria del tutor. Así el que habla opina por que no se considere como un servicio extraordinario que el tutor defienda en juicio los bienes del pupilo, porque esto no es sino su deber. En el mismo sentido opina en cuanto al aumento de bienes por herencia ó donación ó por acumulación de productos.

El Sr. Méndez declara estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Escudero, pues su idea es solamente que se recompense de una manera extraordinaria; pero fijada de antemano por el Código, para evitar arbitrariedades, el verdadero y positivo aumento de los bienes del pupilo. Propone la siguiente redacción:

Cuando el tutor, por su industria ó diligencia, aumente los bienes del menor, haciendo entrar en ellos, en fincas ó capitales, fondos nuevos que no eran poseídos ni litigados antes de la tutela, y que no procedan de herencia ó donación posterior, ni de productos acumulados de los bienes del menor, tendrá el tutor una remuneración de veinte por ciento sobre los valores que hayan llegado á entrar efectivamente en los bienes del menor, sin perjuicio de la que le corresponda por las rentas de los mismos bienes..

La redacción es aprobada y queda como art. 400 del nuevo Código.

INDICE.

La verdad histórica sobre la formación del Código Civil. (Carta del Sr. Lic. Don Luis Mendez á los redactores del Foro)..... 9 á 29

Carta del Sr. Lic. Don Luis Méndez al Lic. Agustín Verdugo ..... 29 á 33

De la ley y sus efectos con las reglas generales de su aplicación

PROMULGACIÓN DE LA LEY (art. 1 del nuevo Código.

DISCUSIÓN: .....

Señores: Lacunza
Ramírez
Terán
Escudero..... ..... 37 á 39

RETROACTIVIDAD DE LA LEY (art. 2.)

Proposición del Sr. Méndez..... 39 á 40

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

RENUNCIA DE LAS LEYES (art. 3.)

Proposición del Sr. Méndez..... 40

ABROGACIÓN DE LA LEY (art. 4.)

Proposición del Sr. Méndez..... ,

LEYES PENALES Y DE POLICÍA (art. 5.)

Proposición del Sr. Lacunza.....

ESTATUTO PERSONAL (art. 6.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 41

ESTATUTO REAL (art. 7.)

..... ,,

Proposición del Sr. Lacunza..... ,,

ESTÁTUTO FORMAL (art. 8.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 41 á 42

LEYES DE ORDEN PUBLICO (art. 9.)

Proposición del Sr. Méndez..... 42

ACTOS JURIDICOS EXTRANJEROS Y SUS EFECTOS EXTRATERRITORIALES (art. 10.)

Proposición del Sr. Lacunza.....

SILENCIO DE LA LEY (art. 11.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 43

LIBRO PRIMERO

De las personas

TÍTULO I.

DE LOS MEXICANOS Y EXTRANJEROS

NACIONALIDAD (arts. 12 y 13.)

Discusión:

Señores: Lacunza
Méndez
Escudero
Terán..... 43 á 44

PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD.

Discusión:

Señores: Ramírez
Méndez..... 45 á 46

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES MEXICANOS PARA CONOCER EN JUICIO, DE ACTOS VERIFICADOS EN PAIS EXTRANJERO (art. 14.)

Proposición de Sr. Escudero..... 47 á 48

ID. ID. PARA CONOCER DE DEMANDAS CONTRA EXTRANJEROS (art. 15.)

Discusión:

Señores: Escudero
Méndez..... 48

CAUCION JUDICATUM SOLVI (art. 16.)

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Discusión:

Señores: Escudero
Lacunza
Méndez
Ramírez
Terán..... 49 y 50

PERSONAS MÓRALES (art. 17)

Proposición del Sr. Méndez..... 51 y 52

TITULO II.

De la vecindad y domicilio.

DE LA VECINDAD.

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez
Méndez
Escudero
Terán..... 52 á 54

DE LA VECINDAD DE LOS EXTRANGEROS.

Discusión.

Señores Mendez
Ramírez
Escudero..... 54 y 55

DE LA VECINDAD DOBLE..... 55

DEL DOMICILIO (art. 18.)

Proposición del Sr. Méndez..... 55 y 56

DOMICILIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (art. 19).

Proposición del Sr. Escudero..... 56

DOMICILIO DE LOS MILITARES (art. 20)..... 56

DOMICILIO DEL HIJO DE FAMILIA (art. 21).

Proposición del Sr. Terán.....56 y 57

DOMICILIO DE LA MUJER CASADA (art. 22)..... 57

DOMICILIO DE LOS SIRVIENTES (art. 23.)

Proposición del Sr. Lacunza..... „

DOMICILIO DE LOS SENTENCIADOS (art. 24)..... „

DOMICILIO DE LOS QUE NO TIENEN RESIDENCIA HABITUAL (art. 25)..... „

DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES (art. 26.)

Proposición del Sr. Mendez..... 58

DOMICILIO DE LÓS MARINOS DE GUERRA (art. 27.)

Proposición del Sr. Ramírez..... „

DOMICILIO DE LOS MARINOS MERCANTES (art. 28)

Discusión.

Señores: Méndez
Lacunza..... 58 y 59

DOMICILIO DE LOS MEXICANOS EMPLEADOS EN LA MARINA DE GUERRA EXTRANJERA. (art. 29.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero..... 59 y 60

DEL DOMICILIO CONVENCIONAL. (art. 30.)..... 60

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TITULO III.

De las actas del estado civil

CAPITULO I.

FÉ DEBIDA Á LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL. (art. 31.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Terán
Ramírez
Méndez..... 60 á 61
LIBROS DEL ESTADO CIVIL. (art. 3 .)
Discusión.
Señores: Lacunza
Escudero
Terán..... 65 á 67
AUTENTICIDAD DE LOS LIBROS DEL ESTADO CIVIL. (art. 33.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Mendez..... 67
COPIAS. (art. 34.)..... „
FORMALIDADES DE LAS ACTAS. (art. 35.)..... 68

INSERCIONES PROHIBIDAS ÉN LAS ACTAS. (art. 36)
Discusión.
Señores: Lacunza.
Escudero..... 68
INTERVENCIÓN POR MEDIO DE PROCURADOR (art. 37.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Ramírez.....68 y 69
TESTIGOS DÉ LAS ACTAS. (art. 38.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Escudero..... 69
LECTURA Y FIRMA DE LAS ACTAS. (art. 39.)
Proposición del Sr. Lacunza..... „
OTRAS FORMALIDADÈS DE LAS ACTAS. (art. 40.)
Proposiciones del Sr. Lacunza..... 70
SANCION DE LAS FORMALIDADES DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL. (art. 41.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Méndez.....70 y 71
APUNTES Y DOCUMÉNTOS ANEXOS. (art. 42.)
Proposiciones del Sr. Lacunza.....71 y 72

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Testimonio de las actas. (art. 43.)..... 72

Actas relativas al mismo oficial del estado civil ó á sus parientes. (art. 44.)..... "

Vicios ó defectos de las actas. (art. 45.)..... "

Límites de la fuerza probatoria de las actas (art. 46.).....72 y 73

Actas extranjeras. (art. 47.)..... 73

Falta ó pèrdida de actas. (art. 48.)

Proposición del Sr. Lacunza. ..... "

Anotación y referencias de las actas. (art. 49.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez.....73 y 74

Oficiales del registro. (art. 50.)

Proposición del Sr Méndez..... 74

Actas de los militares fuera del territorio (art. 51.)

Proposición del Sr. Méndez.....74 á 76

CAPITULO II

De las actas de nacimiento

Término para la presentación (art. 52.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez

Ramírez.....76 y 77

Personas que deben declarar el nacimiento. (art. 53.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez..... 78

Formàlidades de las actas de nacimiento (art. 54.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero.....78 y 79

Presentación de los hijos legítimos (art. 55.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero..... 79

Presentación de los hijos naturales (art. 56.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Terán

Escudero.....79 y 80

Hijos de padres no conocidos (art. 57.)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proposiciones del Sr. Lacunza.....80 y 81

HIJOS ADULTERINOS Ó INCESTUOSOS (art. 58.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez
Escudero
Méndez
Terán.....81 y 82

HIJOS EXPÓSITOS (arts. 59 y 60)

Proposiciones del Sr. Lacunza.....82 y 83

INVESTIGACIÓN PROHIBIDA (art. 61.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero.....83 y 84

NACIMIENTOS EN LOS BUQUES (art. 62.)

Proposiciones del Sr. Lacunza..... 84

ACTAS DE LOS HIJOS RECONOCIDOS (art. 63.)

Proposiciones del Sr. Lacunza.....84 y 85

SIMULTANEIDAD DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (art. 64.)

Proposiciones del Sr. Lacunza..... 85

ACTAS DE GEMELOS (art. 65.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez.....85 y 86

NACIMIENTO DURANTE UN VIAJE (art. 66.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 86

CAPITULO III

De las actas de matrimonio

PRESENTACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO (art. 67)

Discusión.

Señores: Lacunza
Méndez
Terán.....86 á 88

ACTA DE PRESENTACIÓN [art. 68.]

Proposición del Sr. Lacunza..... 88

PUBLICACIÓN DE LA ACTA DE PRESENTACIÓN (art. 69.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero.....88 y 89

DISPENSA DE PUBLICACIONES (art. 70)

Proposición del Sr. Lacunza..... 89

PUBLICACIONES FUERA DEL LUGAR DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO [arts. 71 y 72.]

Discusión.

Señores: Lacunza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Escudero.....89 y 90

REPETICION DE LAS PUBLICACIONES (art. 73.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 91

SEÑALAMIENTO DE DIA PARA LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO (art. 74.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 91

DENUNCIA DE IMPEDIMENTOS (arts. 75, 76 y 77.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez.....92 y 93

ACTA DE MATRIMONIO (art. 78.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Ramírez.....93 y 94

CAPITULO IV.

De las actas de Defunción

FORMALIDADES PRÉVIAS Á LAS INHUMACIONES. (art. 79.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 94

ACTAS DE DEFUNCIÓN (art. 80.)

Discusión:

Señores: Lacunza

Méndez..... 94 y 95

FORMALIDADES DE LAS ACTAS DE DEFUNCIÓN (art. 81.)

Discusión.

Señores: Lacunza.

Méndez..... 95

AVISO DEL FALLECIMIENTO (art. 82)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero.....95 y 96

FALLECIMIENTO DONDE NO HAYA REGISTRO (art. 83.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 96

MUERTE VIOLENTA (art. 84.)

Proposición del Sr. Lacunza....."

IDENTIFICACIÓN DEL CADAVER (art. 85.)

Proposición del Sr. Lacunza.....96 y 97

FALLECIMIENTO FUERA DE DOMICILIO (art. 86.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 97

MUERTE POR SENTENCIA (art. 87.)

Proposición del Sr. Lacunza..... "

MUERTE EN BUQUE DE LA REPÚBLICA (art. 88.)

Proposición del Sr. Lacunza..... "

MILITARES (art. 89.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 98

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MUERTE EN LAS PRISIÓNES (art. 90.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 98

CAPITULO V

De la rectificaciòn de las actas del estado civil.

REQUISITOS DE LA RECTIFICACIÓN (art. 91.)
Proposición del Sr. Lacunza..... "
CASOS DE RECTIFICACIÓN (art. 92.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 99
PUBLICIDAD DE LA DEMANDA DE RECTIFICACION (art. 93.)
Proposición del Sr. Lacunza..... "
PARTES NECESARIAS EN EL JUICIO DE RECTIFICACIÓN (art. 94.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Escudero.....99 y 100
FORMA DEL JUICIO DE RECTIFICACION (art. 95.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Mendez.....100 y 101

ANOTACION DE LA ACTA RECTIFICADA (art. 96.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Ramírez..... 101
FUERZA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA EN EL JUICIO DE RECTIFICACION (art. 97.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Escudero
Méndez
Terán.....101 á 103
PERSONAS QUE PUEDEN PEDIR LA RECTIFICACION (art. 98.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Ramírez
Escudero
Méndez.....103 y 104

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

TITULO IV.

Del Matrimonio

CAPITULO I.

DE LAS CALIDADES Y CONDICIONES QUE SE REQUIEREN PARA PODER CONTRAER MATRIMONIO.

DEFINICION DEL MATRIMONIO (art. 99.)..... 104
ABOLICIÓN DE LOS ESPONSALES DE FUTURO [art.100.]
Discusión:
Señores: Ramírez
Lacunza .....104 á 105
NECESIDAD DE LAS SOLEMNIDADES EXTERNAS (art. 101.)
Proposición del Sr. Ramírez..... 105
MATRIMONIO DE EXTRANJEROS FUERA DE LA REPÚBLICA (art. 102.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 105 á 106
EDAD PARA EL MATRIMONIO (art. 103.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 106 á 107
INEXISTENCIA DEL MATRIMONIO POR FALTA DE CONSENTIMIENTO (art. 104.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 107

INEXISTENCIA DEL MATRIMONIO DURANTE LA EXISTENCIA DE UN VÍNCULO ANTERIOR [art. 105.] 107
NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES (art. 106.)
Proposición del Sr. Lacunza..... ,,
NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DE LOS ASCENDIENTES (art. 107.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 108
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO POR LOS ASCENDIENTES Y POR LOS TUTORES (art. 108.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Ramírez
Terán
Escudero..... 108 á 110
LA NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DE LOS ASCENDIENTES SÓLO SE REFIERE Á LOS HIJOS LEGÍTIMOS, LEGITIMADOS Y NATURALES RECONOCIDOS (art. 109.)
Proposición del Sr. Escudero..... 110 á 111
OCURSO Á LA AUTORIDAD POLÍTICA (art. 110.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Ramírez
Terán..... 111 á 112

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES Y AFINES (art. 111.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 112

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO POR PARENTESCO COLATERAL NATURAL Y DE AFINIDAD (arts. 112 y 113.)

Proposición y consulta del Sr. Lacunza 112 á 123

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE TÍO Y SOBRINA (art. 114.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 124

PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO POR CAUSA DEL TUTOR Ó CURADOR (art. 115.)

Proposición del Sr. Lacunza..... „

MATRIMONIO ENTRE EL RAPTOR Y LA RAPTADA (art. 116.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 124 á 125

DEL ERROR EN EL MATRIMONIO (art. 117.)

Discusión.

Señores: Escudero
Lacunza
Ramírez
Mendez..... 125 á 126

NULIDAD DEL MATRIMONIO POR ADULTERIO ANTERIOR ENTRE LOS CONTRAYENTES (art. 118.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero
Ramírez
Terán..... 126 á 128

NULIDAD DEL MATRIMONIO POR CAUSA DE MUERTE DADA POR UNO DE LOS CÓNYUGES AL DE LA OTRA (art. 119.)

Proposición del Sr. Terán..... 128

NULIDAD DEL MATRIMONIO POR CAUSA DE ATENTADO DE UNO DE LOS CÓNYUGES CONTRA LA VIDA DEL DEL OTRO (art. 120.)

Proposición del Sr. Terán..... „

DE LA VIOLENCIA Ó FUERZA PARA EL MATRIMONIO (art. 121.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 129

DE LA LOCURA (art. 122.)

Discusión.

Señores: Ramírez
Lacunza
Méndez..... „

VALIDEZ DE LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS (art. 123.) 130

AUTORIDAD PARA CONCÉDER LAS DISPENSAS (art. 124.)

Proposición del Sr. Lacunza..... „

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPITULO II.

De las ritualidades con que debe celebrarse el matrimonio.

SUPRESIÓN DE DIVERSÓS ARTÍCULOS DÉL PROYECTO SIERRA.....131 y 132

EXPEDIENTE DE DENUNCIA DE IMPEDIMENTOS (arts. 125 y 126.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 132 y 133

PRUEBA DE IMPEDIMENTO Y SENTENCIA EN EL JUICIO SOBRE SU DENUNCIA (arts. 127 y 128.)

Proposición del Sr. Lacunza.

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez

Terán..... 133 á 135

MATRIMONIO DE MEXICANOS FUERA DE LA REPÚBLICA (art. 129.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 135 y 136

TRANSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO DE MEXICANOS FUERA DE LA REPÚBLICA (art. 130.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero..... 136 á 138

CAPITULO III.

De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio.

EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO Á LAS PERSONAS DE LOS CÓNYUGES (arts. 131, 132 y 133.)

Proposición del Sr. Lacunza y discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez..... 138 á 140

EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO Á LOS BIENES. —ADMINISTRACIÓN Á CARGO DEL MARIDO (art. 134.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 140

ID. ID.—INCAPACIDAD DE LA MUJER CASADA PARA COMPARECER EN JUICIO (art. 135.)

Proposición del Sr. Lacuñza..... 140 á 141

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA EN JUICIO EN QUE HA INTERVENIDO LA MUJER CASADA (art. 136.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Terán..... 141 y 142

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INCAPACIDAD DE LÁ MUJER CASADA PARA CONTRATAR (art. 137.)..... 143

EXTENSIÓN DE LA LICENCIÁ MARITAL (arts. 138 y 139.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez..... 143 á 145

DÉNEGACIÓN DE LA LICENCIA MARITAL (art. 140.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez

Escudero ..... 145 y 146

CAPACIDAD DÈ LÀ MUJER CASADA PARA DEFENDÉRSE EN JUICIO CRIMINAL Y EN LOS PLEITOS CONTRA SU MARIDO [art. 141.] 147

CAPACIDAD DE LA MUJER PARA HACER TESTAMENTO (art. 142.)..... „

CARACTER RELATIVO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE LOS ACTOS DE LA MUJER CASADA (art. 143.)

Proposición del Sr. Lacunza..... „

CAPITULO IV.

De los deberes de los esposos para con sus hijos y de su obligación y la de otros parientes de prestarse alimentos recíprocamente.

OBLIGACIÓN ÀLIMENTICIA DE LOS PADRES EN FAVOR DE LOS HIJOS (art. 144.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 148 y 149

OBLIGACIÓN ALIMENTICIA DE LOS ASCENDIENTES EN FAVOR DE SUS DESCENDIENTES (art. 145.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 149 y 150

OBLIGACIÓN ALÍMENTICIA DE LOS HERMANOS ENTRE SÍ (art. 146.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 150 y 151

RECIPROCIDAD DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA (art. 147.) 151

PROPORCIONALIDAD DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA (art. 148.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 151 y 152

MANERAS DE LLENAR LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA (art. 149.)

Proposición del Sr. Lacuñza..... 152 y 153

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Cesación de la obligación alimenticia (art. 150.)

..... 153

CAPITULO V.

Del Divorcio.

Naturaléza del Divorcio (art. 151.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez..... 153

Causas del Divorcio (art. 152.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Méndez

Ramírez..... 154 á 159

Causas del Divorcio. — Casos de aplicación. — Adulterio (art. 153.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 159 y 160

Id. id. id.—Propuesta del marido para prostituir á la mujer ó hacerla cometer un delito (arts. 154 y 155.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez..... 160 y 161

Id. id. id.—Conato del marido ó de la mujer para corromper á los hijos (art. 156.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero..... 161 y 162

Id. id. id.—Demanda injustificada de nulidad del matrimonio ó del divorcio ó acusación falsa de un cónyugé contra el otro (art. 157.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez

Méndez

Escudero

Terán.....162 y 163

Id. id. id. —Infracción de las capitulaciones matrimoniales (art. 158.)

Discusión.

Señores: Ramírez

Lacunza.....163 y 164

Id. id. id.—Limitaciones de la acción de Divorcio por adulterio (art. 159.)

Discusión.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Señores: Lacuñza
Escudero
Méndez..... 164 y 165

Id. id. id.—Mutuo consentimiento (arts. 160, 161 y 162.)

Discusión.

Señores: Escudero
Lacunza
Terán
Méndez..... 165 á 169

Id. id. id.—Procedimientos y requisitos para el caso de divorcio por consentimiento mutuo (arts. 163 y 164.)

Proposiciones de los Sres. Escudero y Méndéz..... 169 á 171

Arreglos provisorios durante el juicio de divorcio voluntario (art. 165.)

Proposiciones de los Sres. Méndez y Ramírez..... 171 y 172

Duración del divorcio voluntário [art. 166.]

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez..... 172

Divorcio por demencia ó enfermedad contágiosa (art. 167.)..... 172 y 173

El divorcio sólo puede ser demandado por el cónyuge inocente y en qué plazo (art. 168.)

Proposiciones de los Sres. Lacunza y Méndéz..... 173

Reconciliación de los cónyuges divorciados (art. 169.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 173 y 174

Presunción de reconciliación (art. 170.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 174

Dérechos del cónyuge ofendido á prescindir del divorcio [art.171.]

Proposición del Sr. Lacunza..... 174 y 175

Medidas provicionales antés ó durante el juicio de divorcio [art.172.]

Proposición del Sr. Lacunza..... 175 y 176

Testigos en el juicio de divorcio [art. 173.]

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez..... 176 y 177

Efectos de la sentencia ejécutoria del divorcio respecto de los hijos [arts. 174, 175 y 177.]

Obligaciones de los padres en favor de los hijos despues del divorcio [art. 176.]..... 177 y 178

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PÉRDIDA DEL PODER Y DERECHOS DEL PADRE CULPABLE DEL DIVORCIO SOBRE LOS HIJOS [art. 177.]

Proposición del Sr. Lacunza..... 178

PÉRDIDA DE LAS DONACIONES POR EL CÓNYUGE CULPABLE DEL DIVORCIO (art. 178.) ..... „

EFECTOS DE LA SENTENCIA EJECUTIVA DEL DIVORCIO EN CUANTO Á LOS BIENES PROPIOS DE LA MUJER Y SU CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y LITIGAR [art. 179.]

Proposición del Sr. Lacunza..... 178 y 179

DERECHO DE LA MUJER DE PEDIR ALIMENTOS AL MARIDO CULPABLE DEL DIVORCIO [art. 180.]

Proposición del Sr. Lacunza 179

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES GANANCIALES DE LA MUJER CULPABLE DEL DIVORCIO Y ALIMENTOS DE LA MISMA (art. 181.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero
Ramírez
Terán..... .... 179 y 180

CESACIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUERTE DE UNO DE LOS CÓNYUGES (art. 182)..... 180

SECRETO DE LAS AUDIENCIAS EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO É INTERVENCIÓN EN LAS MISMAS DEL MINISTERIO PÚBLICO (art. 183)..... ..... 180 y 181

CAPITULO VI.

De los matrimonios nulos é ilicitos.

Proposición del Sr. Lacunza..... 181

DEFINICIÓN DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO (art. 184.)

Proposiciones de los Sres. Escudero y Lacunza..... 181 y 182

IMPEDIMENTOS DIRIMENTES DEL MATRIMONIO [art. 185.)

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero
Ramírez
Méndez..... 182 y 183

ID. ID.—CASOS DE APLICACIÓN—FALTA DE EDAD [art. 186.]

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez
Méndez
Escudero
Terán..... ..... 185 y 186

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Id. Id. Id.—Naturaleza relativa de la acción de nulidad por falta de consentimiento (art. 187.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 18

Id. id. id—Impédimento por causa de parentesco y naturaleza de la acción de la nulidad fundada en ella (art. 188)

Proposiciones de los Srs. Lacunza y Méndez ..... 187 y 188

Id. id. id.—Impedimento de error y naturaleza de la acción de nulidad fundada en él (art. 189.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Terán

Escudero

Ramírez

Méndez..... 188 á 191

Id. id. id.—Del impedimento de fuerza ó miedo (art. 190.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero.....191 y 192

Id. id. id.—Del impedimento de un matrimonio anterior y naturaleza de la acción respectiva (art. 191.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez

Escudero

Méndez

Terán..... 192 y 193

Id. id. id. de la nulidad dél matrimonio por falta de solemnidad y naturaleza de tal nulidad (art. 192.)

Proposiciones de los Sres. Lacunza y Méndez.....193 y 194

Posesión de estado matrimonial (art. 193.)..... 194 y 195

Presunción de validez del matrimonio, mientras no sea declarado nulo por sentencia ejecutoria—Prohibición dé transación y de compromiso arbitral en materia de nulidad de matrimonio (ar. t194.)

Proposiciones de los Sres. Méndez y Escudero..... 195 á 197

Forma del juicio de nulidad de matrimonio; recursos admisibles, revisión forzosa; intervención del ministerio público é incidencia criminal, (art. 195.)

Proposición del Sr. Méndez..... 197

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De las personas que pueden promover la acción de nulidad del matrimonio (Art. 196.)

Discusión.

Señores: Méndez

Escudero..... 198

Remisión de la sentencia ejecutoria de la nulidad del matrimonio al juez del registro civil (art. 197.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 199

Del matrimonio putativo (art. 198.)

Proposiciones de los Sres. Lacunza y Escudero..... 199 y 200

Medidas provisionales durante el juicio de nulidad del matrimonio (art. 199.)

Proposiciones de los Sres. Lacunza y Méndez..... 200 y 201

Irretroactividad de la sentencia de nulidad del matrimonio respecto de los contratos con terceros (art. 200.)..... 201

Efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio respecto de los hijos (art. 201.)..... „

Del plazo de viudedad (art. 202.)..... „

De los matrimonios ilícitos (art. 203.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 201 y 202

Artículos relativos á los matrimonios canónicos, incluidos en el código del imperio (204 á 209.).....

..... 202 á 204

TITULO V.

De la paternidad y filiación.

CAPITULO I.

De los hijos legítimos.

De la presunción de legitimidad (art. 210.)

Pooposición del Sr. Escudero..... 204

Naturaleza de tal presunción (art. 211.)

Discusión.

Señores Lacunza

Ramírez..... 205 y 206

Ilejitimidad de los hijos por impotencia del marido (art. 212.)

Discusión.

Señores Ramírez

Lacunza

Mendez..... 206 á 210

Desconocimiento del hijo nacido después de trescientos días de la separación de los cónyuges (art. 213.)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez..... 210 á 212

DEL HIJO NACIDO DENTRO DE LOS CIENTO OCHENTA DIAS DE CELEBRADO EL MATRIMONIO (art. 214.)

Proposiciones de los Sres. Méndéz y Escudero..... 212 á 214

PERPETUIDAD DE LA ACCIÓN SOBRE ILEGITIMIDAD DEL HIJO NACIDO DESPUÉS DE TRESCIENTOS DÍAS DE DISUELTO EL MATRIMONIC (art. 215.)

Proposición del Sr. Méndez..... 214 y 215

PLAZO PARA QUE EL MARIDO PUEDA CONTRADECIR LA LEGITIMIDAD DEL HIJO [art. 216.]

Discusión.

Señores: Méndez

Escudero

Ramírez..... 215 y 216

CONTRADICCIÓN DE LA LEGITIMIDAD DEL HIJO POR LOS HEREDEROS DEL MARIDO [arts. 217.]

Proposición del Sr. Méndez..... 216 y 217

DE LA FILIACIÓN, CUANDO LA VIUDA HA CONTRAÍDO SEGUNDAS NUPCIAS, DENTRO DEL PLAZO PROHIBIDO POR LA LEY [art. 218.]

Proposición del Sr. Méndez..... 218 y 219

DEL JUICIO DE DESCONOCIMIENTO DE LA LEGITIMIDAD (art. 219.)

Proposición del Sr. Escudero..... 219

DEL HIJO NACIDO DURANTE LA SEPARACION DE LOS CÓNYUGES [art. 220.]

Proposición del Sr. Lacunza..... ,,

DE LA VIAVILIDAD (arts. 221 y 222.)..... 219 y 220

PROHIBICIÓN DE TRANSAR Y COMPROMETER EN ÀRBITROS LAS CUESTIONES DE FILIACIÓN LEGÍTIMA [art. 223].

Proposición del Sr. Escudero..... 220

CAPITULO II.

De las pruebas de la filiación de los hijos legítimos.

PARTIDA DE NACIMIENTO Y POSESIÓN DE ESTADO (art. 224)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Méndez

Terán

Ramírez..... 220 á 224

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Caso en que falta el acta de matrimonio de los padres (art. 225).

Proposición del Sr. Escudero..... 224

Prueba de la posesión de estado [art. 226].

Proposiciones de los Sres. Ramirez y Lacunza..... 224 y 225

Conformidad de la partida de nacimiento y de lá posesión de estado (art. 227).

Proposición del Sr. Lacunza..... 225 y 226

Requisitos de la posesión de estado (art. 228).

Proposición del Sr. Lacunza..... 226 y 227

Pruebás subsidarias de la filiación legitima [art. 229]

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez..... 227 y 228

Del principio de prueba por escrito (art. 230).

Proposición del Sr. Lacunza..... 229

De la prueba contraria á la ligitimidad (art. 231.)

Proposición del Sr. Lacunza..... „

Imprescriptibilidad de la acción del hijo para reclamar su estado (art. 232.)

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Méndez..... 229 á 232

Prescriptibilidad de las acciones civiles anexas á la lejitimidad (arts. 233 y 234.)

Discusión.

Señores: Ramírez

Méndez

Terán..... 233 y 234

De la acción intentada por los herederos y descendientes del hijo (art. 235.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 234

Continuación de la acción del hijo por sus herederos [art. 236.]

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Méndez.....235 á 237

Pérdida de la posesión de la filiación lejítima (art. 237.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 237

Adquisición de la posesión de la filiación legítima (art. 238.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 237

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Recursos posesorios del que es despojado ó perturbado en la posesión de los derechos de padre ó de hijo (art. 239)..... 237 y 238
Necesidad de la prueba del matrimonio legítimo para comprobar la filiación legítima (art. 240)..... 238

CAPITULO III.

De la legitimación.

De los hijos que pueden ser legitimados [art. 241]
Proposición del Sr. Lacunza..... 238
Medio único de legitimación [art. 242].
Proposición del Sr. Lacunza..... 238 á 240
Sobre quienes son hijos naturales [art. 243].
Discusión.
Señores: Lacunza
Escudero..... 240 á 243
Necesidad del reconocimiento del hijo para su legitimación [arts. 244 y 245].
Discusión.
Señores: Lacunza
Méndez
Terán
Ramírez
Escudero..... 243 á 249

Igualdad de los hijos legítimos y legitimados [art. 246.]
Discusión.
Señores: Ramírez
Méndez..... 229 á 251
Legitimación de los hijos muertos y de los no nacidos (art. 247.)
Discusión.
Señores: Lacunza
Terán
Escudero
Ramírez
Méndez..... 251 á 256

CAPITULO IV.

Del reconocimiento de los hijos naturales.

Edad para el reconocimiento (art. 248.)
Proposición del Sr. Méndez..... 256 á 258
Reconocimiento por ambos padres (art. 249.)
Proposición del Sr. Lacunza..... 258 y 259
Presunción de hijo natural (art. 250.)
Discusión.
Señores: Lacunza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Méndez
Ramírez
Escudero
Terán..... ..... 259 á 252

Reconocimiento por solo el padre (art. 251.)

Discusión.
Señores: Méndez
Escudero
Ramírez..... 263 á 294

Reconocimiento de hijo natural nacido antes del matrimonio de uno de los padres [art. 252.]

Proposición del Sr. Méndez..... 264 y 265

Modos de reconocimiento (art. 253.)

Proposiciones de los Sres. Lacunza y Méndez.....165 y 266

Prohibición del reconocimiento de los hijos espurios (art. 254.)

Proposición del Sr. Méndez..... 266

Reconocimiento por separado de cada uno de los padres (255.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 266 y 267

Prohibición de investigar la paternidad natural [art. 256.]

Discusión.

Señores: Ramírez
Lacunza
Méndez..... 267 á 270

Investigación de la maternidad natural (art. 257.)

Discusión.
Señores: Ramírez
Escudero..... 270 á 273

De la obligación alimenticia en relación con la investigación de la paternidad ó maternidad naturales [art. 258.]

Proposición del Sr. Ramírez..... 273 y 274

Contradicción del reconocimiento por un tercero interesado [art. 259].

Proposición del Sr. Ramírez..... 274 y 275

Id. del id. por la madre (art. 260).

Proposición del Sr. Méndez..... 275

Necesidad del consentimiento del hijo mayor de edad para su reconocimiento (art. 261).

Proposición del Sr. Lacunza..... 275 y 276

Reconocimiento del hijo no nacido y del muerto (art. 262).

Proposición del Sr. Lacunza..... 276

Acción del hijo menor de edad para reclamar contra el reconocimiento, cuando llegue á la mayor edad [art. 263].

Proposición del Sr. Lacunza..... 276 y 277

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Irrevocabilidad del reconocimiento [art. 264].

Proposición del Sr. Méndez..... 277 y 278

Derechos del hijo reconocido (art. 265).. 278

Nulidad del reconocimiento del hijo espurio (art. 266).

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez

Mendez..... 278 y 279

Reconocimiento forzoso en los casos de rapto y violación [art. 267].

Proposición del Sr. Ramírez..... 279 y 280

TITULO VI.

De la menor edad (art. 268)..... 280

TITULO VII.

De la patria potestad.

CAPITULO I.

De los efectos de la patria potestad respecto á las personas de los hijos.

Deberes morales de los hijos (art. 269)..... 280

Sujeción de los hijos menores de edad á la patria potestad [art. 270].

Proposición del Sr. Lacunza..... 281

Hijos sobre que se ejerce la patria potestad (art. 271).

Proposición del Sr. Lacunza..... 281 y 282

De la patria potestad sobre los hijos naturales reconocidos (art. 272).

Proposiciones de los Sres. Ramírez y Méndéz..... 282

Obligación del hijo de habitar la casa paterna (art. 273).

Proposición del Sr. Lacunza..... 283

Educación del hijo (art. 274).

Pooposición del Sr. Lacunza..... 283 y 284

Corrección y castigo del hijo [art. 275].

Discusión.

Señores Lacunza

Ramírez..... 284 á 286

Id. id. — Procedimientos [art. 276].

Proposición del Sr. Ramírez..... 287

Id. id.—Modificación del derecho de corregir y castigar, si la madre ha pasado á segundas nupcias ó el hijo ejerza algún cargo ü oficio [arts. 277 y 278].

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proposición del Sr. Ramírez ..... 287 y 288

Id. id.—De los gastos y alimentos del hijo castigado por órden del padre (art. 279).

Discusión.

Señores: Ramírez

Escudero..... 288 y 289

De las demás personas que ejercen la patria potestad, fuera del padre y de la madre (art. 280)..... 289

Incapacidad del sujeto á patria potestad para contratar y comparecer en juicio [art. 281].

Discusión.

Señores Lacunza

Escudero

Terán..... 289 á 293

CAPITULO II.

De los efectos de la patria potestad respecto de los bienes de los hijos.

Administración de los bienes de los hijos (art. 282.)

Proposición del Sr. Terán..... 293

Clasificación de los bienes del hijo (art. 283).

Discusión.

Señores: Escudero

Ramírez..... 293 á 297

Derechos del hijo administrador (art. 284).

Proposición del Sr. Méndez..... 297 y 298

Usufructo del padre (art. 285).

Proposición del Sr. Méndez..... 298

Obligaciones del padre usufructuario [arts. 286 y 287].

Proposición del Sr. Lacunza..... 298 á 300

Enagenación de los bienes del hijo (art. 288.)

Proposición del Señor Lacunza..... 301 y 302

Caso de oposición de intereses entre el padre y el hijo (art. 289)..... 302

CAPITULO III.

De los modos de acabarse la patria potestad.

Acabamiento de la patria potestad (art. 290).

Proposición del Sr. Lacunza..... 303

Pérdida de la patria potestad (art. 291)..... „

Privación de la patria potestad (art. 292).

Proposición del Sr. Lacunza..... 303 y 304

Suspensión de la patria potestad (art. 293).

Proposición del Sr. Lacunza..... 304

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

NOMBRAMIENTO TESTAMENTARIO DE CONSULTORES POR EL PADRE (art. 294).

Proposición del Sr. Lacunza..... 305 á 308

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD EN CONTRA DE LA MADRE, POR NO OÍR EL DICTAMEN DE LOS CONSULTORES (art. 295).

Proposición del Sr. Lacunza..... 308 y 309

PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR LA MADRE VIUDA, QUE DIERE Á LUZ UN HIJO ILEGÍTIMO (art. 296).

Proposición del Sr. Lacunza..... 309 y 310

DE LA MADRE QUE PASARE Á SEGUNDAS NUPCIAS (art. 297.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 310

DE LOS DERECHOS Ó BIENES DE LA MADRE (art. 298.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 310 á 315

DE LA MADRE DOS VECES VIUDA [art. 299]..... 315

TITULO VIII.

CAPITULO I.

Disposiciones generales.

OBJETO DE LA TUTELA (art. 300).

Proposición del Sr. Lacunza..... 316

NATURALEZA DEL CARGO DE TUTOR (art. 301).

Proposición del Sr. Lacunza..... 317 á 320

PROVIDENCIAS PROVISIONALES EN FAVOR DEL HUÉRFANO, MIENTRAS SE LE NOMBRA TUTOR (art. 302).

Proposición del Sr. Lacunza..... 320

MEDIDAS RESPECTO DEL HUÉRFANO, EN CASO DE HALLARSE FUERA DE SU DOMICILIO, AL DIFERIRSE Ó QUEDAR VACANTE LA TUTELA (art. 303) .. .. 320 y 321

OBLIGACIONES DE LOS PARIENTES DEL HUÉRFANO (art. 304).

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero..... 321 y 322

CAPITULO II.

De la tutela testamentaria.

¿QUIÉNES Y PARA QUIÉNES PUEDEN NOMBRAR TUTOR? (arts. 305, 306 y 307).

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Terán..... 322 á 325

DE LA UNIDAD DE LA TUTELA (arts. 308 y 309).

Discusión.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Señores: Lacunza
Ramírez
Méndez
Escudero
Terán..... ..... 325 á 328

CESACIÓN DE LA TUTELA, EN CASO DE QUE EL CONSORTE SUPÉRSTITE RECOBRE LA PATRIA POTESTAD (art. 310).

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez..... 328 á 330

DEL CASO DE VARIOS TUTORES TESTAMENTARIOS (art. 311).

Proposición del Sr. Lacunza 330

DE LAS CONDICIONES PUESTAS POR EL TESTADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA TUTELA (art 312).

Proposición del Sr. Lacunza..... 330 y 331

CAPITULO III.

De la tutela legítima.

CUANDO HAY LUGAR Á LA TUTELA LEGÍTIMA (art. 313.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 331 y 332

¿A QUIÉNES CORRESPONDE LA TUTELA LEGÍTIMA? (art. 314).

Proposición del Sr. Lacunza..... 332

CAPITULO IV.

De la tutela dativa.

NOMBRAMIENTO DE TUTOR DATIVO (art. 315).

Discusión.

Señores Lacunza
Escudero..... 333 y 334

¿CUÁNDO TIENE LUGAR LA TUTELA DATIVA? (arts. 316 y 317).

Proposición del Sr. Ramírez ..... 334 y 335

CAPITULO V.

Del protector.

NOMBRAMIENTO DE PROTECTOR (art. 318).

Discusión.

Señores: Lacunza
Mendez..... 336 y 337

NECESIDAD DE ESE NOMBRAMIENTO PARA QUE EMPIECE EL EJERCICIO DE LA TUTELA [art. 319].

Proposición del Sr. Lacunza..... 338 y 339

OBLIGACIONES DEL PROTECTOR Y SANCIÓN DE LAS MISMAS (arts. 320 y 321).

Discusión.

Señores Lacunza
Escudero. ..... 339 y 340

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Cesación del protector (art. 322).

Proposición del Sr. Lacunza..... 340

CAPITULO VI.

Del consejo de familia.

Objeto del consejo de familia (art. 323)..... 340 á 343

Cuando se procede á su formación (art. 324)..... 343

Nombramiento de los vocales del consejo de familia por el padre en su testamento (art. 325).

Proposición del Sr. Escudero..... 343 y 344

Personal del consejo de familia, á falta de nombramiento testamentario (art. 326).

Proposición del Sr. Escudero..... 344

Orden de convocación de los parientes para formar el consejo de familia (art. 327).

Proposición del Sr. Escudero..... 344 y 345

Convocación de los parientes que no tengan el mismo domicilio que el huérfano [art. 328]

Proposición del Sr. Escudero..... 346

¿Quid, si no se encuentra suficiente número de parientes? (art. 329).

Proposición del Sr. Escudero..... 346 y 347

Término para que se presenten los parientes [art. 330)..... 347

Multa á los parientes que no obedezcan al llamamiento judicial (art. 331)..... 347

Término para proceder á formar el consejo de familia (art. 332).

Proposición del Señor Escudero..... 347 y 348

Reunión del consejo de familia (art. 333).

Proposición del Sr. Escudero..... 348

Votación en el consejo de familia (art. 334).

Proposición del Sr. Escudero..... 348 y 349

Revocación de las resolucionés del consejo de familia [art. 335].

Proposición del Sr. Méndez..... 349

Inhabilidad de los miembros del consejo de familia para votar por causa de parcialidad (art. 336..... „

Reuniones extraordinarias del consejo de familia [art. 337

Proposición del Sr. Escudero..... 350

Actas de las sesiones del consejo de familia (art. 338..... „

Del consejo de familia, en el caso de tutela de hijos ilegítimos [art. 339].

Proposición del Sr. Méndez..... 350 y 351

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Inhabilidad del tutor ó protector separado para ser miembro del consejo de familia [art. 340].

Proposición del Sr. Escudero 351

Atribuciones del consejo de familia sobre las causas de impedimento y separación de sus vocales (art. 341).

Proposición del Sr. Escudero ..... „

Fundamentos de las resoluciones del consejo de familia (art. 342).

Proposición del Sr. Escudero..... 351 y 352

Procedimientos ante el consejo de familia, cuando pronuncie la inhabilidad ó separación de los vocales (art 343).

Proposición del Sr. Escudero 352

Irrecurribilidad de la declaración del consejo de familia favorable al interesado (art. 344).

Proposición del Sr. Escudero..... „

Medidas que debe tomar el consejo de familia en los casos en que el tutor no entre á desempeñar la tutela por inhabilidad ó separación (art. 345).

Proposición del Sr. Escudero..... 352

CAPITULO VII.

De las Personas inhábiles para ser tutores, protutores y vocales del consejo de familia y de su separación.

Sobre quienes no pueden obtener estos cargos [art. 346].

Discusión.

Señores Lacunza

Escudero

Ramírez..... 353 á 356

Sobre quienes deben ser separados de la tutela [art. 347].

Proposición del Sr. Lacunza..... 357

Sobre nombramiento, impedimento, excusa y remoción de los tutores [art. 348].

Discusión.

Señores: Lacunza

Ramírez..... 358 y 359

CAPITULO VIII.

De las excusas de la tutela y protutela.

Sobre quienes pueden excusarse del cargo de tutor ó protutor (art. 349).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proposición del Sr. Lacunza..... 360 y 361

Renuncia tácita de la tutela ó protutela (art. 350) 361

Ante quien deben proponerse las excusas [art. 351).

Proposición del Sr. Lacunza..... 362

¿En qué oportunidad deben proponerse las excusas? [art. 352].

Discusión.

Señores: Lacunza

Méndez ..... 362 y 363

Obligación del que se excusa, durante el juicio respectivo (art. 353)..... 363 y 364

De la excusa del tutor testamentario (art. 354).

Discusión.

Señores: Lacunza

Terán..... 364 y 365

De la muerte del tutor ó protutor (art. 355).

Proposición del Sr. Lacunza..... 365 y 366

CAPITULO IX.

De la administración de la tutela.

Deberes del tutor en cuanto á la persona del pupilo (art. 356).

Proposición del Sr. Lacunza..... 366 y 367

Del respeto y obediencia al tutor [art. 357].

Proposición del Sr. Ramírez..... 367 y 368

De la cantidad que ha de fijarse para alimentos y educación del menor [art. 359]..... 368

De los gastos de administración (art. 360).

Proposición del Sr. Méndez..... 368

De la carrera ú oficio á que haya de dedicarse el menor (art. 361).

Discusión.

Señores: Escudero

Lacunza

Méndez..... 369 y 371

Quid en el caso de que las rentas del menor no alcancen á cubrir los gastos de sus alimentos y educación (art. 362)..... 371

De la caución del tutor (art. 363).

Proposición del Sr. Escudero..... „

Del inventario de los bienes del menor (art. 364).

Proposición del Sr. Lacunza..... 371 á 374

Del crédito del tutor contra el menor (art. 365).

Proposición del Sr. Lacunza..... 374 y 375

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

De los bienes del menor adquiridos después de hecho el inventario [art. 366].

Proposición del Sr. Escudero 375

Inadmisibilidad de prueba por parte del tutor contra el inventario [art. 367].

Proposición del Sr. Méndez..... 375 y 376

Del caso de omisión de algunos bienes en el inventario (art 368).

Proposición del Sr. Escudero..... 376 y 377

Del caso en que el padre ó madre del menor ejercieran algún comercio ó industria (art. 369)

..... 377

Del caso de sobrante de dinero, después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela (art 370).

Discusión.

Señores: Lacunza
Ramírez
Escudero
Méndez..... 377 á 380

De la enajenación de inmuebles y muebles preciosos del menor (art. 371).

Discusión.

Señores: Lacunza
Méndez
Escudero..... 380 á 382

De la enajenación para objeto determinado [art. 372].

Proposición del Sr. Lacunza..... 382 y 383

Del expediente que ha de formarse en el caso de enajenación (art. 373).

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero..... 383 á 385

Prohibición para el tutor de comprar, arrendar, etc., los bienes del menor [art. 374].

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero..... 386 á 388

Del caso en que el tutor fuese coheredero ó comunero con el menor. (art. 375).

Discusión.

Señores: Lacunza
Escudero
Ramírez..... 388 á 390

Pago al tutor de sus réditos contra el menor. (art. 376).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Proposición del Sr. Lacunza..... .... 390 y 391

Prohibición de que el tutor adquiera créditos contra el menor. (art. 377.)

Proposiciones de los Sres. Méndez y Escudero..... ..... 391 á 393

Del arrendamiento de los bienes dél menor. (arts. 378 y 379).

Proposición del Sr. Escudero..... 393 á 395

Del préstamo hecho al menor. [art. 380].

Discusión.

Señores: Lacunza

Escudero

Méndez

Terán..... ..... 395 y 396

De la admisión de la herencia deferida al menor. (art. 381).

Proposición del Sr. Lacunza..... 396 y 397

De la admisión ó renuncia de legados ó donaciones á favor del menor. (art. 382).

Proposición del Sr. Lacunza..... 397

De los gastos extraordinarios. (art. 383).....397 y 398

De las donaciones que puede hacer el tutor. [art. 384.]

Discusión.

Señores: Escudero

Lacunza..... 399 y 400

De la traslación y compromiso arbitral de los bienes del menor. (arts. 385 y 386.)

Proposición del Sr. Lacunza..... 400

De la transacción sobre bienes ó derechos reales cuyo valor exceda de quinientos pesos. (art. 387).

Proposición del Sr. Lacunza..... 401

De la homologación de la decisión arbitral. (art. 388).

Proposición del Sr. Lacunza..... 403

De la necesidad de la previa audiencia dél protector en todos los casos en qué el tutor necesita de la licencia del juez. [art. 389].

Proposición del Sr. Méndez..... „

Supresión del recurso de restitución in integrum. (art. 390).

Proposición del Sr. Lacunza..... 404 y 405

Recursos de los menores en el caso de actos que les perjudiquen. [art. 391].

Proposición del Sr. Lacunza..... 405

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN ®
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

DEL RECURSO DE NULIDAD Á FAVOR DEL MENOR. (art. 392).

Proposición del Sr. Lacunza..... 405

REQUISITOS PARA QUE EL TUTOR PUEDA CONFORMARSE CON LA DEMANDA ENTABLADA CONTRA EL MENOR [art. 393]..... 406

CASOS EN QUE CESAN ESOS REQUISITOS [art. 394.]

Proposición del Sr. Escudero ..... „

DE LA PARTICIÓN DE BIENES DEL MENOR, CUANDO EL TUTOR SEA COHEREDERO Ó COMUNERO [art. 395.]

Proposición del Sr. Méndez..... ..... 406 á 407

NECESIDAD DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE FAMILIA PARA QUE EL TUTOR RETIRE UN CAPITAL Á RÉDITOS DEL MENOR (art. 396).

Proposición del Señor Escudero..... 407 y 408

DEL CASO EN QUE SE PAGUEN AL MENOR MÁS DE MIL PESOS (art. 397).

Proposición del Sr. Méndez..... 408

OBLIGACIÓN DEL SEGUNDO PAGO Á CARGO DEL DEUDOR DEL MENOR, SI NO SE OBSERVAN CIERTOS REQUISITOS.

(art. 398.)

Proposición del Sr. Escudero..... „

RETRIBUCIÓN DEL TUTOR (arts. 399 y 400)..... 408 y 409

Discusión.

Señores: Méndez

Escudero..... 409 y 410

FIN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
1190001153